REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MARCELIANO CHAVEZ AVILA
Magistrado Sustanciador

Radicación No. 31-2021-00371-01

Bogotá D.C., febrero veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE: **CESAR AUGUSTO LIS HERNANDEZ**
DEMANDADOS: **CENTRO ITALIANO DI BOGOTÁ**
ASUNTO : **AUTO – RECONOCE PERSONERÍA**

De conformidad con el poder de sustitución conferido por el Doctor TITO A. FERRONI G., en calidad de apoderado principal de la parte demandada CENTRO ITALIANO DI BOGOTÁ, se reconoce personería para actuar en el proceso de la referencia al Doctor LUIS FELIP EBONILLA ESCOBAR, identificado con CC No. 79.487.815 de Bogotá, y T.P. 86.606del C. S. de la J., como apoderado sustituto de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder que le fue conferido visible a folio 5 del expediente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHAVEZ AVILA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **01 2019 00680 01**
Demandante:	EPS FAMISANAR S.A.S.
Demandado:	COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra del auto proferido el 27 de octubre de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se resolvió el incidente de nulidad propuesto por la parte actora.

I-. ANTECEDENTES:

a. De la demanda:

La EPS FAMISANAR S.A.S. formuló demanda ordinaria laboral en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., a fin que se declare que la enjuiciada le adeuda todos los gastos generados por concepto de prestaciones asistenciales y económicas que garantizó y pagó a los trabajadores afiliados a esa administradora de riesgos laborales.

Por consiguiente, se condene a la pasiva a pagar la suma de $107.926.450, los cuales corresponden a la sumatoria de las 240 facturas relacionadas en la columna U "SALDO ENERO 2019" en el cuadro anexo que hace parte de la demanda. Igualmente, se condene al pago de intereses moratorios desde la fecha de radicación de la factura en la ARL y hasta el pago efectivo de la

condena, junto con las costas y agencias en derecho. (Fls. 5 a 20 y 93 a 108 archivo 01).

Al corresponder por reparto la demanda al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, ese estrado judicial por auto de 16 de enero de 2020, declaró la falta de competencia y dispuso remitir las diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad; correspondiendo por reparto al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, el cuál mediante proveído de 14 de febrero de 2020, rechazó la demanda y suscitó el conflicto negativo de competencia. (Fls. 81 a 82 y 86 a 87 archivo 01).

Conflicto que, al ser desatado por la Sala Mixta de esta Corporación en providencia de 2 de marzo de 2020, asignó la competencia para conocer el presente asunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá. (Archivo 02).

De esa forma, después de ser inadmitida y subsana la demanda, fue admitida mediante auto de 20 de noviembre de 2020 y se ordenó la notificación a la parte demandada. (Fl. 89 a 110 y 111 archivo 01).

Así las cosas, la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. al contestar a la demanda, solicitó como medio de prueba la práctica de un dictamen pericial en los términos establecidos en el artículo 227 del C.G.P., consistente en el análisis de las obligaciones cuyo pago pretende la demandante, esto a efectos de determinar si está obligada a sufragar los conceptos que se reclaman en el *petitum*, para lo cual solicitó se le otorgara un término de por lo menos de veinte (20) días hábiles para presentarlo. (Fls. 122 a 129 archivo 01).

A través de auto adiado el 29 de marzo de 2022, se tuvo por contestada la demanda, después de ser debidamente subsanada y además se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. (Fls. 140 a 153 archivo 01 y archivo 06).

Estando en la etapa del decreto de pruebas de la parte demandante, en la audiencia que se llevó a cabo 27 de octubre de 2022, la apoderada que representa a la parte actora indagó al Juez de instancia por el decreto de la prueba pericial que solicitó en la reforma a la demanda, a lo cual el *a-quo* indicó que no se tendría en cuenta, dado que el escrito de reforma no obraba en el expediente, además ya se había evacuado la etapa de saneamiento del proceso, decisión que no fue objeto de inconformidad por parte de la activa.

II.- NULIDAD PROPUESTA:

Al finalizar el decreto de pruebas de la parte demandada, la sociedad demandante presentó incidente de nulidad atendiendo lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 133 del C.G.P., el cual señala como causal de nulidad cuando *"se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria".*

Como sustento de la nulidad planteada, refirió que remitió la reforma de la demanda al juzgado de origen y a la parte accionada el 10 de febrero de 2021, a los correos del juzgados y de la demandada que se informaron para efectos de notificación en la contestación de la demanda, por lo que se tuvo conocimiento de la reforma y del dictamen que se aportó con la misma; en consecuencia, solicitó se tuviera en cuenta la reforma a la demanda la cual fue allegada en término y no fue tenida en cuenta, ello en aras de no vulnerar el debido proceso.

III.-DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., llevada a cabo el 27 de octubre de 2022, declaró próspera la nulidad planteada por la parte actora y decretó la prueba pericial que solicitó esa parte en la reforma a la demanda y el testimonio de la señora ANGÉLICA ACERO BARRETO.

Para arribar a esa conclusión, el juez de instancia después de escuchar el recurso de reposición y en subsidio de apelación que presentó la pasiva en

contra de la decisión que negó el decreto de la prueba pericial que solicitó en la contestación a la demanda y el pronunciamiento que realizó sobre la nulidad plateada por la demandante.

Refirió que la nulidad propuesta se fundaba en lo preceptuado en el artículo 133 del C.G.P. que establece las causales de nulidad, entre ellas, la enlistada en el numeral 5º; en esa medida y dada la insistencia de la parte actora y en aras de no vulnerar derechos de rango constitucional como el establecido en el artículo 29 de la Constitución Política y el derecho de defensa y contradicción, advirtió que una vez verificado el correo del Despacho se encontró en el correo no deseado la reforma a la demanda que remitió la parte actora el 10 de febrero de 2021, la cual dirigió a ese estrado judicial y a la parte demandada a los correos que se indicaron en la contestación.

Así las cosas, añadió que los autos ilegales no atan al Juez ni a las partes, por lo que de continuar con el trámite procesal, se le estaría vulnerando un principio de rango constitucional, por lo que repuso su decisión en lo que corresponde a la actuación llevada a cabo, en el entendido que la reforma a la demanda solamente alude a la prueba pericial que aportó con ese escrito. Añadió que procedía a decretar y tener como prueba el dictamen solicitado, y lo correspondiente a la citación a la persona que suscribe el dictamen para evacuar el cuestionario que corresponda. De ese modo, dijo que en virtud de lo anterior se repondrá lo pertinente, esto es, declarar y tener como prueba el dictamen pericial y también darle el valor probatorio que en derecho corresponda.

Al desconectarse de la audiencia el abogado de la parte demandada por unos minutos, el *a quo* al retomar la misma, reiteró que teniendo en cuenta que le asistía la razón a la demandante, en el entendido que presentó la reforma a la demanda, la cual se circunscribía a que se tuviera en cuenta un dictamen pericial, respecto del cual la demandada podía hacer uso de las facultades conferidas por la ley, esto es, ejercer el derecho de contradicción frente al dictamen. Asimismo, adujo que teniendo en cuenta que el testigo que solicitó la activa ya no está vinculado con la demandante y que la persona que debe rendir declaración es la señora ÁNGELICA ACERO BARRETO, decretó su testimonio.

Por último, reitero que en ningún momento con lo que se está llevando a cabo, esto es, declarar la prosperidad de la solicitud impetrada, se modificaron los hechos de la demandada, pues la reforma solo se circunscribe en tener en cuenta el dictamen pericial y la prueba testimonial que acababa de decretar.

De otro lado, el Juez de primer grado al resolver el recurso de reposición que propuso la parte demandada, frente a auto que no decretó el dictamen pericial que solicitó en la contestación a la demanda, señaló que reponía tal decisión y se accedió a su práctica. Por lo que dispuso continuar con el trámite pertinente.

IV.-RECURSO DE APELACIÓN:

La parte demandada inconforme con la decisión del juez de instancia frente a la resolución de la nulidad planteada por la parte actora, presentó recurso de apelación.

Al respecto, señaló que la eventual nulidad se saneó por la inacción de la parte actora de cara a la omisión del Juzgado de origen en relación con la reforma a la demanda, reiterando que se tuvieron varias oportunidades, incluso más de un año y medio para que la activa hubiera planteado al Juzgado la nulidad que formuló, la que por demás convalidó, lo que impedía plantearla, ya que en la etapa de saneamiento del proceso cuando el Juez indagó a las partes y a los apoderados sobre si evidenciaban alguna irregularidad o nulidad que se pudiera plantear, la apoderada de la parte actora indicó que no, y que estaba de acuerdo con la decisión y que se continuara con el proceso, es decir, con la demanda y la contestación sin hacer referencia a la reforma, lo que conllevaba a negar el incidente de nulidad formulado y continuar con el trámite del proceso.

Sin embargo, adujo que en caso de accederse a la nulidad y que el Juzgado de instancia hubiese advertido el error, lo procedente era declarar la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento, proceder a admitir la reforma a la demanda y correr el traslado a la pasiva por el termino de cinco días para se pronunciara sobre la misma en los términos que establece la ley.

VI.-CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto era procedente que el Juzgado de instancia accediera a la nulidad que planteó la parte actora, respecto a la reforma a la demanda y en consecuencia decretara las pruebas que solicitó en dicho escrito.

c. De la nulidad:

Sea lo primero indicar que el artículo 37 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 2 de la Ley 1149 de 2007, establece sobre los incidentes que sólo podrán proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a menos de que se trate de hechos ocurridos con posterioridad; quien los propone deberá aportar las pruebas en la misma audiencia; se decidirán en la sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisión previa.

A su vez, el artículo 133 del C.G.P. establece de manera taxativa las causales de nulidad que se pueden formular, entre las cuales se encuentra la propuesta por la parte actora, en el numeral 5º del citado precepto legal, que reza:

> *"ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*
>
> *"[…]*
>
> *"5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria."*

Entre tanto, el artículo 135 del mismo compendio normativo señala:

> *"ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.*
> *No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla".*

De la misma forma, el artículo 136 *ibidem,* sostiene que la nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

> *"1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.*
>
> *"2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada."*

Al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido sobre el régimen de nulidades en proveído AL4913-2022, Radicación No. 74542 de 25 de octubre de 2022, lo siguiente:

> *"Dicho régimen tiene como propósito dotar al sistema procesal del control de legalidad requerido «[…] para corregir o sanear los vicios» que configuren irregularidades dentro del proceso, pues así lo prevé el artículo 132 CGP, por lo que se distinguen de los recursos, en tanto su vocación es superar cuestiones de trámite y no de fondo que, habiéndose presentado, afecten la validez del litigio en su sentido adjetivo y no material.*
>
> *De otra parte, podrá invocarse la nulidad de una actuación procesal cuando se verifique alguna de las causales taxativas del artículo 133 ibidem, de tal suerte que no es viable formular argumentos ajenos a ellas, pues «El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo» (artículo 135, inciso 4 Ibidem) y así lo ha reconocido esta corporación (CSJ AL4676-2021, CSJ AL4630-2021, CSJ AL4304-2021, CSJ AL4274-2021, CSJ AL3754-2021, CSJ AL3604-2021, CSJ AL3276-2021, CSJ AL2805-2021, CSJ AL2164-2021, CSJ AL1982-2021, CSJ AL1694-2021, CSJ AL1461-2021, CSJ AL620-2021 y CSJ AL587-2021).*
>
> *"En concreto, en la providencia CSJ AL2805-2021 se precisó lo siguiente: De conformidad con el Código General del Proceso, son tres los postulados que rigen el tema relativo a las nulidades adjetivas, a saber: especificidad, protección y convalidación. El primero reclama un texto legal que reconozca la causal, al punto que el proceso solo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales; por ello, el artículo 135 (inciso 4) del citado estatuto establece*

textualmente que «El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo». El segundo guarda relación con la legitimidad y el interés que pueda tener la parte que invoca la causal de nulidad respectiva, pues debe alegar y demostrar que la decisión le genera un perjuicio según el precepto antes citado, que en su inciso 1 prevé que quien la invoca «deberá tener legitimación para proponerla», de tal suerte que, aunque se configure la causal, si ésta no lo perjudica, de nada sirve alegarla. Y el tercero, relacionado con la convalidación, corresponde a la posibilidad de saneamiento, expreso o tácito, por no ser alegado el vicio por la parte afectada.

"En ese orden, solo pueden proponerse las nulidades contempladas de manera taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso, es decir, sobre los hechos y por las razones expresamente contempladas en la ley, aplicables en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social."

Por su parte, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia SC280-2018 con Radicación No. 11001-31-10-007-2010-00947-01 de 20 de febrero de 2018, al referirse sobre el principio de convalidación que rige el instituto de las nulidades, señaló: *"la convalidación, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuración de la nulidad cuando el perjudicado expresa o tácitamente ratificó la actuación anómala, en señal de ausencia de afectación a sus intereses (Cfr. SC, 19dic. 2011, rad. n.° 2008-00084-01).".*

d. Del caso en concreto:

Al descender al caso de marras, se recuerda que en el presente trámite procesal mediante auto calendado el 20 de noviembre de 2020 se admitió la demanda, a continuación, mediante proveído de 1º de octubre de 2021 se inadmitió la contestación que allegó la demandada COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., por tanto, al ser subsanada en tiempo, se tuvo por contestada la demanda y se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. en auto de 29 de marzo de 2022, sin embargo, dicha diligencia fue reprograma en dos ocasiones como se extrae de los proveídos de 6 de julio y 27 de septiembre de dicha anualidad, la cual finalmente se llevó a cabo el 27 de octubre de 2022. (Fls. 111 a 112, 140 archivo 01 y archivos 06, 08, 09).

Adicionalmente, al verificar esta Colegiatura el audio de la citada audiencia, se encuentra que, en efecto en la etapa de saneamiento y fijación del litigio, el Juez de instancia además de sostener que no observaba causal de nulidad que invalidara lo actuado, concedió el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que se manifestaran sobre el particular, sin que evidencie que la parte accionante haya puesto de presente alguna inconformidad al respecto.

En virtud de lo anterior, considera la Sala que con tal proceder la parte demandante convalidó la falta de pronunciamiento del Juzgado de origen frente a la reforma a la demanda que remitió a ese estrado judicial el 10 de febrero de 2021, pues no manifestó disenso alguno a través de los recursos de ley, respecto al auto que tuvo por contestada la demanda y fijo fecha para audiencia, ni los que la reprogramaron, actuar mantuvo en la etapa de saneamiento y fijación del litigio, en la que tampoco indicó nada sobre la reforma a la demanda; luego, es palmario que la nulidad alegada quedó saneada, contrario a lo sostenido por el *a-quo*, lo que conlleva a revocar el auto que accedió a la nulidad que propuso la parte demandante y el consecuente decreto de la prueba pericial y testimonial que fueron decretados en atención a los aspectos que fueron objeto de reforma.

Por último, debe señalar la Sala que la decisión aquí adoptada en manera alguna implica desconocer el decreto oficioso de pruebas, en tanto la decisión se adoptó en el marco de la nulidad, misma que se encontraba saneada, conservando en todo caso, la facultad del *a-quo* de decretar las pruebas de oficio que estime conducentes. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, la nulidad planteada por la parte demandante no goza de prosperidad, por lo que la decisión de primer grado habrá de revocarse.

SIN COSTAS en esta instancia al no haberse causado.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto el auto proferido el 27 de octubre de 2022, mediante el cual se accedió a la nulidad que propuso la parte demandante y se decretó de la prueba pericial y testimonial que fueron solicitadas en la reforma la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **06 2019 00660 01**
Demandante:	MARÍA MERCEDES OTERO PALAU
Demandado:	COLOMBO FILMS S.A. Y OTROS
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., en contra del auto proferido el 19 de octubre de 2022 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se tuvo por no contestada la demanda.

I.- ANTECEDENTES:

La señora MARÍA MERCEDES OTERO PALAU promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLOMBO FILMS S.A., y solidariamente en contra de CLARO COLOMBIA, SODIMAC COLOMBIA S.A., BAVARIA S.A., MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A. – MACADCO y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., con el fin que se declare que sostuvo un contrato de trabajo con COLOMBO FILMS S.A., el cual finalizó en febrero de 2018 por parte del empleador sin justa causa, y se declaren solidariamente responsables de las condenas emitidas a las demandas enjuiciadas.

Como consecuencia de tales declaraciones, pretende se condene al pago de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones, los

aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, la indexación de las sumas adeudadas, la sanción por la no consignación de cesantías, la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria, el pago de la pensión sanción y los perjuicios morales; más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra y extra petita*.

En subsidio solicita el reintegró a su cargo, y se ordene el pago de los salarios y demás prestaciones insolutas. (Folios 2 a 25 archivo 01).

Después de subsanada la demanda, el Juzgado de origen mediante auto adiado el 28 de noviembre de 2019, admitió la demanda en contra de COLOMBO FILMS S.A., y solidariamente en contra de CLARO COLOMBIA, SODIMAC COLOMBIA S.A., BAVARIA S.A., MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A. – MACADCO y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. (Fls. 154 a 155 archivo 01)

En tal sentido, las demandadas COLOMBO FILMS S.A., MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A. – MACADCO presentaron escrito de contestación. (Fls. 158 a 194 y 210 a 236 archivo 01).

Por auto de 9 de diciembre de 2021, se tuvo por notificada por conducta concluyente a la demandada SODIMAC COLOMBIA S.A. y se corrió traslado de la demanda, igualmente se le indicó a la parte actora que el expediente estaba a su disposición para que llevara a cabo la notificación de las demás demandadas. En esa medida, dicha accionada allegó contestación y llamamiento en garantía. (Archivos 05 y 06).

Mediante proveído de 6 de junio de 2022, se requirió nuevamente a la activa para que procediera con la notificación a las demandadas CLARO COLOMBIA, BAVARIA S.A. y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., conforme lo reglado en los artículos 291 y 292 del CGP. Así las cosas, por medio de correo electrónico de 15 de julio de 2022, la demandante allegó memorial en el que manifiesta

que realizó la notificación a dichas demandadas conforme lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022. (Archivos 08 y 09).

En auto de 04 de agosto de 2022, se incorporaron las referidas diligencias de notificación y se le indicó a la demandante que estaba a su disposición el expediente para llevar a cabo la notificación de que trata el artículo 292 del C.G.P. (Archivo 10).

Vía correo electrónico el día 22 de septiembre de 2022, la demandada DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. allegó contestación a la demanda. Sucediendo lo mismo con la demandada BAVARIA S.A. (Archivos 11 y 12).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

En proveído fechado el 19 de octubre de 2022, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá dispuso tener por contestada la demanda por parte de COLOMBO FILMS S.A., MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A. – MACADCO, SODIMAC COLOMBIA S.A. y BAVARIA S.A. y en los que respecta a CLARO COLOMBIA y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., dispuso tenerla por no contestada.

En sustento de tal determinación la *a-quo* señaló que, si bien en auto de 4 de agosto de 2022 dispuso que la activa adelantara los trámites de notificación conforme lo preceptuado en el artículo 292 del CGP, no era menos cierto, que el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022 que estableció de manera permanente la vigencia del Decreto 806 de 2020, regulaba lo referente a la notificación personal.

De modo que, al obrar constancia del acuse de recibo de la notificación personal en los términos de la nueva ley, dejó sin efecto el auto de 4 de agosto de 2022 y dispuso tener por notificada personalmente a CLARO COLOMBIA y a DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. a partir del 30 de junio de 2022, lo que

conlleva a que las citadas encartadas contaran hasta el 14 de julio de 2022 para contestar la demanda, advirtiendo que la primera no se pronunció en ese término y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. solo la aportó hasta el 22 de septiembre de 2022, es decir, de manera extemporánea, por lo que tuvo por no contestada la demanda a esas dos convocada a juicio.(Archivo 13).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconformes con tal decisión, COMCEL S.A. y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación. (Archivos 14 y 15).

DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., sustentó su disenso, aduciendo que mediante auto de 6 de junio de 2022, el juzgado de primer grado advirtió a la parte demandante que el expediente se encontraba a disposición para que procediera con la elaboración y remisión de la notificación personal y por aviso de las demandadas CLARO COLOMBIA S.A., BAVARIA S.A. Y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A., en los términos de los artículos 291 y 292 del C.G.P.

Posteriormente, en auto de 4 de agosto de 2022 el juzgado de origen advirtió a la parte demandante que el expediente se encontraba a su disposición para la elaboración y remisión de la notificación por aviso respecto de las accionadas CLARO COLOMBIA S.A., BAVARIA S.A., y DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A., conforme lo estipulado en el artículo 292 del C.G.P. Así, el 22 de septiembre de 2022, esa apelante a través de apoderado, por conducta concluyente radicó electrónicamente la contestación de la demanda.

Sin embargo, en proveído de 19 de octubre de 2022, el Juzgado de primer grado consideró que, en el proceso de la referencia, existe constancia del acuse de recibo respecto de la notificación personal realizada a DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. conforme lo exige el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, notificación que se concretó el 30 de junio de 2022, por lo que tenía hasta el 14

de julio de 2022 para contestar la demanda. En consecuencia, dispuso dejar sin valor ni efecto el auto de fecha 4 de agosto de 2022.

Enfatizó que al revisar el correo electrónico cofinaciera@grupoddb.co, correspondiente al 24 de junio de 2022 hasta la fecha, no observó que se le hubiese allegado notificación personal, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

En esa medida, solicita se revoque el auto de 19 de octubre de 2022, toda vez, que no se tiene por cuenta de la impugnante la notificación personal referenciada en el auto objeto de recurso, en consecuencia, se le tenga por notificada por conducta concluyente y se le tenga por contestada la demanda de la referencia y en términos, el 22 de septiembre de 2022. (Archivo 15).

En auto de 7 de diciembre de 2022, el juzgado primigenio expuso que no se pronunciaría frente al recurso que impetró COMCEL S.A., en tanto, no ostenta la condición de demandada en el presente asunto, por lo que se abstuvo de pronunciarse al respecto. En lo que respecta al recurso de reposición de DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., lo negó por extemporáneo y concedió el recurso de apelación que impetró de manera subsidiaria. (Archivo 17).

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, la Sala habrá de determinar si la contestación de demanda impetrada por DDB WORLDWIDE

COLOMBIA S.A.S. fue interpuesta dentro del término procesal oportuno, o si, por el contrario, la misma fue extemporánea.

c. De la notificación de la demanda:

Para lo pertinente, sea lo primero indicar la procedencia del recurso de apelación frente al auto que tuvo por no contestada la demanda, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.

Así las cosas, precisa la Sala que el artículo 74 del C.P.T. y de la S.S. establece:

> ***"ARTICULO 74. TRASLADO DE LA DEMANDA:*** *Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."*

Vale la pena destacar igualmente, que la demanda fue presentada el día 13 de agosto de 2019, como da cuenta la respectiva acta individual de reparto (Fl. 1 – archivo 01), calenda en la que aún no se encontraba vigente Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, ni la Ley 2213 de 2022 mediante la cual se estableció la vigencia permanente del citado Decreto.

Luego, las normas que regulaban lo atinente a la notificación del auto admisorio de la demanda para la calenda en la que fue presentada y admitida, refiere a los artículos 29 y 41 del Estatuto Procesal Laboral, los que establecen que dicha providencia debe ser notificada de manera personal al demandado, ello en consonancia con lo reglado en los artículos 291 y 292 del C.G.P.

No obstante, el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos

judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, además de señalar en su artículo 2º que se debían utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, en su artículo 8º, se ocupó de regular lo atinente a la notificación personal.

De esa forma, el artículo 8º de la Ley 2213 de 13 de junio 2022, por medio del cual estableció la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, indica sobre la notificación personal:

> *"ARTÍCULO 8o. NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> ***El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.***
>
> *La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.*
>
> *Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.*
>
> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*

PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.

PARÁGRAFO 2o. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales.

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal (UPU) con cargo a la franquicia postal." (Negrilla fuera de texto).

d. Del caso en concreto:

En tal sentido, claro es el inciso segundo de la norma en cita en advertir que, la dirección de notificaciones electrónicas del sujeto a notificar que suministre el interesado debe realizarse bajo la gravedad de juramento, al igual que debe informar la manera como obtuvo la misma, acreditando las evidencias correspondientes que vislumbren tales afirmaciones.

Así las cosas, al confrontar la demanda que presentó la señora MARÍA MERCEDES OTERO PALAU el 13 de agosto de 2019, se observa que en el acápite de notificaciones indicó como domicilio de la impugnante esta ciudad, además informó el nombre del representante legal de esa enjuiciada y como correo electrónico indicó ddbcol.com.co. Adicionalmente, se advierte que con el escrito de demanda anexó el certificado de existencia y representación legal de la sociedad DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A. expedido el 19 de marzo de 2019, en el que se señala que el correo de notificación judicial de esa convocada a juicio es cofinanciera@ddbcol.com.co. (Fls. 24 y 122 a 124 – archivo 01).

De lo anterior, diáfano es que la demanda fue presentada y admitida antes de la vigencia de la norma que dio cabida a la implementación de las tecnologías

de la información en los procesos judiciales y que permitió la notificación personal con el envío de la providencia a la dirección electrónica o sitio que suministrara el interesado. Sin embargo, el Juzgado de origen en vigencia de las disposiciones que dieron lugar al uso de tales tecnologías en los trámites judiciales, profirió auto de 6 de junio de 2022 en el requirió a la activa para que llevara a cabo la notificación entre otros, el de la demandada DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A., conforme lo normado en los artículos 291 y 292 del CGP; requerimiento que reiteró en proveído de 4 de agosto de 2022. (Archivo 08 y 10).

En esa medida, mediante correo electrónico de 15 de julio de 2022, la parte actora allegó memorial en el que informó que había realizado la notificación a la referida demandada el 24 de junio de 2022 conforme lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022 y además aportó el trámite del citatorio a esa demandada. (Archivo 09).

Bajo ese escenario, encuentra la Sala que no se cumplieron los preceptos normativos del artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, vigente para la fecha en la que se llevó a cabo la notificación personal del auto admisorio de a la apelante, pues como viene de verse, pese a que la actora señaló un canal digital para efectos de notificaciones en la demanda, se advierte que no corresponde al correo designado por la impugnante para efectos de remitir notificaciones judiciales que se indica en la cámara de comercio que se aportó con la demandada.

De otro lado, no puede soslayarse el hecho que la promotora no obstante el Juzgado de instancia haberla instando a que llevara a cabo las notificaciones a la apelante conforme lo reglado en los artículos 291 y 292 del CGP, a *motu proprio* decidió dar aplicación al artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, por lo que procedió a enviar la notificación personal al correo electrónico cofinanciera@ddbcol.com.co, es decir, al que obra en la cámara de comercio que se allegó con la demanda, sin que previamente haya dado cumplimiento a

los dispuesto en el inciso 2º del artículo 8° de la aludida ley, toda vez que no informó al Despacho bajo juramento la forma en que obtuvo la dirección electrónica de DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. para llevar a cabo la notificación y menos aún, tampoco aportó las pruebas que permitieran corroborar tal información.

Adicionalmente, esta Colegiatura al contrastar el correo electrónico para notificaciones judiciales que reposa en el certificado de existencia y representación legal que aportó la accionada DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. con la contestación que presentó el 22 de septiembre de 2022 y que fuera expedido el día 1º del mismo mes y año, encuentra que el canal de comunicación que se informa es cofinanciera@grupoddb.co, luego, no es el mismo al que se dirigió la notificación personal, conforme lo expone dicha sociedad en la alzada. (Archivo 11).

De esa forma, la notificación que realizó la parte actora a la encartada DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. el 24 de junio de 2022 al correo electrónico cofinanciera@ddbcol.com.co, no puede ser avalada como un trámite procesal efectivo, pues resulta palmario el decaimiento procesal al tenor del artículo 29 constitucional, toda vez que, si bien obra constancia que el correo electrónico de notificación fue entregado, ese precepto no demuestra en la realidad procesal que en efecto correspondía a la referida sociedad al momento en que se llevó a cabo dicho trámite; circunstancia por la cual la falladora de primer grado no debió dar por surtida la notificación personal en legal orden.

Recalca la Sala además, que a pesar de que la Corte Constitucional mediante sentencia C-420 del 24 de septiembre de 2020, en revisión realizada al Decreto 806 de 2020 el que posteriormente fue establecido como legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, estableció que tres de sus disposiciones se encontraban constitucionalmente condicionadas, esto es, las que gravitan en torno al artículo 6°, el inciso 3° del artículo 8° y el parágrafo del artículo 9°; manteniendo las demás disposiciones objeto de análisis

exequibles, incluida la que establece la carga procesal a cargo del demandante que se echó de menos en el presente proceso, disposición que en sí satisface mandatos constitucionales relacionados con el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

En este entendido, y al tenor de la norma y de la jurisprudencia traída a colación, encuentra esta Corporación que la parte demandante no cumplió con la disposición contenida en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, toda vez que no informó al Despacho la forma en que obtuvo la dirección electrónica de la impugnante, aspecto que debió ser confrontado con debida diligencia por parte de la *a-quo,* teniendo en cuenta que el certificado que aportó con la demandada, data del año 2019 y la notificación se realizó en el año 2022, lapso en el que evidentemente en el presente asunto se modificó la información que aquí se controvierte.

En consecuencia, habrá de revocarse de forma parcial el auto fechado el 19 de octubre de 2022, mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda a la accionada DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., para en su lugar tenerla por notificada por conducta concluyente conforme lo normado en el artículo 301 del C.G.P., aplicable a los juicios del trabajo por remisión analógica; en consecuencia, el Juzgado de origen deberá proceder con el trámite que corresponda frente a la contestación que allegó esa sociedad el 22 de septiembre de 2022.

SIN COSTAS en esta instancia al no haberse causado.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto de 19 de octubre de 2022, mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda a la enjuiciada DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S., para en su lugar tenerla por notificada por conducta concluyente conforme lo normado en el artículo 301 del C.G.P.; en consecuencia, el Juzgado de primer grado deberá proceder con el trámite que corresponda frente a la contestación que allegó esa accionada el 22 de septiembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **07 2019 00796 01**
Demandante:	MARTHA CECILIA MARTÍN MARTÍNEZ
Demandado:	TRANSMILENIO S.A. y ANGELCOM S.A.S.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por TRANSMILENIO S.A., en contra de la decisión fechada el 26 de octubre de 2022 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la cual se declaró no probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia.

I.- ANTECEDENTES:

La señora MARTHA CECILIA MARTÍN MARTÍNEZ promovió demanda ordinaria en contra de TRANSMILENIO S.A. y ANGELCOM S.A.S..

Lo anterior, a fin de declararse la existencia de un contrato de trabajo con TRANSMILENIO S.A. por el periodo comprendido entre el 25 de enero 2007 y el 3 de junio de 2015, siendo solidariamente la encartada ANGELCOM S.A.S. sobre los derechos laborales perseguidos.

Por consiguiente, se les condene al reconocimiento y pago de salarios, horas extras y trabajo suplementario, vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses a las

cesantías, indemnización moratoria en los términos del artículo 65 del C.S.T., indexación y costas procesales.

A razón de lo anterior, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, quien mediante proveído calendado el 9 de diciembre de 2019, admitió la acción en contra de TRANSMILENIO S.A. y ANGELCOM S.A.S. (Fl. 116 – PDF 01 CUADERNO FÍSICO).

Luego de notificada en legal forma la encartada TRANSMILENIO S.A., la misma contestó la demanda formulando la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia (Fls. 142 a 175 – PDF 01 CUADERNO FÍSICO). Argumentó el medio exceptivo objeto de reproche bajo el entendido que era procedente al tenor de lo estatuido en el artículo 100 del C.G.P., teniendo en cuenta que la parte demandante no agotó la reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S.

Lo anterior, en razón a que no puede perderse de vista que su naturaleza se encuentra catalogada en términos generales como un ente público y, por ende, se convierte en requisito de procedibilidad la reclamación administrativa reglada en el Estatuto Procesal del Trabajo, sin que obre prueba de dicho escrito dentro del asunto de marras.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. llevada a cabo el 26 de octubre de 2022, dentro de la etapa de decisión de excepciones previas declaró no probado el medio exceptivo.

Para arribar a dicha conclusión, indicó que la demandante con el escrito de demanda, allegó la reclamación administrada echada de menos por TRANSMILENIO S.A., la cual por demás contiene el sello expreso por la entidad con fecha de presentación el 11 de noviembre de 2017, de allí que con dicha documental se haya

cumplido con el requisito de procedibilidad regulada en el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión TRANSMILENIO S.A. Argumentó en su alzada que, el documento que el *a-quo* tuvo en cuenta para dar por demostrada la falta de reclamación administrativa, fue estudiado en oportunidad por otro juzgado, más exactamente el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario 35-2017-00612-00, indicándose allí que ese documento no era suficiente para el agotamiento del requisito de procedibilidad.

Que con ocasión de lo anterior, el promotor de la acción decidió radicar nuevamente reclamación administrativa calendada el 24 de octubre de 2019, derecho de petición en el cual solicitó se informara si entre el 1º de enero de 2007 y el 3 de junio de 2015 celebró contratos con la cooperativa de trabajo asociado ANGELCOM, cuestionamientos que tampoco tenían vocación para configurar la reclamación administrativa.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos, la Sala deberá auscultar si goza o no de prosperidad el medio exceptivo objeto de reproche por parte de TRANSMILENIO S.A.

c. De la reclamación administrativa:

Al punto, se recuerda que la reclamación administrativa está consagrada en el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., como un requisito previo a la iniciación del proceso judicial, cuando ha de participar como demandada La Nación, entidades territoriales o una entidad administrativa pública; teniendo como finalidad, que la misma entidad reconsidere su posición y modifique la situación del peticionario sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales; debiendo coincidir en todo caso lo reclamado con lo solicitado judicialmente.

Sobre el tema, la SL CSJ en sentencia radicado 30056 del 24 de mayo de 2007, reiterada en sentencia SL13128 de 2014, rad. 45819 del 24 de septiembre de 2014, expresó:

> *"El Código de Procedimiento Laboral dispone en su artículo 6° que "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse sólo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente". De manera, que antes de reclamarse ante los estrados laborales de la jurisdicción ordinaria alguna pretensión de orden social a cualesquiera de las anteriores entidades, se hace necesario que el interesado formule previamente su petición de reivindicación ante éstas.*
>
> ***"Tiene por finalidad el anterior procedimiento gubernativo que las entidades de derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario****, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez Laboral, la solución de un conflicto en cierne.*
>
> *"De ahí que se haya dicho por la doctrina y la jurisprudencia laboral* ***que a través del instituto de la vía gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer una especie de justicia interna, como que la misma ley les permite conocer de manera primigenia, es decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las inconformidades de orden laboral que tengan las personas legitimadas para formularles esta clase de cuestionamientos, para que sean tales organismos, actuando como juez de sus propias decisiones****, los que definan la viabilidad de aquellas y puedan así corregir por si mismas, cualquier error en que hayan podido incurrir en*

torno a las actuaciones que originaron tales desavenencias y evitar de esta manera los traumatismos propios de una controversia judicial".

"De otro lado, se ha manifestado que el mecanismo procesal contemplado en el artículo 6° del C. de P.L. ofrece ventajas incomparables para los entes relacionados en dicha norma, porque al brindar a los mismos la posibilidad de autocomponer sus conflictos, se evitan los costos que implicaría para tales entidades un largo proceso laboral, lo que significa un considerable ahorro para los contribuyentes y una garantía de que no se verá afectada la buena marcha de dichos organismos como consecuencia de las vicisitudes y tropiezos que conlleva la atención de un juicio, lo que de paso asegura que todos los esfuerzos de aquellos entes se concentrarán en sus naturales cometidos estatales." (Negrillas de la Sala).

Precisando sea del caso que tal exigencia legal, resulta aplicable a cualquier tipo de controversia de índole laboral, incluso en tratándose de derechos ciertos e indiscutibles. Por cuanto, si bien es cierto que los mismos no son susceptibles de conciliación, ni transacción ello es conforme lo dicta de forma expresa el artículo 53 de nuestra Constitución Política, en modo alguno tal disposición permite entrever que tal directriz de orden constitucional se aplique a la reclamación administrativa.

A *contrario sensu* la reclamación administrativa, en modo alguno conculca el derecho o impide la disposición del mismo, ni permite satisfacer ningún tipo de obligación, pues como bien se explicó, su único objeto es permitir que la administración se pronuncie respecto de la obligación reclamada, previo a que el conflicto sea puesto en debate ante el aparato jurisdiccional; luego, con este no se termina el proceso, ni se impide el acceso a la administración de justicia, tan solo se limita su ejercicio previo su agotamiento, por manera que no existe duda en la clara diferencia de ambas instituciones jurídicas, pero se requiere como requisito *sine qua non* de procedibilidad para coaccionar el aparato jurisdiccional.

Descendiendo al caso *sub-examine*, se tiene que la demandante allegó con su escrito de contestación escrito de reclamación administrativa que fuese radicada ante TRANSMILENIO S.A. el 11 de noviembre de 2016, documental que por demás no fue refutada de falsa (Fl. 102 – PDF 01 CUADERNO FÍSICO). El mentado escrito contiene lo siguiente:

*"**REF. Requerimiento de cumplimiento al artículo 4 LEY 712 DE 2001, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012.***
MARTHA CECILIA MARTÍN MARTÍNEZ C.C. No. 52.026.449 de Bogotá

***CARLOS FRANCISCO JIMÉNEZ ALONSO**, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.476.532, expedida en Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 103078 del Consejo Superior de la Judicatura obrando como apoderado de la señora **MARTHA CECILIA MARTÍN MARTÍNEZ**, para instaurar demanda laboral de primera instancia en contra de "**TRANSMILENIO S.A.**", en ejercicio de la prerrogativa que me confiere **LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA**, sobre los derechos y acreencias laborales de mi poderdante. Comedidamente llego ante su despacho, por ser de su competencia, con el fin de requerirle administrativamente el cumplimiento de lo dispuestos en el código de procedimiento laboral y seguridad social y por ende el código sustantivo del trabajo, petición que le formulo en los siguientes términos:*

1. *El citado artículo 4 de la ley 712 de 2001 modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, expresamente dispone: De la reclamación por parte del servidor público o trabajador a las entidades públicas.*

2. *Cuando las entidades de la administración pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para solución de un procedimiento o reclamación de un trabajador, que obre en su entidad pública, procederán a solicitar el envío de dicha información.*

   En consecuencia, solicito se sirva cumplir el expresado ordenamiento a esta entidad, que constituye un deber legal, para que con destino a la actuación administrativa que se adelanta envíe los documentos pertinentes que reposan en su poder."

Así las cosas, advierte la Sala que si bien el artículo 6º del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad dispone un simple reclamo escrito para la prosperidad de este requisito de prosperidad, no puede perderse de vista que tal reclamo pueda impetrarse en forma aislada con relación a lo verdaderamente solicitado dentro del *petitum.*

Bajo este escenario, nótese que las pretensiones de la demanda se encuentran encaminadas a la declaratoria de un contrato de trabajo con la encartada TRANSMILENIO S.A. por el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2007 y el 3 de junio de 2015, de allí que deba cancelar pago de salarios, horas extras y trabajo

suplementario, vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses a las mismas, indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T., indexación y costas procesales.

Por su parte, la reclamación administrativa que fuese impetrada con destino a TRANSMILENIO S.A. el 11 de noviembre de 2016, si bien se referenció tal escrito como reclamación administrativa, el único contenido que comprende frente al ataque de los derechos perseguidos en la demanda que nos ocupa gravita en torno a la denominación "*sobre los derechos y acreencias*", y pretende de manera concreta que *"con destino a la actuación administrativa que se adelanta envíe los documentos pertinentes que reposan en su poder".*

En tal sentido, a juicio de la Sala el escrito de reclamación no puede atenderse como requisito de procedibilidad para el asunto de marras, en la medida que a pesar de que la norma en su tenor literal exponga la presentación de un simple reclamo escrito, también su compendio relata que ese reclamo debe realizarse sobre el derecho que pretenda, entendiéndose este último aspecto como aquel que discrimine en forma general los puntos alegados dentro de la demanda.

Por tal razón, palmario resulta que la parte demandante no referenció en el escrito de reclamación propiamente la existencia del contrato de trabajo, como tampoco lo atinente a las acreencias laborales ni las indemnizaciones perseguidas dentro del escritorio demandatorio, tópico que a juicio de la Sala resulta insuficiente para el agotamiento del requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S.

Es menester aclarar que en tratándose de doctrina, el libro denominado *"Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad"*, cuyo autor es GERARDO BOTERO ZULUAGA – *Pag 213*, discriminó unas características propias de la reclamación administrativa, en la siguiente forma:

> *"Como características importantes de la reclamación administrativa se pueden destacar: a) la reclamación como tal no requiere de formalidad especial, basta*

un simple escrito para que se de por cumplida la misma; b) no se exige un medio de prueba específico para demostrar que se llevó a cabo tal reclamación (no es medio solemne); c) Jurisprudencialmente se ha dicho que el agotamiento de la vía gubernativa es factor de competencia, por lo que su incumplimiento conlleva su inadmisión y el posterior rechazo de la demanda; ***d) debe existir correspondencia entre lo reclamado en la demanda y aquello que se solicitó en el agotamiento de la vía gubernativa, pues de lo contrario se puede incurrir en una indebida acumulación de pretensiones que hagan inadmisible la demanda o terminar el proceso con sentencia inhibitoria frente a las peticiones que no fueron objeto de reclamación previa;*** *e) las reclamaciones que tienen el carácter de accesorias o dependientes por constituir simples consecuencias en el retardo o la renuencia del empleador en su pago, como los intereses o la indemnización moratoria, no requieren de petición previa (…..).”*

Así las cosas, la Sala puede colegir la configuración del medio exceptivo previo de falta de jurisdicción y competencia a razón de la falta de reclamación administrativa respecto de la encartada TRANSMILENIO S.A., pues sin desconocer la interposición de la petición elevada ante ese sujeto procesal demandado, lo cierto es que el escrito de reclamación carece de una discriminación de lo verdaderamente perseguido en el *petitum* y, en tal sentido, no puede atenderse aceptada frente al requisito de procedibilidad, lo que conlleva a que el proceso no pueda continuarse sobre TRANSMILENIO S.A., máxime si se tiene en cuenta que la literalidad del texto de reclamación lo que persigue el extremo accionante es una solicitud de documentos.

Ahora, si en gracia de discusión y aunque no fue presentado por la parte demandante con el escrito genitor de demanda, la demandada TRANSMILENIO S.A. en el recurso de alzada hace mención de un segundo escrito que elevara la demandante calendada el 24 de octubre de 2019, el cual confrontando la contestación de demanda de la encartada en comento dispone (Fls. 180 a 181 – PDF 01 CUADERNO FÍSICO):

“REF. DERECHO DE PETICIÓN

MARTHA CECILIA MARTÍN MARTÍNEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, con residencia y Domicio en la ciudad de Bogotá, actuando en nombre propio, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, en los artículos 13 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y

en la Ley 1755 de 2015, me permito formular la siguiente petición en interés particular:

PRIMERA: *Sírvase informar si durante el 01 de enero de 2007 al 03 de junio de 2015, la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.", celebró contratos y/o negocios jurídicos con la empresa "ANGELCOM S.A.S.", persona jurídica de derecho privado, con NIT. No. 860.062.719-2.*

SEGUNDA: *Sírvase informar si durante el 01 de enero de 2007 al 03 de junio de 2015, la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.", celebró contratos y/o negocios jurídicos con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, APOYO, DESARROLLO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA "ADETEK", con NIT. No. 830.104.653-8.*

TERCERA: *En el enveto en que la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." haya celebrado contratos y/o negocios jurídicos con las empresas "ANGELCOM S.A.S.", persona jurídica de derecho privado, con NIT. No. 860.062.719-2; y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, APOYO, DESARROLLO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA "ADETEK" con NIT. No. 830.104.653-8, durante el 01 de enero de 2007 al 03 de junio de 2015. Sírvase indicar cuáles fueron los contratos o negocios jurídicos celebrados con dichas empresas.*

CUARTA: *En el enveto en que la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." haya celebrado contratos y/o negocios jurídicos con las empresas "ANGELCOM S.A.S.", persona jurídica de derecho privado, con NIT. No. 860.062.719-2 y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, APOYO, DESARROLLO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA "ADETEK" con NIT. No. 830.104.653-8, durante el 01 de enero de 2007 al 03 de junio de 2015. Sírvase enviar una copia de cada uno de los contratos o negocios jurídicos celebrados con dichas empresas."*

El referido escrito en nada advierte reclamo alguno a la encartada sobre los pedimentos de la demanda; circunstancia por la cual, al no constituirse en legal forma el requisito de procedibilidad, habrá de revocarse el auto apelado, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. **SIN COSTAS** en esta instancia como quiera que el recurso de apelación gozó con vocación de prosperidad.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 26 de octubre de 2022 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá dentro etapa de decisión de excepciones previas cursada en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., para en su lugar declarar probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia ante la falta de reclamación administrativa con relación a TRANSMILENIO S.A., de conformidad con las consideraciones expuesta en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone **DESVINCULAR** del trámite procesal de la demandada TRANSMILENIO S.A. y, por consiguiente, todas las intervenciones que este sujeto procesal haya adelantado dentro del presente asunto.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia como quiera que el recurso interpuesto por TRANSMILENIO S.A. gozó de prosperidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral	1100131050 **10 2021 00495 01**
Demandante:	VIVIANA RAMÍREZ BARRETO
Demandada:	CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., GRUPO ASD S.A.S. y SERVIS S.A.S.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, contra el auto proferido en audiencia del 30 de noviembre del 2022, mediante el cual se resolvió la excepción propuesta por la pasiva de falta de integración de litisconsorcio.

I.- ANTECEDENTES:

La demandante VIVIANA RAMÍREZ BARRETO presentó demanda ordinaria laboral en contra de ASSENDA S.A.S. hoy CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., GRUPO ASD S.A.S. y SERVIS S.A.S. como integrantes de la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, con la finalidad que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con las demandadas como miembros de la citada unión temporal, por el periodo comprendido entre el 8 de enero de 2013 y el 8 de junio de 2017. Se declare la mala fe de las encartadas al negarse, sin justificación a pagar los conceptos de reajustes salariales y/o nivelación salarial, horas extras, y salario variable con el respectivo reajuste de cada uno de estos en la respectiva liquidación del auxilio de cesantía,

intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, aportes a seguridad social y la indemnización por despido injusto.

Como consecuencia de dicha declaración, se condene al extremo pasivo a pagar el reajuste o nivelación salarial de los valores los adeudados por la diferencia mensual que dejó de percibir en suma de $2.500.000 a $4.000.000, desde el 4 de marzo de 2015 hasta el 8 de junio de 2017; el salario variable causado del 1º de febrero de 2015 al 8 de junio de 2017, en suma de $200.000 mensuales; las horas extras causadas del 2 de mayo de 2016 al 8 de junio de 2017, en total de 147 horas, el reajuste de las cesantía, los intereses sobre las cesantías, la prima y las vacaciones del 1º de febrero de 2015 al 8 de junio de 2017, el reajuste de la indemnización por despido sin justa causa generada por todo el tiempo laborado, la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., la sanción por no pago de los intereses a las cesantías en las sumas que señala en el libelo introductorio, los aportes que se pagaron de manera deficitaria al Sistema Integral de Seguridad Social del 1º de febrero de 2015 al 8 de junio de 2017, la indexación de las sumas adeudadas, las costas y agencias en derecho, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita*.

Por auto de 28 de agosto de 2020 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí Antioquia, admitió la demanda (Archivo 005).

La demandada CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. al contestar propuso la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia y a su vez, todas las demandas llamaron en garantía a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A. y a MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (Archivo 014, 016 y 018).

Por reforma a la demanda la demandante solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con la demandada GRUPO ASD S.A.S. del 8 de enero de 2013 al 8 de junio de 2017. Se declare la solidaridad de CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S y SERVIS S.A.S como miembros de

la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, y al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, respecto de las condenas que se impongan al GRUPO ASD S.A.S.; además, se declare la mala fe del GRUPO ASD S.A.S., el cual no reajustó los salariales, las horas extras, el salario variable con el respectivo reajuste en la liquidación del auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, aportes a seguridad social y la indemnización por despido injusto.

Como consecuencia de dichas declaraciones, se condene al GRUPO ASD S.A.S, a las condenas que se indican en la demanda principal, excepto lo atiente a la sanción por no pago de los intereses a las cesantías, los aportes que se pagaron de manera deficitaria al Sistema Integral de Seguridad Social del 1º de febrero de 2015 al 8 de junio de 2017, la indexación de las sumas adeudadas, las costas y agencias en derecho, frente a las cuales solicita se condene a las demandadas a pagarlas, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita* (Archivo 22).

Por auto de 8 de octubre de 2020, se tuvo por contestada la demanda, se admitió la reforma a la demanda y se ordenó vincular al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, se admitió el llamamiento en garantía formulado por las encartadas, entre otros. (Archivo 034).

El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL al contestar, formulo la excepción previa que llamó falta de integración de litis consorcio por pasiva o sucesión procesal y la de prescripción extintiva del derecho frente al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. (Archivo 047).

SERVIS S.A.S. y CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVCIOS S.A.S. al contestar la reforma a la demanda propusieron la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia (Archivo 045 y 046)

Por auto de 9 de diciembre de 2020, dio por no contestado no contestado el llamamiento en garantía por parte de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., contestado por parte de LIBERTY SEGUROS S.A. y admitió el llamamiento en garantía que realizó esta última aseguradora a las tres sociedades que integran la unión temporal convocada a juicio, entre otros. (Archivo 087).

En proveído de 22 de enero de 2021, admitió la respuesta al llamamiento en garantía realizado por LIBERTY SEGUROS S.A. a las sociedades CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S., GRUPO ASD S.A.S. y SERVIS S.A.S., y repuso la decisión de 28 de octubre de 2020, en el sentido de tener por contestada la reforma a la demanda por parte de CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. y SERVIS S.A.S., fijo fecha para audiencia y tomó otras decisiones. (Archivo 089).

En auto de 21 de junio de 2021, se admitió el llamamiento en garantía efectuado por LIBERTY SEGUROS S.A. en contra de MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y en auto de 13 de julio admitió la respuesta a dicho llamamiento en garantía y citó a audiencia. (Archivos 099 y 106).

En auto de 21 de septiembre de 2021 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá; siendo asignadas las diligencias al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, el cual avocó conocimiento del asunto mediante proveído del 10 de octubre de 2021 y citó a audiencia. (Archivos 109, 114 y 117)

En audiencia que se surtió el día 30 de noviembre 2022 la falladora de primer grado decidió resolver como de fondo al momento de proferir la sentencia que ponga fin a la instancia la excepción de prescripción extintiva del derecho frente al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL que formuló esa entidad; e igualmente, declaró no probada la de falta de integración de

litisconsorcio por pasiva o sucesión procesal que presentó esa entidad. (Archivos 119 y 120).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Como sustento de su decisión, la Juez de primer grado comenzó por precisar que la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia que propusieron las demandadas fue resuelta en su momento por el Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, lo que conllevó a que esa falladora conozca en la actualidad el presente asunto. En cuanto a la excepción previa de prescripción extintiva del derecho que propuso el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, decidió que sería resulta en la sentencia pusiera fin a la instancia.

Respecto a la excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario por pasiva o sucesión procesal, señaló que se trata de dos figuras jurídicas diferentes. En esa medida, hizo mención al artículo 61 del C.G.P., que regula lo referente a la falta de integración de litisconsorcio necesario, e igualmente, trajo a colación el artículo 68 *ejusdem*, que preceptúa la sucesión procesal.

De esa forma, estimó que en el caso del litisconsorcio necesario, deben comparecer al proceso quienes hayan hecho parte de la relación jurídica procesal, acotando que en el presente caso existe una demanda principal y una reforma la cual es el texto final, en el que se demanda principalmente al GRUPO ASD S.A.S. y solidariamente a CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S y SERVIS S.A.S y al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en donde se reclama la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo con el GRUPO ASD S.A.S. y el pago de las reliquidaciones por los conceptos que se deprecan en la demanda y su reforma.

Además, señalo que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la ADRES entidad que reemplazó al FOSYGA, la cual está encargada de administrar los recursos del sistema de la seguridad social en salud, sin que en las funciones

que tiene esta nueva entidad esté la de reemplazar al FOSYGA como empleador, recordando que en el presente asunto no se están reclamando recobros con cargo a recursos de la seguridad social, sino que el *sub-examine* trata de un asunto en el que se solicita el pago de acreencias de carácter laboral a las sociedades que integraron la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, luego, es claro que no se reclaman pagos por servicios no cubiertos por el plan de salud por parte de Entidades Prestadoras de Salud a la ADRES.

De ese modo, no se advierte de la norma en cita que la ADRES deba responder por obligaciones como empleador por parte del antiguo FOSYGA, siendo evidente que la ADRES no participó dentro de la relación jurídica sustancial, por lo que no hay fundamentos jurídicos que permitan integrarla a la litis en donde se debate una relación de carácter laboral. Declarando no probada la falta de litisconsorcio necesario.

Sobre una posible sucesión procesal, dijo que el Ministerio encartado sigue existiendo, de modo, que la ADRES no lo sustituyó, pues solo sustituyó al FOSYGA en el tema de la administración de recursos de la salud, ente que estaba adscrita a dicho Ministerio, por lo que tampoco es procedente la sucesión procesal.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, presento recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Arguyó que si bien la ADRES tiene unas competencias frente a todos los recursos del sistema, también lo es, que la contratación que se realizó en su momento con el Ministerio se llevó a cabo a través de la Dirección de Fondos de la Protección Social, la cual tenía dentro de sus competencias este tipo de actuación, no obstante, con el Decreto 1429 de 2016 se determinan la

finalización de las funciones de esa dirección que estaban definidas en el Decreto 4107 de 2011.

De esa forma, en el Decreto 1429 de 2016 se establece la transferencia de todas las funciones de ese fondo a la ADRES, conforme el artículo 26 *ejusdem*, el cual señala que la defensa en los procesos judiciales que esté a cargo de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social y los trámites administrativos tendientes al cobro coactivo que esté adelantando la misma Dirección al momento en que la Entidad asuma la administración de los recursos del SGSSS, serán asumidos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, transferencia que constará en las actas que se suscriban para el efecto.

En consecuencia, está en cabeza del ADRES no solo los recursos de la administración, sino también los procesos e incluso las obligaciones contractuales que tenía el Ministerio a través de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, por lo que debe ser incluida esa entidad.

La Juez de Instancia no repuso su decisión, concediendo el recurso de apelación.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si resulta procedente declarar probada la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario.

c. De las Excepciones previas

Sobre este puntual aspecto debe recordar la Corporación que las excepciones previas o dilatorias tienen por objeto eliminar cualquier tipo de impedimento de orden procesal que impida el normal desarrollo del proceso de suerte que las mismas no tienen como finalidad atacar el fondo del asunto en debate, como ocurre con las de mérito o de fondo, en otras palabras, realmente buscan sanear el proceso. En tal sentir, la doctrina nos recuerda:

> *"[…] En estricto sentido, solo tienen carácter de excepción las perentorias, pues son ellas las que se dirigen a contrariar la pretensión presentada por el demandante, ya que las previas buscan evitar actuaciones innecesarias remediando ciertas fallas en el proceso; por ello, en verdad, la excepción previa favorece a las dos partes, y no solo al demandado como pudiera pensarse, pues al permitir el saneamiento inicial del proceso se asegura que este se adelante sobre bases firmes, ajenas a cualquier posibilidad de nulidad[1]".*

Así mismo, se debe enunciar que las excepciones previas o de fondo se encuentran taxativamente regladas en el artículo 100 del C.G.P., aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S. De igual manera, el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. consagra que *"El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo".*

[1] López Blanco, HF. Procedimiento Civil Tomo I. Editores Dupre. 2005.

De cara a lo indicado, conviene precisar que la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario se encuentra enlistada en el numeral 9º del artículo 100 del C.G.P., razón por la cual la Sala procede con el estudio del recurso de apelación frente a esta excepción.

d. Litisconsorcio Necesario

Teniendo en cuenta las actuaciones surtidas dentro del presente proceso, sea lo primero analizar lo contemplado en el artículo 61 del C.G.P., que determina cuales son las circunstancias en las cuales hay lugar a conformar de manera necesaria el contradictorio, en los siguientes términos:

> *"LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*
>
> *"En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término"*
>
> *"[…]*
>
> *"Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio*".

Una vez determinado lo anterior, se observa que el MINISTERIO DE SALUD Y PROSPERIDAD SOCIAL como sustento de la excepción previa que propuso, adujo que el objeto misional e inclusive las obligaciones contractuales del

FOSYGA quedaron en cabeza de la ADRES, la cual estaba adscrita al Ministerio demandado y que era manejado por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia y tenía como propósito administrar los recursos del sistema de salud que tienen destinación definida de conformidad con los preceptos consagrados en la ley y el artículo 48 de la Constitución Política.

Agregó que la ADRES fue creada por la Ley 1753 de 2015, la que en su artículo 66 señala que esa entidad debe garantizar el adecuado flujo de los recursos y realizar los respectivos controles, la cual hace parte del sistema general de seguridad social en salud, y que está adscrita al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, además cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. De modo que la norma en comento fue diáfana en establecer que esa entidad tiene como objeto administrar los recursos que hacen parte del FOSYGA, del FONSAET, los recursos que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del régimen contributivo y los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la UGPP.

De modo que las labores que realizaba la demandante se asemejan a las que hoy en día cubren el objeto social de la ADRES, por lo que en el caso de configurarse la solidaridad, lo seria frente a esa entidad, por lo que debe ser llamada a integrar a litis.

De acuerdo con lo expuesto, se observa que el libelo introductorio y su reforma son claros en señalar que las condenas que se persiguen son producto de la relación laboral que aduce la actora sostuvo con el GRUPO ASD S.A.S., de la cual refiere fueron beneficiarios ASSENDA S.A.S. hoy CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. y SERVIS S.A.S. como integrantes de la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014 y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; advirtiendo en lo que atañe a esta última accionada, que la solidaridad que se depreca se produjo en el marco del Contrato de Consultoría No. 043 de 2013 que pactó

ese Ministerio con las sociedades de la Unión Temporal, según lo sostenido por la promotora en las pretensiones y los hechos de la reforma a la demanda, como viene de verse.

De cara a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que los argumentos de recurrente, de modo alguno son suficientes para dar cabida a la existencia de un litisconsorcio necesario como lo señala esa enjuiciada, en tanto este tan solo es procedente en aquellos casos en que sea imposible zanjar el objeto de debate, sin que se dé la comparecencia de la persona natural o jurídica que se invoca como litisconsorte.

Situación que no se predica en el caso que hoy nos ocupa, habida consideración que si bien para la calenda en la que finalizó la relación laboral que reclama la demandante, es decir, para el 8 de junio de 2017, ya existía la ADRES como ya se dijo. Es palmario que la activa consideró que el Ministerio encartado en razón del contrato que suscribió con la Unión Temporal fue beneficiario de sus servicios, por lo que debe ser condenado de manera solidaria al pago de los emolumentos que reclama, sin que sea imperativo llamar a juicio a otra entidad como lo sostuvo la *a-quo*.

De otro lado, conviene recordar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL497-2022, Radicación No. 81473 de 22de febrero de 2022, en la que abordó el estudio de la solidaridad y el litisconsorcio necesario, así:

> *"El litis consorcio necesario se ha de constituir en todo proceso en el que además de determinar la existencia de unas acreencias laborales a favor del trabajador, se persiga el pago de la condena por parte de cualesquiera de las personas sobre las que la ley impone el deber de la solidaridad´.*
>
> *De esta manera, el responsable principal de las deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia judicial, para que se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno posterior; los deudores solidarios, a su turno, han de ser*

necesariamente partes procesales en los procesos que tengan por objeto definir la solidaridad, esto es, si se dan o no los presupuestos para declarar tal responsabilidad solidaria frente a la deuda laboral, reconocida por el empleador, o declarada judicialmente en proceso, se repite, anterior o concomitante.

En el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no se requiere vincular – nada se opone a que voluntariamente se haga- a un deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia.

Cuando se persiga hacer valer la solidaridad sin que se hubiere establecido la deuda en acta conciliatoria o proceso judicial, se debe constituir litis consorcio necesario con el deudor principal […] (Subrayado de la Sala).

De lo expuesto, se puede concluir que en el *sub lite* será en la sentencia que ponga fin a la instancia, en la que la operadora judicial del caso deberá determinar si se cumplen los presupuestos legales y jurisprudenciales para dar viabilidad a la solidaridad que se solicita a razón de la relación laboral que se alega con las llamadas a juicio, solidaridad que no se endilgó por el demandante a cargo de la ADRES.

En esa medida, la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario no está llamada a prosperar; por las razones aquí expuestas, lo que conlleva a la inexorable confirmación del auto apelado en su integridad.

Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido dentro del presente proceso el 30 de noviembre del 2022, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **13 2016 00098 01**
Demandante:	FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS, quien actúa en causa propia y en representación de su hijo YOSTIN ALEXANDER CLAVIJO BLANDÓN, así como la señora MARÍA NANCY CÁRDENAS CASTAÑEDA
Demandado:	ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. ELCO S.A.S., PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y ESTEBAN ARDILA QUITIAM
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Sería del caso proceder a pronunciarse sobre la resolución del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., de no ser porque la Sala evidencia una falta de legitimación en la causa o interés jurídico para recurrir, respecto de la decisión proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, por medio de la cual se resolvió a cerca de unas medidas cautelares de carácter innominado.

I.- ANTECEDENTES:

El señor FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS, actuando en causa propia y en representación de su menor hijo YOSTIN ALEXANDER CLAVIJO BLANDÓN, así como la señora MARÍA NANCY CÁRDENAS, promovieron demanda ordinaria laboral en

contra de ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y el señor ESTEBAN ARDILA QUITIAN.

Lo anterior, a fin que se declare la existencia de una relación laboral entre el demandante FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS y el señor ESTEBAN ARDILA QUITIAN, último en calidad de contratista de la constructora ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. y de PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN por el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2013 y el 22 de abril de 2013.

Se declare solidariamente responsable a título de culpa patronal al señor ESTEBAN ARDILA QUITIAN, ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. y PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, a razón del accidente de trabajo que sufriera el señor FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS, para que respondan por los correspondientes perjuicios ocasionados a él, a su madre señora MARÍA NANCY CÁRDENAS y su menor hijo YOSTIN ALEXANDER CLAVIJO BLANDÓN, con ocasión de los hechos acontecidos en la obra de construcción del Centro Comercial Unicentro el 22 de abril de 2013 en la Ciudad de Yopal tras caer de la fundición de columna a una altura de 16 metros, siendo entonces responsables de los perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro, generados con ocasión del estado de invalidez absoluta y la resultante pérdida de capacidad laboral con la que finalizó el señor FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS.

Asimismo, se declare que las encartadas son responsables del pago de perjuicios extra patrimoniales a título de daño moral y daño a la vida en relación.

Por consiguiente, se condene a las demandadas al pago del daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro por concepto de la pérdida de capacidad laboral en la suma de $159.343.460, a razón de los hechos acontecidos en la obra de construcción del Centro Comercial Unicentro el 22 de abril de 2013 en la Ciudad de Yopal, tras caer de una fundición de columna a una altura de 16 metros.

Se condene en la suma de 100 S.M.L.M.V. para cada uno de los miembros del núcleo familiar del señor FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS por concepto de daño moral. Al pago de 100 S.M.L.M.V. a favor del señor FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS, así como al pago de 50 S.M.L.V. a la señora MARÍA NANCY CÁRDENAS y YOSTIN ALEXANDER CLAVIJO BLANDÓN en calidad de madre e hijo respectivamente por perjuicios extra patrimoniales a título de daño moral y daño a la vida en relación junto con la actualización correspondiente, lo que resulte probado de manera *ultra y extra petita* y costas procesales.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá en decisión proferida el 24 de noviembre de 2022 accedió a la medida cautelar innominada perseguida respecto de la encartada PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.

Para arribar a dicha conclusión, la *a-quo* indicó que el demandante solicitó la medida cautelar catalogándola como innominada respecto de la sociedad PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, donde pretende se oficie a la Superintendencia de Sociedades para que realice una provisión por valor de $159.343.460, suma con la cual se garantizan las posibles deprecadas dentro del presente proceso.

Lo anterior, con el argumento que entre el demandante FRANKI CLAVIJO CÁRDENAS y el señor ESTEBAN ARDILA QUITIAN existió una relación laboral por el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2013 y el 22 de agosto de 2015, donde éste se desempeñaba como contratista de ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., firma de construcción que estaba ejecutando una obra en el segundo piso del Centro Comercial Unicentro de la Ciudad de Yopal, actividad que en todo momento desempeñó de manera personal hasta el 22 de abril de 2016 cuando tuvo un accidente laboral, obra que para el momento del accidente era de la demandada PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y, por ende, la beneficiaria de dicha obra y responsable a su vez del pago de los salarios e indemnizaciones.

Que la propietaria de la obra ingresó al programa de reestructuración en los términos de la Ley 1116 de 2006, la cual finalizó sin éxito, por lo que la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación designándose una liquidadora, sumado a que el demandante no tiene la legitimación para ser parte dentro del proceso liquidatorio, corriendo así el riesgo de que sea excluido de la reparación del daño sufrido por el accidente de trabajo.

Por tal razón, refirió en primera medida no asistirle la razón al apoderado de ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. en lo atinente a la vinculación de la Superintendencia de Sociedades, pues si bien es cierto en el asunto de marras lo que se solicita es oficiar a dicho ente superintendencial con el propósito de que se genere una provisión para garantizar una presunta condena, resultaría imposible emitir alguna orden a la superintendencia.

De otra parte, la operadora de instancia señaló que la Corte Constitucional en sentencia C-421 de 2020 declaró la exequibilidad del artículo 37 de la Ley 712 de 2001, precisando que el juez laboral puede ordenar la medida innominada en los términos del literal c), numeral 1º del artículo 590 del C.G.P., señalando además que para decretar la medida cautelar el juez apreciará entre otras situaciones la legitimación de interés para actuar de las partes y la existencia de una amenaza, o la vulneración de un derecho.

Que en igual sentido, en la sentencia C-043 de 2021, ese Órgano de cierre resolvió declarar exequible de manera condicionada el artículo 37 A de la Ley 712 de 2001 por el cargo de igualdad analizado, en el sentido de que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el Literal c), numeral 1º del artículo 590 del C.G.P.

Seguidamente, precisó encontrase cumplidos los presupuestos para decretar la medida alegada, en la medida que PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN se encuentra en estado de liquidación judicial ordenada por la Superintendencia de Sociedades y efectivamente el demandante no cuenta con ningún título o documento

para hacerse parte dentro de dicha liquidación, puesto que dentro del presente asunto ni siquiera se ha adelantado la diligencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., de ahí que la liquidación de esta sociedad pone en peligro la efectivización de la posible condena que se llegase a dar en su contra.

Al unísono, reiteró que lo pretendido por el demandante gravita en torno a una medida cautelar innominada, distinta a la dispuesta en el artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S., de allí que no se esté solicitando una caución, sino una provisión dineraria. Por ello, dispuso oficiar a la Superintendencia de Sociedades por intermedio de la liquidadora de PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con la finalidad de que se lleve a cabo una provisión por valor de $159.343.460 a efectos de garantizar una presunta condena.

Argumentó además que, mediante auto del 21 de septiembre de 2021 la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la demandada PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S., así como que las diligencias de notificación personal de dicha parte se adelantaron con anterioridad a esa calenda, sin que se evidencia ninguna causal de nulidad el hecho de no habérsele comunicado sobre el presente asunto a la liquidadora; sin embargo, dispuso que la parte demandante debía comunicar la existencia de este proceso a la liquidadora de la sociedad en aras de comparecer al proceso en el estado en que se encontrase el mismo.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión el curador *ad litem* de ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. la apeló. Consideró ser necesaria al presente asunto la comparecencia del agente liquidador de la sociedad PEDRO GÓMEZ & CIA S.A.

Por otra parte, refirió que de las pruebas allegadas no se puede considerar la configuración de los presupuestos exigidos en el artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S., en la medida que resulta prematuro que se demuestre una posibilidad de insolvencia o que se encuentre en riesgo algún derecho de índole laboral, como

quiera que con la simple acta de liquidación de una sociedad no puede advertirse el decreto de la medida otorgada por la *a-quo*.

Que no se ha notado la apariencia de derecho, ya que existen excepciones de mérito planteadas en las diferentes contestaciones de la demanda, y lo que se hizo en la solicitud elevada por el extremo accionante fue replantear los mismos hechos del escrito demandatorio, pero sin adentrarse a explicar el motivo del porqué podría configurarse una insolvencia.

IV.- CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta el contexto que precede el presente asunto, palmario resulta que la falladora de instancia dispuso el decreto de la medida cautelar innominada objeto de reproche sobre la demandada PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, sujeto jurídico quien se encuentra representado a través de curador *ad litem*, el cual no refutó la decisión adoptada.

En tal sentido, no puede pasarse por alto que quien presentó recurso de apelación fue el curador *ad litem* de la encartada ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., sujeto respecto del cual no se decretó la medida cautelar.

Es por ello que la Sala no puede perder de vista la figura de legitimidad en la causa o interés jurídico para recurrir, entendida esta en términos generales como aquel actuar con el que goza aquella parte perjudicada en juicio para controvertir actuaciones en las que se le responsabilice procesal o jurídicamente de aspectos directos a sus intereses.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia con SP5210 del 2014, Radicación No. 41534 del 30 de abril de 2014, efectuó un análisis en lo que atañe al derecho de legitimación en la causa, donde sostuvo:

"1.2. La legitimación en la causa o interés jurídico para recurrir. El sujeto procesal, parte o interviniente, solamente puede interponer el medio de gravamen (con el correlativo derecho a que se estudie el fondo de su propuesta) en cuanto la decisión cuestionada, o la parte pertinente de ella, le hubiere causado un daño, un agravio, un perjuicio, pero medido este de manera real, material, efectiva, siempre de cara a los intereses que representa.

"Si la determinación judicial censurada favorece las pretensiones de la parte o se pronuncia en los términos postulados por esta, surge evidente que, por no existir un agravio, la parte se inhabilita para impugnarla, porque ningún daño puede reclamar frente a lo que se resolvió según sus expectativas.

"Cuando la decisión judicial no se pronuncia respecto de un específico tópico, como consecuencia de que el sujeto procesal no hizo petición alguna al respecto, tampoco existe legitimidad para exigir corrección alguna.

"Ello surge evidente, en tanto, en esencia, los recursos son instrumentos previstos por el legislador para que las partes reclamen la corrección de los errores cometidos por los jueces al resolver las peticiones de estas o adoptar determinaciones oficiosas, contexto dentro del cual no puede señalarse como equivocada la ausencia de pronunciamiento sobre lo que no se reclamó.

"En palabras sencillas, si la parte no pide un acto específico y, por esa obvia razón, el juez nada decide al respecto, resulta contrario a cualquier coherencia que, por intermedio del recurso, se invoque como equivocada esa supuesta omisión, que no lo es, porque solamente se omite lo que, habiendo sido pedido, no se resuelve."

Por tal razón, al no haberse sometido la decisión de primera instancia a ninguna medida cautelar respecto de ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., a juicio de este cuerpo Colegiado no existe razón justificable para que se aborde el estudio de la apelación interpuesta, lo que conlleva a que se rechace de plano el recurso en comento y se disponga remitir el proceso al juzgado de origen con la finalidad de que se continúe con el trámite procesal correspondiente.

SIN COSTAS en esta instancia por considerar que no se causaron.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por la demandada ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se dispone **DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO** el auto calendado el 19 de diciembre de 2022, a través del cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S.

TERCERO: DISPONER que por Secretaría se devuelva el proceso al juzgado de origen, con la finalidad de que se continúe el trámite procesal correspondiente.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **13 2020 00356 01**
Demandante:	ELVIA TERESA VÁSQUEZ PALACIOS
Demandado:	COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por SKANDIA S.A., en contra del auto calendado el 8 de julio de 2022 proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se negó el llamamiento en garantía pretendido por dicha encartada respecto de la aseguradora MAPFRE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

I.- ANTECEDENTES:

La señora ELVIA TERESA VÁSQUES PALACIOS promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A., a fin de declararse la nulidad o ineficacia del traslado realizado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad que realizara por intermedio de la AFP PORVENIR S.A. en el mes de mayo de 1999, por existir vicios del consentimiento ante la falta del deber de información en todas las etapas del proceso de afiliación.

Por consiguiente, se condene a SKANDIA S.A. tramitar de manera inmediata o en un plazo máximo de 15 días contados desde la ejecutoria del fallo que ponga fin a la

instancia, su regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

Igualmente, se le condene a SKANDIA S.A. tramitar el traslado a COLPENSIONES de los valores que reposen en su cuenta de ahorro individual correspondiente a las cotizaciones al riesgo derivado de la vejez, más lo que resulte probado de manera *ultra* y *extra petita.*

Luego de vinculado el contradictorio en su integridad, SKANDIA S.A. junto con la contestación de demanda, presentó llamamiento en garantía con relación a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., bajo el entendido de que la demandante se afilió dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad ante sus dependencia en el año 2004, por lo que, en calidad de administradora de contingencias pensionales y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, suscribió con la mencionada aseguradora un contrato de seguro previsional para cubrir, principalmente, los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a su fondo obligatorio de pensiones, entre los que se encontraba la actora, contrato de seguro previsional que tuvo vigencia por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2018.

De esa forma, y en cumplimiento de dicho acuerdo contractual realizó los pagos correspondientes a las primas del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes a favor de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. desde enero de 2007 hasta diciembre de 2018, por tanto, esa administradora ya no cuenta con dichos recursos, haciéndose necesaria la vinculación al presente trámite judicial de la pluricitada aseguradora, ya que en caso de que se condene a devolver los aportes de la demandante a COLPENSIONES, junto con los gastos de administración de los que trata el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la aseguradora el cumplimiento de esa obligación en lo que se refiere particularmente a la prima pagada por el seguro previsional.

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

Mediante auto del 8 de julio de 2022 el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá negó el llamamiento en garantía pretendido. Para arribar a dicha conclusión, indicó la *a-quo* que, con la solicitud de llamamiento en garantía fue aportada la póliza No. 9201407000002 del 2 de enero de 2017 que suscribiera la encartada con MAPFRE S.A., por lo que confrontadas y riesgos que cubre, no se aprecia el amparo de lo discutido en el asunto de marras, esto es, la ineficacia del régimen pensional, adicional a que, la póliza no se declara ineficaz y de pretenderse aquello, no sería competencia de la jurisdicción laboral.

De otra parte, refirió que atendiendo los postulados emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no resulta procedente el llamado en garantía en la medida que el seguro previsional que hace referencia la demandada SKANDIA S.A., se adquirió para el eventual reconocimiento de una pensión de invalidez o sobrevivencia, pero no para el rubro atinente a gastos de administración, tópico que al tenor de lo preceptuado por el órgano de cierre, debe ser asumido por la misma AFP.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

SKANDIA S.A. inconforme con la decisión la apeló. Argumentó en términos generales que esa administradora en cumplimiento a su obligación legal consagrada en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, celebró con MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A un contrato de seguro previsional, destinado a amparar los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados a ese fondo de pensiones, entre los que se encuentra la demandante, por tanto, es evidente que en caso que en la sentencia que ponga fin al proceso se condene a devolver la prima pagada como contraprestación legal por ese seguro, la entidad llamada a realizar esa devolución es la referida aseguradora, que fue la que recibió la prima que pagó, lo que justifica el llamado en garantía.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes en la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si en el presente caso resulta procedente ordenar el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

a. Llamamiento en garantía:

En aras de desatar el objeto del debate resulta oportuno recordar que el llamamiento en garantía es una figura que permite a la parte accionada convocar al juicio a un tercero, cuando se estime que este tiene la obligación legal de responder por la obligación que pudiere existir en cabeza suya. En tal sentir, el artículo 64 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S, reza:

> *"Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".*

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 5031-2019, Radicación No. 71196 del 9 de octubre de 2019, explicó que esta figura aplica cuando quiera que se corrobore que el llamado en garantía debe responder por el derecho que esta peticionando el libelista, donde precisó:

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en*

virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.

"Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante".

Ahora bien, en el *sub-examine* alega la parte recurrente que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A debe ser llamada en garantía en virtud del seguro previsional que fue suscrito con la misma a través de la póliza No. 9201407000002 del 2 de enero de 2017.

No obstante lo anterior, no debe soslayarse que el juicio que hoy nos convoca gira en torno a establecer si es ineficaz o no el traslado de régimen pensional suscrito por la demandante con la AFP hoy demandada, para que en razón de ello, se ordene su traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin que para desatar tal controversia sea necesaria la vinculación de la entidad aseguradora con ocasión del objeto de la póliza que se contrató con la misma, por manera que no cumple los requisitos exigidos por el legislador para tenerla como llamada en garantía.

De forma adicional no es dable establecer en el estudio del llamamiento en garantía el debate planteado por la AFP, esto es, que la devolución de los gastos de seguros previsionales debe correr a cargo de la aseguradora, en tanto tal situación se debe desatar en la sentencia que ponga fin al proceso, por lo que se reitera, no se advierte que se deba convocar en virtud del llamamiento en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Dimana de lo que se explica en líneas precedentes la indiscutible confirmación de la providencia recurrida. **COSTAS** en esta instancia correrán a cargo de SKANDIA S.A. como quiera que el recurso de alzada no gozó de prosperidad.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 8 de julio de 2022 proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada SKANDIA S.A. y a favor de la parte demandante. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado
SALVO VOTO

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado
ACLARO VOTO

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERO LABORAL

Ordinario Laboral	1100131050 **25 2020 00131 01**
Demandante:	CHRISTIAN CAMILO DÍAZ BLANCO
Demandado:	FM INGENIERÍA S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra del auto proferido el 20 de mayo de 2022 por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la cual declaró no probadas las excepciones previas que propuso.

I-. ANTECEDENTES:

CHRISTIAN CAMILO DÍAZ BLANCO, LUZ STELLA BLANCO BARBOSA y JULIETH ANDREA DIAZ BLANCO formularon demanda ordinaria laboral en contra de FM INGENIERÍA S.A., con la finalidad que se declare que entre la demandada y CHRISTIAN CAMILO DÍAZ BLANCO existió de un contrato de trabajo por obra o labor, vigente del 20 de junio de 2017 al 11 de diciembre de 2018, en el que devengó como salario $1.500.000, y que existió culpa patronal por parte de la encartada en la ocurrencia del accidente de trabajo acaecido el 26 de septiembre de 2017, el cual le ocasionó una PCL del 35.80%.

Consecuencialmente, pretenden se condene a la pasiva a pagar al extrabajador lo correspondiente al lucro consolidado y futuro, perjuicios morales y daño a la vida en relación; a pagar perjuicios morales a favor de las demandantes LUZ STELLA BLANCO BARBOSA y JULIETH ANDREA DIAZ BLANCO, en las sumas

que se indican en el *petitum*, junto con las costas y agencias en derecho y lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra y extra petita*. (Archivos 01 y 04).

Después de ser subsanada la demanda, mediante auto adiado el 10 de marzo de 2021, se admitió la demanda en contra de FM INGENIERÍA S.A. (Archivo 10).

De esa forma, la encartada contestó la demanda y formuló como excepción previa la de cosa juzgada en los términos del artículo 2483 del Código Civil y la de falta de legitimación en la causa por activa en los demandantes JULIETH ANDREA DIAZ BLANCO y LUZ ESTELA BLANCO BARBOZA.

Sustentó la excepción de cosa juzgada indicando que suscribió con el demandante principal un contrato de transacción el 18 de diciembre de 2018, en el que decidieron resolver las diferencias que existían como consecuencia del contrato de trabajo que mantuvieron, decidieron terminar el vínculo laboral de mutuo acuerdo, pagar los derechos ciertos e indiscutibles, transar cualquier diferencia que existía y pudiese llegar a existir entre las partes con ocasión o por causa del vínculo contractual, o la que surja frente a derechos inciertos y discutibles como los que son materia de análisis y conflicto.

Se declaró que las partes estaban a paz y salvo por todo concepto, que el acuerdo hacía tránsito a cosa juzgada en los términos del artículo 2483 del Código Civil, el cual fue pactado sin presiones y de manera voluntaria, lo que hace improcedente la demanda por existir identidad de objeto, causa y partes ante el referido contrato de transacción.

En cuanto a la segunda excepción dijo que es evidente que las demandantes JULIETH ANDREA DIAZ BLANCO y LUZ ESTELA BLANCO BARBOZA, carecen de legitimación en la causa por activa dentro del presente proceso, en la medida en que no han sufrido ningún daño indemnizable, derivado del accidente de trabajo sufrido por el señor CHRISTIAN CAMILO DIAZ BLANCO. Luego, la única circunstancia que las legitimaría sería su comparecencia al proceso como herederos del ex trabajador, circunstancia que no tiene lugar en el presente caso (Fls. 1 a 82 y 508 a 511 - archivo 08).

II.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., dentro de la etapa de decisión de excepciones previas, la cual se llevó a cabo el día 20 de mayo de 2022, declaró no probadas las excepciones.

Para arribar a dicha conclusión, el operador de instancia recordó que para que tenga prosperidad la excepción de cosa juzgada debe existir identidad de partes, identidad de objeto e identidad de *causa petendi*, explicando cada uno de estos elementos. A continuación advirtió que en el caso de marras no se dan tales presupuestos, pues no se trata de otro proceso judicial en el que ya se hubiesen debatido las pretensiones del demandante y sus beneficiarias, pues en el *sub examine* de acuerdo a los hechos narrados en la demanda, lo que se persigue a parte de la declaratoria del contrato de trabajo, es la declaratoria de la culpa patronal con ocasión del accidente ocurrido al actor el que aduce una PCL del 35.80%, además se reclama el pago de lucro cesante, daño emergente, daños y perjuicios entre otros, situaciones que no fueron planteados en el contrato de transacción y finiquito, por lo que no hay lugar a declarar la excepción de cosa juzgada.

Frente a la de falta de legitimación en la causa por activa, dijo que los pretendido por JULIETH ANDREA DIAZ BLANCO y LUZ ESTELA BLANCO BARBOZA refiere al reconocimiento de perjuicios morales con ocasión del accidente sufrido por su familiar, sin que sea requisito el deceso del trabajador. Declarando no probado ese medio exceptivo.

II-. RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Al respecto sostuvo sobre la excepción previa de cosa juzgada en los términos del artículo en los términos del artículo 2483 del Código Civil, como consecuencia que el contrato de transacción que suscribieron las partes nace como consecuencia de una relación de índole

laboral y blinda todo aquello que haya nacido a razón del contrato laboral, nada diferente ni adicional, tanto presente, pasado como futuro, el propio contrato lo expresa de manera expresa clara y taxativa, por lo que el accidente de trabajo es una de las consecuencias que se derivan del contrato de trabajo.

Así, al revisar el contrato de transacción se evidencia que termina de común acuerdo y transa cualquier diferencia que exista o pudiere existir entre las partes, con ocasión o por causa del contrato de trabajo, o el que surja frente a los derechos inciertos y discutibles como lo es el tema análisis del presente conflicto, adicionalmente, las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto, lo que abarca la generalidad de cualquier derecho incierto y discutible que pudiese surgir o hubiese surgido o había surgido.

El Juez de primer grado, mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación.

III-. CONSIDERACIONES:

3.1 Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes en la etapa de alegaciones.

3.2 Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si goza de prosperidad la excepción previa de cosa juzgada formulada por el extremo demandado.

3.3 De la procedencia de la excepción de cosa juzgada:

Sea lo primero indicar, para desatar la controversia que concita la atención de la Sala que el Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social precisa en su artículo 32, modificado por el artículo 1 de la Ley 1149 de 2007, sobre el trámite de las excepciones, que:

> *"El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.*
>
> *"Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia."*

Acorde con lo anterior, es necesario acudir a lo establecido en el artículo 303 del C.G.P, norma aplicable al presente caso por remisión normativa del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que consagra lo referente al fenómeno jurídico de cosa juzgada en los siguientes términos:

> *"La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.*
>
> *"Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos".*

Por su parte, la doctrina al abordar el análisis de la figura de la cosa juzgada ha señalado sobre su significado y los elementos sobre los cuales se estructura:

> *"La expresión cosa juzgada proviene del latín res iudicata. Significa, en su acepción corriente, lo que ha sido juzgado o resuelto. Procesalmente atañe las consecuencias o efectos, su esencia, los cuales se contraen a dotar a ciertos proveídos, generalmente las sentencias, de una especial calidad que tiende a evitar que entre las mismas partes (demandante y demandado), por igual causa (hechos) y sobre idénticos objeto (pretensión), se instaure un segundo proceso."*
>
> *(…)*
> *"En consecuencia, solo cuando esos elementos en su totalidad se presentan en un segundo proceso obra la cosa juzgada. Entonces, si las partes y los hechos son los mismos, pero varía la pretensión, no hay lugar a que se reconozca la cosa juzgada. (…) Tampoco si las partes y las pretensión son iguales, pero cambian los hechos (…). Se excluye también si al menos una*

de las partes es diferente, aunque los hechos y las pretensiones conserven su identidad, (…).[1]".

Así las cosas, diáfano es, que esta institución garantiza la seguridad jurídica, pues impide la toma de decisiones contradictorias en un mismo asunto, cerrando la posibilidad de que sean sometidas a un nuevo debate judicial.

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL814-2022 con Radicado No. 79462 de 16 de marzo de 2022, al realizar el análisis del precedente jurisprudencial que ha emanado de antaño sobre esta figura, consideró lo siguiente:

"Sobre este tópico, la Corporación en sentencia CSJ SL11414-2016, discurrió:

Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, para que sea procedente, es preciso recordar que, en ambos procesos judiciales debe concurrir los tres requisitos comunes que son: 1) Identidad de persona (eaedem personae): debe tratarse del mismo demandante y demandado; 2) Identidad de la cosa pedida (eadem res): el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo, es decir, lo que se reclama; y 3) ***Identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi): el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, esto es, el por qué se reclama.***

"Los anteriores requisitos o elementos, se encuentran presentes en la norma que consagra la cosa juzgada, valga decir, el art. 332 del CPC hoy art. 303 del Código General del Proceso, aplicable por analogía del art. 145 del CPT y SS., que exige para su declaratoria que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes»."

Teniendo en cuenta el caso puesto a consideración de la Sala, conviene memorar lo expuesto por esa misma Corporación en sentencia SL3436-2020, Radicación No. 79452 de 8 de septiembre de 2020, en la que abordó el estudio de la cosa juzgada al mediar transacción entre las partes en asunto de similares contornos al aquí analizado, expuso:

"Encuentra la Sala que el Tribunal, en lo que interesa a al cargo, argumentó que en el acuerdo transaccional suscrito entre el señor Edgar Robles Rojas y la sociedad Ingenierías Triturados y Concretos SA (Intricon

[1] Azula, Camacho Jaime. Manual de Derecho Procesal: Tomo I, Teoría General del Proceso. 11ª edición, Bogotá: Editorial Temis, 2015. Páginas 368, 370.

SA), el 10 de diciembre del año 2009 (folios 379 a 382), «[…] no comprendió las pretensiones esbozadas en la demanda […]», por lo que no se configuró la cosa juzgada, pues para ello se requería la concurrencia de tres condiciones: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa; iii) entidad de parte.

"Por su parte, el casacionista insiste que la culpa patronal hizo parte del objeto de la transacción celebrada el día 10 de diciembre del año 2009, entre el actor y la empresa, por lo que acusó la apreciación errada de este medio (f.° 379 a 382).

"El problema jurídico que se le plantea a la Corte con este cargo, se contrae a determinar si se configuró el fenómeno de cosa juzgada frente a las pretensiones incoadas en la demanda."

"[…]

"Dicho lo anterior, y verificado el medio de convicción acusado, se lee de este lo siguiente:

[…] el trabajador ha recibido la suma correspondiente a la liquidación, reajuste salarial, y además de hechos laborales renunciando expresamente a cualquier otra acreencia que se haya causado o se cause en cualquier concepto que sea susceptible de transar incluida la mora, salarios caídos hasta la fecha desde el inicio de la relación hasta la firma de la transacción, prestaciones y demás derechos laborales como salarios, primas, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, cotizaciones, horas extras, compensatorios, recargos, nivelación, liquidaciones, y etc.

"Entonces, tal como lo señaló el Tribunal, la transacción no comprendió las pretensiones incoadas en la demanda, en consecuencia, no están dados los requisitos para que se declare la existencia de la cosa juzgada, en los términos del artículo 303 del CGP, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión que hace el artículo 145 del CPTSS."

Al descender al *sub-examine*, se tiene que los demandantes solicitaron la declaratoria de un contrato de trabajo entre la pasiva y el accionante CHRISTIAN CAMILO DÍAZ BLANCO del 20 de junio de 2017 al 11 de diciembre de 2018 y que existió culpa patronal por parte del empleador en el accidente de trabajo que le ocurrió el 26 de septiembre de 2017, el cual le ocasionó una PCL del 35.80%; en consecuencia, reclaman el pago del lucro cesante consolidado y futuro, los perjuicios morales y el daño a la vida en relación a favor del ex trabajador; así como los perjuicios morales a favor de las promotoras LUZ STELLA BLANCO BARBOSA y JULIETH ANDREA DIAZ BLANCO.

Entre tanto, el acuerdo de transacción que suscribió el demandante CHRISTIAN CAMILO DÍAZ BLANCO con la sociedad demandada el 18 de diciembre de 2018, señala:

> *"QUE, teniendo en cuenta todo lo anterior y con ocasión de la terminación de la Incapacidad, el Trabajador y la Sociedad suscriben el presente Contrato para regular entre las Partes: (i) la terminación del Contrato de Trabajo de mutuo acuerdo, (ii) la desafiliación del Trabajador a las entidades que conforman el sistema de Seguridad Social y (iii) la liquidación de acreencias laborales de conformidad con la ley laboral;*
>
> *"EN CONSECUENCIA, las Partes acuerdan:*
>
> ***1. Terminación del Contrato de Trabajo***
>
> *"En la fecha de este Contrato, las Partes acuerdan terminar el Contrato de Trabajo de mutuo acuerdo, a pesar de que las Partes reconocen que la Obra para la cual estaba contratado el Trabajador terminó desde el día [16] de [marzo] de 20[18].*
>
> ***2. Efectos de la Terminación***
>
> *"(a) Terminación de la Relación Laboral. Como consecuencia de la terminación de la Obra que motivó el Contrato de Trabajo y la terminación de la Incapacidad del Trabajador, las Partes reconocen y acuerdan que se da por terminado el Contrato de Trabajo suscrito entre la Sociedad y el Trabajador de común acuerdo. En consecuencia:*
>
> *"(i) la liquidación de acreencias laborales al Trabajador, la cual asciende tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos moneda corriente - COP (3.494.00.00) de conformidad con el Anexo C, se ha pagado en su totalidad al Trabajador forma concomitante a la suscripción del presente Contrato;*
>
> *"(ii) en concordancia con la terminación, la Sociedad notificará a novedad de terminación del Contrato de Trabajo a las entidades que conforman el sistema de Seguridad Social en Colombia y realizará la correspondiente desafiliación del trabajador;*
>
> *"(iii) las Partes manifiestan su voluntad de transar cualquier diferencia y reclamación económica recíproca en virtud del Contrato de Trabajo y*
>
> *"(iv) las Partes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Contrato de Trabajo.*
>
> ***3. Declaraciones de las Partes***
>
> *"(a) A fin de evitar la eventual instauración por cualquiera de las Partes de un acción, reclamación o proceso, judicial o extrajudicial, así como para evitar los costos, horarios daños y perjuicios que, entre otros, puedan ocasionarse, de mutuo acuerdo cada una de las partes declara, conviene,*

reconoce y acepta que los términos de este Contrato, incluyendo todos y cada uno de los pagos debidos en la forma como se han acordado. Por lo anterior, manifiestan su voluntad de transar cualquier diferente o reclamación económica reciproca presente o futura derivada del Contrato de Trabajo." (Fls. 508 a 511 archivo 08).

Bajo ese escenario, es diáfano que no concurren los elementos de lugar a la cosa juzgada, por cuanto no hay identidad de partes, en tanto, no todos los accionantes suscribieron el acuerdo de transacción, y pese a que en el citado documento hace alusión al accidente de trabajo, no se especifican los sucesos que dieron lugar al misma, luego, no hay identidad de causa, además, la declaración del contrato de trabajo tiene como trasfondo principal la declaratoria de la culpa patronal del empleador, aspecto este último del cual no se hace mención en la transacción, de ahí, que tampoco exista identidad de objeto.

Finalmente, debe señalar este Juez Colegiado que el hecho de que se haya indicado en acuerdo que las partes manifestaban su voluntad de transar cualquier diferencia o reclamación económica reciproca presente o futura derivada del contrato de trabajo, ello *per se*, de modo alguno puede entenderse como transado lo atinente a la cual patronal que se depreca, pues nada se acordó al respecto. Dicho esto, es claro que no erró el juez de primer grado al declarar no probada la excepción previa de cosa juzgada, lo que compele la confirmación de la decisión objeto de censura.

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente.

IV. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERO LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 20 de mayo de 2022 por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral	1100131050 **30 2021 00021 01**
Demandante:	PEDRO IGNACIO GONZALEZ PARDO
Demandada:	PROTECCIÓN S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada PROTECCIÓN S.A., contra el auto proferido en audiencia del 14 de diciembre del 2022, mediante la cual se resolvió la excepción propuesta por la pasiva de falta de integración de litisconsorcio necesario.

I.- ANTECEDENTES:

El demandante PEDRO IGNACIO GONZALEZ PARDO presentó demanda ordinaria laboral en contra de PROTECCIÓN S.A., con la finalidad que se declare que es beneficiario de la garantía de la pensión mínima de vejez establecida en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Como consecuencia de tal declaración, solicita se condena la demandada a pagar la pensión de vejez desde el 18 de agosto de 2014, fecha en que cumplió la edad exigida o el 1º de agosto de 2016, día siguiente al que realizó el último aporte al fondo demandado, además, pretende se condene al pago de la indexación de la primera mesada y las que se reconozcan, junto con el reajuste de ley, y los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100

de 1993. Asimismo, solicita se ordene a la encartada efectúe los trámites correspondientes para el reconocimiento de la pensión deprecada ante la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES y se condene en costas y agencias en derecho a la demandada, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita*.

De manera subsidiaria, solicita se declare que es acreedor a la devolución de saldos, en consecuencia, pretende se condene a la encartada a devolver el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, con los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, además, se condene en costas y agencias en derecho, más lo *ultra y extra petita.* (Archivo 01).

Por auto de 27 de julio de 2021 el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda (Archivo 005).

En consecuencia, la convocada a juicio PROTECCIÓN S.A. al contestar propuso la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario por pasiva. (Archivo 07). Por auto de 1º de septiembre de 2022 el Juzgado de origen tuvo por contestada la demanda y citó a la audiencia de que trata el artículo 7 del C.T.P. y de la S.S. (Archivo 09)

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

En audiencia que llevada a cabo el día 14 de diciembre 2022, el fallador de primer grado declaró no probada la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio por pasiva propuesta por la encartada.

Como sustento de su decisión, el *a-quo* señaló que el medio exceptivo propuesto está consagrado como previo en el artículo 100 del C.G.P., además trajo a colación el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que establece que los fondos encargados deben reconocer la pensión en un tiempo no superior a

cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho, sin que puedan aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte, ello, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 510 de 2003, luego, en el presente asunto no se está ante un trámite complejo, en tanto, el artículo 20 del Decreto 656 de 1994 estipula que las administradoras de fondos de pensiones tiene la obligación de adelantar las solicitudes de emisión y de adelantar labores de seguimiento trimestral hasta que se logre la emisión del bono.

Seguidamente, trajo a colación la sentencia SL 2512 de 2021 en la que se dijo que sí existe normativamente la posibilidad de establecer en cabeza de una administradora del RAIS la obligación, de manera temporal, de asumir el pago de la pensión con cargo a sus propios recursos. De ahí, que es claro que cuando las administradoras de pensiones del RAIS evidencien que el afiliados no cuentan con los recursos para acceder a la garantía de la pensión mínima, por causa imputable a estas, deben asumir de manera provisional el pago con cargo a sus propios recursos, por lo que no es necesaria la integración del litisconsorcio necesario que se solicita ya que le corresponde a la pasiva adelantar tales gestiones de cobro, sin que pueda imponer tal responsabilidad a los afiliados. Declarando no probada la excepción aquí analizada.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión PROTECCIÓN S.A., presento recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Refirió que, si bien en el presente asunto como lo indicó el juez de origen, no se está ante un trámite complejo, también lo es que la controversia alude al posible reconocimiento de una pensión de vejez, una garantía de pensión mínima de vejez o una devolución de saldos, lo cual depende de los requisitos que logre acreditar el promotor ante la administradora.

No obstante, desconoce la parte actora y el *a-quo* que para llevar a cabo tal fin se deben adelantar dos etapas, una atinente a la reconstrucción de la historia laboral del actor y la recuperación del bono pensional si a ello hubiere derecho y las demás gestiones que se adelantan ante las entidades que deben reconocer esos derechos al trabajador; y la segunda la que atañe al reconocimiento final del acuerdo a las condiciones que acredite el afiliado.

Añadió que de acuerdo al artículo 12 del Decreto 4712 de 2008, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima está a cargo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; situación que tiene relevancia en el presente asunto, pues el actor ya ostenta la edad para acceder a la prestación, sin embargo administrativamente no tiene reconstruida o normalizada su historia laboral, de ahí, que puede tener las semanas mínimas para acceder al reconocimiento pensional..

Por tanto, se hace necesaria la integración de la UGPP por los periodos laborados al DAS ya que están pendientes por acreditar, evento ante el cual como intermediaria que es, no esta habilitada para solicitar el reconocimiento de la pensión de garantía mínima ante el citado Ministerio sin el cumplimiento de los presupuestos mínimos exigidos, más aún cuando documentó de manera suficiente que ha adelantado las gestiones administrativas ante esas entidades para alcanzar el reconocimiento pensional que se depreca.

El Juez de Instancia no repuso su decisión, concediendo el recurso de apelación.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si resulta procedente declarar probada la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario.

c. De las excepciones previas:

Sobre este puntual aspecto debe recordar la Corporación que las excepciones previas o dilatorias tienen por objeto eliminar cualquier tipo de impedimento de orden procesal que impida el normal desarrollo del proceso de suerte que las mismas no tienen como finalidad atacar el fondo del asunto en debate, como ocurre con las de mérito o de fondo, en otras palabras, realmente buscan sanear el proceso. En tal sentir, la doctrina nos recuerda:

> *"[…] En estricto sentido, solo tienen carácter de excepción las perentorias, pues son ellas las que se dirigen a contrariar la pretensión presentada por el demandante, ya que las previas buscan evitar actuaciones innecesarias remediando ciertas fallas en el proceso; por ello, en verdad, la excepción previa favorece a las dos partes, y no solo al demandado como pudiera pensarse, pues al permitir el saneamiento inicial del proceso se asegura que este se adelante sobre bases firmes, ajenas a cualquier posibilidad de nulidad[1]".*

Así mismo, se debe enunciar que las excepciones previas o de fondo se encuentran taxativamente regladas en el artículo 100 del C.G.P., aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S. De igual manera, el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. consagra que *"El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones*

[1] López Blanco, HF. Procedimiento Civil Tomo I. Editores Dupre. 2005.

previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo".

De cara a lo indicado, conviene precisar que la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario se encuentra enlistada en el numeral 9º del artículo 100 del C.G.P., razón por la cual la Sala procede con el estudio del recurso de apelación frente a esta excepción.

d. Litisconsorcio Necesario:

Teniendo en cuenta las actuaciones surtidas dentro del presente proceso, sea lo primero analizar lo contemplado en el artículo 61 del C.G.P., que determina cuales son las circunstancias en las cuales hay lugar a conformar de manera necesaria el contradictorio, en los siguientes términos:

> *"LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*
>
> *"En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término"*
>
> *"[…]*

"Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio".

Una vez determinado lo anterior, se observa que PROTECCIÓN S.A. como sustento de la excepción previa que propuso, adujo que la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, es la encargada de expedir el acto administrativo que reconoce la garantía de pensión mínima en favor del afiliado una vez se corroboran íntegramente las semanas requeridas en la historia laboral y se acredita el pago de los aportes pendientes en la cuenta individual del afiliado.

A su vez, la UGPP participa en el pago de eventual de los aportes no constitutivos de bono pensional por los tiempos laborados por el gestor en el DAS, y que se requieren como parte del capital con el que cuenta el afiliado para financiar la prestación reclamada, aspectos que no pudieron ser resueltos ni recuperados por la pasiva en instancias administrativas, por lo que tienen las llamas a conformar la litis un interés directo en las resultas del presente proceso.

Dicho esto, se observa que el libelo introductorio es claro en señalar que las condenas que se persiguen aluden al reconocimiento y pago de la garantía de pensión mínima de vejez, en tanto, señala el gestor acredita los requisitos de ley para acceder a la misma, en su defecto, reclama la devolución de saldos, según lo sostenido por el promotor en el *petitum*.

De cara a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que los argumentos de la recurrente, de modo alguno son suficientes para dar cabida a la existencia de un litisconsorcio necesario como lo señala esa enjuiciada, en tanto este solo es procedente en aquellos casos en que sea imposible zanjar el objeto de debate, sin que se dé la comparecencia de la persona natural o jurídica que se invoca como litisconsorte.

Situación que no se predica en el caso que hoy nos ocupa, habida consideración que el parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, establece:

> *"Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte."*

De la misma forma, el artículo 7º del decreto 510 de 2003, indica que para los efectos del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, la obligación de los fondos encargados de reconocer la pensión, dentro del término legal establecido, procederá una vez se presente la solicitud de reconocimiento junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, a través de la cual se prueben los presupuestos de hecho y de derecho de la norma que confiere la respectiva prestación de vejez.

A su vez, los artículos 17 y 18 del Decreto 656 de 1994, señalan que es deber de las sociedades administradoras obtener y mantener actualizada toda la información previsional de los afiliados, de tal forma que estén en capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez, de la misma forma, deben avisar a los afiliados, mínimo con tres (3) meses de antelación el cumplimiento de los requisitos para acceder a la garantía estatal de pensión mínima.

De otro lado, conviene recordar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencia SL5701-2021, Radicación No. 83584 de 24de noviembre de 2021, en la que al abordar el estudio del reconocimiento de la garantía de pensión mínima, indicó lo siguiente:

> *"Ahora, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado que corresponde a la administradora de pensiones del RAIS el otorgamiento de esa pensión de vejez y adelantar a nombre del afiliado los trámites para el*

reconocimiento de la garantía estatal ante dicho ministerio (CSJ SL, 20 feb. 2013, rad. 41993).”

(…)

“Con fundamento en lo anterior, la Sala ha adoctrinado que no es admisible que la AFP excuse el reconocimiento en la falta de agotamiento de un procedimiento que le corresponde adelantar (CSJ SL4531-2020 y CSJ SL2676-2021).”

De lo expuesto, es palmario para la Sala que el fallador de instancia no desatinó en su decisión, pues en el *sub-lite* no se hace imperativa la concurrencia del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de la UGPP, para decidir el asunto, ya que de las normas y la jurisprudencia antes citadas, es diáfano que el reconocimiento pensional que se reclama se encuentra en cabeza de las administradora de pensiones accionada, quienes deben adelantar los trámites pertinentes a afectos de concretar el reconocimiento pensional, si a ello hay lugar, estando a su arbitrio el adelantar las acciones del caso ante la autoridad correspondiente si se ve perjudicada con el posible reconocimiento pensional, como viene de verse.

En esa medida, la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario no está llamada a prosperar; por las razones aquí expuestas, lo que conlleva a la inexorable confirmación del auto apelado en su integridad.

Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido dentro del presente proceso el 14 de diciembre del 2022, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral:	1100131050 **31 2022 00449 01**
Demandante:	MARTHA DEL SOCORRO RIVEROS ZÁRATE
Demandado:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y COLFONDOS S.A.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en contra del auto proferido el 2 de noviembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, a través del cual se tuvo por no contestada la demanda.

I.- ANTECEDENTES:

La señora MARTHA DEL SOCORRO RIVEROS ZÁRATE promovió demanda ordinaria en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Lo anterior, a fin de declararse que tiene derecho al pago de la devolución de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y demás realidades jurídicas sustanciales correspondientes.

Por consiguiente, se ordene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO emitir el bono pensional a favor de COLFONDOS S.A., ordenándole a su vez a esta última encartada reconocer, ordenar y pagar la devolución de aportes.

Asimismo, se les condene a ambas demandadas reconocer y pagar la devolución de saldos de manera indexada, más lo que resulte probado de manera *ultra* y *extra petita*.

A razón de lo anterior, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, quien a través de proveído calendado el 30 de septiembre de 2022, admitió la demanda en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y COLFONDOS S.A. (PDF 05 – AUTO ADMITE DEMANDA).

En tal sentido, el ente ministerial demandado presentó escrito de contestación vía correo electrónico el día 1º de noviembre de 2022 (PDF 11 – CONTESTACIÓN DEMANDA MINISTERIO DE HACIENDA).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

En proveído fechado el 2 de noviembre de 2022, el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá dispuso tener por no contestada la demanda que presentara LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Ello bajo el entendido que, el envío de notificación personal a esta encartada se remitió vía correo electrónico el 12 de octubre de 2022 a la dirección de notificaciones judiciales *notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co*; sin embargo, fue hasta el 1º de noviembre de esa misma anualidad que el extremo demandado allegó el escrito de contestación, esto es, un día después del término con que contaba para ello de conformidad con lo establecido en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, decisión que fue notificada en el estado del 2 de noviembre de 2022 según da cuenta la consulta de procesos de la página *Web* con que cuenta la Rama Judicial.

Asimismo, dentro del proveído objeto de reproche el Juzgado advirtió que no se había allegado poder para actuar al presunto abogado del ente ministerial de

nombre NIXON ALEJANDRO NAVARRETE GARZÓN (PDF 12 – AUTO TIENE POR CONTESTADA DEMANDA).

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Como consecuencia de la decisión de tenerse por no contestada la demanda, el ente ministerial por intermedio del profesional del derecho NIXON ALEJANDRO NAVARRETE GARZÓN, con poder debidamente conferido, interpuso recurso de apelación, indicando que la contestación de demanda presentada fue allegada de manera oportuna al correo dispuesto por el Juzgado.

Asentó que la demanda le fue notificada a la entidad el día 12 de octubre de 2022, la cual fue contestada y debidamente remitida al Juzgado el 1º de noviembre de esa misma anualidad, es decir, que el término preceptuado en el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S. fenecía el 4 de noviembre de 2022, término que por demás corresponde a 15 días hábiles, y no como equivocadamente lo estima la *a-quo*.

Concluyó que, el ente ministerial al tenor de lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, es una entidad pública, por lo que la forma de notificación debe realizarse al tenor del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., y no la consagrada en el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, último que establece la notificación personal.

Por último, refirió que, en caso de no accederse al pedimento anterior, se aplique la forma de notificación estatuida en el artículo 199 del C.P.A.C.A., en atención de la remisión analógica dispuesta en el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. (PDF 14 – RECURSO DE APELACIÓN AUTO).

IV.- CONSIDERACIONES:

a. **Trámite de segunda instancia:**

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, la Sala habrá de determinar si la contestación de demanda impetrada por LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO fue interpuesta dentro del término procesal oportuno, o si, por el contrario, la misma fue extemporánea.

c. Del caso en concreto:

Para lo pertinente, sea lo primero indicar la procedencia del recurso de apelación frente al auto que tuvo por no contestada la demanda, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.

La Sala reitera que el reproche del extremo apelante se circunscribe a que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del C.P.T. y de la S.S., la notificación del auto admisorio de la demanda debió surtirse al tenor de lo preceptuado en el Parágrafo del referido articulado, y no bajo los preceptos del artículo 806 de 2020 hoy Ley 2213 de 2022.

Así las cosas, precisa la Sala que el artículo 74 del C.P.T. y de la S.S. establece:

> ***"ARTICULO 74. TRASLADO DE LA DEMANDA:*** *Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."*

Vale pena precisar que en tratándose de notificaciones a entidades públicas, el Parágrafo del artículo 41 del C.P.T. y de la S.S. dispone:

***"PARÁGRAFO. NOTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS**. Cuando en un proceso intervengan Entidades Públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones.*

"Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso.

"En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad demandada, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria.

"Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia.

"En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba." (Subrayado por la Sala).

De otra parte, el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, en tratándose de las notificaciones personal, refiere:

"ARTÍCULO 8°. NOTIFICACIONES PERSONALES.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, **sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

"El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

"La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje*.*

"Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

"Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

"PARÁGRAFO 1°. *Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.*

"PARÁGRAFO 2°. *La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas c privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales.*

"PARÁGRAFO 3. *Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal -UPU- con cargo a la franquicia postal."*

Así entonces, es evidente que el Parágrafo del artículo 41 del Estatuto Procesal precisa que cuando no se pueda surtir la notificación por aviso al representante legal o en su defecto a su delegado, la misma se puede practicar a través de entrega al secretario general de la entidad, o por intermedio de la oficina receptora de correspondencia, adjuntando copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso judicial y, en caso que la notificación se efectúe bajo esta premisa, se entenderá surtida después de cinco (5) días.

A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la implementación del Decreto 806 de 2020 hoy Ley 2213 de 2022, fue con la finalidad de resguardar las tecnologías en materia judicial, situación con que procedió la *a-quo* para

efectivizar la notificación personal de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO ÚBLICO, ello con ocasión de la emergencia de salubridad que ha venido atravesando el país derivada de la pandemia COVID 19 y la necesidad de implementar la virtualidad a nivel nacional, incluida la especialidad laboral.

Por tal razón, por intermedio de la mentada Ley 2213 de 2022, artículo 8º, el legislador reguló las formas de notificación personal, incluidas las entidades de orden nacional, como es el caso del ente ministerial demandado; circunstancia por la cual, al haberse instaurado la demanda en el campo de vigencia de esta normativa, más exactamente el 21 de septiembre de 2022 como da cuenta el acta individual de reparto (PDF 04 – SECUENCIA REPARTO), no puede pretenderse la aplicabilidad exclusiva para el asunto de marras del Parágrafo del artículo 41 del Estatuto Procesal del Trabajo, en tanto, sin desconocer su vigencia, ya se encontraba regulada la posibilidad de la notificación por intermedio de correo electrónico a la dirección de notificaciones judiciales del ente ministerial, esto es, *notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co*, como así sucedió.

Bajo este escenario, al haberse surtido la notificación personal vía correo electrónico a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO el 12 de octubre de 2022, calenda que por demás no fue desconocida por la demandada y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 2213 de 2022 "*La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje",* los 12 días hábiles con que se contaba para contestar la demanda vencieron el 31 de octubre de 2022, por lo que la Sala puede colegir que al haberse aportado el escrito el día 1º de noviembre de esa misma anualidad, este fue presentado de manera extemporánea, lo que da cabida a que el auto objeto de apelación se confirme.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisión STL9407-2022, Radicación No. 98473 del 13 de julio de 2022, analizó un asunto a la

notificación personal bajo la égida de entidades públicas, donde recalcó la realización de las prerrogativas de la notificación según la Ley 2213 de 2022, tópico que sopesa más aún lo señalado en precedencia, al respecto manifestó:

> *"En ese orden, asiste razón en su reproche a la impugnante, en cuanto que las juntas de calificación de invalidez ostenta una naturaleza jurídica de derecho privado, empero, para efectos de la notificación en nada incide tal calidad, puesto que hoy por hoy, no se da aplicación a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 41 del CPLSS, sino a las disposiciones del Decreto 860 de 2020, por el cual se crearon medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el cual, fue adoptado como legislación permanente por la Ley 2213 de 2022.*
>
> ***"Es decir, que para efectos de continuar con el trámite el proceso, el juzgado deberá ceñirse a las últimas disposiciones legales aquí referidas, para efectos de la notificación de las demandadas".*** (Subrayado por la Sala).

Por otro lado, frente a la solicitud elevada por el ente ministerial atinente a que se tenga en cuenta para efectos de notificación lo dispuesto en el artículo 199 del C.P.A.C.A., tampoco resulta de asidero su argumento, toda vez que el C.P.T. y de la S.S. goza de aplicación expresa de las formas de notificación, de allí que no se deba acudir a ritos procesales de otras especialidades, adicional a que en gracia de discusión, como se abordó en precedencia, existe forma regulada por el legislador para este tipo de asuntos como lo es la Ley 2213 de 2022.

COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 2 de noviembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Se fija como agencias en derecho la suma de $200.000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Proceso Ordinario Laboral	1100131050 **32 2021 00420 01**
Demandante:	DANIEL NOVA TORRES
Demandada:	JORGE IVÁN LUNA BENAVIDES
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

A U T O:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra el auto proferido en audiencia del 26 de enero del 2023, mediante el cual se resolvieron las excepciones previas que propuso la pasiva.

I.- ANTECEDENTES:

El demandante DANIEL NOVA TORRES presentó demanda ordinaria laboral en contra de JORGE IVÁN LUNA BENAVIDES, con la finalidad que sea condenado a pagar las prestaciones sociales que se causaron en vigencia del contrato de trabajo a término indefinido que mantuvo con el gestor del 5 de agosto de 2005 al 30 de abril de 2021, teniendo en cuenta los salarios que devengó en los últimos cinco (5) años y que relaciona en el *petitum.*

En consecuencia, solicita se condene al pago de cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido sin justa causa, sanción por no consignación de las cesantías, indemnización moratoria, al pago de aportes a seguridad social en pensión sobre los salarios realmente devengados, y la indexación de las sumas adeudadas, en los periodos y por los valores que indica en la demanda y su

subsanación; asimismo, se condene al pago de perjuicios morales, se de aplicación al principio *indubio pro-operario y* al artículo 244 del C.G.P., respecto de los pantallazos que aportó con la demanda. Finalmente, solicita se condene al pago de costas y agencias en derecho, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra y extra petita.* (Archivos 01 y 04).

Después de subsanada la demanda, por auto de 19 de enero de 2022 el Juzgado de origen admitió la demanda (Archivo 03 y 05).

El demandado JORGE IVÁN LUNA BENAVIDES al contestar propuso las excepciones previas de falta de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y la de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. (Archivo 08).

Por auto de 9 de mayo de 2022, se tuvo por contestada la demanda, se corrió traslado de las excepciones previas formuladas y se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. Por su parte, la activa descorrió el traslado de las excepciones previas. (Archivos 09 y 10).

II.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO:

El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., dentro de la etapa de decisión de excepciones previas, la cual se llevó a cabo el 26 de enero de 2023, declaró no probadas las excepciones de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y la de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.

Como sustento de su decisión, el Juez de primer grado al pronunciarse sobre la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, refirió que al haberse subsanado la demanda, sustentaría su decisión en tal escrito, así las cosas, al verificar las pretensiones quinta y sexta, dijo que el promotor

solicitaba el pago de la sanción por no consignación de las cesantías, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., las que no eran excluyentes, pues se fundamentan en supuestos normativos diferentes, como se indica en los citados preceptos legales, de ese modo la del artículo 65 del C.S.T., corre a la terminación del contrato de trabajo en los eventos en que no se cancele lo adeudado por salarios y prestaciones sociales; en tanto que la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se causa en vigencia del contrato cuando no se consignan las cesantías en los plazos dispuestos por la Ley, denegando así, la excepción previa de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones.

Respecto a la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, hizo mención a los numerales 6º y 7º el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., e indicó que al verificar la subsanación de la demanda, era claro que el actor pretendía el pago de la prima de servicios del primer semestre de 2021, las vacaciones del 5 de agosto de 2020 al 5 de agosto de 2021 y las causadas de forma proporcional a la terminación del contrato, la indemnización por despido sin justa causa, sanción por no consignación de las cesantías, sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T., el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensión sobre los salarios realmente devengados, la indexación de las condenas y el reconocimiento de perjuicios morales.

Luego, era diáfano que las pretensiones estaban expresadas de manera separada, por lo que no se requería ningún esfuerzo intelectivo más allá de la lectura para determinar lo pretendido por el gestor. Frente a los hechos, adujo que al calificar la demanda observo que los mismos incluían fundamentos de derecho, por lo que requirió al demandante para que corrigiera esta situación, lo que se cumplió en la subsanación, por lo que al calificar la demanda estimo que cumplía con los requisitos de ley, de modo que, el hecho que no estén narrados de forma cronológica esa situación por sí sola, no es un requisito *sine qua non* para rechazar la demanda, pues si bien lo recomienda, lo cierto es, que los hechos son claros y sustentan las

pretensiones, estimando así que se cumple con la norma que regula el asunto, por ende, declaró no probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación. Al respecto, precisó que no tenía inconformidad alguna frente a la excepción de indebida acumulación de pretensiones.

Sin embargo, su disenso aludía a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales. Sobre el particular señaló que reiteraba los argumentos que expuso en la contestación, además, indicó que pese a que se enumeró cada uno de los hechos, no son constitutivos de situaciones de tiempo modo y lugar, sino refieren a juicios de valor consistente en afirmaciones, los cuales no comportan precisiones que sirvan de sustento al Juez para resolver las peticiones que se elevan.

El Juez de Instancia no repuso su decisión, concediendo el recurso de apelación.

IV.- CONSIDERACIONES:

a. Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

b. Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso, el problema jurídico se contrae a establecer si resulta procedente declarar probada la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.

c. De las Excepciones previas

Sobre este puntual aspecto debe recordar la Corporación que las excepciones previas o dilatorias tienen por objeto eliminar cualquier tipo de impedimento de orden procesal que impida el normal desarrollo del proceso de suerte que las mismas no tienen como finalidad atacar el fondo del asunto en debate, como ocurre con las de mérito o de fondo, en otras palabras, realmente buscan sanear el proceso. En tal sentir, la doctrina nos recuerda:

> *"[…] En estricto sentido, solo tienen carácter de excepción las perentorias, pues son ellas las que se dirigen a contrariar la pretensión presentada por el demandante, ya que las previas buscan evitar actuaciones innecesarias remediando ciertas fallas en el proceso; por ello, en verdad, la excepción previa favorece a las dos partes, y no solo al demandado como pudiera pensarse, pues al permitir el saneamiento inicial del proceso se asegura que este se adelante sobre bases firmes, ajenas a cualquier posibilidad de nulidad[1]".*

Así mismo, se debe enunciar que las excepciones previas o de fondo se encuentran taxativamente regladas en el artículo 100 del C.G.P., aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y la S.S. De igual manera, el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. consagra que *"El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo".*

[1] *López Blanco, HF*. Procedimiento Civil Tomo I. Editores Dupre. 2005.

De cara a lo indicado, conviene precisar que la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, se encuentra enlistada en el numeral 5º del artículo 100 del C.G.P., razón por la cual la Sala procede con el estudio del recurso de apelación frente a esta excepción.

d. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales:

Al analizar dicho medio exceptivo, resulta imperioso recordar que el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, indica la forma y los requisitos que debe contener la demanda en materia laboral, entre ellos, el que se indica en el numeral 7º, así:

> *"Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados."*

Sobre el particular, la doctrina ha expuesto, que:

> *"Merece destacar, que si bien es cierto el escrito de demanda debe ser lo mas claro, preciso y conciso posible en cuanto a los hechos y pretensiones se refiere, para de esa forma permitirle al juez una mayor comprensión del querer del accionante, y así ejercer un adecuado control sobre su aspecto formal, cuando se advierta una desproporción exagerada e inconveniente sobre la narración de los fundamentos fácticos y las reclamaciones, esa situación no conduce inexoblemente a su inadmisión y posterior rechazo, pues una cosa es la falta de claridad respecto de los requisitos que son objeto de estudio y otra muy diferente es el estilo del actor sobre la manera de narrar los hechos, lo cual atañe más a una cualidad relacionada con la capacidad de síntesis y a la forma en la que el escrito utiliza el lenguaje para trasmitir sus ideas, que es el sello personal y privado de cada ser humano. Así lo expuso la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, mediante auto del 9 de octubre de 2006, Radicación 2006 00290 01, con ponencia del autor del presente libro, al revocar el auto que rechazó una demanda de 70 folios, donde se evidenciaba una exagerada y atiborrada narración de hechos y extractos jurisprudenciales[2]".*

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia con Radicación 39819 del 14 de febrero de 2012, señaló al respecto:

---

[2] *Botero, Zuluaga Gerardo. Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.6ª Edición, Página 237. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, 2016.*

"En casos como estos ha señalado esta Corporación en sentencia del 14 de Febrero de 2005, radicación 22923, citada por la impugnante:

"(…) Desde antaño, es jurisprudencia adoctrinada que cuando el juez al momento de dictar sentencia se encuentra ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas, bien por la forma como aparecen las súplicas, ora en la exposición de los hechos, también en los fundamentos de derecho, o en las unas y en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo, sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico; y además si es necesario para precisar su auténtico sentido y aspiración procesal, tener en cuenta las actuaciones que haya desarrollado el actor en el trámite del proceso, lo cual debe observar celosamente el instructor judicial a manera de saneamiento, a efecto de evitar una nulidad o una decisión inhibitoria con grave perjuicio para los litigantes y talanquera infranqueable para que se llegue a la norma individual constituida con la sentencia de fondo, lo que choca con el deber ser de la administración de justicia.

(…)
Así las cosas, cuando la demanda no ofrece claridad y precisión en los hechos narrados como pedestal del petitum, o en la forma como quedaron impetradas las súplicas, tiene dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina, que para no sacrificar el derecho sustancial, es deber del fallador descubrir la pretensión en tan fundamental pieza procesal y tratar de borrar las imprecisiones, lagunas o vaguedades que en principio quedan exteriorizadas. Con razón se ha dicho que "la torpe expresión de las ideas no puede ser motivo de repudiación del derecho cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición de ideas del demandante", lo cual no es más que la protección de los principios que orientan la observancia del derecho sustancial por encima de las formas, dentro del marco del debido proceso a que se contraen los artículos 29, 228 y 230 de la carta mayor. (Casación Civil del 12 de Diciembre de 1936. T. XLVII. Pág. 483).

Es que de verdad, lo que hace inepta una demanda por indebida acumulación de pretensiones, es la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora y fijar su verdades trascendencia jurídica como en muchas oportunidades lo ha predicado esta Corte; y lo decidido por el Tribunal como que conduce a una elaboración paradigmática cuando la ley de enjuiciamiento lo que exige es que el libelo no imposibilite definitivamente su entendimiento, como ha quedado claro en esta oportunidad (…)".

e. Del caso en concreto:

Al descender en el *sub examine*, se observa que además de los argumentos expuestos en la alzada, la pasiva al sustentar el medio exceptivo propuesto adujo que los hechos fueron presentados sin ser numerados en su totalidad, sin ningún sentido específico narrando un sin fin de situaciones inconducentes que obstaculiza la interpretación del operador judicial y entorpece el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, lo que amerita el rechazo de la demanda.

Bajo ese escenario, advierte la Sala al verificar los fundamentos fácticos de la subsanación de la demanda, los que por demás huelga memorar fueron objeto de inadmisión por parte del *a-quo*, que si bien no son un modelo a seguir; lo cierto es, que de los mismos se puede extraer que en definitiva sustentan las pretensiones que se elevan en la subsanación de la demanda, conforme lo establece el Estatuto Procesal Laboral, el que además, nada señala sobre que respecto a que los hechos deban seguir un detallado orden cronológico, como lo aduce la pasiva en su disenso.

De otro lado, no encuentra esta Colegiatura que se vulneren los derechos de defensa y contradicción de la encartada, pues como viene de verse, lo que en realidad daría cabida a la prosperidad de la excepción aquí analizada es la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora a efectos de limitar el problema jurídico a resolver, lo que a las claras no sucede en el presente asunto, ya que tal como lo sostuvo el Juzgador de instancia, no se necesita realizar un mayor esfuerzo para entender las situaciones fácticas que allí se narran, lo que de contera de pudiese dar cabida al rechazo de la demanda.

En esa medida, la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales no está llamada a prosperar; por las razones aquí expuestas, lo que conlleva a la inexorable a la confirmación del auto apelado en su integridad.

Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido dentro del presente proceso el 26 de enero del 2023, por el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $500.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA TERCERA LABORAL

Ordinario Laboral	11001 31 050 **35 2021 00324 01**
Demandante:	JOSÉ BENJAMÍN MORA RAMOS
Demandado:	SUPERLABORALES S.A.S. y la EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. – EDINSA.
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido dentro de la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., llevada a cabo el 6 de junio del 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se negó la práctica de una prueba a favor de la apelante.

I.- ANTECEDENTES:

El señor JOSÉ BENJAMÍN MORA RAMOS presentó demanda ordinaria laboral en contra de SUPERLABORALES S.A. y de la EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. - EDINSA, con la finalidad que se declare que existió un contrato de trabajo a término indefinido con EDINSA, vigente del 4 de diciembre de 2014 hasta el 11 de julio de 2019 y que SUPERLABORALES S.A., fungió como un simple intermediario, por lo que es solidariamente responsable por las condenas que se profieran hasta el 22 de julio de 2015; asimismo, se declare que EDINSA tenía conocimiento del lumbago no

especificado y el síndrome del manguito rotador que padecía al momento del despido el 11 de junio de 2019, el cual debe ser declarado nulo por encontrarse en estado de debilidad al no haber terminado la rehabilitación por el accidente de trabajo que sufrió y que se encuentra pendiente de calificar la su PCL, a su vez, que de haberse efectuado pagos parciales por cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo por parte de las encartadas, tales sumas no se tendrán por pagadas.

Como consecuencia de tales declaraciones, pretende se condene a EDINSA S.A.S. a reintegrarlo sin solución de continuidad al cargo que venía desempeñando o a uno de mayor jerarquía, se condene a las demandadas a pagar las horas extras horas diurnas y nocturnas ordinarias y las diurnas y nocturnas festivas causadas durante la relación aboral; igualmente, se condene a reliquidar y pagar las cesantías y sus intereses, la prima de servicios y las vacaciones con el salario real. Se condene a pagar los salarios, aportes a pensión y demás emolumentos causados del 11 de junio de 2019 y hasta que se produzca el reintegro. Se condene a pagar de la sanción por no consignación de las cesantías, la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indexación de las sumas objeto de condena, las costas y agencias en derecho, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita.*

Como primeras pretensiones subsidiarias, solicita que en caso de no proceder el reintegro; se condene a las demandadas a pagar las horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y las festivas diurnas y nocturnas causadas en vigencia del contrato, se condene a reliquidar la prima, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y las vacaciones con el salario realmente devengado, a pagar la sanción por no consignación de las cesantías con el salario real, las indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del C.S.T., la indexación de las sumas adeudadas, junto con las costas y agencias en derecho, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita*.

En las segundas pretensiones subsidiarias que elevó, solicita que en caso de determinarse que el contrato de trabajo que celebró con EDINSA, fue a término fijo del 23 de julio de 2015 al 11 de Julio de 2019; se condene a esa demandada a pagar las horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y las festivas diurnas y nocturnas causadas durante el mismo, además, se reliquiden las cesantías y sus intereses, la prima, las vacaciones, y la indemnización por despido sin justa causa con el salario realmente devengado, la sanción por no consignación de las cesantías, la sanción moratoria, la indexación de las condenas, y las costas y agencias en derecho, más lo que resulte probado en uso de las facultades *ultra* y *extra petita*.

Como medios de prueba, solicitó entre otros, la práctica una prueba pericial. (Fls. 7 a 23 - archivo 01 y archivo 24).

II.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

En audiencia surtida el 6 de junio de 2022, el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, al momento de agotar la etapa de decreto y práctica de pruebas, denegó el mencionado dictamen pericial.

Como sustento de su decisión, el *a-quo* indicó que en los términos del artículo 227 del C.G.P., aplicable por remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., los dictámenes se deben aportar por la parte interesada en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, siendo el caso con la demanda.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión del Juez de instancia la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Al respecto, adujo que el actor no tenía recursos para acceder al dictamen pericial, agregando que en la actualidad ya cuenta con un trabajo y puede solventar ese gasto,

precisando que ese fue el motivo por el cual no fue posible presentarlo con la demanda.

Al respecto, el Juzgado de origen al resolver el recurso de reposición, mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación.

IV.- CONSIDERACIONES:

4.1 Trámite de segunda instancia:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

4.2 Problema jurídico:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de alzada, el objeto del presente debate se centra en establecer si resulta procedente decretar la práctica del peritaje solicitado por la demandante.

4.3 Del peritaje:

Sabido es que en materia laboral por disposición del artículo 51 del C.P.T son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley. Con todo, el Juez goza de la potestad para rechazar de plano las pruebas que estime notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles, conforme lo dispuesto en los artículos 53 del C.P.T. y de la S.S. y 168 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión del artículo 145 del C.P.T y la S.S.

Así mismo, el artículo 51 del C.P.T. y de la S.S., consagra que *"Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá*

lugar cuando el Juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales"; de otra parte, el artículo 227 del C.G.P., reza:

> *"La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días hábiles. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.*
>
> *"El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado".*

4.4 Del caso en concreto:

Descendiendo al caso que hoy nos ocupa, y de acuerdo con los argumentos expuestos por la parte actora en su alzada, advierte la Sala que la inconformidad se presenta frente a la negativa del juez de instancia en el decreto de la prueba pericial enlistada en el acápite de pruebas, así:

> *"Le solicito señor Juez se sirva decretar el dictamen pericial, por tal motivo, solicito se oficie a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ u otra entidad encargada de la valoración de la perdida de la capacidad laboral, ya que le corresponde a ésta determinar en primera instancia la PCL, el estado de invalidez y su origen.".*

Acorde con lo anterior, luego de analizar el escrito de demanda no cabe duda de que el libelista como viene de verse no solicitó la práctica del dictamen en los términos enunciados en la norma en cita, tampoco lo aportó con la demanda, ni solicitó se le concediera un plazo para aportarlo, de ahí que contrario a lo aducido en su impugnación, no solicitó en debida forma la pluricitada prueba.

Siendo ello así, estima esta Colegiatura que el juez de origen no incurrió en yerro alguno al negar el decreto de la prueba pericial antes referida, más si se

tiene en cuenta que uno de los aspectos a resolver alude a una posible estabilidad laboral reforzada del actor a la terminación de la relación laboral, en la que la prueba pericial deprecada no es totalmente decisiva para definir el asunto, pues el juez laboral goza de libertad probatoria para establecer tal aspecto.

Aunado a lo anterior, no se puede pasar por alto que por la forma en que fue solicitada la prueba, pareciera ser que la activa pretende dejar al arbitrio del juzgado primigenio el decreto de esta, según lo reglado en el artículo 54 del C.P.T. y de la S.S. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL3817-2020, Radicación No. 72142 de 16 de septiembre de 2020, señaló sobre el decreto de pruebas de oficio:

> *"la Sala considera pertinente indicar que si bien esta Corporación ha adoctrinado que en tratándose de derechos derivados del ámbito de la seguridad social, los funcionarios judiciales tienen por obligación superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial, cuando se sospecha que de ellas pende una irreparable decisión de privar de protección a quien realmente se le debía otorgar, haciendo uso de los mecanismos legales previstos para ello, (Ver sentencia CSJ SL392-2019), también lo es que ha sostenido respecto del decreto oficioso de pruebas en los procesos del trabajo, que esta facultad legal consagrada en los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no puede desplazar, reemplazar o relevar a las partes de la «iniciativa probatoria» que, conforme a las reglas de la carga de la prueba, les competía de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 167 del Código General del Proceso."*

En esa medida, y por no haberse solicitado en debida forma la prueba pericial, de acuerdo con las razones ya esgrimidas, la Sala confirmará el auto apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la apelante.

VI. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto proferido el 6 de junio de 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $200.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA TERCERA LABORAL

Ordinario Laboral	11001 31 050 **39 2019 00319 01**
Demandante:	MARIA CECILIA BELTRAN
Demandado:	COLPENSIONES Y MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ
Magistrado Ponente:	**DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la litisconsorte necesaria MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ, contra el auto proferido dentro de la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., llevada a cabo el 30 de noviembre del 2022 por el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se negó la práctica de unas pruebas a favor de la apelante.

I.- ANTECEDENTES:

La señora MARIA CECILIA BELTRAN presentó demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, con el objeto que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del deceso del señor JOSÉ EDGAR RAMIREZ MORA, en condición de compañera permanente y a partir del 30 de septiembre de 2013; que tiene derecho al pago del retroactivo correspondiente de manera indexada y que es la única beneficiaria de la prestación, sin que pueda ser reconocida a la señora MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ, al no haber convivido con el causante en los últimos cinco años de vida.

Como consecuencia de tales declaraciones, pretende se condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a partir del 30 de septiembre de 2013, fecha del óbito del causante junto con el respectivo retroactivo debidamente indexado al pago, los intereses de mora, y se excluya a MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ, al no acreditar el requisito de convivencia en los últimos cinco años de vida del pensionado; por último, pretende se condene al pago de costas y agencias en derecho.

De manera subsidiaria, pretende que en caso de que se reconozca algún derecho a la cónyuge se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes teniendo en cuenta la calenda que se determine de acuerdo con el tiempo de convivencia y el pago realizado a la viuda del causante, retroactivo que deberá pagarse indexado, y además se deberá condenar al pago de los intereses de mora.

Subsanada la demanda, por auto de 28 de noviembre de 2019 fue admitida y se ordenó la notificación de la misma. En esa medida COLPENSIONES allegó escrito de contestación, teniéndose por contestada la demanda por parte de esa accionada mediante proveído de 2 de julio de 2020, mismo en el que se dispuso, vincular como litisconsorte pasiva a MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ. (Fls. 184, 189 a 212 y 214 - archivo 01).

De esa forma, mediante auto de 1º de febrero de 2022 se tuvo por notificada por conducta concluyente a la citada litisconsorte MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ, por lo que el juzgado de instancia se procedió a calificar la contestación que aportó, en la que observa la Sala realizó algunas consideraciones frente a las pruebas aportadas con la demanda y además solicitó el interrogatorio de parte del accionante y los accionados; así las cosas, se inadmitió la contestación concediéndose el término de ley para subsanar las falencias señaladas por la juez de primer grado. (Archivos 05 y 08).

En virtud de lo anterior, la referida accionada allegó subsanación de la contestación el 9 de febrero de 2022. Sin embargo, al no haberse corregido en debida forma los yerros señalados, a través de auto de 30 de junio de 2022, se tuvo por no contestada la demanda por parte de MIRIAM RIVERA DE RAMÍREZ, además el Juzgado de origen ante esa situación en la misma providencia señaló *"de conformidad con lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 31 del CPTSS, esto es, tenerse tal situación como indicio grave en contra de esta demandada, lo que significa que se tendrá en cuenta la contestación presentada el 19 de octubre de 2020, así como la subsanación del 09 de febrero de 2022 , en los aspectos que no fueron objeto de reparo y los que se subsanaron de conformidad con lo ordenado."* (Archivos 09 y 13)

Mediante proveído de 20 de septiembre de 2022, se aceptó solicitud de aplazamiento y se fijo nueva fecha para audiencia. No obstante, el apoderado de la parte demandada MIRIAM RIVERA DE RAMÍREZ el 25 de noviembre de 2022, allegó memorial en el que solicita se tengan en cuenta como medios de prueba los documentos que aporta y los testimonios que allí enlista. (Archivo 19).

II.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

En audiencia surtida el 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, al momento de agotar la etapa de decreto de pruebas, denegó las que fueron solicitadas el 25 de noviembre de 2022 por la litisconsorte MIRIAM RIVERA DE RAMÍREZ.

Como sustento de su decisión, la *a-quo* en dicha etapa señaló que decretaba a favor de dicha accionada las documentales contenidas en la carpeta 07 archivo 02 del expediente digital, entendiendo esta Juez Colegiado que hace referencia a las que se aportaron con la contestación que obra en el archivo 05 de la carpeta C01, denominado *05ContestacionMiriamRivera20201019.pdf*, ello

teniendo en cuenta las manifestaciones que se realizaron en el auto que tuvo por no contestada la demanda a la impugnante, como viene de verse. Asimismo, decretó a favor de esa encartada el interrogatorio de parte de la de la demandante MARIA CECILIA BELTRÁN.

En cuanto a las pruebas aportadas el 25 de noviembre de 2022, expuso que no se tendrían en cuenta por haber sido aportadas de manera extemporánea, y en gracia de discusión adujo que tampoco resultaban relevantes y pertinentes, en el sentido que nada acreditan sobre los hechos objeto de debate, esto es, la convivencia de la demandada con el causante.

III.- RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión de la *a-quo la* litisconsorte MIRIAM RIVERA DE RAMÍREZ interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Argumentando que se ratificaba en las pruebas aportadas el día 25 de noviembre de 2022, ya que son pruebas documentales y testimoniales que son conducentes, pertinentes y útiles para el proceso.

Al respecto, el Juzgado de origen al resolver el recurso de reposición, mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación.

IV.- CONSIDERACIONES:

4.1 TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA:

Se surtió el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, corriendo traslado a las partes para la etapa de alegaciones, las que se aportaron al plenario.

4.2 PROBLEMA JURÍDICO:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de alzada, el objeto del presente debate se centra en establecer si resulta procedente decretar las pruebas que solicitó el 25 de noviembre de 2022 la demandada MIRIAM RIVERA DE RAMIREZ.

4.3 De la oportunidad para solicitar y aportar pruebas:

Sabido es que en materia laboral por disposición del artículo 51 del C.P.T son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley. Con todo, el Juez goza de la potestad para rechazar de plano las pruebas que estime notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles, conforme lo dispuesto en los artículos 53 del C.P.T. y de la S.S. y 168 del C.G.P, aplicable a los juicios laborales por remisión del artículo 145 del C.P.T y la S.S.

Así mismo, el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, establecen como requisito de la demanda en su numeral 9º que debe contener la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, a su vez, el artículo 26 *ejusdem* modificado por el artículo 14 de la Ley 712 de 2001, señala que el escrito demandatorio debe ir acompañado de las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante.

En consonancia con lo anterior, el artículo 31 del estatuto procesal laboral, modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, indica en su numeral 5º que la contestación de la demanda debe contener la "*petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba"* y además los numerales 2º y 3º del parágrafo 1º de ese mismo artículo, establece que la contestación debe estar acompañada de las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda que se encuentren en su poder, junto con las pruebas anticipadas.

De la misma forma, el artículo 60 del mismo compendio normativo establece que el Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo; lo que guarda consonancia con el artículo 173 del C.G.P., que indica que para que sean apreciadas por el juez las pruebas, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello en esa norma, la cual se aplica por analogía a los juicios del trabajo.

Descendiendo al caso que hoy nos ocupa, advierte la Sala que la apelante frente al auto de 30 de junio de 2022 que le tuvo por no contestada la demanda, con las prevenciones allí expuestas, según viene de verse, no manifestó inconformidad alguna mediante los medios de impugnación respectivos, por lo que tal decisión quedó en firme.

No obstante, el 25 de noviembre de la misma anualidad, es decir, más de cuatro meses después, la impugnante allega un escrito en el que solicita se le tengan en cuenta como medios de prueba unas documentales que aporta y los testimonios que allí relaciona, los cuales claramente fueron deprecados de manera extemporánea como bien lo adujo la juez de primer grado, pues la oportunidad para solicitar y aportar pruebas al proceso ya había fenecido; más si se tiene en cuenta que en la contestación a la demanda y la subsanación a la misma, no fueron había solicitado los medios de prueba que pretendió incluir *a posteriori.*

Acorde con lo anterior, y según lo expuesto conviene recordar que el Código Procesal del Trabajo se ocupó de establecer de manera diáfana, la oportunidad con la que cuentan las partes para solicitar y aportar pruebas al trámite procesal, ello en aras de garantizar el debido proceso a los intervinientes y que de suyo tengan mérito probatorio, luego, no pueden ser pedidos y allegados cuando a bien lo tengan las partes.

Ahora, no se puede soslayar el hecho que por la forma en que fueron solicitadas las pruebas objeto de inconformidad, parecer ser que la apelante pretende dejar al arbitrio del juzgado primigenio el decreto de estas, según lo reglado en el artículo 54 del C.P.T. y de la S.S. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL3817-2020, Radicación No. 72142 de 16 de septiembre de 2020, señaló sobre el decreto de pruebas de oficio:

> *"la Sala considera pertinente indicar que si bien esta Corporación ha adoctrinado que en tratándose de derechos derivados del ámbito de la seguridad social, los funcionarios judiciales tienen por obligación superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial, cuando se sospecha que de ellas pende una irreparable decisión de privar de protección a quien realmente se le debía otorgar, haciendo uso de los mecanismos legales previstos para ello, (Ver sentencia CSJ SL392-2019), también lo es que ha sostenido respecto del decreto oficioso de pruebas en los procesos del trabajo, que esta facultad legal consagrada en los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no puede desplazar, reemplazar o relevar a las partes de la «iniciativa probatoria» que, conforme a las reglas de la carga de la prueba, les competía de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 167 del Código General del Proceso."*

En esa medida, y por no haberse solicitado en debida forma y oportunidad las pruebas indicadas en el escrito de 25 de noviembre de 2022, de acuerdo con las razones ya esgrimidas, la Sala confirmará el auto apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la apelante.

VI. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,**

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto proferido el 30 de noviembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

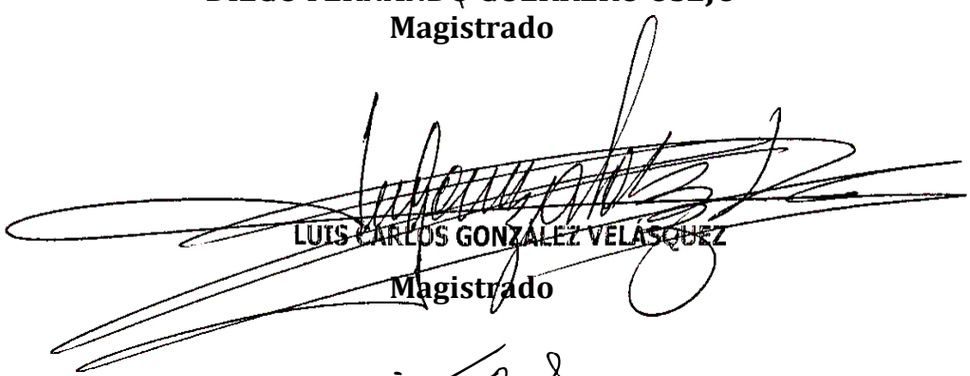
SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Fíjense como valor de agencias en derecho la suma de $300.000, las cuales deberán ser incluidas en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen para que continúe su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado



JOSÉ WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala al estudio del recurso de reposición, interpuesto por la parte demandada la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS-PORVENIR S.A.**[1], contra el auto de 01 de diciembre de 2022, mediante el cual decidió negar el recurso de casación, interpuesto contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2022, dentro del proceso ordinario laboral que promovió **ÓSCAR ERNESTO GUZMÁN CARDOZO**, en contra de la sociedad recurrente y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

I. ANTECEDENTES

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., formuló recurso extraordinario de casación, el cual fue negado mediante auto de 01 de diciembre de 2022, al considerar que no le asiste interés para recurrir a la entidad antes mencionada, con fundamento en

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado 09 de diciembre de 2022.

la sentencia CSJ AL 1223-2020 MP CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO:

> […] el *ad quem* al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional son de la demandante.
>
> Luego en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que, además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, no se puede tasar para efectos del recurso extraordinario […]

La AFP antes mencionada, presentó recurso de reposición, y en subsidio el de queja, contra el auto que negó la posibilidad de acudir en casación, para lo cual expuso que:

> […] En este sentido, es preciso recordar que las sumas correspondientes a los gastos de administración, como se ha reiterado a lo largo del proceso, tienen una destinación especifica por mandato legal, la cual fue cumplida plenamente por mi representada, de tal suerte que esas sumas fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que implicaron la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual de la demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos, y cuyos, rendimientos fueron reconocidos al accionante, por lo que al imponer dicha condena a mi representada, implica que debe retornar estas sumas a costa de su propio patrimonio, lo que claramente acredita un interés económico para recurrir en casación. […]

Por lo anterior, solicitó reponer el auto impugnado y en su lugar, se conceda el recurso extraordinario de casación, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina el asunto.

II. CONSIDERACIONES

Respecto al recurso de reposición interpuesto en contra del auto que denegó el recurso de casación a la parte demandada de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,

establece que el recurso de reposición es procedente. Asimismo, con arreglo a lo establecido en el artículo 352 y 353 del CGP el recurso de queja procede en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la casación.

Conforme a lo anterior, procede la Sala a estudiar el recurso de reposición interpuesto, teniendo en cuenta que la condena impuesta a la AFP Porvenir S.A., consistió en «*… declaró la ineficacia de la afiliación del actor a la AFP Colmena hoy AFP Protección S.A., realizada el 9 de septiembre de 1994 y de contera los traslados horizontales realizados en las AFP ING (sic) y AFP Porvenir S.A., en consecuencia, ordenó el regreso automático del actor sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, condenó a la recurrente y a la AFP Protección S.A. devolver a Colpensiones todos los valores y sumas que se encuentren en la cuenta individual de ahorro del demandante correspondientes a cotizaciones, frutos e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con todos los rendimientos, gastos y cuotas de administración que se hayan descontado durante las respectivas vinculaciones sumas debidamente indexadas, para ello le otorgó un término de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, con la obligación de hacer entrega de las documentales que permitan a Colpensiones establecer que la devolución se hace en los términos de la sentencia a quo.…»*.

En virtud de lo anterior, se negó el recurso de casación, al considerar que no le asistía interés económico a la recurrente, en la medida en que al ordenarle la devolución de los saldos que integran la cuenta de ahorro individual del afiliado, no hizo otra cosa que orientarla en el sentido de que tal capital sea retornado, junto con sus rendimientos financieros que pertenecen al accionante, por lo cual no son computables en aras de establecer el interés jurídico para recurrir en casación de la AFP Porvenir (CSJ AL 53798, 13

mar. 2012, CSJ AL3805-2018, CSJ AL3602-2019, CSJ AL1226-2020 y CSJ AL1401-2020).

La recurrente, disiente de tal determinación, por considerar que contrario a lo afirmado, sí le asiste interés económico para recurrir en casación, pues a su juicio en dicha cuantificación debían incluirse los gastos de administración ya que fueron debidamente invertidos en la forma exigida por la ley, al igual que los seguros provisionales.

Al respecto cabe precisar, que no se advierte un agravio a la recurrente, habida cuenta de la declaratoria de la ineficacia del traslado, por lo tanto, se hace imperante la devolución plena y con efectos retroactivos de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual que incluye el reintegro a Colpensiones de todos los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. (CSJ SL2877-2020 reiterado en autos CSJ AL 2079-2019, CSJ AL5102-2017 y CSJ AL1663-2018).

Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la recurrente, consistente en los recursos administrados por la AFP, incluidos gastos de administración, comisiones, primas de seguros y aportes al fondo de garantía de pensión mínima y que deben ser asumidos de su propio patrimonio la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha

determinado que se deben tener en cuenta los siguientes requisitos a saber: *(i)* la *summa gravaminis* debe ser determinable, es decir, cuantificable en dinero, no son susceptibles de valoración las condenas meramente declarativas, *(ii)* el monto debe superar la cuantía exigida para recurrir en casación, *(iii)* en gracia de discusión, los montos objeto de reproche debieron ser calculables, demostrables y superar el debate probatorio en aras de salvaguardar el derecho defensa y contradicción de las partes. Así lo ha determinado la Sala de Casación Laboral en casos similares presentados por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.:

> [...]De acuerdo con lo anterior, Porvenir S.A. no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el *ad quem* al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional, son de la afiliada. Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, *no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario*. [...] (AL1226-2020[2]).

> [...]Para desestimar tal petición basta decir, que si bien podría pregonarse que la misma se constituye en una carga económica para el Fondo demandado, no se demostró que tal imposición superara la cuantía exigida para efectos de recurrir en casación; y en esa medida por obvias razones, no pueden ser objeto de cuantificación para hallar el interés económico, por consiguiente, se declara bien denegado el recurso de casación formulado por la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. [...] (AL2866-2022[3]).

En consecuencia, la Sala se mantiene incólume en la decisión de negar el recurso de casación, y comoquiera que el recurso de queja es procedente se ordena trasladar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el expediente de la referencia, con el fin de surtirse el recurso de queja.

---

[2] Magistrada ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.
[3] Magistrado ponente: GERARDO BOTERO ZULUAGA.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto de fecha primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), por las razones anteriormente expuestas.

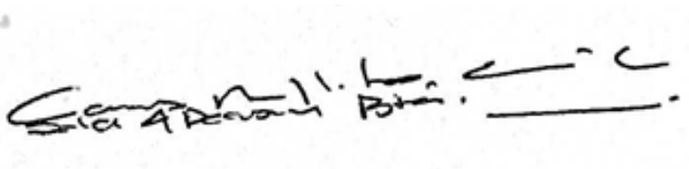
SEGUNDO: CONCÉDASE EL RECURSO DE QUEJA. Por la Secretaría de la Sala Laboral de este Tribunal súrtase lo pertinente ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

Magistrado



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

Magistrada

Proyectó: DR

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Sala a determinar la viabilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por la sociedad demandada **TIMON S.A.**[1], contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022 y notificada por edicto de fecha cinco (05) de diciembre de la misma anualidad dado su resultado adverso dentro del proceso ordinario laboral promovido por **PEDRO GONZALO NASPIRAN MARTÍNEZ** en contra de la recurrente.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Establece el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su parte pertinente que: *«…sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente»*. Tal estimación debe efectuarse, teniendo en cuenta el monto del

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado el dieciséis (16) de diciembre de 2022.

salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar, en el caso en concreto la cuantía corresponde a la suma de $ 120.000.000,00.

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, establece que el interés económico para recurrir en casación se encuentra determinado por el agravio o perjuicio que la sentencia recurrida les irroga a las partes[2].

Así, el interés jurídico de la pasiva para recurrir en casación, se encuentra determinado por el monto de las condenas que le fueron impuestas por el fallo de segunda instancia que confirmó la sentencia condenatoria del *a quo*.

Entre otras condenas impuestas a la recurrente se encuentran, el reconocimiento y pago de *(i)* cesantías, *(ii)* intereses a las cesantías, *(iii)* primas de servicios, *(iv)* vacaciones, *(v)* indemnización por despido sin justa causa suma indexada, *(vi)* indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST e intereses moratorios a partir del mes 25, *(vii)* aportes al Subsistema de Seguridad Social en Pensiones por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 al 15 de agosto de 2018 adicionando al ingreso base de cotización la suma de $200.000 por concepto de auxilio de formación.

Al cuantificar las condenas obtenemos:

Tabla Indexación Despido sin Justa Causa					
Año	***Despido sin Justa Causa***	***I.P.C. inicial***	***I.P.C. final***	***Factor de Indexación***	***Indexación***
2021	*$ 7.555.456,00*	*110,06*	*123,51*	*1,12*	*$ 923.322,58*
Total Indexación Prestaciones Sociales				***$ 923.322,58***	

[2] CSJ AL2538-2022. Magistrado Ponente: GERARDO BOTERO ZULUAGA.

Tabla Aportes a Pensión				
Año	No. Meses	% Aporte	Salario Mensual	Total
2012	5	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 1.017.600,00
2013	12	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 2.442.240,00
2014	12	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 2.442.240,00
2015	12	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 2.442.240,00
2016	12	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 2.442.240,00
2017	12	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 2.442.240,00
2018	7,50	16,00%	$ 1.272.000,00	$ 1.526.400,00
Total Aporte a Pensión				**$ 14.755.200,00**

Tabla liquidación intereses moratorios art. 65 CST						
Fecha inicial	**Fecha final**	**Número de días**	**Interés**	**Tasa de interés de mora diario**	**Capital**	**Subtotal**
15/08/20	30/11/22	828	27,53%	0,0676%	$ 1.207.778,00	$ 675.759,37
15/08/20	30/11/22	826	27,53%	0,0676%	$ 144.933,00	$ 80.895,05
15/08/20	30/11/22	826	27,53%	0,0676%	$ 1.207.778,00	$ 674.127,10
Total Intereses						**$ 1.430.781,53**

Tabla Liquidación Crédito	
Auxilio Cesantías	$ 1.207.778,00
Intereses Sobre las Cesantías	$ 144.933,00
Prima de Servicios	$ 1.207.778,00
Vacaciones	$ 603.889,00
Indemnización por despido sin Justa Causa - Art. 64 C.S.T.	$ 7.555.456,00
Indexación despido sin justa causa	$ 923.322,58
Indemnización moratoria - Art. 65 C.S.T.	$ 25.728.000,00
Interés de mora - Art. 65 C.S.T. (sobre prestaciones)	$ 1.430.781,53
Aportes pensión (incluye aumento IBC)	$ 14.755.200,00
Total Liquidación	**$ 53.557.138,11**

Visto lo que antecede, se tiene que el perjuicio económico irrogado a la accionada con las condenas impuestas, asciende a $ 53’557.138,11, valor inferior a los 120 salarios mínimos legales para acceder al recurso. En consecuencia, y al no hallarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, se negará el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada.

DECISIÓN

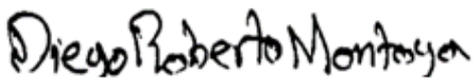
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada **TIMON S.A.**

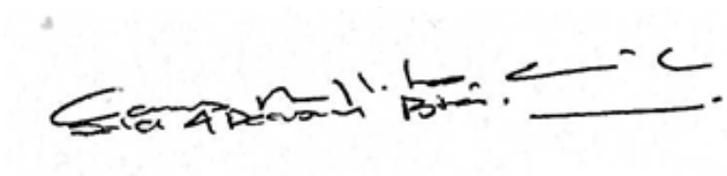
SEGUNDO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

Magistrado



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

Magistrada

Proyectó: DR

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Decisión Laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado ponente

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala al estudio del recurso de reposición, interpuesto por la parte demandada la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS-PORVENIR S.A.**[1], contra el auto de 01 de diciembre de 2022, mediante el cual decidió negar el recurso de casación, interpuesto contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2022, dentro del proceso ordinario laboral que promovió **CLARA PATRICIA QUINTERO GARAY**, en contra de la sociedad recurrente y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

I. ANTECEDENTES

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., formuló recurso extraordinario de casación, el cual fue negado mediante auto de 01 de diciembre de 2022, al considerar que no le asiste interés para recurrir a la entidad antes mencionada, con fundamento en

[1] Allegado vía correo electrónico memorial fechado 09 de diciembre de 2022.

la sentencia CSJ AL 1223-2020 MP CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO:

> […] el *ad quem* al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional son de la demandante.
>
> Luego en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que, además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, no se puede tasar para efectos del recurso extraordinario […]

La AFP antes mencionada, presentó recurso de reposición, y en subsidio el de queja, contra el auto que negó la posibilidad de acudir en casación, para lo cual expuso que:

> […] En este sentido, es preciso recordar que las sumas correspondientes a los gastos de administración, como se ha reiterado a lo largo del proceso, tienen una destinación especifica por mandato legal, la cual fue cumplida plenamente por mi representada, de tal suerte que esas sumas fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que implicaron la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual de la demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos, y cuyos, rendimientos fueron reconocidos al accionante, por lo que al imponer dicha condena a mi representada, implica que debe retornar estas sumas a costa de su propio patrimonio, lo que claramente acredita un interés económico para recurrir en casación. […]

Por lo anterior, solicitó reponer el auto impugnado y en su lugar, se conceda el recurso extraordinario de casación, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina el asunto.

II. CONSIDERACIONES

Respecto al recurso de reposición interpuesto en contra del auto que denegó el recurso de casación a la parte demandada de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,

establece que el recurso de reposición es procedente. Asimismo, con arreglo a lo establecido en el artículo 352 y 353 del CGP el recurso de queja procede en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la casación.

Conforme a lo anterior, procede la Sala a estudiar el recurso de reposición interpuesto, teniendo en cuenta que la condena impuesta a la AFP Porvenir S.A., consistió en «*… declaró que el trasladó que hizo la actora del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, con efectividad a partir del 1° de julio 1995 es ineficaz y por ende no produjo efecto alguno, por lo que se debe entender que la demandante jamás se separó del régimen de prima media, en ese sentido ordenó a la recurrente transferir a Colpensiones todas las sumas de dinero que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante junto con los rendimientos y los gastos por administración éstos debidamente indexados, sin que sea dable descontar dinero que haya pagado por seguros previsionales ni el porcentaje destinado a la garantía de la pensión mínima. Ordenó a Colpensiones que reciba los mencionados dineros y reactive la afiliación de la demandante al régimen de prima media sin solución de continuidad, declaró no probadas las excepciones propuestas, por último informó a Colpensiones que pueda acudir a las acciones judiciales para obtener el pago de los perjuicios causados…*».

En virtud de lo anterior, se negó el recurso de casación, al considerar que no le asistía interés económico a la recurrente, en la medida en que al ordenarle la devolución de los saldos que integran la cuenta de ahorro individual del afiliado, no hizo otra cosa que orientarla en el sentido de que tal capital sea retornado, junto con sus rendimientos financieros que pertenecen a la accionante, por lo cual no son computables en aras de establecer el interés jurídico para recurrir en casación de la AFP Porvenir (CSJ AL 53798,

13 mar. 2012, CSJ AL3805-2018, CSJ AL3602-2019, CSJ AL1226-2020 y CSJ AL1401-2020).

La recurrente, disiente de tal determinación, por considerar que contrario a lo afirmado, sí le asiste interés económico para recurrir en casación, pues a su juicio en dicha cuantificación debían incluirse los gastos de administración ya que fueron debidamente invertidos en la forma exigida por la ley, al igual que los seguros provisionales.

Al respecto cabe precisar, que no se advierte un agravio a la recurrente, habida cuenta de la declaratoria de la ineficacia del traslado, por lo tanto, se hace imperante la devolución plena y con efectos retroactivos de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual que incluye el reintegro a Colpensiones de todos los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. (CSJ SL2877-2020 reiterado en autos CSJ AL 2079-2019, CSJ AL5102-2017 y CSJ AL1663-2018).

Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la recurrente, consistente en los recursos administrados por la AFP, incluidos gastos de administración, comisiones, primas de seguros y aportes al fondo de garantía de pensión mínima y que deben ser asumidos de su propio patrimonio la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha

determinado que se deben tener en cuenta los siguientes requisitos a saber: *(i)* la *summa gravaminis* debe ser determinable, es decir, cuantificable en dinero, no son susceptibles de valoración las condenas meramente declarativas, *(ii)* el monto debe superar la cuantía exigida para recurrir en casación, *(iii)* en gracia de discusión, los montos objeto de reproche debieron ser calculables, demostrables y superar el debate probatorio en aras de salvaguardar el derecho defensa y contradicción de las partes. Así lo ha determinado la Sala de Casación Laboral en casos similares presentados por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.:

> [...]De acuerdo con lo anterior, Porvenir S.A. no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el *ad quem* al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional, son de la afiliada. Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, *no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario*. [...] (AL1226-2020[2]).

> [...]Para desestimar tal petición basta decir, que si bien podría pregonarse que la misma se constituye en una carga económica para el Fondo demandado, no se demostró que tal imposición superara la cuantía exigida para efectos de recurrir en casación; y en esa medida por obvias razones, no pueden ser objeto de cuantificación para hallar el interés económico, por consiguiente, se declara bien denegado el recurso de casación formulado por la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. [...] (AL2866-2022[3]).

En consecuencia, la Sala se mantiene incólume en la decisión de negar el recurso de casación, y comoquiera que el recurso de queja es procedente se ordena trasladar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el expediente de la referencia, con el fin de surtirse el recurso de queja.

---

[2] Magistrada ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.
[3] Magistrado ponente: GERARDO BOTERO ZULUAGA.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto de fecha primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022), por las razones anteriormente expuestas.

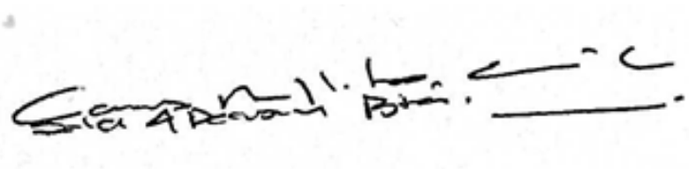
SEGUNDO: CONCÉDASE EL RECURSO DE QUEJA. Por la Secretaría de la Sala Laboral de este Tribunal súrtase lo pertinente ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

Magistrado



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

Magistrada

Proyectó: DR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUIDO POR JOSÉ NOE MARTÍNEZ BUITRAGO Y OTROS CONTRA MENZIES AVIATION COLOMBIA S.A.S. (RAD. 38 2021 00493 01).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 13 numeral primero de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

A U T O

Asume la Sala el conocimiento de este proceso, en virtud del recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandante *(Archivo 7 expediente digital)*, en contra del auto proferido por el Juez Treinta y Ocho Laboral del Circuito de ésta ciudad, el 10 de octubre del 2022, por medio del cual se rechazó la demanda *(Archivo 6 expediente digital),* tras considerar el *a quo* que no se acató lo requerido en el auto que inadmitió la demanda del 11 de mayo del 2022 *(Archivo 4 expediente digital),* en donde se adujo no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 25 del C.P.L., dado que se presenta una indebida acumulación de pretensiones de varios de los demandantes, en tato se reclaman acreencias laborales independiente para cada uno, debiendo cada caso ventilarse necesariamente en un proceso individual para determinar las condenas por incrementos y/o reliquidaciones, aunado a que los hechos de la demanda no son claros pues relaciones múltiples situaciones fácticas respecto de los múltiples demandantes que deben estar individualizados respecto de cada uno.

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Se aprecia que lo atacado por el extremo impugnante es la decisión del Juez de primer grado de rechazar la demanda del proceso ordinario laboral, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación a voces del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, modificatoria del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., razón por la cual se estima viable proceder a su estudio.

En primer lugar, debe recordarse, el artículo 90 del C.G.P. señala que *"la apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquel que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo",* por lo que resulta procedente entonces que la Sala estudie la causa por la cual el Juzgado de origen inadmitió la demanda la cual se basó en que la acumulación hechos y pretensiones realizada en el libelo introductorio, no sigue los lineamientos consagrados en el Articulo 25 del C.P.T. y S.S.

De tal manera, de las actuaciones surtidas al interior del plenario puede advertirse, como ya se mencionó en proveído que data del 11 de mayo del 2022 *(Archivo 4 expediente digital)* el Juez *a quo* inadmitió la demanda promovida por la parte actora, indicando:

> ✓ *No se acompaña poder otorgado por WILMER TRIVIÑO CORREA, que habilite a los abogados para instaurar la demanda en su nombre.*
>
> ✓ *En los términos del artículo 25 del CPTSS, se presenta una indebida acumulación de pretensiones, pues si bien es cierto la norma admite la posibilidad de acumular en una misma demanda pretensiones de varios demandantes, ello es viable cuando provengan de igual causa (en el informativo no puede afirmarse que la causa sea uniforme para todos ellos pues si bien se alude al reconocimiento de derechos extralegales tal situación no necesariamente puede resultar uniforme para cada uno de los accionante); que versen sobre sobre el mismo objeto, lo que no acontece, pues se reclaman acreencias laborales independientes para cada uno y que deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico, lo que tampoco ocurre pues para cada caso las pruebas de vinculación, extremos temporales, valores sufragados, son distintas, debiendo cada caso ventilarse necesariamente en un proceso individual en el marco del cual se garantice el debido proceso y el derecho de defensa, lo que no es viable, cuando se reclaman multiplicidad de pretensiones derivadas de múltiples vinculaciones contractuales laborales (27 nexos laborales), con extremos temporales, cargos, salarios y circunstancias diversas, lo que hace inmanejable el trámite procesal, la representación judicial de cada uno, la eventual celebración de audiencias, el recaudo y valoración de pruebas, la emisión, en la práctica de 27 sentencias disimiles en el marco de un único proceso oral, condensadas en una sola providencia, y la defensa técnica de los demandantes y la parte accionada ante la eventual interposición de recursos contra las decisiones que se lleguen a adoptar, lo que comporta una alta probabilidad de incurrir en equivocaciones que vulneren derechos fundamentales de las partes, siendo de anotar que ello se minimiza al*

tramitarse, como corresponde, procesos individuales para cada uno de los accionantes, que es lo mínimo que deben obtener cuando le otorgan poder a un abogado que los represente.

- ✓ *Los hechos de la demanda no son claros, pues relacionan múltiples situaciones fácticas respeto de los múltiples demandantes que deben estar debidamente individualizadas respecto de cada uno*.

La apoderada de la parte actora frente a dicho proveído guardo silencio, razón por la cual el Juzgado de primer grado emitió auto de rechazo de demanda en los siguientes términos (Archivo 6 expediente digital):

"Atendiendo el informe secretarial que antecede, advierte el Despacho que, si bien la apoderada de la parte accionante, mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2022 solicitó adicionar el auto admisorio, tal solicitud no es procedente en el sentido realizado, en cuanto el Despacho hizo alusión a que "los hechos de la demanda no son claros" en todo su contexto, no algunos de ellos, por lo que el requerimiento de ajuste es claro.

Ahora bien, si la parte actora considera que los requerimientos del juzgado no fueron claros en lo que a "hechos" se refiere, debió proceder a subsanar las falencias que estimaba admisibles dentro del término legal y mantener incólumes las que no; lo que no acontece, y, en consecuencia, al no darse cumplimiento a lo ordenado de manera integral en el auto de fecha 11 de mayo de 2022, se dispone:

***PRIMERO**: Rechazar la demanda Ordinaria laboral instaurada por JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ BUITRAGO y OTROS contra MENZIES AVIATION COLOMBIA S.A.S.*

***SEGUNDO**: En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las anotaciones de rigor en los sistemas de información de la rama judicial."*

Ante tal decisión la apoderada recurrente señala en su escrito de oposición (Archivo 7 expediente digital):

2. Es cierto que la suscrita Apoderada no realizó ninguna gestión encaminada a subsanar la demanda, pero no por negligencia, capricho o desatención a la orden del Señor Juez, sino porque es inexistente la obligada precisión de los hechos que para el Señor Juez merecían reproche y sustentaban su inadmisión.

3. A través del auto notificado el 11 de octubre de 2022, se ratifica y agrava la violación del Debido Proceso Constitucional proveniente de la decisión del Juzgado al inadmitir la demanda, por considerar, en forma genérica, que los "hechos" que la sustentan no cumplen con las reglas exigidas por el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin que se hubiese indicado, de manera razonada y aceptable, cuáles eran los reparos de la objeción judicial sobre la cual se basó la inadmisión de la demanda. Esta norma exige que "los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones…" se deben relacionar de tal forma que queden debidamente, "…clasificados y enumerados…".

4. El Señor Juez indica en la providencia recurrida que debí corregir la totalidad de los hechos, o los que a la suscrita le parecieran, con base en las objeciones que en mi criterio fueran "admisibles". Si de eso se trata, tengo la convicción jurídica de que ningún hecho debía ser objeto de inadmisión y, por esa razón, mantengo en su integridad la redacción, clasificación y numeración, porque considero que ninguno de ellos desconoce el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo.

(…)

6. Además de todo lo anterior, señalo de manera comedida que los hechos y las pretensiones, como están propuestos, redactados, clasificados y numerados, pueden tramitarse por el procedimiento ordinario, dado que no se contraria ninguna regla procesal o sustancial para pedir el cumplimiento pleno del Laudo Arbitral que hasta ahora la demandada se ha negado a aplicar plenamente, por las razones que se explican a continuación, en relación con todos los aspectos que motivaron su inadmisión, porque, en virtud del Debido Proceso, debe entenderse que hasta ahora, el Juzgado adiciona su providencia inadmisoria de la demanda.

7. Las pretensiones no son excluyentes; hecha la revisión rigurosa de todas ellas, tanto declarativas como condenatorias, se verifica que pueden acumularse, aunque correspondan a diferentes demandantes (si a eso se refería el Juzgado en sus providencias) y, por tanto, se cumple a cabalidad con el principio de la celeridad, que prevé el artículo 25A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente, se precisa que todos los demandantes buscan:

> *6.1. El mismo aumento salarial y durante idénticos períodos, de acuerdo con lo previsto en el Laudo Arbitral, cuya vigencia y aplicación opera en la misma forma para todos los afiliados al Sindicato.*
>
> *6.2. El pago de los mismos derechos prestacionales extralegales para todos los trabajadores demandantes y por los mismos períodos.*
>
> *6.3. Todos pretenden la incidencia salarial de las mismas primas extralegales, durante los mismos períodos.*
>
> *6.4. Las sanciones, intereses y ajuste de valor para todos y cada uno de los demandantes, sobre los salarios que la Empresa resulte adeudarle a cada uno de ellos, son exactamente las mismas.*

7. Como puede verse, la decisión judicial que debe tomarse sobre todas las pretensiones, le corresponde al Juez Laboral del Circuito de Bogotá; ninguna excluye a otra, y todas se deben resolver a través del procedimiento ordinario laboral. En consecuencia, se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25 A del Código Procesal del Trabajo.

8. Desde ya aclaro que las pretensiones de los demandantes son exactamente las mismas, corresponden a idénticos períodos de reclamación, tienen los mismos presupuestos fácticos y jurídicos, y se fundamentan en las mismas pruebas. El origen de la demanda, corresponde al incumplimiento del Laudo Arbitral que cobija de idéntica manera a todos los demandantes, dada su condición de beneficiarios de los mismos derechos allí contenidos, al ser afiliados a la misma Organización Sindical: SINTRARED AEREA.

9. El hecho de que se hubiesen separado las pruebas por nombre y en forma muy organizada para facilitar el estudio del expediente por parte del Juzgado, no significa que no haya identidad de causa (incumplimiento del mismo Laudo Arbitral para todos), objeto (pago integral de los mismos derechos legales y extralegales dejados de cancelar) y pruebas (laudo arbitral y documentos que muestran el incumplimiento, aunque existan pruebas individuales para cada trabajador demandante, en razón del vínculo laboral que tienen con la misma entidad demandada: MENZIES AVIATION COLOMBIA SAS).

(…)

12. Aquí se busca la aplicación integral del Laudo Arbitral en cuanto al porcentaje de incremento que es igual para todos, y la fecha a partir de la cual se adeuda dicho derecho que también es exactamente igual para todos y cada uno de los

> *demandantes. Que las operaciones aritméticas dependan del salario que tiene cada trabajador, en nada contradice las reglas legales para la acumulación de pretensiones, liquidación que, en caso de ser necesaria, puede ser realizada por la oficina auxiliar encargada de la parte contable de apoyo a los jueces de la República."*

Igualmente aporta el poder otorgado por el señor WILMER TRIVIÑO CORREA (Archivo 8 expediente digital).

Reseñado lo anterior, de antemano debe precisarse, le asiste razón a la recurrente en su escrito de oposición de rechaza de la demanda, como quiera que, no se evidencia por parte de ésta Corporación yerros en la formulación de las pretensiones, pues éstas se encuentran debidamente formuladas de manera separada, son precisas y claras, las de condena organizadas como principales y subsidiarias, cumpliendo de esta manera la parte actora con el requisito formal establecido en el artículo 25 A del C.P.L. *(ver al efecto páginas 732 a 736 Archivo 1 expediente digital).*

Respecto a la posibilidad de acumular pretensiones, el art. 25 A del CPT y de la SS dispone:

> *"**ARTICULO 25-A. ACUMULACION DE PRETENSIONES.** <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:*
>
> *1. Que el juez sea competente para conocer de todas.*
>
> *2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*
>
> *3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.*
>
> *En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.*
>
> *También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico.*
>
> *En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado.*
>
> *Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa".*

Nótese que su aplicabilidad dentro del presente asunto refiere dos aspectos relevantes:

El primero dirigido a que la parte activa al momento de formular las pretensiones debe valerse de tres requisitos indispensables: (i) que el juez pueda conocer de todas, (ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, a menos que se formulen como principales y subsidiarias y, (iii) que en el mismo procedimiento puedan tramitarse sin impedimento alguno.

El segundo se circunscribe a que las pretensiones de varios demandantes pueden formularse en una misma demanda, y estas a su vez pueden recaer contra el mismo o varios demandados, pero para esta condición la norma precisa, que deben provenir de igual causa, versar sobre igual objeto, o servirse de las mismas pruebas, aunque sea distinto el interés jurídico.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL 2221-2020, Radicación No. T 58818 del 24 de febrero de 2020, en un asunto de similares contornos, realizó un amplio análisis de la forma en que el Juez debe abordar el estudio de las pretensiones cuando estas se formulan dentro de un mismo asunto por varios demandantes. Al respecto dijo:

> *"Descendiendo al caso sub judice, y al analizar las providencias cuestionadas, advierte esta Sala de la Corte, que el juzgado cognoscente de la demanda promovida, entre otros, por los hoy accionantes, en realidad sí incurrió en un desatino significativo, en tanto desconoció lo dispuesto en el artículo 25A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma que facultaba a la demandante para «acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado», las cuales son comunes y cumplen con los siguientes requisitos: i).que el juez sea competente para conocer de todas ellas, ii). que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias y, iii) que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento y bajo una misma cuerda.*
>
> *Así mismo, el referido precepto admite la posibilidad de acumular en una demanda, pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados, cuando «provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico» y, en su inciso final señala, que de presentarse una acumulación que no provenga de alguna de éstas circunstancias, pero sí se cumpla con los tres requisitos mencionados «se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa».*
>
> *En el sub examine, es evidente que las exigencias del canon 25A del estatuto procesal laboral, se cumplían a cabalidad, como quiera que, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar era competente para conocer del asunto; las pretensiones elevadas por los 27 trabajadores no se excluían, pues como se advirtió, a través de la demanda, se perseguía la declaratoria de simulación patronal por contubernio entre las demandadas y en consecuencia, el derecho al pago de acreencias laborales;*

> *además, el trámite a seguir era el mismo, es decir, el del procedimiento ordinario laboral, con la pretensión previamente señalada.*
>
> *Así las cosas, es relevante rememorar, que la acumulación de pretensiones está inspirada en los principios de economía y celeridad procesal, ya que mediante un solo proceso pueden tramitarse y resolverse todas las relaciones jurídicas entre los interesados, siempre y cuando ello sea posible conforme a la regla mencionada, y de contera, sin lugar a dudas se convierte en un indiscutible factor de seguridad jurídica, en cuanto el trámite bajo la misma cuerda posibilita una sola definición de la controversia jurídica, evitando decisiones contradictorias y multiplicidad de procesos que a la postre, resultan ineficaces y perjudiciales para una pronta y eficaz administración de justicia.*
>
> *Sobre dicha figura, esta Corporación ha señalado que su objeto es:*
>
> *Disminuir el número de pleitos y evitar fallos contradictorios en actuaciones idénticas, siendo uno mismo el derecho e iguales las probanzas, pues ello redundaría en desprestigio de la administración de justicia y causaría erogaciones innecesarias a los litigantes (…) Sentencia Julio 30 de 1952 G.J. T. XXII.*
>
> *Así mismo, esta colegiatura en un caso de similares dimensiones se pronunció en relación a la ilustración individual, para este tipo de asuntos, señalando:*
>
> > *«Nótese que, si la necesidad de definir cada caso particular fuera impedimento para acumular las pretensiones de varios demandantes, el legislador simplemente no la habría previsto, pues resulta difícil pensar que solamente pueda utilizarse tal medio cuando las fechas correspondientes a las pensiones de los actores sean exactamente las mismas, para poder resolver en la forma expuesta.», CSJ STL5809-2019.*

Y en la sentencia STL11221-2018 se indicó:

> *«De otro lado, no se puede pasar desapercibido que la aludida figura permite la acumulación de pretensiones de varios demandantes contra un demandado -como en este caso-, o contra varios demandados, siempre y cuando tales pretensiones «provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico», sin que dichas circunstancias tenga que concurrir, pues basta que se dé alguna de estas para que sea viable la acumulación.*

Puestas así las cosas, no cabe duda que el *a-quo* omitió aplicar las reglas de la acumulación, pues por la naturaleza del asunto es competente para conocerlo, precisándose si bien la demanda es presentada por 29 personas, lo cierto es que todos buscan la declaratoria de la existencia de los derechos extralegales contenidos en un Laudo Arbitral de los cuales afirman son beneficiarios, por lo cual se entiende que el objeto es el mismo para todos los demandantes, en tanto cada uno de ellos solicita el incremento de los salarios, la reliquidación de prestaciones legales y extralegales teniendo en cuenta las diferencias salariales, como también el pago de los derechos extralegales contenidos en el laudo arbitral, causados para cada uno de los accionantes en el periodo comprendido 26 de septiembre del 2017 (fecha de la firma del laudo arbitral) y 27 de septiembre del 2018 (fecha en que se notificó por edicto la sentencia que resolvió el recurso de anulación del laudo arbitral),

generándose así la certeza de que los anhelos de los accionantes provienen de igual causa.

Por otra parte, se enfatiza que el Juez de primer grado tampoco tuvo en cuenta los principios de economía y celeridad procesal, como tampoco el hecho que, al tramitarse todos los asuntos bajo un mismo proceso, se apuntala un factor seguridad jurídica al decidirse en un mismo sentido.

Del mismo modo los hechos de la demanda, objeto de inconformidad por el juez de primer grado, a juicio de la Sala, están clasificados y enumerados sin que se advierta ambigüedad en los mismos, cumpliéndose a cabalidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del artículo 25 del C.P.T y S.S.

Advirtiéndose en este punto, que de la lectura integral del escrito de demanda, no se encuentran razones que impidan la admisión de la misma, pues se pueden determinar claramente las pretensiones de los demandantes, divididos en unas pretensiones declarativas principales para todos, y las condenas que persigue cada uno, que si bien NO tienen los mismos extremos temporales de servicio, salarios y cargos, ello no genera que sean excluyentes entre sí, ni de difícil comprensión para su estudio por parte del Juez *a quo.,* además es claro que las pretensiones cumplen los requisitos de la acumulación objetiva pues el Juez es el competente para conocer de todas y cada una de las pretensiones elevadas, éstas no se excluyen entre si y se tramitan bajo el mismo procedimiento, así mismo se acredita una de las exigencias de la acumulación subjetiva de pretensiones, en tanto como en líneas anteriores se expresó la pretensión principal de los demandantes en este proceso versa sobre el mismo objeto, el cual radica en que se declare son beneficiarios de los derechos contenidos en el laudo arbitral de fecha 26 de septiembre del 2017.

En consecuencia, ante la inexistencia de las falencias aducidas por el *a quo*, deberá revocarse la decisión impugnada, para en su lugar disponer que el Juez de primera instancia, estudie la procedencia de admitir la demanda, acorde a lo anteriormente expuesto.

SIN COSTAS en esta instancia**.**

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el 10 de octubre del 2022, para en su lugar disponer que el Juez de primera instancia estudie la procedencia de admitir la demanda, sin atender las razones que dieron origen al auto impugnado, acorde a las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO POR JOHN KEVIN NOVOA BOHÓRQUEZ, ARIEL AMÓRTEGUI MARTÍNEZ y HÉCTOR EYECID CHOACHÍ VELANDIA CONTRA CIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. (RAD. 04 2009 00418 02).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren el siguiente:

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de los demandantes **JOHN KEVIN NOVOA BOHÓRQUEZ, ARIEL AMÓRTEGUI MARTÍNEZ Y HÉCTOR EYECID CHOACHÍ VELANDIA** (*archivo "35 RecursoDe ReposicionEnSubsidioApelaciòn.pdf", expediente digital*) contra la providencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 20 de septiembre de 2022 (*archivo "34AutoRequiereSeAbstieneDeLibrarMandamiento", expediente digital*), por medio del cual se abstuvo de librar el mandamiento de pago solicitado por considerar que con arreglo a lo preceptuado en el artículo 68 del C.G.P., la sucesión procesal es el reemplazo de una de las partes del proceso, con el fin de integrar a la litis a un tercero en lugar de una de ellas; por ende, para el caso de personas jurídicas puede darse por su extinción, por fusión o escisión de sociedades. Con el fin de aterrizar la norma al presente caso, el a quo indicó, que las partes informaron que la Compañía Colombiana Automotriz S.A. suscribió un contrato de fiducia mercantil con Fiduciaria Bogotá S.A., constituyendo un Patrimonio Autónomo para el pago de las eventuales condenas, no obstante, no evidenció copia de dicho contrato en el plenario del cual se inferir de manera inequívoca quien actúa

como sucesor procesal de la sociedad liquidada y en qué términos se constituyó dicha fiducia.

Ante dicha determinación la apoderada de los demandantes presentó recurso de reposición y en subsidio apelación (*archivo "35 RecursoDe ReposicionEnSubsidioApelaciòn.pdf", expediente digital*), argumentando que basta con que exista una obligación clara, expresa y actualmente exigible para que se pueda demandar ejecutivamente y, en el presente caso, existe una sentencia judicial constituyendo un título ejecutivo que fundamenta la acción. Respecto a la falta del contrato de fiducia mercantil suscrito entre la extinta Compañía Colombiana Automotriz, indicó que la apoderada de la empresa liquidada fue clara en manifestar que dentro del proceso de liquidación adelantado ante la Superintendencia de Sociedades y con anterioridad a la liquidación efectiva, se celebró un contrato de fiducia mercantil entre la Compañía Colombiana Automotriz – CCA y Fiduciaria Bogotá S.A., en virtud del cual se constituyó una provisión para atender las posibles contingencias de los procesos que se encontraban en curso al momento de iniciarse la liquidación definitiva de la empresa, a pesar de no adjuntarse el documento, expuso, con la celebración de dicho acuerdo se conformó un patrimonio autónomo, el cual tiene como vocera y administradora a la entidad Fiduciaria Bogotá S.A.

Agregó que los demandantes no están obligados a aportar el contrato de fiducia mercantil, al no ser materia de la acción judicial, en su sentir, el titulo ejecutivo lo constituye la sentencia y la liquidación presentada que no ha sido objetada, correspondiéndole a la demandada a través de la empresa que la sucedió presentar las excepciones que considere pertinentes. Lo anterior lo soportó en lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 712 de 2001, la cual prevé que dicho extremo no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la personería jurídica contra la cual va dirigida ni la de su representante, pues solo basta con designarlos, a menos que en el juicio se debata como cuestión principal este punto.

Al resolver la reposición el a quo consideró mediante providencia del 1º de diciembre de 2022 *(archivo 37.AutoNoReponeConcedeApelacion.pdf*), si bien, la sociedad demandada, al parecer, celebró con la Fiduciaria Bogotá un contrato de fiducia en virtud del cual constituyó una provisión para atender el pago de las posibles contingencias de los procesos que se encontraban en curso al momento de iniciarse la liquidación definitiva de la empresa, lo cierto es que, no obra copia de dicho contrato, del cual, se pueda inferir que la Fiduciaria Bogotá S.A. actúa como sucesor procesal de la demandada, no siendo posible iniciar el proceso ejecutivo, pues no se

conoce a ciencia cierta si la fiduciaria actúa como sucesor procesal, motivo por el cual no se encuentra integrada la litis.

Aunado a lo anterior, citó como soporte de la decisión el contenido de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, radicado No. 57039 del 16 de marzo de 2022, M.P. Luis Benedicto Herrera Diaz, reproduciendo el aparte: "… *la solicitud presentada no es procedente, toda vez* ***que es al sucesor procesal a quien le corresponde presentarse para ser tenido en cuenta como parte****…".*

A título de conclusión expuso, es el sucesor procesal el que debe realizar la solicitud para que sea reconocido como tal dentro de un proceso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Preliminarmente se advierte, el auto que decida sobre el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

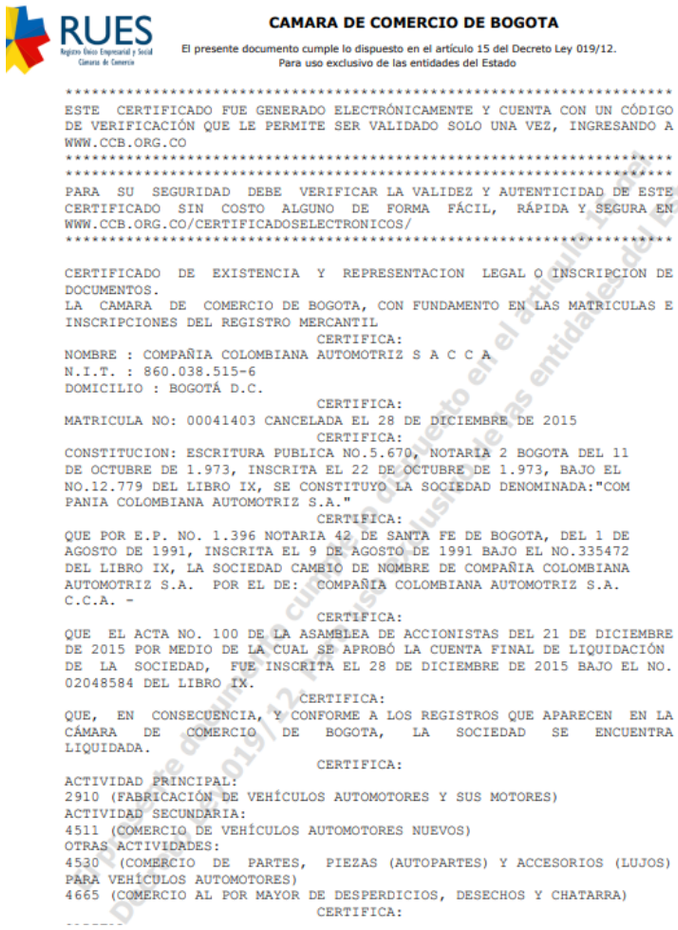
Así las cosas, el tema objeto de apelación consiste en determinar si el ahora traído a los estrados "FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., quien actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo conformado por la Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA", puede ocupar el sillín de la sociedad ejecutada.

En ese orden, sea lo primero señalar como antecedente, la base de recaudo ejecutivo corresponde a la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral de fecha 16 de octubre de 2019 (*carpeta 03Casacion, 01CuadernoCorte.pdf, páginas 68 a 111)*; a través de la cual dispuso revocar la sentencia de primer grado y en sede de instancia, ordenó:

> *"****PRIMERO:*** *Se declara la existencia de una relación de trabajo mediante sendos contratos de trabajo a término indefinido, sin solución de continuidad, entre John Kevin Novoa Bohórquez, Ariel Amórtegui Martínez y Héctor Eyecid Choachí Velandia y la sociedad Compañía Colombiana Automotriz SA CCA desde el 27 de junio de 2001 hasta el 30 de abril de 2008.*

> ***SEGUNDO**: Se condena a la demandada a pagarle a los demandantes los siguientes conceptos:*
>
> - *El reajuste de los salarios causados en el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2006 hasta el 20 de abril de 2008, de conformidad con el art. 9 "ESCALAFON" de las Convenciones Colectivas de Trabajo 2005- 2007 y 2007-2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva.*
> - *Los beneficios consagrados en las convenciones colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y sintrautoscol, a saber: el subsidio de transporte (art. 10 CCT); el subsidio familiar (art. 11 CCT);*
> - *La prima de navidad (art 13 CCT); la prima de junio (art 14 CCT); la prima de vacaciones (art 15); y la prima de antigüedad (art 16 CCT). - El auxilio de cesantía y el interés sobre la misma (art. 31 CCT), autorizando a la demandada a descontar lo pagado por dichos conceptos.*
> - *La suma de treinta y dos millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos ($32.385.983), a título de indemnización por despido sin justa causa; la cual deberá pagarse indexada desde el 1º. de mayo de 2008, y hasta que se realice su pago efectivo.*
> - *Los salarios insolutos causados entre las siguientes fechas: en relación con John Kevin Novoa Bohórquez y Héctor Eyecid Choachí Velandia, del 22 de diciembre de 2007 al 16 de enero de 2008; y de Ariel Amórtegui Martínez del 22 de diciembre de 2007 al 15 de enero de 2008. Aquellos con los reajustes salariales que se hubieran causado de una anualidad a la siguiente, si fuera el caso, de forma indexada.*
> - *Los aportes al Sistema General de Pensiones (a los respectivos fondos de pensiones), respecto de los periodos no cotizados en la vigencia de la relación de trabajo por los extremos reconocidos, conforme lo expuesto en la parte motivada de la providencia.*
> - *El reajuste de las vacaciones, únicamente por el saldo insoluto que resulte de la comparación de lo efectivamente pagado a título de descanso remunerado y lo pendiente de pago, conforme lo considerado en la parte motiva de la providencia.*
> - *La indexación de las sumas objeto de condena, en los términos expuestos en la parte motiva.*
>
> ***TERCERO:** Se absuelve a la demandada de las demás pretensiones.*
>
> ***CUARTO:** Se condena a la demandada a pagar las costas en ambas instancias.*
>
> ***QUIINTO:** Se declara parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de los derechos laborales causados con anterioridad al 12 de junio de 2006, con la salvedad expuesta en lo relacionado con las vacaciones, cuyo fenómeno operó respecto de las causadas con anterioridad al 12 de junio de 2005. Se declara que existió un pago parcial de lo adeudado, por la suma de $2'120.000, conforme se dijo en la parte motiva".*

De lo anterior, es claro, el titulo base de ejecución va dirigido en contra de la sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA, identificada con NIT 860.038.515-6, sociedad que al ser consultada en el Registro Único Empresarial **RUES**, arroja que la matricula No. 00041403 fue cancelada el 28 de diciembre de 2015 apareciendo como liquidada, en razón al acta No. 100 de la asamblea de accionistas celebrada el 21 de diciembre de 2015, por medio de la cual se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, siendo inscrita bajo el No. 02048584 del libro IX (*archivo 28CompañiaColombianaAutomotriz.pdf*), tal como se prueba con la siguiente imagen:



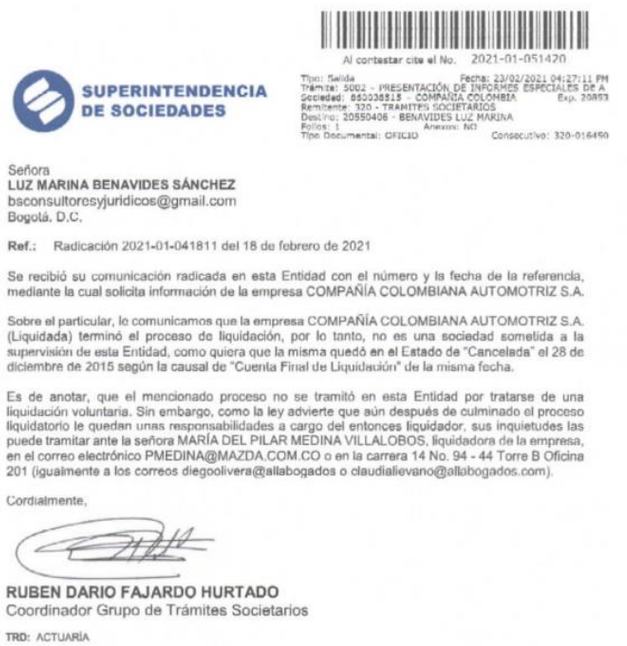
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S A C C A
N.I.T. : 860.038.515-6
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00041403 CANCELADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015
CERTIFICA:
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.5.670, NOTARIA 2 BOGOTA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1.973, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 1.973, BAJO EL NO.12.779 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA:"COMPANIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A."
CERTIFICA:
QUE POR E.P. NO. 1.396 NOTARIA 42 DE SANTA FE DE BOGOTA, DEL 1 DE AGOSTO DE 1991, INSCRITA EL 9 DE AGOSTO DE 1991 BAJO EL NO.335472 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO DE NOMBRE DE COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. POR EL DE: COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. -
CERTIFICA:
QUE EL ACTA NO. 100 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015 POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, FUE INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NO. 02048584 DEL LIBRO IX.
CERTIFICA:
QUE, EN CONSECUENCIA, Y CONFORME A LOS REGISTROS QUE APARECEN EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA LIQUIDADA.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2910 (FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4511 (COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4530 (COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES)
4665 (COMERCIO AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS, DESECHOS Y CHATARRA)
CERTIFICA:

Concordante con esto, la Superintendencia de Sociedades en escrito de fecha 23 de febrero de 2021, radicado No. 2021-01-051420, certificó (*página 12, archivo :01PrimeraInstancia, C02CuadernoOrdinario, 27SolicitudMandamientoDePago*):



Al contestar cite el No. 2021-01-051420

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tipo: Salida Fecha: 23/02/2021 04:37:11 PM
Trámite: 5002 - PRESENTACIÓN DE INFORMES ESPECIALES DE A
Sociedad: 860038515 - COMPAÑIA COLOMBIA Exp. 20853
Remitente: 320 - TRAMITES SOCIETARIOS
Destino: 20550406 - BENAVIDES LUZ MARINA
Folios: 1 Anexos: NO
Tipo Documental: OFICIO Consecutivo: 320-016490

Señora
LUZ MARINA BENAVIDES SÁNCHEZ
bsconsultoresyjuridicos@gmail.com
Bogotá, D.C.

Ref.: Radicación 2021-01-041811 del 18 de febrero de 2021

Se recibió su comunicación radicada en esta Entidad con el número y la fecha de la referencia, mediante la cual solicita información de la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.

Sobre el particular, le comunicamos que la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. (Liquidada) terminó el proceso de liquidación, por lo tanto, no es una sociedad sometida a la supervisión de esta Entidad, como quiera que la misma quedó en el Estado de "Cancelada" el 28 de diciembre de 2015 según la causal de "Cuenta Final de Liquidación" de la misma fecha.

Es de anotar, que el mencionado proceso no se tramitó en esta Entidad por tratarse de una liquidación voluntaria. Sin embargo, como la ley advierte que aún después de culminado el proceso liquidatorio le quedan unas responsabilidades a cargo del entonces liquidador, sus inquietudes las puede tramitar ante la señora MARÍA DEL PILAR MEDINA VILLALOBOS, liquidadora de la empresa, en el correo electrónico PMEDINA@MAZDA.COM.CO o en la carrera 14 No. 94 - 44 Torre B Oficina 201 (igualmente a los correos diegoolivera@allabogados o claudialievano@allabogados.com).

Cordialmente,

RUBEN DARIO FAJARDO HURTADO
Coordinador Grupo de Trámites Societarios

TRD: ACTUARÍA

Así las cosas, debe advertir la Sala, la cancelación de la matricula mercantil supone la desaparición de la sociedad como persona jurídica, en este punto, mediante concepto de la Superintendencia de Sociedades, **la cancelación de la matrícula mercantil conduce a que la sociedad pierda capacidad jurídica para contraer obligaciones, en el entendido que la cancelación definitiva solo procede cuando previamente se ha inscrito la cuenta final de liquidación**, tal como sucedió en el caso de Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA, momento a partir del cual la sociedad pierde la calidad de comerciante y, como consecuencia de la liquidación, **desaparece como persona jurídica para todos los efectos legales**.[1], situación que desde luego impide librar mandamiento de pago en contra de la sociedad Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA.

Hecha la anterior sinopsis debe advertirse, el a quo mediante providencia de fecha 16 de mayo de 2022, requirió a la apoderada de la empresa demandada dentro del proceso ordinario (*20AutoRequierePrevioCompensar.pdf*), solicitando informara:

> Atendiendo la situación de liquidada de la sociedad demandada, informe las personas naturales y/o jurídicas que representa en el presente asunto.
> Informe y acredite en cabeza de quien se encuentra la disposición de los bienes activos y pasivos resultantes de la liquidación efectuada a la demandada. Lo anterior a fin de verificar una posible sucesión procesal.
> Informe las personas naturales y/ jurídicas que realizaron los pagos acreditados para el presente proceso mediante la constitución de depósitos judiciales que fueron entregados a la apoderada de la parte actora.
> Informe la condición o calidad en que actúa la entidad Fiduciaria Bogotá S.A. con relación a la demandada, como quiera que la misma figura como consignante en los depósitos judiciales que fueron constituidos para el presente proceso.

En cumplimiento a dicho requerimiento se aportó escrito (*01PrimeraInstancia, C01Cuaderno Ordinario, 32MemorialResuelveInterrogantes.pdf, páginas 1 a 3),* manifestando la apoderada de la extinta Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA, dentro del proceso de liquidación adelantado ante la Superintendencia de Sociedades y con anterioridad a la liquidación efectiva, se celebró un contrato de fiducia mercantil con “Fiduciaria Bogotá S.A”., en virtud del cual se constituyó una provisión para atender las posibles contingencias de los procesos que se

[1] *Concepto No. 220-200886, de Superintendencia de Sociedades del 22 de diciembre de 2015.*

encontraban en curso al momento de iniciarse la liquidación definitiva de la empresa. Textualmente expuso:

> ***"Atendiendo la situación de liquidada de la sociedad demandada, informe las personas naturales y/o jurídicas que representa en el presente asunto***.
>
> *Teniendo en cuenta que el poder de representación fue otorgado previo a la liquidación de la compañía, las actuaciones que se han adelantado son en representación de la Compañía Colombiana Automotriz SA CCA -Hoy Liquidada- con miras a finalizar los procesos que se encontraban pendientes de fallar, por lo que, en atención al mandato conferido y mis obligaciones como apoderada judicial, he dado cumplimiento al mismo diligentemente.*
>
> ***• Informe y acredite en cabeza de quien se encuentra la disposición de los bienes activos y pasivos resultantes de la liquidación efectuada a la demandada. Lo anterior a fin de verificar una posible sucesión procesal.***
>
> *Dentro del proceso de liquidación adelantado ante la Superintendencia de Sociedades y con anterioridad a liquidación efectiva, se celebró entre la Compañía Colombiana Automotriz - CCA y la Fiduciaria Bogotá un contrato de fiducia en virtud del cual se constituyó una provisión para atender el pago de las posibles contingencias de los procesos que se encontraban en curso al momento de iniciarse la liquidación definitiva de la empresa. El contrato da instrucciones precisas a la Fiduciaria para atender los pagos debidamente identificados en el mismo, sin que y atendiendo la normatividad aplicable tanto a este tipo de entidades, como a los contratos de fiducia en general, pueda predicarse una sucesión procesal con la fiduciaria, pues esta última simplemente debe cumplir con el mandato y proceder al pago de las condenas impartidas en contra de la CCA dentro de los procesos que fueron plenamente identificados en el contrato de fiducia. Es esta la razón por la cual, y dada la condena impuesta dentro del proceso ordinario en relación específica con el pago de aportes al Sistema General de Pensiones, que solicitamos que por intermedio del Despacho se oficie al fondo de pensiones al que se encuentran afiliados los demandantes, para que esa entidad determine el valor que debe ser consignado con cargo a los recursos provisionados en la fiducia.*
>
> ***Informe las personas naturales y/ jurídicas que realizaron los pagos acreditados para el presente proceso mediante la constitución de depósitos judiciales que fueron entregados a la apoderada de la parte actora.***
>
> *Tal y como lo mencionamos en el punto anterior, el pago fue realizado por la Fiduciaria Bogotá con cargo a los recursos de la provisión que se constituyó antes de su liquidación por la Compañía Colombiana Automotriz, precisamente con el objetivo de atender las contingencias que pudieran resultar en su contra dentro de los procesos que se encontraban en curso al momento de iniciarse el proceso de liquidación.*
>
> ***Informe la condición o calidad en que actúa la entidad Fiduciaria Bogotá S.A. con relación a la demandada, como quiera que la misma figura como consignante en los depósitos judiciales que fueron constituidos para el presente proceso.***
>
> *Fiduciaria Bogotá S.A., actúa simplemente como encargada fiduciaria en cumplimiento del contrato de fiducia celebrado con la Compañía Colombiana Automotriz antes de su liquidación.*
>
> *Se reitera que la Compañía Colombiana Automotriz y como se precisó en el Auto al cual estamos dando respuesta, se encuentra totalmente liquidada. Con la fiduciaria Bogotá se celebró el contrato de fiducia al que venimos refiriéndonos, en virtud del cual se llevó a cabo una provisión para el pago de las eventuales condenas que pudieran resultar en contra de la ya liquidada CCA, en los procesos debidamente identificados dentro del contrato de fiducia.".*

Lo anterior, indujo a la ejecutante para que se tuviera también como ejecutada a la sociedad "FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo conformado por la Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA", pues así lo solicitó mediante escrito allegado por correo electrónico en fecha

06 de junio de 2022, (*expediente digital, páginas 1 a 16, archivo33MemoralParteActora.pdf),* al expresar:

> *"Teniendo en cuenta el traslado de la información relacionada con la verificación de que la empresa demandada se encuentra liquidada y su matrícula mercantil se encuentra cancelada y hace requerimiento a la Dra. CLAUDIA LIEVANO TRIANA, para que suministre información necesaria para verificar una posible sucesión procesal, me permito hacer las siguientes precisiones:*
>
> *Respecto a la situación de que la empresa Compañía Colombiana Automotriz se encuentra liquidada y según su solicitud de informar si deseo continuar con la ejecución, me permito ratificar mi petición de mandamiento de pago, para lo cual solicito a su despacho notificar y dar traslado a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. una vez se practiquen las medidas cautelares, como sucesora procesal de la liquidada por las razones que a continuación expongo:*
>
> *De conformidad con lo informado por la Dra. Liévano en respuesta al requerimiento del despacho en el que indica que dentro del proceso de liquidación adelantado ante la Superintendencia de Sociedades y con anterioridad a la liquidación efectiva, se celebró un contrato de fiducia mercantil entre la Compañía Colombiana Automotriz – CCA y la Fiduciaria Bogotá S.A., en virtud del cual se constituyó una provisión para atender las posibles contingencias de los procesos que se encontraban en curso al momento de iniciarse la liquidación definitiva de la empresa, a pesar de que no anexo el documento al que hizo mención, es claro que con la celebración de dicho acuerdo se conformó un patrimonio autónomo, el cual tiene como vocera y administradora a la entidad Fiduciaria Bogotá S.A., quien debe dar cumplimiento al mandato y asumir la responsabilidad de la demandada en el presente proceso, habida cuenta de que es precisamente el pago de las acreencias laborales reconocidas a mis mandantes en las sentencias cuyos procesos laborales se encontraban en curso a la fecha de liquidación de la extinta CCA, atendiendo la finalidad de dicho acuerdo conforme a lo manifestado por la honorable abogada (…).* ***Cita el contenido del artículo 1226 del Código de Comercio.***
>
> *De la norma transcrita resulta claro que los patrimonios autónomos no son personas jurídicas como tampoco naturales, son negocios fiduciarios conformados por bienes para cumplir un fin. El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo de la fiducia y en el presente caso deberá ser la Fiduciaria Bogotá, quien acuda al proceso en representación del Patrimonio Autónomo constituido por la extinta COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ- CCA.*
>
> *Con relación a la naturaleza de los patrimonios autónomos, la Corte Suprema de Justicia expresó: " El patrimonio autónomo no es persona natural ni jurídica, y por tal circunstancia en los términos del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en sentido técnico procesal, no tiene capacidad para ser parte en un proceso, pero cuando sea menester deducir en juicio derechos u obligaciones que lo afectan, emergentes del cumplimiento de la finalidad para la cual fue constituido, su comparecencia como demandante o como demandado debe darse por conducto del fiduciario quien no obra ni a nombre propio porque su patrimonio permanece separado de los bienes fideicomitidos, ni tampoco exactamente a nombre de la fiducia, sino simplemente como dueño o administrador de los bienes que le fueron transferidos a título de fiducia como patrimonio autónomo afecto a una específica finalidad" . (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 3/2005. Exp. 1909. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno). (Subraya fuera de texto)*
>
> *Por su parte la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-438 de 2017 magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, destacó que "PATRIMONIO AUTONOMO EN*

> *EL CONTRATO DE FIDUCIA-Características-. El patrimonio autónomo es un centro de imputación de derechos y obligaciones, de carácter temporal y diferente a la persona que le dio origen (fiduciante, fideicomitente o constituyente), quien lo administra (fiduciario) y quien habrá de recibirlo (fideicomisario o beneficiario)"*
>
> *De conformidad con lo anterior, se deberá hacer comparecer a la entidad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. a través de su representante legal, para que actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo conformado con la demandada COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SA. CCA, dé cumplimiento con la obligación de pagar las acreencias laborales de los demandantes en el presente proceso, quien deberá aportar el contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre la misma y la extinta CCA. (…)".*

Efectuado lo anterior, el juzgador de primer grado se abstuvo de librar mandamiento de pago, conforme se indicó al inicio de este proveído

Así las cosas, se debe resaltar, es deber del juez hacer una interpretación integral de la demanda en aras de evitar el desmedro del derecho sustancial en disputa o de conjurar nulidades o sentencias inhibitorias[2].

Dicho lo anterior, lo cierto es que del título complejo, entendido este como que no es menester que exista unidad material o física del título, sino que en verdad de los plurales documentos base de recaudo pueda desprenderse unidad jurídica, valga precisar, que se encuentren íntimamente ligados por una relación de causalidad y se originen en el mismo negocio jurídico, título compuesto por la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral de fecha 16 de octubre de 2019 (*carpeta 03Casacion, 01CuadernoCorte.pdf, páginas 68 a 111)* y, ahora por el escrito allegado (*01PrimeraInstancia, C01Cuaderno Ordinario,*

---

[2] *Sobre el papel de las formalidades en relación con los derechos sustanciales, la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL531-2013, reiterada en la SL16959 de 2017 recordó que:*

"Las normas instrumentales son los cauces por los que transita el derecho sustancial; sin restarles vigor ni efectividad, aquellas deben acompasarse para lograr el equilibrio, que se traduce en la materialización de la justicia, sin que formulas sacramentales, o exceso de rigor sea permisible para echar por la borda los derechos que el juzgador encuentra plenamente acreditados, que fueron debatidos por las partes a lo largo de la discusión que en cada una de las instancias se suscitó, y que sin lugar a dudas derivaban de la pretensión declaratoria.

Predicar que se vulnera el debido proceso porque se deducen las condenas que emergen por lógica de la declaración del contrato laboral, elimina de tajo la potestad del juzgador de resolver en justicia, como está llamada la controversia.

Aunque si bien la demanda laboral deriva del ejercicio de acción de los particulares, que aspiran un pronunciamiento jurisdiccional y para el efecto compendian sus aspiraciones, tal escrito debe ser visto en perspectiva de su verdadero propósito, esto es un pronunciamiento de fondo claro y coherente sobre aquello debatido, y que resuelva de tajo el problema jurídico que se demanda, esa y no otra puede ser la eficacia que se pregona a la administración de justicia.

32MemorialResuelveInterrogantes.pdf, páginas 1 a 3), por la apoderada de la empresa Colombiana Automotriz S.A. CCA, a través del cual, se reitera, manifestó que dentro del proceso de liquidación adelantado ante la Superintendencia de Sociedades celebró un contrato de fiducia mercantil con Fiduciaria Bogotá S.A.

De lo allegado a instancia del juez puede inferirse que evidentemente entre la extinta Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo conformado por la primera sociedad se celebró un contrato de fiducia, en virtud del cual se constituyó una provisión para atender el pago de posibles contingencias de los procesos que se encontraban en curso al momento de iniciarse la liquidación definitiva de la empresa.

Consecuente con esto, se evidencia que el proceso ordinario se sometió a reparto el 12 de junio de 2009, conforme se constata en la página 265 del archivo 01ProcesosFisicosDigitalizados.pdf del expediente digital, y la liquidación definitiva de la sociedad Colombiana Automotriz S.A. CCA ocurrió el 28 de diciembre de 2015 al ser inscrita en Cámara y Comercio de Bogotá, pues al consultar el respectivo certificado se desprenderse la siguiente anotación (archivo 28CompañiaColombianaAutomotriz):

> *"QUE EL ACTA NO. 100 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015 POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, FUE INSCRITA EL* ***28 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NO. 02048584 DEL LIBRO IX****.". (Negrilla y subrayado fuera del texto).*

De esta manera lo que debe inferirse es la conformación de un patrimonio autónomo para los fines ya señalados, cuya vocera y administradora es la entidad Fiduciaria Bogotá, diluyéndose de paso la discusión acerca del sucesor procesal, dada la legitimidad por pasiva que le asiste al patrimonio autónomo para comparecer como parte.

De esta manera siendo ese el único punto de apelación y el problema jurídico a resolver, la decisión del juez en ese sentido, deberá revocarse estimándose ahora la legitimación de "FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo conformado por la Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA" para ocupar el extremo pasivo, precisándose que en todo caso deberá el juez

---

Restar al juez la potestad de emitir una determinación que se ajuste con lo controvertido, que no una meramente formal, resultaría un despropósito, que se aleja del querer de la Ley y de la Constitución Política."

ahora examinar si se dan los demás supuestos previstos en el articulo 100 del C.P.T. y S.S. y artículo 422 del C.G.P. para librar o no el mandamiento de pago, sin consideración a los argumentos expuestos en su proveído.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C**., Sala Laboral,

RESUELVE

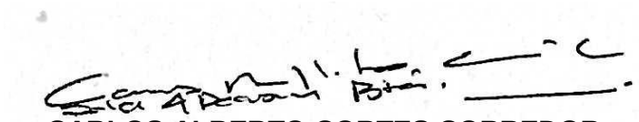
PRIMERO: REVOCAR el auto del 20 de septiembre de 2022, proferido por el Juez Cuarto Laboral del Circuito, para en su lugar ordenar que examine la viabilidad de librar mandamiento de pago, sin consideración a los argumentos consignados en la providencia recurrida, de conformidad con las motivaciones precedentes.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO PORVENIR S.A. CONTRA MYRIAM RENE VILLAMIL JIMENEZ (RAD. 04 2019 00566 01).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado a las partes para alegar de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala, con fundamento en el artículo 13 numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la ejecutada contra la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el 16 de enero del 2023 (Audio Archivo 13 récord: 8:01), por medio del cual se resolvió:

> *"**PRIMERO: DECLARAR** no probadas las excepciones propuestas por la ejecutada.*
>
> ***SEGUNDO:** Seguir adelante con la ejecución.*
>
> ***TERCERO: CONDENAR** en costas a la ejecutada, fijar las agencias en derecho en dos salarios mínimos.*
>
> ***CUARTO: REQUERIR** a las partes para que presenten la liquidación del crédito conforme lo establecido en el artículo 446 del Código del Proceso."*

Para arribar a la anterior decisión en punto a la excepción de prescripción -objeto de apelación-, el Juez de primer grado consideró que el cobro de los aportes destinados a la conformación ya sea del capital en el ahorro individual o de las semanas y el régimen de prima media por parte de la administradora de fondo de pensiones al empleador son imprescriptibles toda vez que mientras no se reconozca el derecho a la pensión de cada persona sigue latente la obligación de empleador de realizar el pago, por ende en su sentir opera la imprescriptibilidad de

los aportes destinados a la conformación del capital suficiente para financiar la pensión de los trabajadores relacionados dentro del título Ejecutivo como trabajadores de la ejecutada Myriam Villamil Jiménez (*Audio Archivo 13 récord: 6:07*[1])

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la ejecutada aduce que dentro del presente proceso si se configura la prescripción de las obligaciones reclamadas, en virtud de lo dispuesto del artículo 817 del Estatuto Tributario donde se establece el termino de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones parafiscales por un término de 5 años, situación que no se tuvo en cuenta, toda vez de que se están haciendo cobros que están por fuera de los 5 años, solicitando revocar la decisión proferida (*Audio Archivo 13 récord: 8:30*[2])

Para resolver se hacen las siguientes,

[1] Finalmente, respecto a la excepción de prescripción y conforme a lo expuesto en el artículo 22 y 24 de la Ley 100 de 1993 se puede concluir que el empleador es el responsable del pago del aporte de él y de los trabajadores a sus servicios, la administradora de pensiones ejecutante está legitimada para adelantar la acción de cobro por incumplimiento del empleador en el pago de las obligaciones para con la Seguridad Social y dentro del sistema general de pensiones.

Aunado a lo anterior por vía jurisprudencial se ha sentado como criterio que el cobro de los aportes destinados a la conformación ya sea del capital en el ahorro individual o de las semanas y el régimen de prima media por parte de la administradora de fondo de pensiones al empleador son imprescriptibles, toda vez que mientras no se reconozca el derecho a la pensión de cada persona sigue latente la obligación de empleador de realizarlo, al respecto puede observarse lo dicho por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en la sentencia del 18 de febrero de 2005 radicado 21 378, así las cosas se da la imprescriptibilidad de los aportes destinados a la conformación del capital suficiente para financiar la pensión de los trabajadores relacionados dentro del título Ejecutivo como trabajadores de la ejecutada Myriam Villamil Jiménez por parte de la administradora de fondo de pensiones y cesantías Porvenir, adicional a que dichos aportes de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 797 de 2003 hacen parte de los recursos del sistema general de pensiones, los cuales están destinados exclusivamente a este sistema y no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administren, es decir que los mismos garantizan la sostenibilidad financiera del sistema y si se autoriza su prescripción el afiliado corre el riesgo de no acceder al derecho pensional asegurado por no contar con el capital suficiente que les permita acceder al reconocimiento de una pensión, por lo anterior se ordena continuar con la ejecución, se condenará en costas a la ejecutada, se requiere a las partes para que presenten la liquidación del crédito conforme a lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso.

[2] Sí señor Juez, quiero presentar el recurso de apelación sobre la decisión. Muy buenas tardes, respecto a los argumentos expuestos por el despacho que desde luego son muy respetados por mi parte pero no compartido respecto a las pretensiones de la demandante, interpongo recurso de apelación contra la decisión antes expresada, toda vez de que si se configura la prescripción de las obligaciones allí establecidas, toda vez como (…) el artículo 817 del Estatuto Tributario establece que el termino de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones parafiscales por un término de 5 años, cosa que no se tuvo en cuenta, toda vez de que se están haciendo unos cobros que están afuera de los que están, que no están dentro de los 5 años sino por fuera. También es claro que el Consejo de Estado en decisiones que han realizado, ha establecido que estos cobros se deben realizar dentro de los 5 años y no fuera de los mismos, entonces le solicitó al despacho por favor tener en cuenta esto para el recurso de apelación, por lo tanto, solicito al despacho revocar la sentencia en comento y enviarlo a la segunda instancia, gracias.

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este especial, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la apoderada de la parte ejecutada, contra el auto que declaró no probada la excepción de prescripción.

Así las cosas, lo que se evidencia en primer término es que mediante proveído calendado del 13 de septiembre del 2019 (*págs. 47 a 48 Archivo 1 expediente digital*) se libró mandamiento ejecutivo, en los siguientes términos:

> Por lo expuesto, el **JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C.**
>
> **R E S U E L V E:**
>
> **PRIMERO: LIBRAR EL MANDAMIENTO DE PAGO** solicitado por la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** en contra de **VILLAMIL JOMENEZ MYRIAM RENÉ**, por las siguientes sumas y conceptos:
>
> 1. Por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($44.935.836) M/Cte., por concepto de aportes en pensión obligatoria y al Fondo de Solidaridad Pensional, dejados de cancelar acorde a la liquidación anexa.
> 2. Por las sumas que se generen por concepto de las cotizaciones obligatorias y al Fondo de Solidaridad Pensional en los casos a que haya lugar, de los periodos que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda.
> 3. Por los intereses moratorios causados por cada uno de los períodos adeudados por concepto de aportes pensión obligatoria y al Fondo de Solidaridad Pensional desde que el empleador debió cumplir con su obligación hasta la fecha del pago.
>
> **SEGUNDO:** Se requiere a la parte ejecutante para que suscriba diligencia de juramento, respecto de las medidas cautelares solicitadas en la demanda ejecutiva.
>
> **TERCERO:** Notifíquese a la ejecutada conforme así lo dispone el Art. 108 del C. de P. L.

Así pues, dentro del término legal, la ejecutada propuso la excepción de mérito denominada prescripción (Archivo 8 págs. 8 a 13), la cual como se anunció desde el inicio de este proveído, fue resuelta por la Juez de primera instancia declarándola no probada, y en ese orden dado que en la alzada la apoderada recurrente insiste en su procedencia, aborda la Sala el estudio de los argumentos expuestos en la apelación en virtud del principio de consonancia.

Bajo tal estructura, el problema jurídico se circunscribe en establecer si dentro del presente asunto es aplicable el fenómeno de la prescripción respecto de las obligaciones objeto de mandamiento de pago y, de ser ello así, si el mismo ya operó y sobre qué cuantías y conceptos.

En esa medida, y con miras a solventar el problema jurídico planteado se determinará la naturaleza jurídica de los aportes a seguridad social y la procedencia de la prescripción de este tipo de conceptos.

Para lo cual ha de recordarse una de las principales fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social, la constituyen los aportes obligatorios efectuados tanto por los empleadores como los trabajadores, en virtud del deber impuesto por la Ley 100 de 1993, específicamente en su artículo 17, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003.

Sobre la naturaleza de los aportes al sistema de seguridad social, la Corte Constitucional mediante sentencia C-711 de 2001, fue categórica en señalar que responden a contribuciones parafiscales. Al respecto, señaló:

> *"Poniendo en un extremo los elementos que anuncian la parafiscalidad, y en el otro los aportes para salud y pensiones, se tiene: 1) los mencionados aportes son de observancia obligatoria para empleadores y empleados, teniendo al efecto el Estado poder coercitivo para garantizar su cumplimiento; 2) dichos aportes afectan, en cuanto sujetos pasivos, a empleados y empleadores, que a su turno conforman un específico grupo socio-económico; 3) el monto de los citados aportes se revierte en beneficio exclusivo del sector integrado por empleadores y empleados.* ***Consecuentemente ha de reconocerse que los aportes a salud y pensiones son de naturaleza parafiscal****."* (Negrilla y subrayas de la Sala)

Así debe tenerse en cuenta que las contribuciones parafiscales corresponden a los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector (artículo 29 del decreto 111 de 1996).

En el mismo sentido se refirió en la sentencia C -155 de 2014, en la que señaló:

> *"Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones,* ***llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica****, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones"*

Esta posición ha sido igualmente aceptada por el Consejo de Estado, quien ha afirmado que, en efecto, los pagos a seguridad social son contribuciones parafiscales (véase por ejemplo la sentencia de 26 de marzo de 2009 Rad. 16257 y 2 de diciembre de 2010 Rad. 17365).

Para el cobro de estos aportes, el legislador ha otorgado facultades y obligaciones a las administradoras de pensión, con independencia de su carácter público o privado. Así, en el artículo 91 de la Ley 488 de 1998, modificado por el artículo 99 de la Ley 633 de 2000, se estableció:

> *"Artículo 91. Normas aplicables al control del pago de aportes parafiscales en materia de Seguridad Social. Las entidades administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, independientemente de su carácter público o privado, tendrán la responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian dicho Sistema."*

Por su parte, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, impuso a las administradoras de fondos de pensiones la obligación de efectuar el cobro de los valores adeudados por el empleador, con ocasión del incumplimiento de la obligación transcrita, al preceptuar:

> *«Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.»*

De igual manera el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994, al referirse a las obligaciones de las sociedades administradoras de fondos de pensiones, determinó como una de ellas:

> *«Adelantar las acciones de cobro de las cotizaciones retrasadas. Los honorarios correspondientes a recaudos extrajudiciales solamente podrán ser cobrados a los deudores morosos cuando estas acciones de cobro se adelanten por terceros cuyos servicios se contraten para el efecto.*
>
> *Las cuentas de cobro que elaboren las administradoras por las sumas que se encuentren en mora prestarán mérito ejecutivo»*

Para dar cumplimiento a lo anterior, el artículo 5º del decreto 2633 de 1994 señaló que las administradoras de fondo de pensiones del régimen solidario de prima media con prestación definida y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, previo requerimiento escrito al empleador moroso. Y seguidamente indicó:

> *"Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993."*

Ahora bien, teniendo en cuenta que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen facultades, desde el momento mismo en que se causa la cotización, para desplegar control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, además de contemplar en su favor, intereses o multas, es preciso determinar si las reclamaciones y los cobros pueden hacerse en cualquier tiempo o se encuentran sometidos a un plazo perentorio.

Sobre el particular, acota la Sala, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que predica la imprescriptibilidad del derecho pensional en sí mismo, sin embargo, tal calidad no se traslada a los efectos económicos del derecho, motivo por el cual, *verbi gratia*, las mesadas pensionales prescriben tres años después de hacerse exigibles, lo cual también se predica de la acción para el cobro de los aportes pensionales, máxime que el ordenamiento jurídico fijó términos con los cuales cuenta la administradora de pensiones para verificar el pago del aporte, así como para realizar el respectivo requerimiento al empleador o deudor moroso, tal como lo consagra el artículo 8° del Decreto 1160 de 1994.

En ese orden de ideas, en criterio de esta Sala de Decisión, la acción de cobro de los aportes no tiene dicho carácter imprescriptible, más aun cuando el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, advierte que tales acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora, por lo cual, para efectos de analizar y contabilizar la prescripción, se debe actuar conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco años, dando alcance a lo que sobre la materia dispuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL3380 de 2020, en la cual asentó:

"Es necesario separar jurídicamente el vínculo entre el empleador y la administradora de fondos de pensiones, y la relación entre esta última y el trabajador, puntualizando, que en el sub examine, nos encontramos frente a la primera circunstancia.

Precisado lo anterior, es pertinente indicar, que el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece como una obligación del patrono descontar los aportes del trabajador a la seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, -adicionados a los aportes patronales- deberán trasladarse a la Entidad Administradora de Pensiones. Esto significa entonces, que durante ese período, la entidad administradora de pensiones debe haber recibido y registrado en su sistema los aportes que mes a mes le debieron trasladar los empleadores, con base en las afiliaciones respectivas y durante la vigencia de su vínculo laboral. Al no ocurrir así, es decir, al presentarse una mora patronal, el Fondo debe proceder a cobrar las cotizaciones pendientes, inclusive, coactivamente.

En esa misma línea, el artículo 24 ibídem preceptúa, que «corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo».

Bajo ese entendido, ante el incumplimiento del empleador, la Ley autorizó a las AFP para iniciar las acciones de cobro o proceso ejecutivo, respaldadas en un «título ejecutivo complejo» que se compone de: (i) la correspondiente liquidación 10 Radicación no 58574 de lo adeudado que elabora el respectivo fondo de pensiones -liquidación que las más de las veces debe ser la misma que el fondo presente al empleador al momento de requerirlo-, y, (ü) la prueba de haberse hecho el respectivo requerimiento al empleador moroso.

Insiste la norma, en que la liquidación presta mérito ejecutivo, es decir, con vocación de cobrarse coactivamente una vez vencido los 15 días del requerimiento al empleador, lo que quiere decir que, mientras no se surta el requerimiento y se elabore la respectiva liquidación, no puede el Fondo de pensiones acudir a la administración de justicia para apremiar el pago de lo adeudado, porque sólo a partir de ese momento la obligación se vuelve exigible, tal y como acertadamente lo expuso la Colegiatura accionada.

Por su parte el Decreto 1161 de 1994, mediante el cual se dictaron normas en materia del Sistema General de Pensiones, estableció en su artículo 13 las acciones de cobro a favor de las entidades administradoras de los diferentes regímenes, precisando que:

"Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994. Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de Prima Media con

Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos 11 Radicación no 58574 coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6° de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen. Parágrafo. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso".

Ahora bien, con base en la normatividad referida, es innegable que el propósito del legislador no era el de dejar a discreción de las entidades administradoras de pensiones, el término para ejercer y adelantar la acción ejecutiva, como quiera que, primero, ello iría en contra de la misma eficiencia y cuidado que se exige a las administradoras en el manejo de los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria y negligencia de la administradora pondría en riesgo el sistema de seguridad social en pensiones, y eventualmente la misma pensión del trabajador. Así las cosas, concluye esta Sala que la entidad administradora de pensiones, no puede hacer exigibles en cualquier tiempo, todos aquellos aportes que el empleador debió haber cotizado por efecto de las vinculaciones contractuales del afiliado durante toda su vida laboral, pues de aceptarse que la acción de cobro que debe adelantar la AFP frente al empleador moroso de los aportes al sistema general de pensiones, es de carácter imprescriptible, se desconocería la finalidad de las diferentes facultades de fiscalización, de control, acciones precoactivas y coactivas, otorgadas por el legislador a dichas entidades, a efectos de hacer efectivo el pago de los aportes por parte del patrono renuente. 12 Radicación no 58574 Resulta relevante advertir, que no es el trabajador el que sufre las consecuencias de la prescripción de sus aportes, sino la entidad administradora de pensiones, quien debe responder con su propio patrimonio por todos y cada uno de los aportes que dejó de cobrar en tiempo con su correspondiente rendimiento, o dicho en otras palabras, que dejó prescribir por su incuria o negligencia, tal como lo prevé el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 656 de 1994. En concordancia con lo expuesto, al ser los aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, ***para su cobro se debe aplicar el Estatuto Tributario****, conforme al artículo 54 de la Ley 383 del 97,* ***según el cual, las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobros contenidas en el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y los aportes inherentes a la nómina, tanto en el sector privado como en el público,*** *establecidas en las leyes 58 del 63, 27 de 74, 21 del 82, 89 del 88 y 100 del 93. Así las cosas, conforme al artículo 17 del Estatuto Tributario, que fue modificado por el artículo 53 de la Ley 1739,* ***se establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco años****."* (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Atendiendo tal estructura, y descendiendo al caso de autos, se observa que la ejecutante efectuó la liquidación de aportes pensionales adeudados por la ejecutada para los periodos comprendidos entre 1998-11 y 2019-03, respecto de 31 afiliados (ver liquidación aportes adeudados págs. 29 a 45 Archivo 1 expediente digital).

Ahora, según se observa en las páginas 21 a 27 (Archivo 1 expediente digital) el requerimiento fue enviado al empleador el **6 de junio del 2019**, recibido al día siguiente -07/06/2019- siendo incoada la demanda el 26 de julio de ese mismo año (pág. 46 ibidem).

En ese sentido, el requerimiento interrumpió la prescripción de los aportes adeudados por la ejecutada en los 5 años anteriores a la realización del mismo, en otros términos, operó el fenómeno prescriptivo respecto de los aportes pensionales objeto de cobro cuya obligación se causó entre los periodos noviembre de 1998 (*primer periodo que se está cobrando*) y los subsiguientes hasta el 6 de junio del 2014 (*5 años anteriores al 6 de junio del 2019 data de la reclamación*), y en esa medida como quiera que en consonancia con la apelación lo solicitado es la declaratoria de la excepción de prescripción habrá de declararse probada de manera parcial respecto de los aportes cobrados por las cotizaciones adeudadas de noviembre de 1998 al 6 de junio del 2014.

Conforme lo analizado, habrá de revocarse parcialmente la providencia de primer grado para en su lugar, declarar parcialmente probada la excepción de prescripción en los términos anteriormente expuestos, precisando que la ejecución deberá continuarse en los términos del mandamiento de pago y respecto de los aportes pensionales adeudados del 7 de junio del 2014 en adelante, frente a los cuales no operó el fenómeno prescriptivo.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL,

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR el numeral **PRIMERO** del auto proferido por el Juez 4° Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia celebrada el 16 de enero del 2023, para en su lugar **DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN,** respecto de las cotizaciones adeudadas a PORVENIR de noviembre de 1998 y las que posteriormente se causaron hasta el 6 de junio del 2014, conforme a las consideraciones expuestas de manera precedente.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** del auto proferido por el Juzgado de primer grado, en el sentido de **SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN**, en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia, es decir, únicamente respecto de los aportes pensionales adeudados del **7 de junio del 2014 en adelante**, frente a los cuales no operó el fenómeno prescriptivo.

TERCERO: **CONFIRMAR** en lo demás la providencia apelada.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUIDO POR GINA PAOLA FANDINO OLAYA CONTRA MEGALINEA S.A y BANCO DE BOGOTÁ S.A. (RAD. 04 2021 00063 01).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el artículo 13 numeral 1º de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad demandada MEGALINEA S.A. (“*10. Recurso de Reposición y Apelación.pdf*”, expediente digital) contra la providencia proferida por el Juez Cuarto (4º) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 5 de septiembre de 2020 (*“09AutoAdmiteContestacionBanco.pdf”* - expediente digital), por medio del cual tuvo por no contestada la demanda por haberse presentado el escrito por fuera de los términos previstos en la ley.

Como motivos de inconformidad, la convocada a juicio aduce, el juzgador de primer grado no tuvo en cuenta que:

> *“(…) el apoderado de la parte demandante incorpora al expediente, como constancias de notificaciones un correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2021 (17:00) dirigido a Solicitudes Requerimientos Judiciales rjudicial@bancodebogota.com.co , Solicitudes1 solicitudes1@megalinea.com.co : (…).*
>
> *En el mismo documento, aporta una certificación de correo generada por Mailtrack, el cual acredita el envío del mensaje de datos a los destinatarios: (…).*
>
> *(…) al realizar un examen más juicioso del Certificado de entrega de Mailtrack aportado por el apoderado de la demandante, se nota con facilidad que no existe un soporte que acredite el acuse de recibido por parte de MEGALINEA S.A., puesto que,*

> *como se acotó en párrafos que anteceden, dicha certificación solo prueba el envíó del mensaje de datos al correo electrónico de las demandadas, sin que ello pueda inferir el acuse efectivo de quien represento, siendo evidente que, la citada Ley 2213, la sentencia C-420 de 2020 y la STC 690 de 2020, establecen que la notificación se entenderá surtida desde el acuse de recibido del mensaje de datos, situación que en el caso de autos no sucede, amen que no se logró acreditar dicho acuse por parte de MEGALINEA S.A. ".*

En criterio del togado, y teniendo en cuenta la exequibilidad condicionada declarada por la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, respecto del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, adoptado de manera permanente a través de la Ley 2213 de 2022, el término para presentar el escrito contestatorio debe contabilizarse a partir del "*acuse de recibido"*, siendo evidente que, la citada ley, sentencia C-420 de 2020 y la STC 690 de 2020, establecen que la notificación se entenderá surtida desde el acuse de recibido del mensaje de datos.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Inicialmente, señala la Sala, el auto que dé por no contestada la demanda, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Pues bien, el artículo 74 del C.P.T. prevé que "*admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."*

Por su parte, el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, que modificó transitoriamente el Código General del Proceso, y vigente para la fecha en que fue incoada la demanda (17 de febrero de 2021 - acta de reparto)[1], establece:

> *"**ARTÍCULO 8. Notificaciones personales.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso*

[1] *Archivo 01Demanda y Anexos.pdf, página 131, expediente digital).*

físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma ***se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos****.*

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

***PARÁGRAFO** 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.*

***PARÁGRAFO 2.** La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales."* (Negrilla y subrayas de la Sala).

Dicha disposición fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia C-420 de 2020, declaró exequible el inciso tercero de manera condicionada bajo el entendido que "*el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.*"[2].

---

[2] *Numeral tercero de la parte resolutiva.*
Para arribar a dicha decisión, la Corte consideró, entre otras cosas que:
"334.Delimitación del asunto. El artículo 8° del Decreto sub examine señala que las notificaciones personales podrán efectuarse enviando la providencia mediante mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio suministrado por la parte interesada en que se efectúe la notificación. También prevé que, para ello, no se exige citación previa o aviso físico o virtual, y que los anexos que deban entregarse para un traslado por correo electrónico deben enviarse por el mismo medio. Para el efecto, el interesado debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica, o sitio suministrado, corresponde al utilizado por la persona a notificar, y deberá informar cómo obtuvo la información, y aportar las evidencias correspondientes. En estos casos, la notificación se entenderá realizada transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje. Para el efecto, se permite el uso de sistemas de confirmación del recibo de correos electrónicos o mensajes de datos[526]. Por último, el parágrafo 2 del artículo 8° prevé que la autoridad judicial podrá solicitar información sobre las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, "o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales".
335.Intervenciones ciudadanas. Algunos intervinientes se pronunciaron sobre este artículo, y solicitaron su inexequibilidad total o parcial. Estas intervenciones señalan que: (i) la notificación por esta vía conculca el derecho de defensa y, por ende, el debido proceso, dado que impide que el demandado que no cuenta con correo electrónico, o que no lo usa con frecuencia, tenga conocimiento de un proceso en su contra[527]; (ii) el Decreto omite regular el derecho del demandado a autorizar el medio mediante el cual quiere ser notificado

de las actuaciones del proceso[528] y (iii) la disposición viola los principios de contradicción y celeridad procesal, dado que una simple manifestación juramentada permite derribar el acto procesal que da inicio al proceso, en tanto crea una nueva causal de nulidad[529].

336.Por otro lado, consideran que (iv) la autorización para que la información se extraiga de redes sociales no ofrece seguridad jurídica alguna, salvo que el titular acepte ser notificado de esta forma, por lo que se vulnera el principio de publicidad, y los derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica[530]; (v) la medida vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto que, durante la emergencia, reduce el plazo previsto en el art. 291 del CGP a 2 días, sin justificación alguna[531]; (vi) la medida es menos garantista que el régimen ordinario, dado que este último previene cualquier problema en la recepción de la comunicación y, por ello, contempla el envío de 2 mensajes de datos sucesivos (citación y aviso) con un intervalo suficiente (mínimo de 5 días)[532]; y, por último, (vii) la exigencia relativa a que se declare cómo se obtuvo la dirección de correo para efectuar la notificación es desproporcionada y desconoce la presunción de buena fe[533].

337. En contraste, otros intervinientes manifestaron que (i) es lógico que un demandante pueda escoger entre múltiples canales para notificar, habida cuenta de las diversas formas de interacción social por medios digitales que existen en la sociedad[534]; (ii) la medida facilita el trámite de notificación que las medidas de aislamiento habían imposibilitado[535]; (iii) la medida agiliza los procesos, pues evita las funciones secretariales presenciales de los servidores, y permite el conocimiento de las actuaciones en el día en que ocurren[536]; (iv) el término concedido por la medida para tener surtida la notificación del sujeto procesal es razonable, pues le permite revisar su bandeja de entrada en el canal digital y ejercer la defensa o cumplir la decisión[537]; (v) al admitir que el juez consulte varias fuentes para obtener la dirección electrónica de notificación del demandado, la medida evita que se acuda directamente al emplazamiento en los casos en que no se conozca la dirección electrónica o física de la parte demanda o exista duda sobre su autenticidad[538] y (vi) la medida adopta medios de control de intento de fraude o suplantación en el trámite[539].

338. En atención a estas consideraciones, le corresponde decidir a la Sala si el artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020 vulnera la garantía de publicidad, integrada al derecho fundamental al debido proceso, al permitir que la notificación del auto admisorio se remita al correo electrónico o sitio suministrado por la parte demandante o identificado mediante las consultas autorizadas en el parágrafo del artículo.

339. El artículo 8º del Decreto sub examine es compatible con la Constitución Política por cuanto no vulnera prima facie la garantía de publicidad. Tal como se explicó en precedencia (epígrafe "(a) La garantía de publicidad" supra), la Constitución no prevé un único modo de notificación para dar cumplimiento al principio de publicidad. Únicamente exige que aquel que sea seleccionado por el legislador tenga la capacidad de dar a conocer las decisiones que deban transmitirse a los interesados para el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción[540]. En principio, la Corte encuentra que la notificación del auto admisorio de la demanda mediante la remisión de un correo electrónico a la parte interesada es una medida plausible para lograr que esta conozca la existencia de un proceso en su contra y ejerza aquellos derechos.

340. En efecto, la Sala advierte que efectuar las notificaciones personales por medio del envío de la providencia como mensaje de datos no es una novedad[541]. Así, el proceso arbitral[542] y el proceso contencioso administrativo[543] prevén la notificación de la primera providencia del proceso mediante mensaje de datos. En materia de procedimiento administrativo, el Decreto Ley 019 de 2012 también prevé este tipo de notificaciones para los actos administrativos tributarios a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–[544]. En particular, estas últimas disposiciones fueron declaradas exequibles por esta Corte, al considerar que "la realización del principio de publicidad, '[…] como un mandato de optimización, depende de las posibilidades fácticas y jurídicas concurrentes"[545].

341. Dado que no se observa una vulneración a una garantía propia del derecho al debido proceso, la constitucionalidad de esta medida dependerá de si es una respuesta proporcionada a las posibilidades fácticas y jurídicas que impone la pandemia y las medidas adoptadas para su contención. Para el efecto, la Sala aplicará un juicio de proporcionalidad de intensidad leve (cfr., sección 13.6, en particular el epígrafe, "i. El juicio de no discriminación en la jurisprudencia constitucional"), dado que se trata de un asunto respecto del cual el legislador goza de un amplio margen de configuración y se ha constatado la inexistencia de una afectación al derecho al debido proceso.

342 El artículo 8º persigue una finalidad que no está constitucionalmente prohibida. En efecto, la previsión de la notificación personal por mensaje de datos busca varias finalidades que no están prohibidas por la Constitución, y que, además, son constitucionalmente importantes, a saber: (i) dar celeridad a los procesos a los que se aplica el Decreto Legislativo sub examine; (ii) proteger el derecho a la salud de los servidores y usuarios de la administración de justicia; (iii) garantizar la publicidad y la defensa de las partes mediante la incorporación de reglas de garantía y control y (iv) reactivar el sector económico de la justicia, a fin de garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes de allí derivan su sustento.

343. La medida dispuesta en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020 es idónea. La notificación personal mediante mensaje de datos es una disposición efectivamente conducente para lograr los fines propuestos porque: (i) elimina la obligación de comparecer al despacho para notificarse, lo que reduce el riesgo para la salud y la vida de funcionarios y sujetos procesales; (ii) prescribe un remedio procesal para aquellos eventos

en los que el interesado en la notificación no recibió el correo; (iii) prevé condiciones para garantizar que el correo, en efecto, es el utilizado por la persona a notificar; y (iv) permite que el interesado, en efecto, conozca la providencia a notificar, en tanto los correos electrónicos ofrecen seguridad y permiten probar la recepción y el envío de aquella.

344. Así las cosas, primero, la Sala observa que, para la elección del medio, el Gobierno tomó en consideración que: (i) el comportamiento del virus es impredecible y requiere la limitación del contacto físico; (ii) la remisión de mensajes de datos elimina la necesidad de contacto físico en los despachos judiciales para la notificación y (iii) trasladar la carga a la parte permite agilizar el trámite de los procesos. Por tanto, no encuentra la Sala evidencia que permita concluir que el Gobierno incurrió en un error manifiesto al juzgar la idoneidad de la medida para reducir el riesgo sanitario de las partes procesales.

345. Segundo, la medida previene cualquier posible limitación que esta pueda generar sobre el contenido iusfundamental del debido proceso por cuanto prevé un remedio procesal eficaz para proteger el derecho de defensa del notificado, que no se enteró de la providencia. En efecto, la disposición prevé que, en este caso, la parte interesada puede solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado. Esta disposición, contrario a lo argumentado por los intervinientes, no crea una causal adicional de nulidad, puesto que el numeral 8 del artículo 133 del CGP ya prevé la nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda. El artículo 8° examinado obliga a la parte interesada a tramitar la nulidad por esta causal, según el procedimiento previsto en los artículos 132 a 138 del CGP, lo cual, a su vez, garantiza los derechos de la parte accionante, que podría verse perjudicada con la declaratoria de nulidad. Por otro lado, una lectura razonable de la medida obliga a concluir que, para que se declare nula la notificación del auto admisorio por la razón habilitada en el artículo 8° no basta la sola afirmación de la parte afectada de que no se enteró de la providencia. Es necesario que el juez valore integralmente la actuación procesal y las pruebas que se aporten en el incidente de nulidad para determinar si en el trámite de la notificación personal se vulneró la garantía de publicidad de la parte notificada. En otras palabras, la Sala encuentra que la disposición no libra a la parte de cumplir con la obligación de probar los supuestos de hecho que soportan la causal de nulidad alegada. Por el contrario, la medida compensa la flexibilidad introducida por la norma, con la necesidad de proteger los derechos de defensa y contradicción de las partes, mediante la agravación de las consecuencias jurídicas, incluso con tácitas implicaciones penales, a fin de dotar de veracidad la información que sea aportada al proceso. Razón por la cual, la Corte constata que este mecanismo más que generar un sacrificio a las garantías del debido proceso, busca garantizarlas durante la emergencia.

346. Tercero, la medida prevé condiciones que contribuyen a garantizar que el correo en el que se practicará la notificación sea, en efecto, el utilizado por la persona a notificar. Así, el inciso 5 del artículo que se estudia dispone que el interesado en la notificación debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al que utiliza la persona a notificar, para lo cual deberá indicar la manera en que obtuvo la información y aportar evidencias. A juicio de la Sala, este cambio en el modelo de notificación personal no es extraño ni novedoso, en tanto pretende, en virtud del deber de colaboración con las autoridades que tienen las partes procesales, garantizar que la dirección electrónica o sitio en el que se va a efectuar la notificación personal sea, en efecto, una dirección utilizada por el sujeto a notificar, a fin de realizar los principios de publicidad, celeridad y seguridad jurídica, y de garantizar los derechos de defensa y contradicción.

347. Además, el parágrafo 2 autoriza al juez para verificar la información de la dirección electrónica para notificar al demandado en redes sociales o páginas Web. Algunos intervinientes consideran que esta autorización no ofrece seguridad jurídica alguna, salvo que el titular acepte ser notificado de esta forma. Sin embargo, la Sala discrepa de la interpretación de los intervinientes habida cuenta que la medida no tiene objeto distinto al de dotar a las autoridades de herramientas acordes con los avances tecnológicos, que faciliten la obtención de la información, y lleven al interesado a conocer las actuaciones en su contra. De manera que, más que presentarse como la vía principal para obtener la información, se trata de una herramienta adicional para que el juez, como director del proceso, pueda dar celeridad al trámite[546]. Además, la Sala advierte que el ejercicio de esta potestad procede, prima facie, solo frente a aquellas personas naturales que no están registradas en ninguna base de datos pública. Por tanto, es la falta de registro oficial de los datos de las personas a notificar, lo que faculta a la autoridad para obtener la información por estas otras vías. En otras palabras, la facultad de verificación de información en redes sociales y páginas Web, prevista en el parágrafo 2 del artículo 8º, no se predica respecto de: (i) entidades públicas u órganos de la administración, (ii) personas jurídicas, (iii) comerciantes o personas naturales o jurídicas que estén en el registro mercantil y (iv) abogados, pues en relación con todos ellos ya existen bases de datos legalmente reconocidas y utilizadas para diversos fines.

348. La Sala considera que la medida aquí analizada es efectivamente conducente para lograr notificar a las partes y agilizar y facilitar el trámite de los procesos judiciales durante la emergencia, en tanto que: (i) la naturaleza semi-privada[547] de la información consignada en páginas Web y redes sociales, que se origina en un acto voluntario, regido por normas principalmente de derecho privado, es publicada a terceros sin discriminación alguna, y con el pleno conocimiento por parte de su titular; (ii) si bien es cierto que el uso de redes sociales o páginas Web puede, en principio, ofrecer problemas relacionadas con la certeza o calidad de la información, garantía de su uso, o incluso casos de confusión o error por homónimos, es al juez, como garante del proceso, al que le corresponde, en cada caso, verificar la razonabilidad y pertinencia de usar la

información suministrada en estos canales[548]. Todo esto, teniendo especial sensibilidad con la realidad generada por la pandemia, y con respeto del dinamismo de los procesos, las garantías procesales y las normas de la administración de datos personales sistematizadas por la jurisprudencia[549]

349. ***Cuarto, la Sala advierte que la disposición sub judice prevé el uso sistemas de confirmación de recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Estos instrumentos brindan mayor seguridad al proceso y ofrecen certeza respecto del recibo de la providencia u acto notificado. En efecto, según lo informado por el CSDJ, dentro de las herramientas colaborativas de Microsoft Office 365 provistas a los servidores judiciales se incluye el servicio de confirmación de entrega y lectura de mensajes. Así, cuando se envía un correo desde la cuenta institucional de la Rama Judicial con solicitud de confirmación de entrega, el servidor de correo de destino responderá inmediata y automáticamente enviando un mensaje informativo al remitente acerca de la recepción del correo. En los casos en que la dirección del correo sea incorrecta o no exista, de manera automática, el servidor, en un periodo máximo de 72 horas, informará sobre la imposibilidad de recepción del correo[550].***

350.El Consejo de Estado[551], la Corte Suprema de Justicia[552] y la Corte Constitucional[553] coinciden en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante la cual se notifica (sea cual fuere el medio elegido para el ***efecto) sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió efectivamente tal comunicación.*** *Así, la garantía de publicidad de las providencias solo podrá tenerse por satisfecha con la demostración de que la notificación ha sido recibida con éxito por su destinatario.*

351. El inciso 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020 prevé que "la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación". Una regla semejante se contiene en el parágrafo del artículo 9°, según el cual, "Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente". ***Al ser consultado sobre las razones que motivaron estos apartados normativos, el Gobierno nacional informó que la medida tiene por objeto conceder un término razonable para que los sujetos procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del reconocimiento de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet[554]. De esta respuesta no se sigue que, al adoptar la medida, el Gobierno pretendiera desconocer el precedente descrito relativo a la validez de la notificación a partir de su recepción por el destinatario –en el caso de la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, que no de su envío.***

352.No obstante, la Corte encuentra que, tal como fue adoptada la disposición, es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada o del traslado no corresponde a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación implicaría admitir que, aun en los eventos en que el mensaje ***no haya sido efectivamente recibido*** *en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío****. Una interpretación en este sentido desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución.***

353.Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el régimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta simplificación se admitan interpretaciones que desconozcan la teleología de las notificaciones, esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto ***empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.*** *A juicio de la Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida que desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales mediante correo electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en el artículo 8°, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para valorar su ocurrencia."*

(…)

392. Al examinar el inciso 3 del artículo 8° y el parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020, la Corte encontró que tal como fueron adoptadas las disposiciones es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada –en relación con la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, no correspondan a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución, en tanto implica admitir que, aun en los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos

Atendiendo lo anterior, y al tenor de las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal Constitucional, cuando la notificación se realice a través de mensaje de datos, la misma se entenderá surtida contados dos días a partir de i) la fecha en que se acuse recibo o ii) la fecha en que el mensaje **haya sido efectivamente recibido**, si la misma puede verificarse a través de cualquier medio.

En el caso bajo examen, se tiene que mediante correo electrónico calendado 26 de agosto de 2021, remitido al email solicitudes1@megalinea.com.co, la parte demandante desde el correo notificaciones.leneca@gmail.com,. Informó:

"NOTIFICACIÓN PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020.

Bogotá D.C, 26 de agosto de 2021

Señores
MEGALINEA S.A. y BANCO DE BOGOTA
Representante legal o quien haga sus veces

Atentamente le informo la existencia del proceso identificado con la radicación 2021-63, que corresponde a la demanda ORDINARIO LABORAL, promovida por GINA PAOLA FANDINO OLAYA contra MEGALINEA S.A. Y EL BANCO DE BOGOTA que cursa en el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del que se emitió providencia de fecha 24 de agosto de 2021, mediante la cual se admitió la demanda.

Por lo anterior, le remito 3 archivos en PDF (archivo con 128 folios: DEMANDA Y ANEXOS - archivo con 1 folio: SUBSANACION - archivo con 1 folio: ADMITE DEMANDA), donde encontrará: LA DEMANDA, SUS ANEXOS, SUBSANACION y el AUTO ADMISORIO.

La notificación se entiende surtida a los dos días hábiles siguientes al envío del correo electrónico y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente de la notificación. Los términos serán los establecidos en el artículo 74 del C.P.T.

La contestación de la demanda deberá remitirla al correo electrónico del Juzgado y también al correo de la parte demandante: notificaciones.leneca@gmail.com "(Negrilla fuera del texto).

Junto con el correo en comento, se adjuntó el auto admisorio de la demanda, subsanación y demanda, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020., tal como se muestra a continuación:

---

(02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje."

Parte Interesada

Notificaciones Leneca Abogados
Cel: 318 692 5709
Whatsapp: 310 793 8833
Notificaciones.Leneca@gmail.com
Leneca.com

Información Confidencial de la reserva del Abogado.

3 archivos adjuntos

6-ADMITE.pdf
73K

5- SUBSANACION GINA PAOLA FANDINO.pdf
821K

1- DEMANDA GINA PAOLA FANDINO OLAYA - MEGALINEA.pdf
3237K

Ahora, según la certificación de correo generado por "Mailtrack" en esa misma fecha -26 de agosto de 2021-, siendo las 17:00 horas, el mensaje fue entregado a la dirección de destino, como se observa a continuación:

Email Certificate generated by Mailtrack

From	Notificaciones Leneca Abogados <notificaciones.leneca@gmail.com>
Subject	NOTIFICACION DEMANDA LAB GINA PAOLA FANDINO OLAYA - MEGALINEA Y BANCO DE BOGOTA
Message ID	<CAH+=X137BqS32JhcZTyiKRvZO2SdU01NefPWWyAQFkpuBA9V_A@mail.gmail.com>
Delivered on	26 August 2021 at 17:00
Delivered to	Solicitudes Requerimientos Judiciales <rjudicial@bancodebogota.com.co>, Solicitudes1 <solicitudes1@megalinea.com.co>, Valbuena Canon, Luz Dari <LVALBU2@bancodebogota.com.co>, Viviana García Miranda - Pérez y Pérez Abogados S. A. S <vgarcia@perezyperez.com.co>

Delivery times

one of the recipients on 27 August 2021 at 00:04

Es importante resaltar, la dirección electrónica a la que se envió el mensaje de datos, es la misma registrada como "*notificaciones judiciales"* en el certificado de existencia y representación legal aportado tanto por el demandante con el escrito introductor (página 93 a 112, "*01. Demanda y Anexos.pdf*" como por la demandada Megalinea S.A. al contestar la demanda (*páginas 3 a 18, "05. Poder Megalinea.pdf"*).

En vista de lo anterior, se tiene que la recepción del mensaje fue el 26 de agosto de 2021, fecha en la cual efectivamente se recibió, según la aludida certificación, por lo

que, aplicando la normatividad anteriormente relacionada, el término para contestar fenecía el 13 de septiembre de 2021[3]

Retomando, la demandada Megalinea S.A. otorgó poder al togado Juan Camilo Pérez Diaz, pues así lo hizo saber esta parte al juzgado a través del correo electrónico calendado 10 de septiembre de 2021, esto es, dentro del término de contestación y, posteriormente, mediante mensaje de datos del 23 de septiembre de 2021, siendo las 08:06 a.m. se aportó contestación al juzgado de primera instancia, encontrándose esta última actuación por fuera del plazo ya que, como se advirtió en precedencia, venció el 13 de septiembre de 2021.

Según el anterior recuento procesal, aunado a la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada al inciso 3º del artículo 8 del Decreto 806 de 2020, para la Sala es claro que la notificación del auto admisorio de la demanda quedó surtido el 13 de septembre de 2021, esto es, contando dos días siguientes a la verificación de la entrega del correo al buzon de notificaciones electrónico dispuesto por la encartada Megalinea, por cuanto, se puede verificar por los medios tecnologícos dispuestos por el Ministerio de Comunicaciones contentivo de la notificación personal había sido efectivamente entregado a su destinatorio en la misma fecha en que fue remitido.

En gracia de discusión del certificado expedido por Mailtrack se extrae que el plazo de entrega de uno de los destinatarios fue el 27 de agosto de 2021 a las 00:04, sin relacionarse el email que recepcionó el mensaje de datos, lo que en principio pemitiria concluir que la notificaciòn de una de las encartadas se surtió en esta fecha. No obstante, si esta situación se tuviera por surtida en favor de la enjuciada Megalinea, se tiene que el plazo para allegar el escrito de contestacion venció el 14 de septiembre de 2021, por lo que tampoco estaria en término.[4]

En ese orden, los 10 días de traslado de que trata el artículo 74 del C.P.T y la S.S. iniciaban a contarse el 31 de agosto de 2021 -dos siguientes a la notificación- y vencieron el 13 septiembre de la misma anualidad, por lo que, al haberse radicado la contestación de la demanda el 23 de septiembre de 2021, diáfana resulta su extemporaneidad.

---

[3] Los (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, siendo para este caso el 27 y 30 de agosto de 2021, comenzando a correr el término para contestar entre el 31 de agosto al 13 de septiembre de 2021".
[4] Se allegó contestación el 23 de septiembre de 2021 (07ContestacionMegalinea.pdf).

Por último, resulta procedente advertir que al haberse practicado la notificacion en debida forma, los términos procesales comenzaron a correr el 31 de agosto de 2021, siendo pertinente que la demandada Megalinea aportara el escrito de contestacion en la misma fecha en que puso en conocimiento el poder al a quo o antes del vencimiento, pues el hecho de haberse aportado el mandato el 10 de septiembre de 2021 no suspendia el plazo para ejercer el derecho de defensa y contradiccion que le asiste, ya que, se reitera, la notificación se practicó en debida forma.

Aunado a lo anterior, el dia 19 de noviembre de 2020, la parte actora puso en conocimiento la demanda y anexos en 128 folios a las demandadas MEGALINEA S.A. y BANCO DE BOGOTA, esto es, previo a someterla a reparto ya que el escrito fue radicado el 17 de febrero de 2021 (*pàginas 129 a 131, archivo 01.Demanda y Anexos, expediente digital*)., permitiendo concluir que la empresa recurrente tenia pleno conocimiento de la existencia del proceso, pudiendo hacer un adecuado y diligente seguimiento desde la notificaciòn del auto admisorio proferido el dia fecha 24 de agosto de 2021.

No sobra consignar para esta tematica y en atenciòn al recurso de apelaciòn que ocupa a la Sala, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil unificò la posiciòn respecto al momento en que debe entenderse como surtida la notificaciòn personal, disponiendo mediante providencia STC-16733-2022, radicaciòn No. 68001-22-13-000-2022-00389-01 del 14 de diciembre de 2022 y ponencia del Doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque, lo siguiente:

> *"Por esa razón, la Sala encuentra en esta ocasión la necesidad de unificar su posición en cuanto al momento en el que debe entenderse surtida la notificación personal por medios digitales y la época en la que debe empezar a correr el término que de la providencia notificada derive.*
>
> *3.5.1. Para ello, es necesario resaltar que la intención del legislador con la promulgación del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, al regular el trámite de la notificación personal a través de medios electrónicos, no fue otra que la de ofrecer a las partes y apoderados un trámite alterno de enteramiento acorde con los avances tecnológicos de la sociedad. Un procedimiento quizás menos oneroso en tiempo y dinero, pero igual de efectivo al dispuesto en el Código General del Proceso en el que las partes deben acudir necesariamente a empresas de servicio postal autorizadas a remitir sus citatorios y avisos. En línea con ese propósito, consagró una serie de medidas tendientes a garantizar la efectividad de una notificación más célere y económica, pero con plenas garantías de defensa y contradicción para el demandado.*
>
> *i). Como ya se vio, la primera de ellas fue la de exigir al libelista que en su demanda cumpliera las tres cargas descritas en precedencia, esto es, el juramento relativo a*

que el canal escogido es el utilizado por el demandado, la explicación de la forma en la que lo obtuvo y la prueba de esa circunstancia.

ii). La segunda, consistió en otorgar al juez la facultad de verificar la «información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las (…) entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales» (Parágrafo 2° del art. 8 Precepto sobre el cual se predicó en juicio de constitucionalidad que:

> *«(…) la medida no tiene objeto distinto al de dotar a las autoridades de herramientas acordes con los avances tecnológicos, que faciliten la obtención de la información, y lleven al interesado a conocer las actuaciones en su contra. De manera que, más que presentarse como la vía principal para obtener la información, se trata de una herramienta adicional para que el juez, como director del proceso, pueda dar celeridad al trámite (…).*
>
> *La Sala considera que la medida aquí* ***analizada es efectivamente conducente para lograr notificar a las partes y agilizar y facilitar el trámite de los procesos judiciales»*** *(Subrayado y resaltado propio)*
>
> *iii). La tercera, relacionada con el deber de acreditar el «envío» de la providencia a notificar como mensaje de datos al canal elegido por el demandante. En últimas, es de esa remisión que se deriva la presunción legal contenida en el canon en cita, esto es, que «se entenderá realizada» la notificación:*
>
> *«****La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje*** *y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje» (Subrayado y resaltado propios).*

Al respecto, no sobra precisar que una cosa es el momento en el que se entiende surtido el enteramiento -dos días hábiles siguientes al envío de la misiva- y otra distinta es el inicio del término derivado de la providencia notificada que puede verse afectado si se demuestra que el destinatario no recibió el mensaje de datos.

Sobre la distinción en comento esta Sala predicó recientemente que:

La ley 2213 de 2022, por cierto, ***replica en su inciso tercero una regla compuesta de dos partes****, la primera idéntica a la que consagraba el Decreto 806 de 2020 («La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje»), y la segunda con ciertas modificaciones, orientadas a que el cómputo de los términos de traslado inicie a partir del momento en que «el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje». Como puede verse, en ambos casos* ***la pauta legal diferencia dos fenómenos muy distintos: la notificación personal de una providencia que está sujeta a esa especial forma de enteramiento, y el hito inicial del término de traslado de la demanda****, es decir, el punto de partida del plazo que confiere la ley al demandado para ejercer su derecho de contradicción. (STC10689-2022)*

iv. También se consagró la ***posibilidad*** *que tienen las partes de «implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos», obvia resaltar, sin limitarse al correo electrónico como canal de comunicación posible.*

Esa diferenciación se realizó con el fin de precisar que, al margen de que se hubiese surtido la notificación con el envío y recepción del mensaje, el término no podía empezar a rodar hasta tanto se garantizara al usuario el acceso de la demanda y sus anexos, siempre que no se hubiesen compartido con la radicación del libelo inicial (STC8125- 2022).

En esa línea de pensamiento, avaló la opción de «hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificada y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal -UPU- con cargo a la franquicia postal».

v. Finalmente, como una de las medidas más garantistas del derecho de defensa y contradicción del demandado, el legislador optó por salvaguardar expresamente el derecho que asiste al destinatario de la notificación, de ventilar sus eventuales inconformidades con la forma en que se surtió el enteramiento mediante la vía de la solicitud de declaratoria de nulidad procesal. En concreto, señaló que:

> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada* ***deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.***

Así las cosas, de lo expuesto no queda duda que el demandante debe cumplir unas exigencias legales con el objetivo de dar convicción sobre la idoneidad y efectividad del canal digital elegido, actividad sobre la cual el juez tiene facultades oficiosas de verificación. Tampoco hay inconveniente en afirmar que para la notificación personal por medios electrónicos es facultativo el uso de los sistemas de confirmación del recibo de los distintos canales digitales y del servicio de correo electrónico postal certificado

Igualmente, no hay problema en admitir que -por presunción legal- es con el envío de la providencia como mensaje de datos que se entiende surtida la notificación personal y, menos, con reconocer que no puede iniciar el cómputo del término derivado de la determinación notificada si se demuestra que el destinatario no recibió la respectiva comunicación.

3.6. Escenario para discutir irregularidades en torno a la notificación personal con uso de las TIC

Del panorama recreado -armonizado con la práctica judicial- es dable colegir que, por regla general, si el demandante supera las exigencias iniciales previstas por el legislador tendientes a demostrar la idoneidad del canal digital elegido y el juez hace uso de los poderes de verificación que le otorga el legislador, hay una alta probabilidad de que ese medio resulte efectivo para el enteramiento del demandado o convocado.

De igual forma, para los posibles casos en los que, a pesar de lo anterior, exista anomalía con la notificación, tiene el demandado la posibilidad de acudir a la solicitud de declaratoria de nulidad.

Con ese razonamiento, podría concluirse que el establecimiento de una regla de carácter general según la cual deba requerirse en todos los casos al demandante para que, además de cumplir los requisitos del inciso 2° del artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, demuestre que su contraparte recibió la comunicación por él remitida, podría resultar excesiva, incompatible con el principio constitucional de buena fe, e incluso, contraria al querer y al tenor de la normativa en comento.

Y es que, vistas bien las cosas, no resulta sensato y acorde a los postulados legales de implementación de las TIC, celeridad de los trámites y tutela jurisdiccional efectiva, que se hagan una serie de exigencias previas al demandante tendientes a verificar la idoneidad del canal de comunicación elegido para los fines del proceso, si, de todas formas, ninguna consecuencia jurídica pudiera derivarse de ello.

Resáltese que, al leer cuidadosamente la norma, se advierte que en ningún momento se impone al demandante - o al interesado en la notificación- la carga de probar el acceso del destinatario al mensaje. Lo que la norma procura es que no pueda

empezar a andar el término derivado de la providencia a notificar si la misma no arribó a su receptor. De allí que no sea dable a los juzgadores imponer responsabilidades no previstas por el legislador.

En ese orden, como quiera que la ley no dispone que la prueba del acuse de recibo deba ser aportada por el demandante, bien puede inferirse que se trata de una actividad que también puede cumplir el demandado en los casos en que considere que no tuvo oportuno acceso a la comunicación remitida. Justamente es a él a quien le Radicación n° 68001-22-13-000-2022-00389-01 35 interesa demostrar la falta de acceso al mensaje con el fin de que no se entienda iniciado el cómputo del término otorgado.

Es en el trámite de la eventual nulidad -y no la etapa inicial del litigio- donde se abre el sendero para que se debata la efectividad o no del enteramiento y, sobre todo, del hito en el que empiezan a correr los términos derivados de la providencia a notificar. Es en ese escenario en el que cobran real importancia las pruebas que las partes aporten para demostrar la recepción, o no, de la misiva remitida por el demandante.

Afirmar lo contrario desdibujaría la desformalización del proceso y la celeridad añorada por el legislador, así como ninguna garantía adicional ofrecería al demandado, quien, en todo caso, siempre tendrá la posibilidad de cuestionar el enteramiento.

No en vano, al declarar la exequibilidad condicionada de esta norma, la homologa constitucional procuró textualmente ***«orienta[r] la aplicación del remedio de nulidad*** *previsto en el artículo 8°, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio* ***para valorar su ocurrencia».***

Ahora bien, algunos podrían pensar que tal interpretación no resulta suficiente para garantizar que el destinatario recibió la comunicación y que, en tal sentido, el cómputo de términos solo puede andar cuando exista solemne prueba de ello. Sin embargo, esa postura opta por Radicación n° 68001-22-13-000-2022-00389-01 36 reclamar lo que no exigió el legislador. A decir verdad, basta con remitirse a la norma en comento para advertir que existe la posibilidad de acudir a cualquier «otro medio», distinto al acuse de recibo, para «constatar» la recepción del mensaje.

Esa tesis también desconoce que, quien se considere afectado con la forma en que se surtió la notificación, tiene la oportunidad de exponerlo ante el juez del asunto bajo juramento y por la vía de la solicitud de declaratoria de nulidad, como se explicó. A modo de ejemplo, es viable resaltar que incluso los sistemas de confirmación de recibo automático o las certificaciones emitidas por empresas de servicio postal autorizadas -a pesar de que están dotados de cierto grado de fiabilidad- también son susceptibles de equívoco y, para esos eventos, igualmente tiene el demandado la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad para que los términos que se le otorgan no comiencen a rodar sino desde la fecha de recepción de la misiva.

Dicho en otros términos, dar absoluta y dócil veracidad al acuse de recibo, sería tanto como predicar que en los casos en los que el demandante los acredite, no tendría derecho el demandado a cuestionarlos por la vía de la solicitud de nulidad, lo que a todas luces emerge desproporcionado.

Incluso, en el sistema de notificación personal del Código General del Proceso, existe la posibilidad de que, con soporte en una certificación de entrega o recibo emitida por empresa de servicio postal, comience a correr un respectivo término; no obstante, ello no impide que se tramiten solicitudes de nulidad por las eventuales inconformidades derivadas de la forma en que se surtió el enteramiento.

> ***3.7****. En síntesis, tratándose de notificación personal por medios electrónicos, es el demandante quien, en principio, elije los canales digitales para los fines del proceso. En tal sentido debe colmar las exigencias que el legislador le hizo con el propósito de demostrar la idoneidad de la vía de comunicación escogida. Por su parte, el Juez tiene la posibilidad de verificar esa información con el fin de agilizar eficazmente el trámite de notificación y el impulso del proceso.*
>
> *El enteramiento se entiende surtido dos días hábiles siguientes al envío del mensaje al canal seleccionado y, por regla general, allí empieza a contar el término de contestación o traslado, salvo que el mismo demandante o el juez se percaten de que el mensaje no fue enviado con éxito, o cuando la persona que se considere afectada solicite la nulidad de lo actuado y, en ese trámite, sobre la cuerda de la nulidad procesal proponga el debate probatorio en torno a la efectiva recepción del mensaje.*
>
> *Además, como el legislador no estableció prueba solemne para demostrar las circunstancias relativas al envío y recepción de la providencia objeto de notificación, es dable acreditar lo respectivo mediante cualquier medio de prueba lícito, conducente y pertinente, dentro de los cuales pueden encontrarse capturas de pantalla, audios, videograbaciones, entre otros medios de naturaleza documental que deberán ser analizados en cada caso particular por los jueces naturales de la disputa.”*

Para concluir, la Sala advierte que los tèrminos procesales para que la demandada MEGALINEA S.A. allegara contestaciòn comenzaron a contabilizarse el 27 de agosto de 2021 al haber sido recepcionado el correo sin que ello implique que los tèrminos procesales queden supeditados al acuse de recibo del mensaje de datos por parte del destinatario, pues lo que importa es la recepciòn del mensaje, tal como sucedió en este caso.

Agotada como se encuentra esta instancia, por el estudio de los motivos de apelación esbozados por la demandada Megalinea S.A., conforme las consideraciones expuestas, se confirmará el proveído apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL**,

RESUELVE

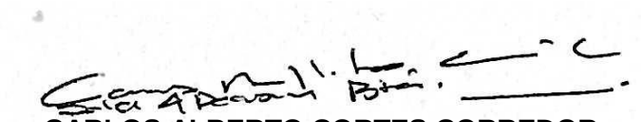
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la sociedad demandada.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000,oo, a cargo de la parte demandada, Megalinea S.A. la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUIDO POR MARIA CONSTANZA TALERO VARGAS CONTRA COLPENSIONES y PORVENIR S.A. (RAD. 08 2020 00333 01).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el artículo 13 numeral 1º de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad demandada PORVENIR S.A. (“*18. Recurso de Reposición y Apelación.Porvenir.pdf”, expediente digital)* contra la providencia proferida por la Juez Octava Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 30 de marzo de 2022 (*“0179AutoFijaFecha.pdf”* - expediente digital), por medio del cual tuvo por no contestada la demanda por haberse presentado el escrito por fuera de los términos previstos en la ley.

Como motivos de inconformidad, la convocada a juicio aduce en el recurso que ocupa a la Sala *(archivo 18 RecursodeApelacion.pdf, páginas 2 a 8):*

> *“La demanda en este asunto, se admitió mediante auto el 28 de mayo de 2021;*
>
> *En nuestra condición de apoderados de la demandada Porvenir S.A., el 02 de junio de 2021, es decir, antes del inicio del trámite que realizó el apoderado de la parte actora, -30 de junio de 2021-, solicitamos la notificación del auto admisorio de la demanda, oportunidad en la que informamos las direcciones electrónicas para recibir las notificaciones como apoderados – Se anexa soporte- (…).*
>
> *En este asunto, sin duda la demandada Porvenir S.A., debía comparecer al proceso a través de apoderado y así lo hizo, no solo el 02 de junio de 2021, cuando la Dra.*

> *Elizabeth Espinel solicitó la notificación personal del auto admisorio de la demanda, sino también con la presentación del escrito de contestación demanda radicado el 27 de julio de 2021, lo que evidencia que nuestra comparecencia como apoderados de la demandada PORVENIR S.A, fue anterior al trámite que inició la parte actora para intentar notificar directamente a esta demandada…*
>
> 1. *Como apoderados en el proceso del asunto, solicitamos el 02 de junio de 2021, la notificación personal -virtual-, del auto admisorio de la demanda, sin obtener respuesta del despacho;*
> 2. *En el auto que se recurre, indica el Despacho que, la parte demandante el 30 de junio de 2021, - casi un mes después que como apoderados presentamos la solicitud de notificación-, remitió a la dirección electrónica de la demanda la notificación, lo que no nos permitió conocer del trámite.*
> 3. *El 27 de julio de 2021, tres (03) días antes que el apoderado intentara la notificación directamente con Porvenir S.A., en representación de esta presentamos el escrito de contestación para intentar que nos notificaran entonces por conducta concluyente".*

En criterio del togado, y teniendo en cuenta la exequibilidad condicionada declarada por la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, respecto del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, adoptado de manera permanente a través de la Ley 2213 de 2022, el término para presentar el escrito contestatario no debe contabilizarse a partir del envío del correo electrónico remitido por la parte actora el 30 de junio de 2021, sino, por el contrario, se debió notificar de manera personal a PORVENIR S.A., conforme a la solicitud efectuada mediante correo electrónico el día 02 de junio de 2021.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Inicialmente, señala la Sala, el auto que dé por no contestada la demanda, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Pues bien, el artículo 74 del C.P.T. prevé que "*admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados.*"

Por su parte, el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, que modificó transitoriamente el Código General del Proceso, y vigente para la fecha de esta controversia (13 de octubre de 2020 - acta de reparto)[1], establece:

> *"**ARTÍCULO 8. Notificaciones personales.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.***
>
> *Para los fines de esta norma **se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos**.*
>
> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*
>
> ***PARÁGRAFO** 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.*
>
> ***PARÁGRAFO 2.** La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales."* (Negrilla y subrayas de la Sala).

Dicha disposición fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia C-420 de 2020, declaró exequible el inciso tercero de manera condicionada bajo el entendido que: "*el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje."*[2].

---

[1] *Archivo 01Acta Reparto.pdf, expediente digital).*

[2] *Numeral tercero de la parte resolutiva.*
Para arribar a dicha decisión, la Corte consideró, entre otras cosas que:
"334.Delimitación del asunto. El artículo 8° del Decreto sub examine señala que las notificaciones personales podrán efectuarse enviando la providencia mediante mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio suministrado por la parte interesada en que se efectúe la notificación. También prevé que, para ello, no se exige citación previa o aviso físico o virtual, y que los anexos que deban entregarse para un traslado por correo electrónico deben enviarse por el mismo medio. Para el efecto, el interesado debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica, o sitio suministrado, corresponde al utilizado por la

persona a notificar, y deberá informar cómo obtuvo la información, y aportar las evidencias correspondientes. En estos casos, la notificación se entenderá realizada transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje. Para el efecto, se permite el uso de sistemas de confirmación del recibo de correos electrónicos o mensajes de datos[526]. Por último, el parágrafo 2 del artículo 8° prevé que la autoridad judicial podrá solicitar información sobre las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, "o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales".

335.Intervenciones ciudadanas. Algunos intervinientes se pronunciaron sobre este artículo, y solicitaron su inexequibilidad total o parcial. Estas intervenciones señalan que: (i) la notificación por esta vía conculca el derecho de defensa y, por ende, el debido proceso, dado que impide que el demandado que no cuenta con correo electrónico, o que no lo usa con frecuencia, tenga conocimiento de un proceso en su contra[527]; (ii) el Decreto omite regular el derecho del demandado a autorizar el medio mediante el cual quiere ser notificado de las actuaciones del proceso[528] y (iii) la disposición viola los principios de contradicción y celeridad procesal, dado que una simple manifestación juramentada permite derribar el acto procesal que da inicio al proceso, en tanto crea una nueva causal de nulidad[529].

336.Por otro lado, consideran que (iv) la autorización para que la información se extraiga de redes sociales no ofrece seguridad jurídica alguna, salvo que el titular acepte ser notificado de esta forma, por lo que se vulnera el principio de publicidad, y los derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica[530]; (v) la medida vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto que, durante la emergencia, reduce el plazo previsto en el art. 291 del CGP a 2 días, sin justificación alguna[531]; (vi) la medida es menos garantista que el régimen ordinario, dado que este último previene cualquier problema en la recepción de la comunicación y, por ello, contempla el envío de 2 mensajes de datos sucesivos (citación y aviso) con un intervalo suficiente (mínimo de 5 días)[532]; y, por último, (vii) la exigencia relativa a que se declare cómo se obtuvo la dirección de correo para efectuar la notificación es desproporcionada y desconoce la presunción de buena fe[533].

337. En contraste, otros intervinientes manifestaron que (i) es lógico que un demandante pueda escoger entre múltiples canales para notificar, habida cuenta de las diversas formas de interacción social por medios digitales que existen en la sociedad[534]; (ii) la medida facilita el trámite de notificación que las medidas de aislamiento habían imposibilitado[535]; (iii) la medida agiliza los procesos, pues evita las funciones secretariales presenciales de los servidores, y permite el conocimiento de las actuaciones en el día en que ocurren[536]; (iv) el término concedido por la medida para tener surtida la notificación del sujeto procesal es razonable, pues le permite revisar su bandeja de entrada en el canal digital y ejercer la defensa o cumplir la decisión[537]; (v) al admitir que el juez consulte varias fuentes para obtener la dirección electrónica de notificación del demandado, la medida evita que se acuda directamente al emplazamiento en los casos en que no se conozca la dirección electrónica o física de la parte demanda o exista duda sobre su autenticidad[538] y (vi) la medida adopta medios de control de intento de fraude o suplantación en el trámite[539].

338. En atención a estas consideraciones, le corresponde decidir a la Sala si el artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020 vulnera la garantía de publicidad, integrada al derecho fundamental al debido proceso, al permitir que la notificación del auto admisorio se remita al correo electrónico o sitio suministrado por la parte demandante o identificado mediante las consultas autorizadas en el parágrafo del artículo.

339. El artículo 8º del Decreto sub examine es compatible con la Constitución Política por cuanto no vulnera prima facie la garantía de publicidad. Tal como se explicó en precedencia (epígrafe "(a) La garantía de publicidad" supra), la Constitución no prevé un único modo de notificación para dar cumplimiento al principio de publicidad. Únicamente exige que aquel que sea seleccionado por el legislador tenga la capacidad de dar a conocer las decisiones que deban transmitirse a los interesados para el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción[540]. En principio, la Corte encuentra que la notificación del auto admisorio de la demanda mediante la remisión de un correo electrónico a la parte interesada es una medida plausible para lograr que esta conozca la existencia de un proceso en su contra y ejerza aquellos derechos.

340. En efecto, la Sala advierte que efectuar las notificaciones personales por medio del envío de la providencia como mensaje de datos no es una novedad[541]. Así, el proceso arbitral[542] y el proceso contencioso administrativo[543] prevén la notificación de la primera providencia del proceso mediante mensaje de datos. En materia de procedimiento administrativo, el Decreto Ley 019 de 2012 también prevé este tipo de notificaciones para los actos administrativos tributarios a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–[544]. En particular, estas últimas disposiciones fueron declaradas exequibles por esta Corte, al considerar que "la realización del principio de publicidad, '[…] como un mandato de optimización, depende de las posibilidades fácticas y jurídicas concurrentes"[545].

341. Dado que no se observa una vulneración a una garantía propia del derecho al debido proceso, la constitucionalidad de esta medida dependerá de si es una respuesta proporcionada a las posibilidades fácticas y jurídicas que impone la pandemia y las medidas adoptadas para su contención. Para el efecto, la Sala aplicará un juicio de proporcionalidad de intensidad leve (cfr., sección 13.6, en particular el epígrafe, "i. El juicio de no discriminación en la jurisprudencia constitucional"), dado que se trata de un

asunto respecto del cual el legislador goza de un amplio margen de configuración y se ha constatado la inexistencia de una afectación al derecho al debido proceso.
342 El artículo 8º persigue una finalidad que no está constitucionalmente prohibida. En efecto, la previsión de la notificación personal por mensaje de datos busca varias finalidades que no están prohibidas por la Constitución, y que, además, son constitucionalmente importantes, a saber: (i) dar celeridad a los procesos a los que se aplica el Decreto Legislativo sub examine; (ii) proteger el derecho a la salud de los servidores y usuarios de la administración de justicia; (iii) garantizar la publicidad y la defensa de las partes mediante la incorporación de reglas de garantía y control y (iv) reactivar el sector económico de la justicia, a fin de garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes de allí derivan su sustento.
343. La medida dispuesta en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020 es idónea. La notificación personal mediante mensaje de datos es una disposición efectivamente conducente para lograr los fines propuestos porque: (i) elimina la obligación de comparecer al despacho para notificarse, lo que reduce el riesgo para la salud y la vida de funcionarios y sujetos procesales; (ii) prescribe un remedio procesal para aquellos eventos en los que el interesado en la notificación no recibió el correo; (iii) prevé condiciones para garantizar que el correo, en efecto, es el utilizado por la persona a notificar; y (iv) permite que el interesado, en efecto, conozca la providencia a notificar, en tanto los correos electrónicos ofrecen seguridad y permiten probar la recepción y el envío de aquella.
344. Así las cosas, primero, la Sala observa que, para la elección del medio, el Gobierno tomó en consideración que: (i) el comportamiento del virus es impredecible y requiere la limitación del contacto físico; (ii) la remisión de mensajes de datos elimina la necesidad de contacto físico en los despachos judiciales para la notificación y (iii) trasladar la carga a la parte permite agilizar el trámite de los procesos. Por tanto, no encuentra la Sala evidencia que permita concluir que el Gobierno incurrió en un error manifiesto al juzgar la idoneidad de la medida para reducir el riesgo sanitario de las partes procesales.
345. Segundo, la medida previene cualquier posible limitación que esta pueda generar sobre el contenido iusfundamental del debido proceso por cuanto prevé un remedio procesal eficaz para proteger el derecho de defensa del notificado, que no se enteró de la providencia. En efecto, la disposición prevé que, en este caso, la parte interesada puede solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado. Esta disposición, contrario a lo argumentado por los intervinientes, no crea una causal adicional de nulidad, puesto que el numeral 8 del artículo 133 del CGP ya prevé la nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda. El artículo 8° examinado obliga a la parte interesada a tramitar la nulidad por esta causal, según el procedimiento previsto en los artículos 132 a 138 del CGP, lo cual, a su vez, garantiza los derechos de la parte accionante, que podría verse perjudicada con la declaratoria de nulidad. Por otro lado, una lectura razonable de la medida obliga a concluir que, para que se declare nula la notificación del auto admisorio por la razón habilitada en el artículo 8° no basta la sola afirmación de la parte afectada de que no se enteró de la providencia. Es necesario que el juez valore integralmente la actuación procesal y las pruebas que se aporten en el incidente de nulidad para determinar si en el trámite de la notificación personal se vulneró la garantía de publicidad de la parte notificada. En otras palabras, la Sala encuentra que la disposición no libra a la parte de cumplir con la obligación de probar los supuestos de hecho que soportan la causal de nulidad alegada. Por el contrario, la medida compensa la flexibilidad introducida por la norma, con la necesidad de proteger los derechos de defensa y contradicción de las partes, mediante la agravación de las consecuencias jurídicas, incluso con tácitas implicaciones penales, a fin de dotar de veracidad la información que sea aportada al proceso. Razón por la cual, la Corte constata que este mecanismo más que generar un sacrificio a las garantías del debido proceso, busca garantizarlas durante la emergencia.
346. Tercero, la medida prevé condiciones que contribuyen a garantizar que el correo en el que se practicará la notificación sea, en efecto, el utilizado por la persona a notificar. Así, el inciso 5 del artículo que se estudia dispone que el interesado en la notificación debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al que utiliza la persona a notificar, para lo cual deberá indicar la manera en que obtuvo la información y aportar evidencias. A juicio de la Sala, este cambio en el modelo de notificación personal no es extraño ni novedoso, en tanto pretende, en virtud del deber de colaboración con las autoridades que tienen las partes procesales, garantizar que la dirección electrónica o sitio en el que se va a efectuar la notificación personal sea, en efecto, una dirección utilizada por el sujeto a notificar, a fin de realizar los principios de publicidad, celeridad y seguridad jurídica, y de garantizar los derechos de defensa y contradicción.
347. Además, el parágrafo 2 autoriza al juez para verificar la información de la dirección electrónica para notificar al demandado en redes sociales o páginas Web. Algunos intervinientes consideran que esta autorización no ofrece seguridad jurídica alguna, salvo que el titular acepte ser notificado de esta forma. Sin embargo, la Sala discrepa de la interpretación de los intervinientes habida cuenta que la medida no tiene objeto distinto al de dotar a las autoridades de herramientas acordes con los avances tecnológicos, que faciliten la obtención de la información, y lleven al interesado a conocer las actuaciones en su contra. De manera que, más que presentarse como la vía principal para obtener la información, se trata de una herramienta adicional para que el juez, como director del proceso, pueda dar celeridad al trámite[546]. Además, la Sala advierte que el ejercicio de esta potestad procede, prima facie, solo frente a aquellas personas naturales que no están registradas en ninguna base de datos pública. Por tanto, es la falta de registro oficial de los datos de las personas a notificar, lo que faculta a la autoridad para obtener la información por estas otras vías. En otras palabras, la facultad de verificación de información en redes

sociales y páginas Web, prevista en el parágrafo 2 del artículo 8º, no se predica respecto de: (i) entidades públicas u órganos de la administración, (ii) personas jurídicas, (iii) comerciantes o personas naturales o jurídicas que estén en el registro mercantil y (iv) abogados, pues en relación con todos ellos ya existen bases de datos legalmente reconocidas y utilizadas para diversos fines.

348. La Sala considera que la medida aquí analizada es efectivamente conducente para lograr notificar a las partes y agilizar y facilitar el trámite de los procesos judiciales durante la emergencia, en tanto que: (i) la naturaleza semi-privada[547] de la información consignada en páginas Web y redes sociales, que se origina en un acto voluntario, regido por normas principalmente de derecho privado, es publicada a terceros sin discriminación alguna, y con el pleno conocimiento por parte de su titular; (ii) si bien es cierto que el uso de redes sociales o páginas Web puede, en principio, ofrecer problemas relacionadas con la certeza o calidad de la información, garantía de su uso, o incluso casos de confusión o error por homónimos, es al juez, como garante del proceso, al que le corresponde, en cada caso, verificar la razonabilidad y pertinencia de usar la información suministrada en estos canales[548]. Todo esto, teniendo especial sensibilidad con la realidad generada por la pandemia, y con respeto del dinamismo de los procesos, las garantías procesales y las normas de la administración de datos personales sistematizadas por la jurisprudencia[549]

*349. **Cuarto, la Sala advierte que la disposición sub judice prevé el uso sistemas de confirmación de recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Estos instrumentos brindan mayor seguridad al proceso y ofrecen certeza respecto del recibo de la providencia u acto notificado. En efecto, según lo informado por el CSDJ, dentro de las herramientas colaborativas de Microsoft Office 365 provistas a los servidores judiciales se incluye el servicio de confirmación de entrega y lectura de mensajes. Así, cuando se envía un correo desde la cuenta institucional de la Rama Judicial con solicitud de confirmación de entrega, el servidor de correo de destino responderá inmediata y automáticamente enviando un mensaje informativo al remitente acerca de la recepción del correo. En los casos en que la dirección del correo sea incorrecta o no exista, de manera automática, el servidor, en un periodo máximo de 72 horas, informará sobre la imposibilidad de recepción del correo[550].***

*350.El Consejo de Estado[551], la Corte Suprema de Justicia[552] y la Corte Constitucional[553] coinciden en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante la cual se notifica (sea cual fuere el medio elegido para el **efecto) sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió efectivamente tal comunicación.** Así, la garantía de publicidad de las providencias solo podrá tenerse por satisfecha con la demostración de que la notificación ha sido recibida con éxito por su destinatario.*

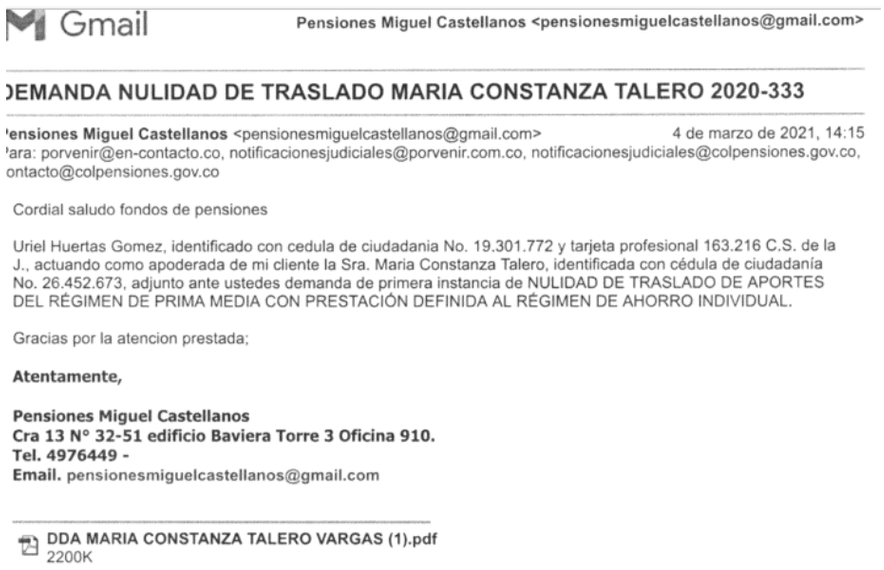
*351. El inciso 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020 prevé que "la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación". Una regla semejante se contiene en el parágrafo del artículo 9°, según el cual, "Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente". **Al ser consultado sobre las razones que motivaron estos apartados normativos, el Gobierno nacional informó que la medida tiene por objeto conceder un término razonable para que los sujetos procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del reconocimiento de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet[554]. De esta respuesta no se sigue que, al adoptar la medida, el Gobierno pretendiera desconocer el precedente descrito relativo a la validez de la notificación a partir de su recepción por el destinatario –en el caso de la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, que no de su envío.***

*352.No obstante, la Corte encuentra que, tal como fue adoptada la disposición, es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada o del traslado no corresponde a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación implicaría admitir que, aun en los eventos en que el mensaje **no haya sido efectivamente recibido** en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío**. Una interpretación en este sentido desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución.***

*353.Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el régimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta simplificación se admitan interpretaciones que desconozcan la teleología de las notificaciones, esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto **empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.** A juicio de la Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida que desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales mediante correo electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en el artículo 8°, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para valorar su ocurrencia."*

Atendiendo lo anterior, y al tenor de las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal Constitucional, cuando la notificación se realice a través de mensaje de datos, la misma se entenderá surtida contados dos días a partir de i) la fecha en que se acuse recibo o ii) la fecha en que el mensaje **haya sido efectivamente recibido**, si la misma puede verificarse a través de cualquier medio.

En el caso bajo examen y para dilucidar las actuaciones surtidas en el proceso que ocupa la Sala, se tiene, i) Sometida la demanda a reparto e inadmitida la misma, la parte actora procedió a poner en conocimiento de las demandadas, entre ellas, PORVENIR S.A., el escrito introductorio con el fin de corregir los yerros indicados en auto del 25 de febrero de 2021 (“*03AutoInadmite.pdf” del expediente digital),* enviando el correo el 4 de marzo de 2021 al email notificacionesjudiciales@porvenir.com.co., conforme a la siguiente imagen:



Gmail Pensiones Miguel Castellanos <pensionesmiguelcastellanos@gmail.com>

)EMANDA NULIDAD DE TRASLADO MARIA CONSTANZA TALERO 2020-333

'ensiones Miguel Castellanos <pensionesmiguelcastellanos@gmail.com> 4 de marzo de 2021, 14:15
'ara: porvenir@en-contacto.co, notificacionesjudiciales@porvenir.com.co, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, ontacto@colpensiones.gov.co

Cordial saludo fondos de pensiones

Uriel Huertas Gomez, identificado con cedula de ciudadania No. 19.301.772 y tarjeta profesional 163.216 C.S. de la J., actuando como apoderada de mi cliente la Sra. Maria Constanza Talero, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.452.673, adjunto ante ustedes demanda de primera instancia de NULIDAD DE TRASLADO DE APORTES DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL.

Gracias por la atencion prestada;

Atentamente,

Pensiones Miguel Castellanos
Cra 13 N° 32-51 edificio Baviera Torre 3 Oficina 910.
Tel. 4976449 -
Email. pensionesmiguelcastellanos@gmail.com

DDA MARIA CONSTANZA TALERO VARGAS (1).pdf
2200K

Surtido lo anterior, y admitida la demanda mediante auto del 28 de mayo de 2021 (*archivo “08AutoAdmite.pdf” del expediente digital),* la demandada PORVENIR S.A.

(…)

392. Al examinar el inciso 3 del artículo 8° y el parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020, la Corte encontró que tal como fueron adoptadas las disposiciones es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada –en relación con la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, no correspondan a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución, en tanto implica admitir que, aun en los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.”

otorgó a través de apoderado poder mediante correo del 2 de junio de 2021, solicitando se surtiera la notificación personal, conforme lo dispone al contenido del Decreto 806 de 2020, vigente para dicha data.

Posteriormente el 30 de junio de 2021 la parte actora a través de la empresa de correo certificado -RAPIENTREGA-, surtió la notificación prevista en el decreto ibidem, enviando el mensaje de datos al email, notificacionesjudiciales@porvenir.com.co; correo que fue efectivamente recepcionado en el servidor de PORVENIR S.A., pues así lo acredita el certificado que reposa en la página 3 del archivo 12TramiteNotificaciòn.pdf, siendo las 10:23:45:



Que el día 2021-06-30 esta oficina recepcionó y proceso una notificación que dice contener notificación con la siguiente información:

Datos de remitente

Nombre: URIEL HUERTAS GOMEZ
Contacto: jlato39@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección: pensionesmiguelcastellanos@gmail.com 110811 BOGOTA BOGOTA
Teléfono: 3133908770
Identificación: C Cedula 19301772

Datos de destinatario

Nombre: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
Contacto: MIGUEL LARGACHA MARTINEZ REP LEGAL PORVENIR
Dirección: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co 111021 BOGOTA BOGOTA
Nombre: 0

Datos de notificación

Ciudad notificación: BOGOTA BOGOTA
Juzgado: JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
Departamento juzgado: BOGOTA
Demandante: MARIA CONSTANZA TALERO
Radicado: 2020 00333
Naturaleza: ORDINARIO LABORAL NOTIFICACION 291 CGP
Demandado: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR Y OTROS
Notificado: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
Fecha auto: 0

Correo electrónico destinatario: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co
Asunto: NOTIF 291 Notificacion art. 8 Decreto 806 2020 HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1HUOTIIR-JK0KUTI3ZUW-Q-
Token único del mensaje de datos: 3D68EFCE-8877-4D0A-A92B-18E4C786C33E

Processed - [Correo electrónico procesado]

FECHA	FECHA SERVICIO	DETALLE SERVICIO
2021-06-30 08:29:10	2021-06-30T14:29:17.1928683Z	OK

Delivery - [Correo electrónico entregado]

FECHA	FECHA SERVICIO	DETALLE SERVICIO
2021-06-30 10:23:45	2021-06-30T14:29:24Z	smtp;250 2.0.0 OK 00/28-09108-EBF7CD86

FiveMail 2021 BOGOTA COLOMBIA

Junto con el correo en comento, se adjuntaron documentos por medio de Google Drive, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020.

Ahora, es importante resaltar, la dirección electrónica a la que se envió el mensaje de datos, es la misma registrada como "*notificaciones judiciales"* en el certificado de existencia y representación legal aportado tanto por el demandante con el escrito introductor (página 27, "*02.Demanda.pdf*") como por la demandada Porvenir S.A. al relacionar en el acápite de notificaciones el mismo correo electrónico (*página 33, "11.ContestaciònPorvenir.pdf"*).

En vista de lo anterior, se tiene que la recepción del mensaje fue el 30 de junio de 2021, fecha en la cual efectivamente se recibió la notificación, según la certificación expedida por **RAPIENTREGA**, por lo que, aplicando la normatividad anteriormente relacionada, el término para contestar fenecía el 19 de julio de 2021 (1 y 2 de junio

de 2021 se entendió surtida la notificación y el término para contestar corrió entre el 6 al 19 del mismo mes y año), plazo que debió acatarse por parte de la enjuiciada recurrente ya que, si bien, solicitó mediante correo del 2 de junio de 2021, se surtiera la notificación personal, en los términos del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, al no existir pronunciamiento del a quo, era procedente atender la notificación que efectuó el apoderado de la demandante, nótese, que este extremo probó la recepción del correo, así como se remitió el mensaje de datos al email registrado para notificaciones judiciales en el certificado de Cámara y Comercio al tratarse de una persona jurídica.

Así las cosas, la Sala no acoge los argumentos expuestos por PORVENIR S.A. al considerar que la juez computó los términos desde la notificación del auto admisorio, esto es, desde la recepción del correo electrónico, siendo esta la manera correcta de contabilizar el plazo ya que, si bien el 2 de junio de 2021 Porvenir remitió un correo al juzgado para efectos de proceder a la notificación, se debe decir que, esta carga procesal le incumbía a la parte actora y así lo hizo. Además, Porvenir pretendía ser notificado conforme al Decreto 806 de 2020, no pudiéndose interpretar que, si la notificación no la hizo el despacho de manera directa por secretaria, no tiene validez alguna la única notificación surtida en este proceso.

Así mismo, observa la Sala, el recurrente alega que el 27 de julio de 2021 presentó la contestación a la demanda, enfatizando en su escrito: "***antes del inicio del trámite que realizó el apoderado de la parte actora, -30 de junio de 2021",*** *página 4, archivo 18ContestacionRecursoReposicionApelacion.pdf),* situación que no se comparte, ya que una vez se admitió la demanda, PORVENIR S.A. dirigió el correo al a quo el 2 de junio de 2021 al juzgado de primera instancia y, a los 28 días **la parte actora realizò la notificación**, teniendo plena validez ya que el mensaje de datos fue efectivo y se dirigió a la dirección electrónica dispuesta por Porvenir. Se indica en este punto, es válida la notificación en la medida que el a quo no notificó a Porvenir, conforme lo solicitó el 2 de junio de 2021, entonces era deber de la enjuiciada hacer seguimiento y dar estricto cumplimiento a la notificación que si fue recibida en el buzón electrónico.

Aunado a ello, si se contemplara la posibilidad de tener por notificada a PORVENIR S.A. por conducta concluyente en virtud al artículo 301 del C.G.P., se debe enfatizar, el memorial remitido a través de correo del 2 de junio de 2021 no cumplía las características requeridas en la norma, pues no se plasmó que tuviera conocimiento

de las providencias dictadas dentro del proceso. Sumado a esto, la juzgadora de primer grado reconoció personería adjetiva para actuar al Doctor **ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ** como apoderado de **PORVENIR S.A.** mediante auto de fecha 30 de marzo de 2022 (archivo 17AutoFijaFecha.pdf), siendo claro que en dicha calenda ya se había surtido la notificación por parte del apoderado de la actora, siendo impropio tener por notificado por conducta concluyente a la sociedad recurrente en este acto.

No sobra consignar para esta tematica y en atenciòn al recurso de apelaciòn que ocupa a la Sala, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil unificò la posiciòn respecto al momento en que debe entenderse como surtida la notificaciòn personal, disponiendo mediante providencia STC-16733-2022, radicaciòn No. 68001-22-13-000-2022-00389-01 del 14 de diciembre de 2022 y ponencia del Doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque, lo siguiente:

> *"Por esa razón, la Sala encuentra en esta ocasión la necesidad de unificar su posición en cuanto al momento en el que debe entenderse surtida la notificación personal por medios digitales y la época en la que debe empezar a correr el término que de la providencia notificada derive.*
>
> *3.5.1. Para ello, es necesario resaltar que la intención del legislador con la promulgación del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, al regular el trámite de la notificación personal a través de medios electrónicos, no fue otra que la de ofrecer a las partes y apoderados un trámite alterno de enteramiento acorde con los avances tecnológicos de la sociedad. Un procedimiento quizás menos oneroso en tiempo y dinero, pero igual de efectivo al dispuesto en el Código General del Proceso en el que las partes deben acudir necesariamente a empresas de servicio postal autorizadas a remitir sus citatorios y avisos. En línea con ese propósito, consagró una serie de medidas tendientes a garantizar la efectividad de una notificación más célere y económica, pero con plenas garantías de defensa y contradicción para el demandado.*
>
> *i). Como ya se vio, la primera de ellas fue la de exigir al libelista que en su demanda cumpliera las tres cargas descritas en precedencia, esto es, el juramento relativo a que el canal escogido es el utilizado por el demandado, la explicación de la forma en la que lo obtuvo y la prueba de esa circunstancia.*
>
> *ii). La segunda, consistió en otorgar al juez la facultad de verificar la «información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las (…) entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales» (Parágrafo 2° del art. 8 Precepto sobre el cual se predicó en juicio de constitucionalidad que:*
>
> > *«(…) la medida no tiene objeto distinto al de dotar a las autoridades de herramientas acordes con los avances tecnológicos, que faciliten la obtención de la información, y lleven al interesado a conocer las actuaciones en su contra. De manera que, más que presentarse como la vía principal para obtener la información, se trata de una herramienta adicional para que el juez, como director del proceso, pueda dar celeridad al trámite (…).*

> *La Sala considera que la medida aquí* ***analizada es efectivamente conducente para lograr notificar a las partes y agilizar y facilitar el trámite de los procesos judiciales»*** *(Subrayado y resaltado propio)*
>
> *iii). La tercera, relacionada con el deber de acreditar el «envío» de la providencia a notificar como mensaje de datos al canal elegido por el demandante. En últimas, es de esa remisión que se deriva la presunción legal contenida en el canon en cita, esto es, que «se entenderá realizada» la notificación:*
>
> *«**La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje** y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje» (Subrayado y resaltado propios).*

Al respecto, no sobra precisar que una cosa es el momento en el que se entiende surtido el enteramiento -dos días hábiles siguientes al envío de la misiva- y otra distinta es el inicio del término derivado de la providencia notificada que puede verse afectado si se demuestra que el destinatario no recibió el mensaje de datos.

Sobre la distinción en comento esta Sala predicó recientemente que:

*La ley 2213 de 2022, por cierto, **replica en su inciso tercero una regla compuesta de dos partes**, la primera idéntica a la que consagraba el Decreto 806 de 2020 («La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje»), y la segunda con ciertas modificaciones, orientadas a que el cómputo de los términos de traslado inicie a partir del momento en que «el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje». Como puede verse, en ambos casos **la pauta legal diferencia dos fenómenos muy distintos: la notificación personal de una providencia que está sujeta a esa especial forma de enteramiento, y el hito inicial del término de traslado de la demanda**, es decir, el punto de partida del plazo que confiere la ley al demandado para ejercer su derecho de contradicción. (STC10689-2022)*

*iv. También se consagró la **posibilidad** que tienen las partes de «implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos», obvia resaltar, sin limitarse al correo electrónico como canal de comunicación posible.*

Esa diferenciación se realizó con el fin de precisar que, al margen de que se hubiese surtido la notificación con el envío y recepción del mensaje, el término no podía empezar a rodar hasta tanto se garantizara al usuario el acceso de la demanda y sus anexos, siempre que no se hubiesen compartido con la radicación del libelo inicial (STC8125- 2022).
En esa línea de pensamiento, avaló la opción de «hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificada y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal -UPU- con cargo a la franquicia postal».

v. Finalmente, como una de las medidas más garantistas del derecho de defensa y contradicción del demandado, el legislador optó por salvaguardar expresamente el derecho que asiste al destinatario de la notificación, de ventilar sus eventuales inconformidades con la forma en que se surtió el enteramiento mediante la vía de la solicitud de declaratoria de nulidad procesal. En concreto, señaló que:

> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada **deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.***

Así las cosas, de lo expuesto no queda duda que el demandante debe cumplir unas exigencias legales con el objetivo de dar convicción sobre la idoneidad y efectividad del canal digital elegido, actividad sobre la cual el juez tiene facultades oficiosas de verificación. Tampoco hay inconveniente en afirmar que para la notificación personal por medios electrónicos es facultativo el uso de los sistemas de confirmación del recibo de los distintos canales digitales y del servicio de correo electrónico postal certificado

Igualmente, no hay problema en admitir que -por presunción legal- es con el envío de la providencia como mensaje de datos que se entiende surtida la notificación personal y, menos, con reconocer que no puede iniciar el cómputo del término derivado de la determinación notificada si se demuestra que el destinatario no recibió la respectiva comunicación.

3.6. Escenario para discutir irregularidades en torno a la notificación personal con uso de las TIC

Del panorama recreado -armonizado con la práctica judicial- es dable colegir que, por regla general, si el demandante supera las exigencias iniciales previstas por el legislador tendientes a demostrar la idoneidad del canal digital elegido y el juez hace uso de los poderes de verificación que le otorga el legislador, hay una alta probabilidad de que ese medio resulte efectivo para el enteramiento del demandado o convocado.

De igual forma, para los posibles casos en los que, a pesar de lo anterior, exista anomalía con la notificación, tiene el demandado la posibilidad de acudir a la solicitud de declaratoria de nulidad.

Con ese razonamiento, podría concluirse que el establecimiento de una regla de carácter general según la cual deba requerirse en todos los casos al demandante para que, además de cumplir los requisitos del inciso 2° del artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, demuestre que su contraparte recibió la comunicación por él remitida, podría resultar excesiva, incompatible con el principio constitucional de buena fe, e incluso, contraria al querer y al tenor de la normativa en comento.

Y es que, vistas bien las cosas, no resulta sensato y acorde a los postulados legales de implementación de las TIC, celeridad de los trámites y tutela jurisdiccional efectiva, que se hagan una serie de exigencias previas al demandante tendientes a verificar la idoneidad del canal de comunicación elegido para los fines del proceso, si, de todas formas, ninguna consecuencia jurídica pudiera derivarse de ello.

Resáltese que, al leer cuidadosamente la norma, se advierte que en ningún momento se impone al demandante - o al interesado en la notificación- la carga de probar el acceso del destinatario al mensaje. Lo que la norma procura es que no pueda empezar a andar el término derivado de la providencia a notificar si la misma no arribó a su receptor. De allí que no sea dable a los juzgadores imponer responsabilidades no previstas por el legislador.

En ese orden, como quiera que la ley no dispone que la prueba del acuse de recibo deba ser aportada por el demandante, bien puede inferirse que se trata de una actividad que también puede cumplir el demandado en los casos en que considere que no tuvo oportuno acceso a la comunicación remitida. Justamente es a él a quien le Radicación n° 68001-22-13-000-2022-00389-01 35 interesa demostrar la falta de acceso al mensaje con el fin de que no se entienda iniciado el cómputo del término otorgado.

Es en el trámite de la eventual nulidad -y no la etapa inicial del litigio- donde se abre el sendero para que se debata la efectividad o no del enteramiento y, sobre todo, del hito en el que empiezan a correr los términos derivados de la providencia a

notificar. Es en ese escenario en el que cobran real importancia las pruebas que las partes aporten para demostrar la recepción, o no, de la misiva remitida por el demandante.

Afirmar lo contrario desdibujaría la desformalización del proceso y la celeridad añorada por el legislador, así como ninguna garantía adicional ofrecería al demandado, quien, en todo caso, siempre tendrá la posibilidad de cuestionar el enteramiento.

No en vano, al declarar la exequibilidad condicionada de esta norma, la homologa constitucional procuró textualmente ***«orienta[r] la aplicación del remedio de nulidad*** *previsto en el artículo 8°, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio* ***para valorar su ocurrencia».***

Ahora bien, algunos podrían pensar que tal interpretación no resulta suficiente para garantizar que el destinatario recibió la comunicación y que, en tal sentido, el cómputo de términos solo puede andar cuando exista solemne prueba de ello. Sin embargo, esa postura opta por Radicación n° 68001-22-13-000-2022-00389-01 36 reclamar lo que no exigió el legislador. A decir verdad, basta con remitirse a la norma en comento para advertir que existe la posibilidad de acudir a cualquier «otro medio», distinto al acuse de recibo, para «constatar» la recepción del mensaje.

Esa tesis también desconoce que, quien se considere afectado con la forma en que se surtió la notificación, tiene la oportunidad de exponerlo ante el juez del asunto bajo juramento y por la vía de la solicitud de declaratoria de nulidad, como se explicó. A modo de ejemplo, es viable resaltar que incluso los sistemas de confirmación de recibo automático o las certificaciones emitidas por empresas de servicio postal autorizadas -a pesar de que están dotados de cierto grado de fiabilidad- también son susceptibles de equívoco y, para esos eventos, igualmente tiene el demandado la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad para que los términos que se le otorgan no comiencen a rodar sino desde la fecha de recepción de la misiva.

Dicho en otros términos, dar absoluta y dócil veracidad al acuse de recibo, sería tanto como predicar que en los casos en los que el demandante los acredite, no tendría derecho el demandado a cuestionarlos por la vía de la solicitud de nulidad, lo que a todas luces emerge desproporcionado.

Incluso, en el sistema de notificación personal del Código General del Proceso, existe la posibilidad de que, con soporte en una certificación de entrega o recibo emitida por empresa de servicio postal, comience a correr un respectivo término; no obstante, ello no impide que se tramiten solicitudes de nulidad por las eventuales inconformidades derivadas de la forma en que se surtió el enteramiento.

3.7*. En síntesis, tratándose de notificación personal por medios electrónicos, es el demandante quien, en principio, elije los canales digitales para los fines del proceso. En tal sentido debe colmar las exigencias que el legislador le hizo con el propósito de demostrar la idoneidad de la vía de comunicación escogida. Por su parte, el Juez tiene la posibilidad de verificar esa información con el fin de agilizar eficazmente el trámite de notificación y el impulso del proceso.*

El enteramiento se entiende surtido dos días hábiles siguientes al envío del mensaje al canal seleccionado y, por regla general, allí empieza a contar el término de contestación o traslado, salvo que el mismo demandante o el juez se percaten de que el mensaje no fue enviado con éxito, o cuando la persona que se considere afectada solicite la nulidad de lo actuado y, en ese trámite, sobre la cuerda de la nulidad procesal proponga el debate probatorio en torno a la efectiva recepción del mensaje.

> *Además, como el legislador no estableció prueba solemne para demostrar las circunstancias relativas al envío y recepción de la providencia objeto de notificación, es dable acreditar lo respectivo mediante cualquier medio de prueba lícito, conducente y pertinente, dentro de los cuales pueden encontrarse capturas de pantalla, audios, videograbaciones, entre otros medios de naturaleza documental que deberán ser analizados en cada caso particular por los jueces naturales de la disputa."*

Para concluir, la Sala advierte que los tèrminos procesales para que la demandada PORVENIR S.A. allegara contestaciòn comenzaron a contabilizarse el 06 de junio de 2021 al 19 del mismo mes y año (1 y 2 de junio de 2021 se entendió surtida la notificación y el término para contestar corrió entre el 6 al 19), al haber sido recepcionado el correo de manera efectiva, acertando la falladora de primera instancia.

Agotada como se encuentra esta instancia, por el estudio de los motivos de apelación esbozados por la demandada Porvenir S.A., conforme las consideraciones expuestas, se confirmará el proveído apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la sociedad demandada.

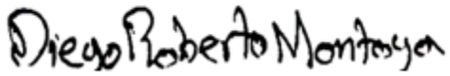
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000,oo, a cargo de la parte demandada, Porvenir S.A. la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO SEGUIDO POR NANCY ASTRID ARISTIZABAL RUBIANO Y OTROS CONTRA BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUERZA EMPRESARIAL (RAD. 14 2006 00372 03).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado a las partes para alegar de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala, con fundamento en el artículo 13 numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente

P R O V I D E N C I A

Se decide por la Sala la apelación de la entidad demandada COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. en contra del auto de fecha 20 de abril del 2022 proferido por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en la suma de $25.000.000 a favor de los 8 demandantes (ver págs. 572 y 573 Archivo 2 expediente digital), solicitando se disminuyan las mismas, en tanto considera excesivo su valor "*cuando en el presente proceso no existió un gasto innecesario del aparato judicial, pues el mismo se adelantó de manera expedita y con colaboración de mi representada, quien actúo con la más absoluta buena fe en todas las instancias judiciales"* solicitando "*se tenga en cuenta la buena fe de mis representada durante todo el proceso, teniendo como prueba de lo anterior, el pago que ya se realizo en favor de todos y cada uno de los demandantes de la condena prevista…" (*págs. 574 y 575 ibidem)

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Advierte la Sala que la liquidación de las costas a cargo de la parte demandada COLPATRIA S.A. se fijó en cuantía de $25.000.000, que corresponden a $3.125.000 para cada uno de los 8 demandantes dentro de este proceso *(pág. 572 Archivo 2 expediente digital)*, en virtud de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral que CASÓ la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero del 2011 mediante la cual se había confirmado la sentencia absolutoria del Juzgado Catorce Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, del 31 de mayo de 2010.

En este orden de ideas, conviene recordar, las costas son una erogación económica a **cargo de la parte vencida**, a quien corresponderá pagar la suma que establezca el juez de instancia, respecto de las cuales el artículo 365 del C.G.P. contiene el principio general, según el cual *"se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…)"*, sin consideración a su propósito, razonabilidad de su discusión en el conflicto jurídico en litigio o su conducta en el trámite procesal, sino el hecho de haber sido vencido en juicio y para ese efecto, el artículo 366 en su numeral 4º prevé que *"para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura".*

De esta manera como quiera que en el presente asunto la sentencia de primer grado fue totalmente desfavorable a la parte demandada COLPATRIA S.A., lo atinente a derecho es que sea condenada en costas.

De igual forma, es menester precisar, el juez para el señalamiento de agencias en derecho puede moverse dentro de los porcentajes mínimos y máximos establecidos por la tarifa de honorarios profesionales expedida en las condiciones allí señaladas, estimación que variará de acuerdo a la valoración subjetiva que se haga sobre la gestión del apoderado o de la parte a cuyo favor se liquidan, la cuantía, duración y circunstancias especiales que rodearon al proceso.

Así las cosas, para resolver la controversia, advierte la Sala, en la actualidad rige el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura para los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, y en esa medida, dado que el presente proceso se inició con anterioridad a la vigencia referida (6 de abril del 2006 *ver acta reparto pág. 164 Archivo 1 expediente digital*), resulta evidente que el caso de marras es aplicable el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establecen las tarifas o agencias en derecho, para fijar las que correspondan a las respectivas instancias, y en consecuencia procederá la Sala con la revisión de la tasación elaborada por el Juzgado de conocimiento, a la luz del acuerdo aplicable, a efectos de verificar si la apelación planteada por el procurador judicial de la parte demandada COLPATRIA S.A.S tiene la virtud de prosperar o no.

En esta dirección, iterando, la norma aplicable, es la del Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003 que, en su parágrafo, del acápite segundo II del artículo 2.1.1 dispone sobre las costas a favor del trabajador:

> **2*.1. PROCESO ORDINARIO***
>
> ***2.1.1. A favor del trabajador:***
>
> *Primera instancia.* ***Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia****. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*
>
> *En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Así las cosas, de acuerdo a la sentencia visible en las páginas 158 a 186 del archivo No. 4 expediente digital SL4773-2020 Rad. 52023 del 18 de noviembre del 2020, proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, mediante la cual se CASÓ la sentencia dictada el 28 de febrero del 2011 por esta Corporación en descongestión, revocando la proferida por el Juzgado 14 Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, se tiene que se dispuso condenar a la demandada COLPATRIA S.A. por los siguientes conceptos:

> **PRIMERO**: **REVOCAR** la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, el 31 de mayo de 2010, y, en su lugar, declarar

que entre el banco **COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.** y los demandantes **NANCY ASTRID ARISTIZÁBAL RUBIANO, LUÍS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA**, **HERNÁN CHÁVEZ VÉLEZ**, **ELIZABETH GRANADOS SIERRA**, **JAIME ALEJANDRO LAVERDE LARRAÑAGA**, **CÉSAR ENRIQUE RUNZA CIFUENTES**, **MODESTA BEATRIZ SANTANA CALA y WILLIAM DAVID TRUJILLO MOSQUERA** existieron sendos contratos de trabajo, que se desarrollaron en los siguientes extremos temporales:

(…)

SEGUNDO: **CONDENAR** al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., a reconocer y cancelar a favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

NANCY ASTRID ARISTIZÁBAL RUBIANO

- Auxilio de cesantías: **$1.161.796**
- Intereses a las cesantías: **$121.330**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$121.330**
- Prima de servicios: **$1.161.796**
- Compensación por vacaciones: **$580.898**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$5.904.528**
- Indemnización moratoria: **$9.792.000,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

LUÍS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA

- Auxilio de cesantías: **$1.998.196**
- Intereses a las cesantías: **$206.605**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$206.605**
- Prima de servicios: **$1.809.928**
- Compensación por vacaciones: **$904.964**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$12.565.982**
- Indemnización moratoria: **$26.068.989,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

HERNÁN CHÁVEZ VÉLEZ

- Auxilio de cesantías: **$2.019.579**
- Intereses a las cesantías: **$203.556**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$203.556**
- Prima de servicios: **$1.962.590**
- Compensación por vacaciones: **$981.295**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$14.602.963**
- Indemnización moratoria: **$20.647.449,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

ELIZABETH GRANADOS SIERRA

- Auxilio de cesantías: **$488.353**
- Intereses a las cesantías: **$23.530**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$23.530**
- Prima de servicios: **$488.353**
- Compensación por vacaciones: **$244.176**
- Indemnización moratoria: **$22.188.000,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

JAIME ALEJANDRO LAVERDE LARRAÑAGA

- Auxilio de cesantías: **$1.122.312**
- Intereses a las cesantías: **$121.765**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$121.765**
- Prima de servicios: **$1.040.234**
- Compensación por vacaciones: **$520.117**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$6.764.467**
- Indemnización moratoria: **$13.706.455,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

CÉSAR ENRIQUE RUNZA CIFUENTES

- Auxilio de cesantías: **$910.982**
- Intereses a las cesantías: **$97.339**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$97.339**
- Prima de servicios: **$828.905**
- Compensación por vacaciones: **$414.452**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$5.976.867**
- Indemnización moratoria: **$9.319.503,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

MODESTA BEATRIZ SANTANA CALA

- Auxilio de cesantías: **$1.328.697**
- Intereses a las cesantías: **$153.641**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$153.641**
- Prima de servicios: **$1.246.619**
- Compensación por vacaciones: **$623.310**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$8.268.067**
- Indemnización moratoria: **$9.792.000,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de

créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

WILLIAM DAVID TRUJILLO MOSQUERA

- Auxilio de cesantías: **$588.659**
- Intereses a las cesantías: **$44.651**
- Sanción por no pago de intereses a las cesantías: **$44.651**
- Prima de servicios: **$588.659**
- Compensación por vacaciones: **$294.329**
- Sanción moratoria por no consignación de cesantías: **$3.819.400**
- Indemnización moratoria: **$13.744.541,** que corresponde a los 24 meses subsiguientes a la terminación del contrato de trabajo y a partir del mes 25 se pagaran los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, según Certificado de la Superintendencia de Valores.

Valores que totalizan la suma de **$208.415.244** sin tener en cuenta los intereses moratorios que allí se indican pues estos se deben tasar al momento del pago de la obligación, correspondiendo el 25% de que trata el mencionado acuerdo al valor de *$52.103.811*.

De tal manera, la suma fijada por la Juez de primer grado de **$25.000.000**, corresponde aproximadamente al **12%** de la condena, advirtiéndose entonces, el valor estimado se encuentra dentro del margen señalado en la norma antes mencionada de ***"Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia".***

Por tales razones, se estima por la Sala procedente confirmar el monto señalado por concepto de agencias en derecho por la Juez de primer grado, toda vez que el valor de las mismas se acompasa con las aristas mínimas y máximas fijadas por el Acuerdo 1887 de 2003 citado, valor que se considera, es apenas equitativo y razonable de acuerdo a las resultas del juicio, reiterando para su imposición no se analiza la intención de las partes, razonabilidad de su discusión en el conflicto jurídico en litigio o su conducta en el trámite procesal, sino el hecho de haber sido vencido en juicio.

En estas circunstancias se confirmará el proveído atacado.

SIN COSTAS en esta instancia.

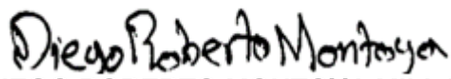
En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SALA LABORAL**,

R E S U E L V E

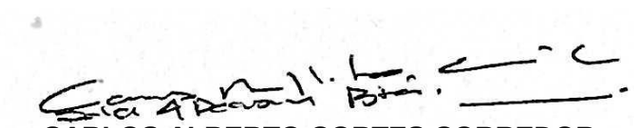
PRIMERO: CONFIRMAR el proveído apelado, de conformidad a las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR MILENA AMALIA GAITÁN MARÍN CONTRA CORPORACIÓN CULTURAL ALEJANDRO VON HUMBOLT - DEUTSCHER SCHULVEREIN (RAD. 14 2021 00159 01).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 13 numeral primero de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del demandado contra el auto proferido por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia llevada a cabo el 21 de febrero del 2022, por medio del cual dispuso declaró no probada la excepción de prescripción.

Para llegar a tal conclusión, la Juez de primera instancia consideró que la radicación de la demanda fue el 5 de abril del 2021 cuando el vinculo laboral entre las partes terminó el 6 de abril del 2018, esto es, que la parte actora acudió a la jurisdicción dentro de los tres años de que tratan los artículos 488 del C.S.T. y 151 de C.P.T., precisando obra el correo electrónico del 5 de abril de 2021 que envió la oficina judicial de reparto a la demandante en el que se le informa acerca de la recepción o recibo de la demanda con el respectivo número de confirmación (Audio archivo 18 expediente digital)[1]

[1] **JUEZ (Récord: 6:36 PARTE I)** Muy bien, este esta etapa subsiguiente corresponde a la decisión de excepciones previas, efectivamente con carácter dilatorio la parte demandada propuso en su defensa la excepción que denominó prescripción, fundamentada en que el vínculo contractual sostenido por las partes finalizó el día 6 de abril de 2018 y según afirma la demanda fue radicada el 5 de mayo de 2021 por lo que a su juicio transcurrió y se superó el término trienal que prevén los artículos 151 del código procesal laboral y 488 del Estatuto sustancial para ejercer la acción laboral, en consecuencia concluye que operó este fenómeno

Inconforme con la decisión, el apoderado del extremo accionado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, pues considera que la demanda según el sistema de rama judicial de consulta de procesos de la Rama Judicial data del 11 de mayo del 2021 y como quiera que el contrato terminó el 6 de abril del 2021 es claro que la acción se encuentra prescrita en el entendido de que han transcurrido 3 años después de la finalización del último de contrato de trabajo, advirtiendo nunca se presentó una reclamación escrita con el fin de solicitar las acreencias o los derechos pretendidos con la demanda (Audio archivo 18 expediente digital)[2]

En cuanto a la reposición la Juez de primer grado mantuvo su decisión, señalando que como bien es sabido la prescripción puede ser interrumpida a través de dos mecanismos distintos uno de ellos con la presentación de la demanda, en el que se centra la discusión en este caso, ya que la pasiva afirma que tuvo ocurrencia el

---

extintivo al respecto debe precisar el despacho que de las documentales relativas al trámite de radicación de demanda no obra prueba constancia alguna que acredite que la demandante efectivamente radicó la demanda el 5 de mayo de 2021 conforme lo afirma la parte demandada pues inclusive en el acta de reparto, se logra evidenciar en principio que la demanda se radicó el 12 de abril de la citada anualidad ahora si se tuviera esta última fecha como la data de radicación de la demanda, habría cabida a tener por probada esta excepción pues se evidencia que del 6 de abril de 2018 al 12 de abril de 2021, transcurrió un periodo de tiempo superior al referido término trienal regulado en las normas sustancial y procesal antes citadas, de no ser por qué al verificar la trazabilidad del trámite de radicación de la demanda, el juzgado se observa el correo electrónico de fecha 5 de abril de 2021 que le envió la oficina judicial de reparto a la demandante en el que se le informa acerca de la recepción o recibo de la demanda con el respectivo número de confirmación, en ese orden si el vínculo contractual feneció el 6 de abril de 2018 supuesto fáctico respecto del cual las partes son coincidentes es claro que, conforme a lo dispuesto en la precitada normatividad la promotora del proceso tenía como fecha límite para interponer la acción laboral el día 6 de abril de 2021 y como se indicó en precedencia de las documentales obrantes en el expediente digital se evidencia que la demanda fue radicada el 5 de igual mes y año razón por la que no alcanzó a transcurrir el mencionado término prescriptivo así las cosas se declara no probada la acción de prescripción propuesta por la parte demandada notifíquese en estrados

[2] **APODERADO PARTE DEMANDADA (Récord: 10:09)** Un momento, su señoría muchas gracias, siendo el momento procesal oportuno me permito presentar recurso de reposición en subsidio de apelación frente a la decisión que declaró no probada la excepción de prescripción presentada por parte de mi representada Colegio Andino con la contestación de la demanda, ello tiene asidero en el entendido de que según se según se puede constatar dentro de la demanda junto con la contestación y las pruebas arrimadas dentro del mismo, se puede constatar de manera fehaciente y que el último contrato, que la demanda según el sistema de rama judicial de consulta de procesos de la Rama Judicial, la demanda tiene o la radicación del proceso data del 11 de mayo del 2021 por ese en ese sentido su señoría de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 488 y 150 tanto del Código Sustantivo del Trabajo, como del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es claro que en el entendido de que el último contrato de trabajo, suscrito con la señora Milena Amalia Gaitán, terminó el 6 de abril del 2021, es claro que la acción la pretérita acción se cuenta irremediablemente prescrita en el entendido de que han transcurrido 3 años después de la finalización del último de contrato de trabajo que dicho sea de paso no fue suspendido el término de prescripción en el entendido que el demandante nunca presentó una reclamación escrita con el fin de solicitar las acreencias o los derechos sujetos de, dentro de esta demanda por tal razón su señoría y en subsidio solicitó al Tribunal que así lo declare en el entendido de que si la demanda, si el contrato de trabajo terminó el 6 de abril y la demanda se pone consulta de procesos es del 11 de mayo de 2021 es claro que la acción pretérita está innegablemente presenta muchas gracias.

5 de mayo del 2021, cuando dicha fecha es la de la radicación de la demanda efectuada por el juzgado más no la presentación de la misma ante la oficina de reparto que lo fue el 5 de abril del 2021, considerando por ende no estar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada. (Audio archivo 18 expediente digital)[3]

Como quiera que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver lo pertinente, previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Se aprecia que lo atacado por el impugnante es la decisión de la Juez de primer grado donde se dispuso declarar no probada la excepción de prescripción, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación a voces del numeral 3º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, modificatoria del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., razón por la cual se estima viable proceder a su estudio, en los términos del artículo 66A del estatuto procesal laboral.

---

[3] **JUEZ (Récord: 00:00 PARTE II)** se verifica pronunciamiento en torno al recurso de reposición y subsidiario de apelación que interpone el apoderado de la demandada en contra de la decisión que tuvo por nuevo probada la excepción de prescripción formulada con carácter dilatorio muy bien para resolver entonces tendrá en cuenta el juzgado que como bien es sabido la prescripción puede ser interrumpida a través de 2 mecanismos distintos 1 de ellos con la presentación de la demanda precisamente frente a este supuesto es que se centra la discusión en este caso pues ahora por vía del recurso afirma el excepcionante que la presentación de la demanda tuvo ocurrencia el día 5 de mayo de 2021 tal y como se desprende de la consulta de procesos nacional unificada siendo ello cierto que la radicación este escrito procesal ocurrió en mayo 11 de 2021 está confundiendo el excepcionante, el hecho de la radicación en el juzgado y el hecho de la presentación de la demanda en la oficina de reparto para su asignación, esta fecha de radicación corresponde a la que el juzgado una vez que ha sido repartida y asignada al despacho procede a hacer la correspondiente erradicación en el sistema de gestión judicial para iniciar el respectivo trámite ello repito no se puede confundir doctor con la fecha de presentación de la demanda que como consta en los documentos que por demás ya estaban anexos en el expediente digital sobre trazabilidad de la presentación de la demanda ocurrió como se dijo el lunes 5 de abril de 2021 ello se prueba con el correo electrónico que remitió el Consejo Superior de la oficina de asignaciones mejor demanda en línea 1 a la aquí demandante señora Milena Gaitán, el documento repito está inserto dentro del expediente digital este correo electrónico da cuenta que para su reparto se presentó por la parte actora la demanda, el 5 de abril del año 2021 luego sin ningún sustento sin ningún piso queda toda la argumentación de la parte demandada que si se hubiere detenido en mirar estas documentales para efectos de proponer o mejor no hubiera visto que había lugar a proponer la excepción de prescripción bajo esa argumentación el juzgado entonces atendiendo que se ejercitó la acción laboral dentro del término trienal a que se refiere el artículo 151 el código procesal del trabajo no revoca la decisión y como consecuencia de ello concede el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria por el excepcionante, ello en el efecto suspensivo de manera que se deberá proceder a remitir el proceso al superior a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bogotá para que se surta él se surta el saber, notifíquese en estrados a las partes.

Consecuencia de lo anterior, pues no hay se ha concedido el recurso en el efecto suspensivo no hay lugar a adelantar ninguna otra actuación señor

De este modo ha de recordarse, en el ámbito jurídico es sabido que las excepciones son hechos distintos de los afirmados en la demanda, alegados por el demandado para contradecir el nacimiento del derecho pretendido por el demandante o para producir su extinción, para negar su exigibilidad actual o simplemente para impedir el juicio, suspender o mejorar el procedimiento.

Pues bien, frente a la excepción de prescripción, es de anotarse que en vigencia de la Ley 712 de 2001 se dispuso en el artículo 19, la posibilidad de examinar el medio exceptivo de prescripción como de carácter previo, sin embargo, tal evaluación únicamente procede siempre y cuando no exista discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o suspensión.

En el caso de marras, contrario a lo considerado por el apoderado recurrente para esta Corporación resulta claro que existe discusión frente a la interrupción de la misma *-prescripción-* y por ende de los derechos que son exigibles a la parte actora, pues como fundamento de la citada excepción señaló (Archivo 16 expediente digital, pág. 51):

EXCEPCIONES:

Contra las pretensiones de la demanda, me permito interponer las siguientes:

EXCEPCIONES PREVIAS.

- **PRESCRIPCIÓN.-** Sin que implique el reconocimiento de derecho alguno, esta debe ser declarada por el Despacho en los términos preceptuados por el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 155 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de todas las obligaciones de tracto sucesivo cuya causación haya sido anterior a los tres (3) años de la fecha de presentación de la demanda.

  Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Sistema de la Rama Judicial la presente demanda se radicó el once (11) de mayo de dos mil veintiuno (2021) habiendo transcurrido más de tres (3) años de finalización del contrato de trabajo, esto eso, **seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), siendo claro entonces que la demanda debió radicarse con anterioridad al cinco (5) de mayo de dos mil dieciocho (2018) encontrándose la presente acción irremediablemente PRESCRITA.**

Razón por la cual, conforme es señalado por la Juez de primer grado al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, dentro del presente asunto se encuentra en discusión la fecha de interrupción del fenómeno extintivo, pues existe controversia frente a si debe tenerse en cuenta la fecha de presentación ante la oficina de reparto o la data de radicación que se anota por el Juzgado en el sistema, y adicionalmente se debe estudiar si una vez admitida la

demanda la misma fue debidamente notificada dentro de los términos legalmente establecidos.

Por lo que, a juicio de esta Sala, la citada excepción de prescripción debe ser objeto de un estudio de fondo, luego entonces debe ser sometida a un debate probatorio que permita establecer con claridad la data que se tomará como interrupción de la prescripción lo cual influye en el estudio de la exigibilidad de los derechos de la parte actora, y en ese orden, no es dable para la Juez resolver el fenómeno de prescripción como una excepción previa, iterando que para que se pueda estudiar así, no debe existir discusión respecto de la fecha de exigibilidad de los derechos y como ocurre en el presente asunto tampoco debe encontrarse en duda la data de interrupción de los mismos, debiendo entonces efectuarse su estudio en la sentencia que ponga fin a la Litis.

Nótese, para el caso de autos, el estudio del medio exceptivo como previo y la declaración de prosperidad del mismo priva al demandante de la posibilidad de demostrar la concurrencia de los requisitos legales para la causación de los derechos reclamados; sin dejar de lado que el debate probatorio puede arrojar como resultado que la demandante no acredite el cumplimiento de los supuestos de hecho para la causación de los derechos de los cuales solicita su condena, evento en el cual la decisión así tomada puede haber llegado al punto de declarar la extinción de una obligación inexistente.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, solamente agotado el debate probatorio se tendrá certeza de la existencia del derecho, la fecha de su causación y la exigibilidad del mismo; asertos todos que llevan a la conclusión como ya se anunció de que, en el caso bajo estudio, la decisión de la excepción debe postergarse hasta el momento en que se resuelva el fondo del asunto.

Al respecto puede consultarse el razonamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizado en sentencia con radicación 26939 del 25 de julio de 2006[4], en la cual expuso criterio según el cual, para que el Juez pueda

[4] *"En este orden de ideas, para que el juez pueda decidir sobre la prescripción, al comienzo de la litis, no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho; pero si hay controversia en cuanto a la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, la resolución de la misma debe esperar a la sentencia. Si el juzgador tiene la certeza que el derecho reclamado se extinguió por el paso del tiempo, por su inactividad, por medio de auto interlocutorio así lo debe declarar en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y en este evento no le es dable retomar en el fallo el punto debatido. Pero, a* contrario sensu*, si el juez, como sucede en el sub examine, consideró que no tenía los suficientes elementos de juicio*

resolver la excepción de prescripción al inicio de la Litis no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho, pues si hay controversia en relación con la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, es su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia; igualmente en la Sentencia SL 6380 de 2015[5], se reitera que no le es dado al Juez resolver la excepción de prescripción, si previamente no ha determinado la existencia del derecho.

Lo expuesto conduce a revocar el auto impugnado, para que en su lugar ordenar se continúe con el trámite de la primera instancia y la excepción de prescripción sea resuelta de fondo al momento de proferir el fallo correspondiente.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL**-,

---

para decidir de entrada sobre la excepción de prescripción en la audiencia de trámite, era su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia." (Subrayado de la Sala)

[5] *"Para resolver la controversia debe decirse que al juzgador no le es viable jurídicamente pronunciarse sobre la extinción de un derecho que no ha sido declarado, pues ello desconoce que en el marco de las obligaciones existen unas que permiten exigir su cumplimiento (civiles) y otras que pese a ser inexigibles (naturales) «cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas», entre las que se cuentan "las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción" (artículo 1527 Código Civil). A lo anterior se suma que la existencia jurídica de un hecho es susceptible de demandarse en cualquier tiempo, pues deriva del ejercicio del derecho público de acción, y en ese evento lo que procede es que el Juez declare extinguidos los derechos que de aquel emanen, como obligación civil, dado el retardo en su ejercicio.*

En tal sentido se ha pronunciado esta Sala de la Corte, entre otros en decisión CSJ SL 1, mar, 2011, rad. 39396:

> *Ahora bien, en torno a la prescripción ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala, que bastan las reglas de la lógica para entender que para decidir dicha excepción, es necesario haber determinado previamente la existencia del derecho, pues solo puede prescribir lo que en un tiempo tuvo vida jurídica (sentencia 01-08-2006, radicación 28071). No obstante lo anterior, aunque el Tribunal señaló inicialmente que no tenía ningún sentido práctico examinar las aspiraciones del demandante si ya estaban prescritas, lo cierto es que más adelante consideró la pertinencia del derecho reclamado, en cuanto afirmó "También a esta altura de la disquisición no le cabe la menor duda a la Sala que por concepto de alojamiento y manutención, la demandante se le canceló viáticos permanentes.", para luego transcribir los artículos 127 y 130 del C. S. T. que regulan la materia.*
>
> *Verificada la existencia del derecho en el demandante, era pertinente declarar su extinción por prescripción, como lo hizo el Tribunal, sin que fuera necesario, por no oponerse a la lógica, que lo hubiera cuantificado, de donde cabe concluir que, por este aspecto, en ningún yerro incurrió el ad quem, al menos, con incidencia en la sentencia.*

(…) *Tales reflexiones dan cuenta de la equivocación hermenéutica que el censor le endilga a la sentencia del Tribunal, dado que sin haber definido la existencia de la relación laboral, de la que se pidió la declaración, declaró la extinción de las obligaciones por prescripción"*

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá en la audiencia llevada a cabo el 24 de noviembre del 2022, para que en su lugar **ORDENAR** se continúe con el trámite de la primera instancia y se postergue el estudio de la excepción de prescripción para el momento de proferir sentencia que ponga fin a la *litis*.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR OSCAR ANTONIO MORALES BARAHONA CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISACALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP (RAD. 16 2022 00010 01)

Bogotá D.C. veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado a las partes para alegar de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala, con fundamento en el artículo 13 numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente

AUTO

Asume la Sala el conocimiento de este proceso especial, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutada (Expediente digital: *04Ejecucion/ C04PrincipalEjecutivo/01ExpedienteDigitalizado págs. 61 a 64*), en contra del auto proferido por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el pasado 4 de marzo del 2022 (*págs. 10 a 12 ibidem*), por medio del cual se decretó el embargo y retención "*sobre los dineros que posea o llegare a poseer la ejecutada, en cuentas de ahorro y/o corrientes, CDT o créditos, que no gocen del beneficio de inembargabilidad, en los tres primeros Bancos solicitados, esto es Banco BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA y BOGOTA. (…) LIMITESE LA MEDIDA en la suma de siete millones $7.000.000 mc/te"*

Señalando, en síntesis, que las deudas por conceptos pensionales ejecutados judicialmente no pueden pagarse con cargo a recursos públicos propios de la UGPP, sino con recursos parafiscales del sistema de seguridad social de que trata el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, conforme lo certifica la Subdirectora

Financiera de la entidad, donde se señalan los fundamentos jurídicos sobre la no procedencia del embargo y retención de los dineros de propiedad de la UGPP.

Así mismo indica, las sumas dinerarias que se encuentran en la cuenta corriente de la entidad no pueden ser objeto de embargo y retención, toda vez que en ellas reposan dineros recaudados para el pago de impuestos, deducciones de orden parafiscal realizadas a proveedores y contratistas, entre otros, que hacen partes del tesoro público y no son de uso y goce libre de la UGPP.

Finalmente expresa que su representada canceló en su totalidad las costas procesales el 29 de octubre del 2021 según consta en la orden de pago presupuestal.

Para resolver las siguientes,

CONSIDERACIONES

Mediante proveído del 4 de marzo del 2022 se libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

RESUELVE:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN – UGPP** y en favor del señor **OSCAR ANTONIO MORALES BARAHONA,** por las siguientes obligaciones, para que dentro de los **CINCO (5) DÍAS** sucesivos a la notificación de esta providencia proceda a:

a) **RECONOCER** y **PAGAR** al ejecutante la suma de $6.249.936 por concepto de las costas aprobadas en el proceso ordinario Nº 2009-468.
b) **RECONOCER Y PAGAR** los intereses moratorios en tasa del seis por ciento (6%) anual, desde el momento en que la obligación se hizo exigible, esto es a partir de ejecutoria del auto que aprobó la liquidación de costas en el proceso ordinario hasta que se verifique su pago.

TERCERO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta decisión a la parte ejecutada **UGPP.**

CUARTO: NOTIFÍQUESE a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, corriéndose el respectivo traslado al Representante legal de tal entidad, de conformidad y bajo los términos establecidos en el Art. 612 del C.G.P. – Ley 1564 de 2012.

QUINTO: DECRETAR EMBARGO Y RETENCIÓN sobre los dineros que posea o llegare a poseer la ejecutada., en cuentas de ahorro y/o corrientes, CDT o créditos, que no gocen del beneficio de inembargabilidad, en los tres primeros Bancos solicitados, esto es Banco BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA y BOGOTA. Una vez se tenga respuestas de dichas entidades se dispondrá sobre las demás. LIMITESE LA MEDIDA en la suma de Siete millones ($7'000.000=) mcte

De esta manera y para resolver la apelación presentada es menester precisar, si bien los Jueces de la República a través del proceso ejecutivo deben tomar las medidas tendientes a hacer efectivo el reconocimiento de las obligaciones y/o créditos derivados de un fallo judicial, como en el presente asunto -*costas procesales*- , y su pago debiera ser cumplido por las entidades sin necesidad del mismo, tal poder no es absoluto, pues están sometidos al imperio de la Ley, debiendo verificar si las actuaciones o medidas a practicar tienen un límite.

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, dispuso en su artículo 19: *"…son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman"*. Así mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 3947 de 2007[1], la UGPP, por ser una Unidad Administrativa Especial de la Administración Central, es considerada como una unidad ejecutora[2], razón por la cual sus rentas y recursos independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentren, están incorporados en el Presupuesto General de la Nación[3].

De conformidad con la disposición normativa aludida, en principio y a título de regla general, debe darse aplicación al principio de inembargabilidad, no obstante, el mismo admite excepciones en determinados casos, situación que ha venido siendo desarrollada por la Corte Constitucional. En dicho sentido, en la Sentencia C-1154 de 2008, esa Corporación consideró que dicha cláusula debe ser armonizada con los demás principios y derechos reconocidos constitucionalmente, para lo cual fijó algunas reglas de excepción a la inembargabilidad de los recursos de la Nación, bajo el fundamento de que no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada, de acuerdo a ello, estableció tales excepciones de la siguiente manera:

---

[1] Compilado en el artículo 2.8.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015.
[2] Es el ente público que realiza una actividad específica dentro de los organismos que ejecutan el presupuesto General de la Nación.
[3] Artículos 2 y 7 de la Resolución 010 del 7 de marzo de 2018, artículo 11 literal a) del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

(...) La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que "en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo."

(...) La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto ***General de la Nación), "bajo*** *el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean* ***que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos*** *18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.*

(...) Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que ***reconocen una obligación clara, expresa y exigible****. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación." (Negrilla de la Sala).*

Igualmente, en la sentencia C - 543 de 2013 la Corte Constitucional, en relación con el tema de la inembargabilidad de recursos, alegados por la ejecutada UGPP, refirió lo siguiente:

"5.2.2.1 *El artículo 63 de la Constitución dispone que "****Los bienes de uso público,*** *los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley,* ***son inalienables, imprescriptibles e inembargables"***

A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.

Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 *sobre el tema en discusión,* ***ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado,*** *en particular, los destinados a*

> *cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior[3].*
>
> ***Sin embargo, contempló excepciones a la regla general** para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:*
>
> *(i) **Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral** con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas[4].*
>
> *(ii) **Pago de sentencias judiciales** para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos[5].*
>
> *(iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.[6]*
>
> *(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)[7]*

En este orden ideas, y de acuerdo a lo establecido en el auto que libró mandamiento de pago se extrae que el titulo base de la ejecución proviene de la sentencia debidamente ejecutoriada contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN en la que se dispuso reconocer a OSCAR ANTONIO MORALES BARAHONA la pensión de jubilación a partir del 27 de marzo de 2004 en la suma de $754.958,43 y el pago de diferencias pensional en suma de $43.004.698,95, condenándose en costas a la parte demandada (*ver sentencia Corte Suprema de Justicia 03RecursosExtraordinarios/C03Casacion págs. 66 a 84*), por lo que el crédito ahora objeto de ejecución -costas- se enmarcaría en las excepciones que contempla la jurisprudencia, toda vez que la medida cautelar solicitada tiene por objeto garantizar el pago de la sentencia y contiene una obligación clara, expresa y exigible.

---

[5] En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

Ahora, si bien es cierto, las costas reclamadas en este proceso ejecutivo, no dependen de la pensión del actor, ni constituyen un crédito u obligación de origen laboral, **no se puede desconocer, que las mismas hacen parte y están contenidas en una sentencia judicial, respecto de la cual se pretende su cumplimiento**, por lo tanto, el rubro correspondiente a las costas, constituye una de las excepciones establecidas al principio de inembargabilidad señalado por la Corte Constitucional.

En ese orden de ideas, con relación a los argumentos de la recurrente fundados en la inembargabilidad de los recursos de la ejecutada, advierte la sala, esto no se ha constatado aún en el presente asunto, aspecto que cobra relevancia, bajo el entendido que se desconoce si todos los recursos de la UGPP pertenecen al presupuesto general de la nación o si son recursos pertenecientes al sistema general de seguridad social que conforme lo previsto en el artículo 134 de la ley 100 de 1993 son inembargables, y sobre los cuales como ya se ha visto, no pueden recaer medidas cautelares precisamente en atención al carácter de inembargabilidad que los reviste, empero, se itera, dicha condición especial debe ser constatada justamente mediante la información que pudieren dar las entidades bancarias enlistadas en el decreto de la medida cautelar para colegir si tales dineros son del presupuesto general o recursos del régimen de seguridad social, **precisándose en este punto** si bien el Juez de primer grado en el auto que decretó la medida cautelar señalo expresamente que la medida recaía sobre los dineros "*que no gocen del beneficio de inembargabilidad"*, ello no quedo consignado en los oficios elaborados por la secretaría de ese despacho (ver carpeta: *04Ejecucion/C04PrincipalEjecutivo págs. 16, 17 y 18),* razón por la cual deberán elaborarse nuevamente poniendo de presente tal condición.

Ahora, frente a lo señalado en la Certificación emitida por la Subdirectora Financiera de la UGPP (ver carpeta: *04Ejecucion/C04PrincipalEjecutivo págs. 65 a 69),* en cuanto a que las cuentas del Banco Popular No. 110-026-001685 y del Banco Agrario No. 3-023-00-00446-2 fueron creadas para la recepción de los recursos embargados a los aportantes y por ende corresponden al Sistema de Protección Social y son inembargables, valga aclarar dichas cuentas no fueron objeto de la medida cautelar decretada por el Juez de primer grado, pues

la medida se libró frente a las cuentas de los bancos DAVIVIENDA, BOGOTÁ y BANCOLOMBIA.

Así las cosas, las medidas cautelares decretadas por el *a quo* deben mantenerse, ya que las mismas tienen como fin, garantizar parte del pago de una sentencia judicial, por lo que considera la Sala que al estar pendiente en este momento por ejecutar las costas ordenadas en la sentencia proferida dentro del proceso ordinario No 2009-468, pues dicho pago aún no se ha materializado, la Sala confirmará la decisión impugnada, advirtiéndose a la recurrente dentro del presente proceso no se encuentra acreditado el pago que aduce haberse efectuado pues tan solo aporta un pantallazo de "*orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones*" más no un comprobante que demuestre que en efecto ya se canceló la suma aquí objeto de ejecución.

En los términos anteriores, sin que haya lugar a más consideraciones, se confirmará el auto recurrido, de conformidad con las motivaciones expuestas en precedencia, con la precisión anotada.

SIN COSTAS en esta instancia.

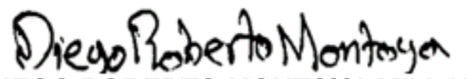
En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., SALA LABORAL**

RESUELVE

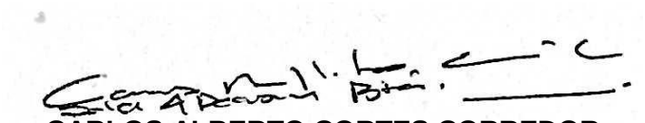
PRIMERO: CONFIRMAR en el auto apelado y proferido por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto, **precisándose** la secretaría de ese despacho deberá elaborar nuevamente los oficios dirigidos a las entidades bancarias BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA y BOGOTÁ poniendo de presente que la medida decretada recae sobre los dineros "***que no gocen del beneficio de inembargabilidad***".

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

9TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO POR JOSÉ IGNACIO BERNAL MONTERO, NAYIRIS TROYA PAYARES, ESTEFANI YISET BERNAL TROYA, HELEN ASTRID BERNAL TROYA, YANILA BERNAL TROYA y MARIANA JOSE BERNAL LIMA CONTRA DRUMMOND LTDA. (RAD. 29 2014 00386 02).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado a las partes para alegar de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala, con fundamento en el artículo 13 numeral primero del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutada DRUMMOND LTDA., contra el auto proferido por la Juez 29 Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el pasado 17 de noviembre del 2022, por medio del cual resolvió declarar parcialmente probada la excepción de pago y dispuso continuar la ejecución por la suma de $89.667.120 (Exp. Digital: *Audio archivo 50 expediente digital,* récord: 18:45):

> ***«PRIMERO: DECLARAR*** *parcialmente probada la excepción de pago conforme a la parte motiva de esta decisión.*
>
> ***SEGUNDO: CONTINUAR*** *con la ejecución por la suma de $89.667.120.*
>
> ***TERCERO: CONDENAR*** *en costas a la ejecutada.».*

Para arribar a la anterior decisión, la Juez de primer grado consideró que el título ejecutivo dentro del presente asunto corresponde a las sentencias judiciales proferidas el 14 de julio del 2016 (primera instancia), 29 de noviembre del 2016 (segunda instancia) y la del 17 de agosto del 2021 (casación), precisando el punto de inconformidad de la ejecutada radica en la condena impuesta a favor de YANILA BERNAL TROYA en calidad de hija del demandante, esto es, la suma de 100 smmlv en primera instancia, respecto de quien no hubo modificación en segunda instancia, advirtiendo si bien el Tribunal hizo referencia en el fallo a 4 hijas, en la parte resolutiva no se citó a dicha ejecutante como tampoco se hizo mención en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, luego entonces para dicha Juzgadora al no estar la modificación de la citada condena impuesta en primera instancia, la misma se encuentra ejecutoriada, de modo que concluyo que los valores a ejecutar correspondían a:

- Lucro cesante consolidado obra $22.145.105.07
- Lucro cesante futuro $83.533.667.05
- Perjuicios Morales José Ignacio Bernal es $6.894.540
- Perjuicios Morales Nayiris Troya $4.136.724
- Perjuicios Helen Astrid Bernal Troya $4.136.724
- Numeral primero en la sentencia de la corte EYBT $20.000.000
- Numeral segundo de la sentencia de la corte MJBL $20.000.000
- Ignacio Bernal 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2021, $9.085.260.
- Inciso sexto en el numeral cuarto de la sentencia del Juzgado 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, $90.852.600 para 2021
- Costas y agencias en derecho de primera y segunda instancia $24.000.000.

Para un total de $284.784.620,12, precisando como quiera que obra el pago por parte de la ejecutada de $180.710.036.12 y $14.407.464, la deuda ascendía para el 15 de noviembre de 2022 a $89.667.120 y fue ese el valor por el cual se dispuso continuar con la ejecución (récord: 9:31[1], ibidem).

[1] **JUEZ (Récord: 9:31):** Una vez reunidos los presupuestos procesales procederá el despacho a pronunciarse previa las siguientes consideraciones:

En primer lugar recordemos que el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece abro comillas "*Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme*", de la misma manera prescribe el artículo 306 del Código General del Proceso al cual nos remitimos por autorización expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social "*Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior....*" cierro comillas y más adelante en el artículo 442 ibidem se señala abro comillas "...2. *Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida*" cierro comillas.

Así las cosas tenemos que la ejecutada propone las excepciones de pago, inexistencia de la obligación y compensación, se hace necesario destacar que en el presente asunto el título Ejecutivo se contrae a sentencias judiciales a saber la proferida por este despacho el día 14 de julio de 2016 que obra a folio de 1215 a 1217, sentencia de segunda instancia proferida con fecha 29 noviembre 2016 que obra a folio 1250 a 1279 y sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral 3741 de 2021 de fecha 17 de agosto de 2021, conforme a ello y descendiendo al punto de inconformidad de las ejecutadas en lo cual se sustenta parte de la excepción de pago hace consistir su alegación en el hecho que al ser modificado el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia se entiende que dicha modificación se efectuó también respecto de Yanila Bernal Troya quien en calidad de hija se dispuso en su favor el pago de 100 salarios mínimos legales vigentes en primera instancia, de ello pese a que el Tribunal en el minuto 20 hizo referencia para resolver la apelación, específicamente se refirió a José Ignacio Bernal Montero por valor de 10 salarios mínimos legales vigentes, Nayiris Troya Pajares por valor de 6 salarios mínimos legales vigentes, Estefanía Yiset Bernal Troya menor por valor de 6 salarios mínimos legales vigentes, Helen Astrid Bernal Troya por valor de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes tal como obra a folio 1271.

De igual manera lo concretó en la parte resolutiva de la decisión en el numeral segundo que modificó el numeral cuarto de la sentencia apelada folio 1273, aunado a lo anterior la sentencia de casación del día 17 de agosto de 2021 específicamente caso lo correspondiente a las menores respecto de quienes dispuso el pago de 20 millones de pesos en favor de cada una de ellas y en el numeral tercer comillas "se modifica el numeral sexto para precisar que se declara probada la excepción de prescripción frente a la enfermedad de manguito rotador para todos los demandantes salvo para los menores EYBT y MJBL" cierro comillas conforme a ello si bien es cierto, el nombre de la demandante Yanila Bernal Troya fue incluido en el numeral cuarto de la parte resolutiva de primera instancia y en su favor se impuso condena de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicho pronunciamiento fue objeto de apelación de lo cual específicamente se pronunció en segunda instancia el Tribunal de Bogotá en su Sala Laboral, también lo es y no puede dejarse de lado el hecho que pese a que en segunda instancia dicho corporación hizo referencia a cuatro hijas, al determinar las condenas a que había lugar hizo mención específicamente a los demás demandantes como se observa a folio 1271, asimismo en la parte resolutiva folio 1273 y 1274 sin citar de modo concreto en la audiencia registrada en audio ni en el documento impreso a la señorita Yanila Bernal Troya igualmente la sentencia de casación caso específicamente en lo referente a los menores EYBT y MJBL, en lo demás manifestó no se casa en lo demás.

Ahora bien si concluye la pasiva que dicha circunstancia constituye una omisión del juzgador de segunda instancia quien al completar la parte resolutiva de la sentencia no incluyó la señora Yanila Bernal Troya debió hacer uso del contenido de los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso pues siendo que dicho vacío ocurrió en esa instancia Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral no le es dable a este despacho interpretar y menos aún modificar el contenido de las sentencias en sede de ejecución, máxime si se trata de la sentencia de segunda instancia y sentencia de casación en un asunto resuelto en primera instancia en esta sede judicial con lo cual incluso de modificarse podría incurrirse

Inconforme con la decisión el apoderado de la ejecutada, interpuso recurso de apelación, manifestando que, el juzgado simplemente se limitó a indicar que como no aparece en la parte resolutiva Yanila Bernal se debe entender que en consecuencia quedó en firme el pago de los 100 salarios mínimos por concepto de los perjuicios, advirtiendo no se hizo una interpretación de la

---

en una nulidad, luego entonces para esta juzgadora al no estar de modo concreto la modificación del numeral cuarto de la sentencia de fecha 14 de julio de 2016 en lo referente a la demandante Yanila Bernal Troya, se considera que se encuentre ejecutoriada la decisión aquí proferida es decir la condena en su favor por valor de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes pues vuelve y se insiste a este despacho no le está dado la modificación de una sentencia judicial y menos aún si se trata de una decisión del superior la cual es sentencia de fecha 29 noviembre 2016 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

Zanjado lo anterior, procede el despacho respecto de las condenas en concreto a determinar cuáles de ellas fueron canceladas por la ejecutada conforme alegatos y depósitos judiciales allegados al expediente así que se hace el cuadrito de resumen de las condenas del proceso ordinario que anterior a la audiencia fue compartido a las partes para que lo pudiesen observar más detalladamente:

- Numeral primero del tribunal lucro cesante consolidado obra $22.145.105.07
- Numeral primero del tribunal lucro cesante futuro $83.533.667.05
- Numeral segundo del tribunal perjuicios Morales José Ignacio Bernal es $6.894.540
- Numeral segundo del tribunal perjuicios Morales Nayiris Troya $4.136.724
- Numeral segundo del tribunal perjuicios Helen Astrid Bernal Troya $4.136.724
- Numeral primero en la sentencia de la corte EYBT $20.000.000
- Numeral segundo de la sentencia de la corte MJBL $20.000.000
- Numeral quinto de la sentencia del tribunal a favor de Ignacio Bernal 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2021, $9.085.260.
- Inciso sexto en el numeral cuarto de la sentencia del Juzgado 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, $90.852.600 para 2021

Total, de la liquidación año 2022 $260.784.320.12.

- Costas y agencias en derecho de primera y segunda instancia $24.000.000.

Total, de la liquidación del año 2022 $284.764.620.12

- Consignación de depósito judicial folio 1295 a 1300 $180.710.036.12
- Consignación depósito judicial folio 1295 a 1308 adverso 1310 $14.407.464

Valor de la liquidación al 15 de noviembre de 2022 $89.667.120

Voy a compartir el cuadro, aunque las partes ya tienen conocimiento del mismo para que quede grabado en la audiencia y así pueda ser observado por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá.

Bueno, ya quedando grabado para que pueda ser observado por el tribunal, continua el despacho señalando que acorde con lo anterior se declarara parcialmente probada la excepción de pago y se dispondrá seguir la ejecución por el valor de $89.667.120 más las costas de la ejecución conforme a lo resuelto en la excepción de pago por sustracción de materia el despacho se releva a estudiar las demás propuestas, en razón y en mérito de lo expuesto el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:

PRIMERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de pago conforme a la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONTINUAR con la ejecución por la suma de $89.667.120.

TERCERO: CONDENAR en costas a la ejecutada."

sentencia tanto de la parte considerativa como de la resolutiva, señalando que el Tribunal efectivamente sí hizo referencia en su parte considerativa en cuanto a que los perjuicios a que se estaba condenando y modificando de la sentencia del juzgado era respecto de la compañera del señor Bernal y de sus cuatro hijas, por lo que en su sentir lo expuesto por el juzgado de primer grado constituye un enriquecimiento ilícito, dado que no se puede sostener que como no se menciono en la parte resolutiva del fallo a una cuarta hija se deben mantener los 100 smmlv que si fueron revocados.

De otra parte, señala la conclusión, la hermenéutica y la interpretación que se hace a la sentencia de la Sala Laboral de la Corte tampoco se ajusta a la realidad, dado que, si bien dicha Corporación mantiene la condena respecto de las menores EYBT y MJBL, se debe entender que no hubo condena por perjuicios en relación a los demás demandantes, dado que fue enfática en señalar que estaban prescritos para todos menos para esas dos menores.

Razones por las cuales considera, no solamente se ha debido declarar el pago total de la obligación sino también declarar la compensación para que la parte actora reintegre el saldo que se canceló adicional.

Finalmente expone que al demandante le fue "*quitada*" su pensión y por ende hay inexistencia del título ejecutivo que fue lo que dio lugar al pago de los perjuicios, desapareciendo con ello toda obligación a su cargo, manifestando aportar ante esta instancia la prueba de ello, como un hecho sobreviniente. (récord 19:37[2], ibidem).

---

[2] **APODERADO DRUMMOND (Récord: 19:37):** Gracias su señoría, por no estar de acuerdo con la providencia que dicta su despacho procedo a presentar el recurso de apelación para el H Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con el fin de que revoque la sentencia que ordena continuar con la ejecución y acepta parcialmente la probada la excepción de pago, lo cual sustento y fundamento de la siguiente manera:

Discrepamos primero en cuanto a que el juzgado no hace ningún razonamiento ni ninguna objeción a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que le indican cómo se debe interpretar una sentencia en estos casos, el juzgado simplemente se limita a indicar que como no aparece en la parte resolutiva esa situación en relación con Yanila Bernal se debe entender que en consecuencia pues quedó en firme el pago de los 100 salarios mínimos por concepto de los perjuicios, en primer lugar sin hacer ninguna consideración a lo que ya ha expresado la Corte Suprema de Justicia en lo que se debe entender como una providencia y una sentencia que involucra tanto su parte considerativa como su parte resolutiva, en efecto a nuestro juicio no solamente basado en la interpretación y en esas decisiones de la corte incluso hay una sentencia también de la Sala de la Corte Constitucional en el sentido de que tanto la parte considerativa como en la parte resolutiva hace parte y debe tenerse en cuenta para efectos de

interpretar la providencia, el despacho pasa por alto que efectivamente sí hubo dentro de la parte considerativa una decisión por parte tanto del Tribunal como por parte de la Corte, si oímos la sentencia del Tribunal en el minuto 29:10 dice el tribunal comillas "en efecto la compañera permanente del señor José Ignacio Bernal Montero como para sus cuatro hijas quienes probaron su parentesco con los derechos y bienes se han visto afectadas por los padecimientos de su familia", que significa eso señora juez, que el tribunal efectivamente sí hizo referencia en su parte considerativa de que los perjuicios a que se estaba condenando y modificando la sentencia de su juzgado hacía referencia a la compañera del señor Bernal y a sus cuatro hijas quienes probaron su parentesco con los registros civiles, o sea de dónde puede llegarse a una conclusión diferente de que entonces la tercera hija no se mencionó en la parte resolutiva y en consecuencia desconocer lo que se dijo en la parte considerativa de la sentencia donde se refirió en forma expresa a sus cuatro hijas incluyendo a Yanila y lógicamente al fenómeno probatorio cuando indica que probaron el parentesco sus cuatro hijas, entonces no entiendo incluso me parece que sería permitirle enriquecimiento ilícito al contrario a lo que piensa el juzgado en que está modificando la sentencia darle una interpretación diferente bajo el entendido de que el tribunal le dice los perjuicios se deben tasar por cada hija que está acreditada con los registros civiles de esta manera 6 salarios mínimos para cada una de ellas de acuerdo al criterio ya de la Corte reiterado y 10 salarios para el demandante para ahora decir ah no es que resulta que se debe mantener lo que dijo el Juzgado en 100 salarios mínimos cuando eso ya fue revocado, es que si le revocan en relación con un criterio jurisprudencial, no entendemos cómo puede ser acogido parcialmente por el Juzgado que acepte le revocaron bajo el criterio de que los salarios y perjuicios morales se entiende por 10 salarios mínimos y 6 salarios para la compañera y los cuatro hijos que están acreditados para sostener no que es que como no se mencionó una cuarta hija en la parte resolutiva entonces se deben mantener los 100 salarios cuando ya eso se lo revocaron, entonces por eso nos extraña que el juzgado no ha hecho ninguna interpretación conforme a lo que ya ha interpretado nuestra Corte, es desconocer el criterio jurisprudencial y reiterado por eso citamos varias jurisprudencias de la H Corte Suprema y el desconocimiento de una sentencia reiterada de la Corte puede llegar a constituir hasta una vía de hecho sin lugar a dudas, pero si vamos más allá de toda sana crítica y hermenéutica de la propia sentencia pues no tienen ningún fundamento que se diga que el demandante tuvo derecho a perjuicios por 10 salarios mínimos la compañera y sus hijas que están acreditadas en el expediente a 6 salarios mínimos pero que en forma totalmente incongruente desproporcionada y sin ningún fundamento a una de las mismas hijas entonces tenga derecho a 100 salarios mínimos, o sea más de lo que tuvieron sumados todos sus hermanos, madre y padre dónde está la hermenéutica, la sana crítica, la interpretación que precisamente es totalmente echamos de menos en esta providencia del juzgado.

Qué dice el Código General del Proceso, el Código General del Proceso habla de las clases de sentencias y providencias en su artículo 278 y en el artículo 280 indica que es una sentencia, que comprende la sentencia o sea así no tuviéramos una reiterada jurisprudencia de la Corte se ha debido acudir al artículo 280 del Código General del Proceso que indica que la sentencia tiene La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella, la sentencia incluye de acuerdo al propio Código General del Proceso la parte considerativa y a renglón seguido habla de la parte resolutiva y dice La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código, cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación, entonces su señoría la sentencia por propia disposición del Código General del Proceso comprende la parte considerativa y la parte resolutiva y por eso nos extraña que el jurado se limita solamente a revisar la parte resolutiva y entonces como la parte resolutiva no dice y no se refiere y no toma la misma sentencia en su parte considerativa pues llega a una conclusión que lógicamente es la que nosotros decimos constituiría una vía de hecho y hasta un enriquecimiento pues hasta ilícito, porque nadie entiende cómo a sus hermanas le revocan los perjuicios para decir que son 6 salarios mínimos, pero ella va a tener 100 salarios mínimos.

Adicionalmente, la conclusión y la hermenéutica y la interpretación que hace la sentencia de la Sala Laboral de la Corte tampoco se ajusta a la realidad, qué dice la corte, la corte indica se modifica el numeral cuarto en la sentencia del Juzgado y en su lugar se condena a la demandada a reconocer a la

Para resolver, se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este especial, en orden a desatar el recurso de apelación promovido por la parte ejecutada, contra la providencia proferida por la Juez 29 Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el pasado 17 de noviembre del 2022, mediante la cual declaró probada parcialmente la excepción de pago y dispuso seguir la ejecución por valor de $89.667.120.

En esa dirección, previo a resolver debe recordarse, el título base de la ejecución lo constituyen las sentencias proferidas en primera instancia el 14

---

menor EYBT $20.000.000 a título de perjuicios morales, segundo se revoca el numeral quinto ordenando el pago del mismo monto y por igual concepto a favor de la otra menor, pues si solamente se ordena, la corte ordena mantener en firme la condena a las dos menores, pues se debe entender que no hubo condena en relación en perjuicios con relación a los demás demandantes, pero es más en el artículo tercero que dice se modifica el numeral sexto para precisar que se declara probada la excepción de prescripción frente a la enfermedad de síndrome de manguito rotador para todos óigase bien los demandantes para todos los demandantes, por Dios es que cuáles son los demandantes pues todos los demandantes y dice salvo para las menores EYBT y MJBL perdón es que eso no requiere ni siquiera otro tipo de interpretación, están prescritas para todos los demás solo se mantuvo la Corte fue clara solo se mantiene en relación con las dos menores porque la protección no la prescripción no puede operar ya he en virtud de lo dicho por la propia corte, los demás estarían prescritos su señoría.
Bajo esas consideraciones señora juez pues consideramos que no solamente se ha debido declarar el pago total de la obligación sino también se ha debido ordenar declarar la excepción de compensación para que la parte actora nos reintegrará el saldo que de acuerdo a lo que se canceló pues se canceló de demás, por eso también estamos solicitando al H Tribunal que haga un pronunciamiento en relación con que se pagó totalmente y adicionalmente un pronunciamiento en relación con que esa excepción de compensación debe operar y se ordene el reembolso de esas sumas canceladas de demás.

Finalmente su señoría ha surgido un hecho sobreviniente y una prueba sobreviniente que vamos a presentar ante el Tribunal que consiste en la inexistencia del título, el apoderado el doctor Benjamín ha indicado que no se podía hacer ninguna fórmula de arreglo en consideración a que el demandante le fue quitada su pensión y si le fue quitada su pensión señora juez el título Ejecutivo que dio pie a este proceso fue precisamente el reconocimiento de unos perjuicios como consecuencia de una pensión que se le dio al ex trabajador y si bajo esas circunstancias su señoría ha surgido un hecho sobreviniente que hasta ahora conocemos en esta audiencia y es que le fue revocada la pensión, pues bajo ese entendimiento el título ejecutivo desaparece lo que dio causa y razón a este título Ejecutivo e incluso al proceso, desapareció porque le fue revocada la pensión y le fue revocada en consecuencia pues también la obligación que dio origen a esta demanda entonces con base en eso pues haremos las diligencias pertinentes para acreditar en segunda instancia y traer como prueba de este hecho sobreviniente que lógicamente daría al traste no solamente con todo el proceso ejecutivo, sino también con todo el mandamiento y todo el pago que se estaba haciendo aquí en este proceso y el pago que se hizo lógicamente resultaría un pago inexistente, injustificable y bajo ningún título, la obligación se extendía y bajo esas consideraciones de la compensación operaría y se debería ordenar el reintegro de los $195.000.000 su señoría, $195.117.000.500,12 centavos que como consecuencia de desaparecer esa obligación se deben ser reintegrados por la parte actora, así dejó en conclusión entonces expuesta el recurso de apelación para ante el H Tribunal, reservándome la Facultad de presentar, adicionar las pruebas y sustentar otros argumentos ante el H Tribunal, muchas gracias su señoría.

de julio del 2016 por el Juzgado 29 Laboral (Archivo 30 expediente digital), modificada por esta Corporación el 29 de noviembre del 2016 (Archivo 32 expediente digital, págs. 34 a 58), como también la de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral SL3749-2021 (Archivo 34 expediente digital, págs. 78 a 112) y el auto que aprueba la liquidación de costas (Archivo 36 expediente digital, pág. 4).

De tal manera, teniendo en cuenta la solicitud de ejecución (Páginas 41 a 54 Archivo 36 expediente digital), el Juzgado primigenio, mediante proveído del 16 de agosto del 2022 (Archivo 43), libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

> ***"PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO*** *por vía ejecutiva laboral en contra del DRUMMOND LTD representada legalmente por Juan Carlos López González o quien haga sus veces en favor del señor JOSE IGNACIO BERNAL MONTERO C.C. No. 12.521.268, por los conceptos que a continuación se indican.*
>
> *1.- Ordenar a la DRUMMOND LTD representada legalmente por Juan Carlos López González o quien haga sus veces a pagar las siguientes sumas y conceptos:*
>
> *a. La suma de $22.145.105,07 por concepto Lucro Cesante consolidado*
>
> *b. La suma de $83.533.667,05 por concepto de lucro Cesante futuro*
>
> *2.- Ordenar a la DRUMMOND LTD representada legalmente por Juan Carlos López González o quien haga sus veces a pagar por perjuicios morales así a favor de:*
>
> *a. José Ignacio _Bernal Montero la suma de $6.894.540*
> *b. Nayiris Troya Payares la suma de $4.136.724*
> *c. Estefany Yiset Troya $20.000.000*
> *d. Helen Astrid Bernal Troya $4.136.724*
> *e. Mariana José Bernal Lima la suma de $20.000.000*
> *f. Yanila Bernal Troya La suma de Cien Salarios mínimos legales mensuales vigentes*
>
> *3.- Ordenar a la DRUMMOND LTD representada legalmente por Juan Carlos López González o quien haga sus veces a pagar al señor JOSE IGNACIO BERNAL MONTERO, la suma de 10smmlv, por concepto de daño a la salud- o perjuicio fisiológico-.*
>
> *4-. Ordenar a la DRUMMOND LTD representada legalmente por Juan Carlos López González o quien haga sus veces a pagar la suma de $24.000.000,oo por concepto de costas del proceso ordinario.*
>
> ***SEGUNDO:*** *Tener en cuenta al momento de la liquidación del crédito los pagos realizados por valor de $180.710.036,12 y la suma de $14.407.464,oo-.*

> ***TERCERO:*** *NO. libra mandamiento de pago por los intereses moratorios por cuanto los mismos no están ordenados en la sentencia título base de recaudo ejecutivo-."*

Así las cosas, teniendo en cuenta las manifestaciones de la alzada, en virtud del principio de consonancia, la controversia en esta instancia girará en torno a establecer si la obligación objeto de mandamiento de pago se encuentra pagada en su totalidad, verificando específicamente la orden de pago frente a YANILA BERNAL TROYA.

En esa orientación se advierte, de conformidad con las providencias base de la ejecución a las que se hizo referencia al inicio de éste proveído, sea lo primero indicar si bien el numeral cuarto de la sentencia de primer grado dispuso (Archivo 30 expediente digital, pág. 2):

> ***"CUARTO: CONDENAR*** *a la demandada DRUMMOND LTD representada legalmente por el señor JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ o por quien haga sus veces a reconocer y pagar a los demandantes por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas en su orden:*
>
> - *Al señor JOSÉ IGNACIO BERNAL MONTERO la suma de 200 s.m.l.m.v.*
> - *A la señora NAYIRIS TROYA PALLARES en calidad de compañera permanente la suma de 100 s.m.l.m.v.*
> - *A STEFANY YISETH BERNA TROYA en calidad de hija del demandante la suma de 100 s.m.l.m.v.*
> - *A GELEN ASTRID BERNAL TROYA en calidad de hija del demandante la suma de 100 s.m.l.m.v.*
> - ***A YANILA BERNAL TROYA en calidad de hija del demandante la suma de 100 s.m.l.m.v.***

Frente a tal aspecto esta Corporación en sentencia del 29 de noviembre del 2016 señaló (Archivo 32 expediente digital, págs. 57 y 58):

> ***PRIMERO: MODIFICAR*** *el numeral* ***TERCERO*** *del fallo proferido por la Juez 29 Laboral del Circuito de Bogotá, aclarando que la condena por lucro cesante consolidado asciende a la suma de* ***$22.145.105,07*** *y por concepto de lucro cesante futuro* ***$83.533.667,05****.*
>
> ***SEGUNDO: MODIFICAR*** *el numeral* ***CUARTO*** *de la sentencia apelada, para en su lugar condenar a la demandada DRUMMOND LTD, a pagar por perjuicios morales las siguientes sumas:*
>
> 1. *José Ignacio Bernal Montero (Víctima) 10 smmlv = $ 6.894.540*
> 2. *Nayiris Troya Payares (Compañera) 6 smmlv = $ 4.136.724*
> 3. *Estefani Yiset Bernal Troya (Hija) 6 smmlv = $ 4.136.724*

4. Helen Astrid Bernal Troya (Hija) 6 smmlv = $ 4.136.724

***TERCERO: REVOCAR** el numeral **QUINTO** de la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar a la encartada a pagar a **MARIANA JOSÉ BERNAL LIMA,** en calidad de hija del señor José Ignacio Bernal Montero, la suma de 6 smmlv ($ 4.136.724), por concepto de perjuicios morales.*

***CUARTO: MODIFICAR** el numeral SEXTO de la sentencia apelada, para en su lugar DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción.*

***QUINTO: ADICIONAR** el numeral NOVENO a la sentencia de instancia, en el sentido de CONDENAR a DRUMMOND LTD., a pagar al señor José Ignacio Bernal Montero, la suma de 10 SMMLV, por concepto del daño a la salud o perjuicio fisiológico.*

***SEXTO: CONFIRMAR** la sentencia apelada, en lo demás.*

***SÉPTIMO: SIN COSTAS** en esta instancia.*

En este orden de ideas, deber señalar esta Sala de decisión al recurrente que lo que no quedó inserto en el numeral *SEGUNDO* del fallo aquí proferido, es evidente que no fue objeto de modificación, por ende, la condena de primer grado respecto de YANILA BERNAL TROYA en calidad de hija del demandante en la suma de 100 s.m.l.m.v. se encuentre en firme, aunado a que en el numeral *SEXTO* se señaló que se **CONFIRMABA la sentencia apelada, en lo demás,** es decir, que allí se encuentra incluida la condena impuesta a la ejecutada en relación con YANILA BERNAL TROYA.

Téngase en cuenta que si bien en las consideraciones del fallo de este Tribunal se señaló: *"Así, de la prueba testimonial recaudada, la Sala encuentra que en efecto, la compañera permanente del señor BERNAL MONTERO, como sus cuatro hijas quienes probaron sus parentesco con los registros civiles obrantes a folios 330 a 333 se han visto afectadas por los padecimiento de su familiar…*" (Archivo 32 expediente digital, pág. 53), es decir, se hizo referencia a cuatro (4) hijas, lo cierto es que la condena de la Juez *a quo* solo fue modificada respecto de Estefani Yiset Bernal Troya (Hija), Mariana José Bernal Lima (Hija) y Helen Astrid Bernal Troya (Hija), de modo que se itera se mantuvo la impuesta para YANILA BERNAL TROYA en la suma de 100 smmlv.

Recuérdese que la parte resolutiva de una sentencia judicial es la decisión y su obligatoriedad está por fuera de toda discusión, siendo la parte motiva la que contiene el análisis racional que sustenta la decisión, razón por la cual de conformidad con el artículo 306 del C.G.P. el mandamiento de pago se debía librar en los términos precisos de la parte resolutiva de las sentencias base de ejecución.

> ***ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN.*** *Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud* ***el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia*** *y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.*

Precisando esta Sala de decisión, ninguna de las partes solicito dentro del proceso ordinario la aclaración o adición de la sentencia frente a la demandante YANILA BERNAL TROYA en los términos dispuestos en el C.G.P., si es que se hacía necesario y al no hacerse se mostró conformidad, de modo que no puede ahora en esta ejecución estudiarse dicho punto, ni ahondar en consideraciones discutidas en los puntos concretos de las apelaciones surtidas en el ordinario.

Ahora y en relación con la sentencia proferida por la Corte Suprema respecto de la cual aduce el apelante, se indicó que los perjuicios estaban prescritos para todos los demandantes con excepción de ESTEFANI YISET BERNAL TROYA y a MARIANA JOSÉ BERNAL LIMA respecto de quienes dispuso el pago de perjuicios morales en suma de $20.000.000 para cada una, se permite la Sala aclarar lo siguiente:

En sentencia proferida en esta instancia se indicó que el señor JOSE IGNACIO BERNAL MONTERO fue diagnosticado con dos enfermedades *síndrome del manguito rotador* y *restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumba*r, precisando que frente a la primera de ellas operó el fenómeno de la prescripción y por ende los perjuicios generados por tal padecimiento no podían ser objeto de

condena, de modo que tan solo se condenó a los perjuicios por la enfermedad de *restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumbar*, frente a la cual no operó la prescripción.

De forma literal se indicó (Archivo 32 expediente digital, págs. 50 a 52):

> "Por ello, es procedente la declaratoria de responsabilidad en cabeza de la empleadora, en la ocurrencia o desarrollo de las enfermedades que hoy padece el accionante, pues se demostró que actuó al menos con culpa leve, al no cumplir con las obligaciones sobre seguridad e higiene industrial, lo que generó un daño, evidenciado en el padecimiento del "*síndrome del manguito rotador"* y de la "*restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumbar*" y que existe una relación de causalidad, cual es, que la causa de las patologías se debieron a los movimientos repetitivos y a la exposición de altas vibraciones por más de 10 horas seguidas, sin que sean de recibo, los argumentos expuestos en la alzada por el apoderado de la pasiva, pues si bien inicialmente pudo existir una confesión derivada de la aplicación del artículo 77 de C.P.L., lo cierto es que la consecuencia contenida en dicha disposición normativa hace referencia a una presunción legal que admite prueba en contrario y como se vio se desvirtuó con el acervo probatorio vertido en autos.
>
> En este punto, debe analizarse la excepción de prescripción propuesta por la demandada, para proceder al estudio de la indemnización plena de perjuicios solicitada por el extremo demandante, recordándose que no es dable comenzar a contar el término extintivo desde el momento en que culmina la relación de trabajo, sino que ello debe hacerse desde el momento en que los médicos califican al trabajador, aspecto que puede inferirse de lo expuesto en sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, radicación No. 39631 del 30 de diciembre del 2012.
>
> Así, debe tenerse en cuenta que para el diagnóstico del "*síndrome del manguito rotador"* hubo dos calificaciones, la primera datada del 18 de diciembre del año 2008 (fl. 60) y la segunda del 26 de enero del 2011(fl. 62), y para la enfermedad de "*restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumbar"* la notificación del dictamen se dio el 26 de diciembre del 2012 (fl. 67), por ello como la demanda se radicó el 9 de julio de 2014 (fl. 450), resulta que los prejuicios generados a causa del "*síndrome del manguito rotador"* se encuentran prescritos en razón a que se sobrepasó el termino trienal establecido en el artículo 488 del C.S.T., no ocurriendo lo mismo respecto "*restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumbar"* en tanto no se superó tal término desde la fecha del dictamen y el de la interposición del libelo, debiéndose declarar parcialmente probada la excepción de prescripción."

Ahora bien en la sentencia de Casación contrario a lo señalado por el apelante, lo que se dijo fue que no se tuvo en cuenta para el estudio de la prescripción, en relación únicamente con la enfermedad "*síndrome del manguito rotador",* que para ESTEFANI YISET BERNAL TROYA y MARIANA JOSÉ BERNAL LIMA, tal fenómeno se encontraba suspendido por ser menores de edad, por ello modificó la condena impuesta y condenó en la suma de $20.000.000 para cada una, advirtiéndose si bien señaló que los

perjuicios estaban prescritos para todos los demandantes con excepción de ellas dos, nótese que solo fue en relación con la enfermedad de "*síndrome del manguito rotador"* más no la de "*restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumbar"* que fue por la que se emitió condena respecto de los demás demandantes.

Para mayor claridad se transcribe la sentencia de la Máxima Corporación así (Archivo 34 expediente digital págs. 108 a 112):

> "Conforme a lo anterior, si para la enfermedad del síndrome de manguito rotador, existieron 2 calificaciones, del 18 de diciembre de 2008 y del 26 de enero de 2011, los derechos originados por ese padecimiento, estarían afectados por la prescripción, al presentarse la demanda ordinaria laboral, hasta el 9 de julio de 2014, transcurriendo los tres años de que tratan los artículos 488 y 151 del CST y del CPTSS, en su orden.
>
> Así, en lo que hace a la primera acusación, el Tribunal, no cometió error en su determinación.
>
> En cuanto a la segunda imputación, se evidencia que el Juez de la apelación, paso por alto que la acción se promovió, entre otros, por los hijos menores del señor José Ignacio Bernal Troya.
>
> En efecto, los documentos de folios 330 y 331, informan que EYBT y MJBL, nacieron el 2 de julio de 1998 y el 12 de diciembre de 2006 respectivamente; de ahí, que la prescripción no podía correr para ellas, hasta que no llegaran a la mayoría de edad, porque procesal como sustancialmente, el eventual derecho discutido no forma parte del patrimonio del representante legal de los incapaces, sino de sus representados (sentencia de casación CSJ SL,30 oct 2012, rad. 39631).
>
> Así, al radicarse la demanda el 9 de julio de 2014 (f.° 450 del cuaderno 1), cada una de ellas, tenía 16 y algo más de 8 años, estando, por lo tanto, suspendido el termino de prescripción para esas menores.
>
> Por lo tanto, y como las hijas del extrabajador, se encuentran legitimadas para reclamar los perjuicios generados por las enfermedades laborales sufridas por su padre, **debe tomarse tanto el síndrome de manguito rotador, como el de restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral, a efectos de tasar los perjuicios morales.**
>
> *(…)*
>
> En este asunto, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y la Guajira, con n.° 2008 (f.° 60 a 63), diagnosticó el síndrome de manguito rotador, con una pérdida de capacidad laboral, del 19.20 %; luego, en la experticia n.° 3194 (f.° 66 a 68), se precisó que el paciente, desde el 2009 presentaba dolor a nivel de columna cervical y lumbar, señalando, como diagnóstico, el de ruptura traumática de disco intervertebral lumbar, calificándolo con una pérdida del 9.55%, con fecha de estructuración el 2 de febrero de 2010.
>
> *(…)*
>
> En sede instancia, sirven los argumentos atrás expuestos, para modificar el numeral cuarto de la sentencia del Juzgado y, en su lugar, se condena a la demandada a reconocer a favor de EYBT, la suma de $20.000.000 a título de perjuicios morales. Se revoca el numeral quinto, ordenando el pago del mismo monto y por igual concepto, a favor de MJBL.

> Se declarará probada la excepción de **prescripción frente a la enfermedad síndrome de maguito rotador**, para todos los demandantes, salvo para las menores EYBT y MJBL.
>
> (…)
>
> En **SEDE DE INSTANCIA**,
>
> **PRIMERO:** Se modifica el numeral cuarto de la sentencia del Juzgado y, en su lugar, se condena a la demandada a reconocer a favor de EYBT, la suma de $20.000.000 a título de perjuicios morales.
>
> **SEGUNDO:** Se revoca el numeral quinto, ordenando el pago del mismo monto y por igual concepto, a favor de MJBL.
>
> **TERCERO:** Se modifica el numeral sexto para precisar que **se declara probada la excepción de prescripción frente a la enfermedad de síndrome de maguito rotador**, para todos los demandantes, salvo para las menores EYBT y MJBL."

Razones por las cuales, los argumentos del apelante no pueden ser tenidos en cuenta como se solicita.

Por otro y en relación con el hecho sobreviviente, esto es, que el demandante ya no cuenta con la calidad de pensionado por invalidez, debe indicarse frente a este aspecto, el demandado apelante en el proceso ordinario señaló en su recurso que como quiera que el actor tenía una pensión de origen común (sic), no se podía generar el pago simultaneo de la pensión con el pago de lucro cesante futuro y consolidado ni mucho menos de perjuicios morales, a lo que esta Corporación le señaló (Archivo 32 expediente digital págs. 56 y 57):

> "Finalmente, es necesario manifestar que conforme lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, el hecho de que al señor BERNAL MONTERO le haya sido otorgada una pensión de invalidez, no impide la condena por perjuicios materiales. Al respecto, en sentencia SL 16367 del 22 de octubre de 2014, se dijo:
>
> > *"(…) la dicha indemnización de perjuicios tiene su génesis en la conducta culposa del empleador, esto es, en el indebido comportamiento contractual laboral; en tanto que, las prestaciones de la seguridad social tienen su fuente en la ocurrencia objetiva de ciertos infortunios en el decurso de la actividad laboral, es decir, una y otras tienen una etiología distinta.*
> >
> > *De ese modo, no resulta jurídicamente atinado que el empleador pretenda cruzar el valor de las prestaciones económicas o asistenciales que dispensa el sistema de seguridad social por razón de la mera ocurrencia de las contingencias laborales, como lo es, entre otras, la pensión de invalidez, con los conceptos indemnizatorios, entre ellos el lucro cesante futuro, causados por su particular comportamiento culposo en la contingencia que afectó la vida o la salud del trabajador."*

Ahora, en el ejecutivo señala que al no tener tal calidad de pensionado, se genera la inexistencia del título ejecutivo. Ante lo cual baste con señalar dicha condena -los perjuicios- no devino como consecuencia de dicha

prestación pensional, sino por haberse acreditado la culpa del empleador en las enfermedades adquiridas por el señor JOSE IGNACIO BERNAL MONTERO ("*síndrome del manguito rotador"* y "*restricción de movimientos de columna lumbar por ruptura traumática de disco intervertebral lumbar"*)

En los términos anteriores y sin más consideraciones, se procederá a confirmar el proveído impugnado, señalándose por esta Sala de Decisión que los montos liquidados por la Juez de primer grado para ordenar continuar con la ejecución por $89.667.120 no fueron objeto de reproche por las partes, razones por las cuales en virtud del principio de consonancia esta Sala no revisara dichas sumas aritméticas.

COSTAS en esta instancia a cargo de la ejecutada.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C**., Sala Laboral

R E S U E L V E

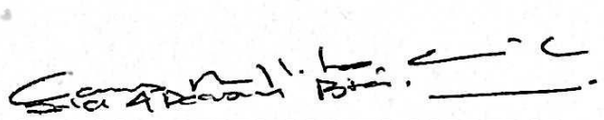
PRIMERO: CONFIRMAR el proveído apelado, en cuanto declaró probada la **EXCEPCIÓN DE PAGO DE MANERA PARCIAL** y dispuso continuar adelante con la ejecución, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la ejecutada.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

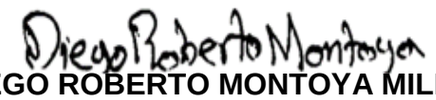


CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR SANDRA PATRICIA MELO CONTRA SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y OTRO (RAD. 35 2016 00493 03).

Bogotá D.C. veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado para presentar los alegatos de conclusión, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el artículo 13 numeral 1º de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, profieren la siguiente:

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por la apoderada de la parte demandada **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** contra el auto proferido en audiencia celebrada el 23 de septiembre de 2022 por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por medio del cual se negó la práctica de la prueba *(Expediente digital, audio articulo 80 archivo 34, récord: 39:40[1]).*

Contra la decisión proferida por el a quo, la apoderada de la demandada **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** oportunamente interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que la sociedad cumplió con la carga impuesta, en el sentido de notificar a la Junta Regional

[1] ***Juez (Récord: 37:36):*** *"Teniendo en cuenta la manifestación de la parte demandada se observa que la doctora Ana Lucía López Villegas no comparece a la diligencia y por lo tanto teniendo en cuenta que en proveído del 27 de julio del año 2022 fue debidamente citada, sin que el perito se haga presente a la diligencia, se dará aplicación a lo señalado en el artículo 228 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión del artículo 145 del Estatuto procesal del Trabajo, es decir, se declara la imposibilidad de apreciar el dictamen allegado por la parte demandada Suramericana".*

de Calificación de Invalidez a través de correos electrónicos por medio de los cuales se puso en conocimiento la providencia que citó a audiencia, adicionalmente, manifestó comunicarse vía telefónica teniendo en cuenta que la Junta Regional de Calificación de Invalidez es una persona ajena a la sociedad demandada. Agregó que no puede resultar perjudicada por la inasistencia de la ponente del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. *(Expediente digital audio articulo 80 archivo 34, récord:35:48)*[2].

Respecto al recurso de reposición presentado el juez de primer grado mantuvo incólume su decisión aduciendo sobre el particular que no puede estar de manera indefinida prorrogando una audiencia al tratarse de una carga que le corresponde a la sociedad demandada al haber solicitado dicha prueba a su cargo, concluyendo que esta parte es quien tiene la obligación de hacer comparecer a la declarante a la diligencia programada por el Despacho. *(Expediente digital audio articulo 80 archivo 4, récord: 39:48).*

Para resolver se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES

Asume la Sala el conocimiento de este proceso ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, debiendo señalar, en primer lugar, el auto mediante el cual se *"… niegue el decreto o la práctica de una prueba"*, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

---

[2] ***Apoderada Suramericana (récord 38:22):*** *"Interpongo recurso de reposición y en subsidio apelación contra su decisión teniendo en cuenta que mi representada cumplió y así se evidencia con el expediente digita que cumplió con la carga que el despacho le impuso, es decir, notificar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez a través de correos electrónicos y enviando el auto adicionalmente como le manifiesto, también se hizo la llamada telefónica, personalmente realicé la llamada telefónica teniendo en cuenta que la Junta Regional de Calificación de Invalidez es una persona ajena a mi representada, de tal manera que, telefónicamente pregunté cuál era el conducto a seguir y fue lo que me dijeron, de tal manera señor juez que, respetuosamente. interpongo el recurso de reposición en subsidio apelación, teniendo en cuenta que no puede resultar perjudicada Seguros de Vida Suramericana SA por el hecho de terceros, es decir, la inasistencia del perito o de la doctora ponente del dictamen ponente del dictamen de Junta Regional de Calificación de Invalidez".*

Previo al estudio de fondo, debe precisar la Sala, con la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007, se fortaleció el principio de oralidad, el cual supone los de publicidad, inmediación y concentración, así como la premisa según la cual el Juez es el director del proceso, quien se erige como tal en el curso de los juicios laborales, dadas las facultades que a él confiere el derecho procesal laboral, al consagrarlo así en el artículo 48 del C.P.L y S.S., norma que al otorgarle al Juez tal facultad, le permite conducir la litis en forma tal que garantice su rápido adelantamiento, así como el derecho de defensa de las partes, y por sobre todo, la inmediación, permitiéndole estar al tanto en la formación de los medios de prueba de utilidad para su convencimiento.

El principio de inmediación es de la esencia del proceso oral, pues éste impone al Juez, estar siempre presente dirigiendo la actuación, con lo cual adquiere el conocimiento del litigio en toda su extensión, y tiene contacto directo con los intervinientes, lo cual le permite un amplio conocimiento de los hechos, así como conducir el procedimiento evitando dilaciones, actuaciones o pruebas innecesarias, siempre bajo el respeto de los derechos fundamentales de las partes; igualmente, la concentración implica que los actos procesales deben aproximarse en el tiempo al máximo posible.

En virtud de lo anterior, la norma procesal ha otorgado instrumentos para el cumplimiento del cometido de la justicia ordinaria laboral y del sistema de oralidad, de la mano de políticas orientadas hacia la descongestión judicial, y de los principios que la gobiernan.

En este orden de ideas, el problema jurídico que debe dilucidar esta Sala de decisión se circunscribe en determinar si es procedente practicar la prueba, consistente en la contradicción del dictamen proferido por la Médico Ponente en calidad de integrante de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de fecha 25 de abril de 2022 y que fue aportado al plenario (*archivo 21Copia Dictamen del expediente digital).*

Pues bien, allegado el dictamen en mención, el *a quo* lo puso en conocimiento de las partes mediante providencia de fecha 18 de mayo de 2022 *(archivo 22AutoPoneConocimiento del expediente digital),* por lo que la

apoderada de la parte actora solicitó la contradicción del mismo en los términos previstos en el artículo 228 del C.G.P., aplicable por analogía del articulo 145 del C.P.T. y S.S.

Ante lo anterior, el juez de primera instancia mediante auto de fecha 17 de julio de 2022 (*archivo 25AutoFijaFecha*), dispuso la citación del perito Ana Lucia López Villegas, señalando para el efecto el día 23 de septiembre de 2022. Por ende, llegada la fecha para llevar a cabo la contradicción del dictamen y como quiera que la perito no compareció el Despacho se abstuvo de citarla nuevamente, relevándose del estudio del dictamen aportado por Suramericana S.A., considerando que no se puede postergar la citación cuando el despacho había señalado la fecha con una antelación prudente, siendo además debidamente notificada sobre la diligencia por correo electrónico, conforme lo acreditó la parte demandada.

En vista de lo anterior, considera la Sala, no se avizora errada la decisión de primera instancia ya que atendiendo sus facultades como director del proceso de conformidad con el artículo 48 del C.P.T. y de la S.S., y al tenor de lo consagrado en el artículo 53 de la misma codificación, en materia probatoria, resulta viable al Juzgador rechazar la práctica de pruebas que a bien tenga, pues en este caso se trata de una perito que no compareció, habiéndose señalado como fecha inicial el día 14 de septiembre de 2022, diligencia que valga indicar, no se surtió debido a la solicitud de aplazamiento impetrada por la apoderada de la demandante (*archivo 30Allega incapacidad pdf, expediente digital, páginas 1 a 3),* habiéndose reprogramado la misma para el 23 de septiembre del mismo mes y año, fechas que fueron puestas en conocimiento de la perito, conforme se constata con la documental aportada por **SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.,** consistente en los correos electrónicos remitidos los días 29 de julio, 7, 12 y 15 de septiembre de 2022 a los emails jurídica@juntaregionalbogota.co y johana.rios@juntaregionalbogota.co (archivo 26Correo Remite Auto, 28ConstanciaNotificacionJunta, 29ConstanciaNotificacionJunta y 32ConstanciaNotificacionJunta del expediente digital), comunicaciones que dieron a conocer las 2 fechas programadas por el a quo y que evidencian que la profesional tenía pleno conocimiento que la diligencia se llevaría a

cabo y por ende, se surtiría la contradicción del dictamen prevista en el artículo 228 del C.G.P., correspondiendo de esta forma, únicamente al juez como director del proceso verificar si practica o no dicha prueba, lo cual no obsta para que, en caso de considerarlo viable, el *a quo* decrete otros medios de prueba que estime necesarios para resolver el debate planteado por las partes

En gracia de discusión observa la Sala que la perito no dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 228 del C.G.P., en la medida que no justificó su inasistencia antes de la audiencia, pues solo aportó excusa el 6 de octubre de 2022 vía correo electrónico de manera extemporánea.

De conformidad con las consideraciones que anteceden procede la confirmación del proveído apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral,

RESUELVE

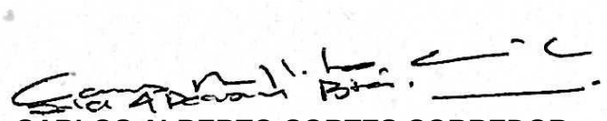
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, de conformidad con las motivaciones precedentemente expuestas.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del demandante.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO MANUEL FERNANDO BETANCOURT RUIZ CONTRA IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÒN "CENTRO MISIONERO BETHESDA" - (RAD. 38 2020 000209 01).

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Vencido el término de traslado otorgado, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, profieren la siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso apelación interpuesto por el apoderado de la demandada **IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÒN "CENTRO MISIONERO BETHESDA",** contra el auto proferido por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito, el día 14 de diciembre de 2022 (expediente digital, *14Acta suspendeporRecursodeNulidad.pdf)*, mediante el cual no se accedió a la nulidad propuesta por el extremo demandado, tras considerar el *a quo,* en los términos del artículo 135 del Código General del Proceso, la parte que alega una nulidad deberá tener legitimación para proponerla expresando la causal invocada y los hechos en que se fundamente, así como deberá aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, destacando, no podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la originó ni quien omitió alegarla como excepción previa teniendo la oportunidad para hacerlo ni quien después de ocurrir la causa haya actuado en el proceso sin proponerla. Igualmente infirió el juzgador, no se adujo específicamente cuál causal de las previstas en el artículo 133 ibidem se habría configurado con ocasión de los hechos a los que hace alusión el aquí recurrente, señaló, dentro de este escenario el hecho de que las partes no cumplan con su deber de remitir memoriales con copia a los demás apoderados en los términos del Decreto 806 del 2020 y de la legislación que lo ha adoptado como permanente no establece que ello

comporte una causal de nulidad sino que implica una eventual sanción para el apoderado que incurra en este tipo de omisiones.

También consideró, este escenario no se enmarca como una causal de nulidad máxime cuando las partes tienen acceso al expediente y cuentan con los medios de información y de comunicación para garantizar el acceso a los procesos, añadió, el auto que dispuso reconocer al Doctor Velázquez Reyes como apoderado de la demandada tuvo por contestada la demanda, disponiéndose la notificación de la demanda por anotación en estado. Dicha determinación fue debidamente notificada, por lo que si la parte no tenía el documento o no le había sido copiada la reforma debió comunicarse con el despacho dentro del término correspondiente y, así suministrar o pedir el acceso al expediente digital, en este contexto casi 6 meses después de haberse corrido traslado no hubo manifestación de naturaleza alguna en relación con la reforma, disponiéndose tener por no contestada la reforma por la demandada y en ese momento se fijó fecha para la audiencia de conciliación y primera de trámite, incluyéndose en el auto el link de acceso a la audiencia correspondiente.

Así, en sentir del a quo, era carga de la parte demandada verificar la providencia y acceder a la audiencia correspondiente en su oportunidad lo que efectivamente aconteció con del demandante, quien estuvo pendiente del proceso y concurrió a la audiencia de conciliación y primera de trámite en la fecha en que fue programada, agregó, en este escenario no podría señalarse que se ha vulnerado de alguna manera el debido proceso y el derecho de defensa cuando la demandada ha tenido tiempo más que suficiente para participar en el trámite procesal, resaltando, la audiencia que se adelantó del artículo 77 de conciliación se surtió el 3 de agosto del año 2022 y se fijó fecha para efectos de trámite y juzgamiento para el día 6 de diciembre del año 2022, esto es, con una antelación importante, consecuente con ello, rechazó la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado de la demandada.

Inconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación, insistiendo en la configuración de la nulidad procesal, al afirmar que el artículo 29 de la Constitución Política basado también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, prevé la procedencia del auto que decreta una nulidad por carencia de defensa técnica, informando que el despacho corrió traslado por el término de (5) días de la reforma a la demanda, y que la misma no fue conocida por dicho extremo al no ser "copiado" en el correo por el demandante, igualmente, no se enteró de la

programación de la audiencia de que trata el artículo 80 del CPT y de la SS., programada para el día 6 de diciembre de 2022, afirmando, que no podía asistir en esa fecha, dado que tenía programada otra audiencia en otro juzgado el mismo día, la que asegura inició a las 9 am hasta las 4 pm, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar – Tolima, aportando como prueba el "Acta de Audiencia Oral Civil" realizada el 5 de septiembre de 2022, en la cual se fijó fecha para la audiencia de juzgamiento para ese mismo día, 6 de diciembre de 2022, finalizó informando, existe carencia de defensa técnica, no por deficiencia del defensor, sino, por otras razones que ocasionan la nulidad propuesta conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dado que no conoció el escrito de reforma a la demanda, ni pudo participar junto con su representada en la audiencia programada para el día 6 de diciembre de 2022, por las razones expuestas.

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se aprecia que lo atacado por el impugnante es la decisión de la Juez de primer grado de negar la solicitud de nulidad elevada, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación a voces del numeral 6º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, modificatoria del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., razón por la cual se estima viable proceder a su estudio.

En esa orientación, conviene recordar que el artículo 29 de la Constitución Nacional consagra el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas para que nadie pueda ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el Juez o Tribunal competente, con observancia de las formas propias de cada juicio.

Para garantizar dichos postulados, el legislador en su sabio entender erigió en nulidades determinados vicios que impiden que exista el debido proceso, para efectos de no dejar al albedrío del interprete el determinar cuándo se da la violación.

Fue así entonces como se taxaron las nulidades que pueden invalidar la actuación surtida dentro de un proceso, como desarrollo del art. 29 de la Constitución, por lo que no puede existir causal de nulidad distinta de las señaladas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Cosa diferente es que se configuren otras

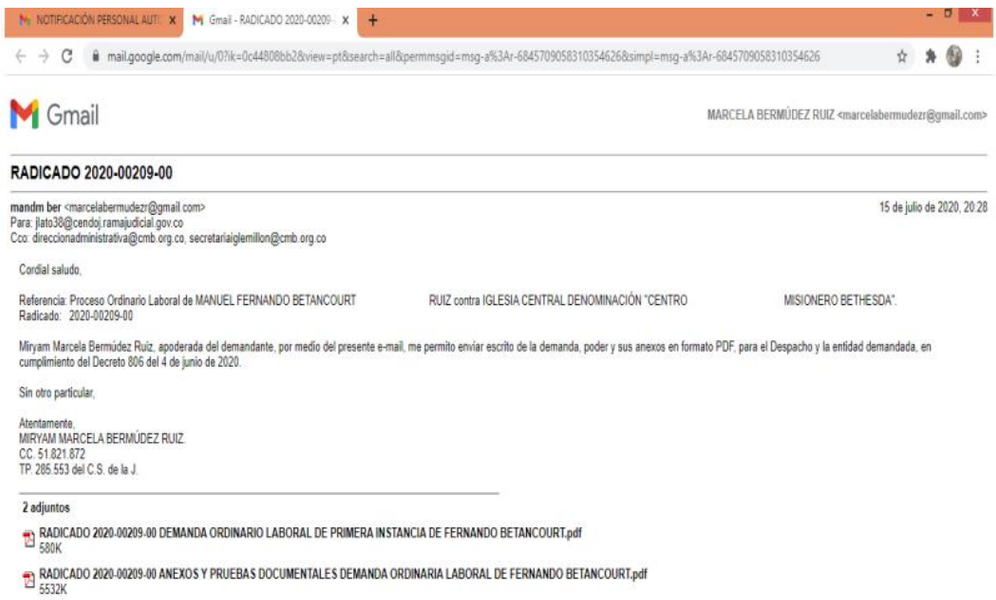
irregularidades, por lo que fuera de las taxativamente contempladas en la norma procesal, no existen otras nulidades o si se generan no producen la invalidez de la actuación, salvo que tal yerro lleve consigo una violación al debido proceso o a las prerrogativas fundamentales de las partes.

En ese orden de ideas, se observa claramente que el extremo demandado, no invoca ninguna causal prevista en el artículo 133 del C.G.P., siendo de gran relevancia dar a conocer dicha situación para emitir un pronunciamiento de fondo y verificar si los hechos se ajustan a lo normado, pues el incidentante expone de manera general actuaciones que no se ajustan a ninguna causal del contenido normativo en cita. Sobre este punto el articulo ibidem, señala:

> *"El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*
>
> *1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.*
>
> *2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.*
> *3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.*
>
> *4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*
>
> *5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.*
>
> *6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.*
>
> *7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.*
>
> *8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.*
>
> *Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.*
>
> ***PARÁGRAFO.*** *Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece".*

En acatamiento de la anterior normatividad, considera la Sala que no es plausible analizar ninguna causal al no mencionarse por la demandada, alguna de ellas. Sin embargo, con el fin de verificar si los hechos puestos en conocimiento configuran una posible nulidad, pese a que no fue técnicamente enlistada por el apoderado recurrente la causal, se procede a la valoración de las actuaciones surtidas para extraer lo pertinente.

En primera medida la demandada **IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÒN "CENTRO MISIONERO BETHESDA"** conoció sobre la existencia del presente proceso a través del correo calendado 15 de julio de 2020, por medio del cual la parte actora puso en conocimiento la demanda y anexos (página 3, archivo 03ConstanciaDeNotificacion2020.pdf), conforme se muestra continuación:



NOTIFICACIÓN PERSONAL AUT... | Gmail - RADICADO 2020-00209-...

mail.google.com/mail/u/0?ik=0c44808bb2&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-6845709058310354626&simpl=msg-a%3Ar-6845709058310354626

Gmail

MARCELA BERMÚDEZ RUIZ <marcelabermudezr@gmail.com>

RADICADO 2020-00209-00

mandm ber <marcelabermudezr@gmail.com> 15 de julio de 2020, 20:28
Para: jlato38@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cco: direccionadministrativa@cmb.org.co, secretariaiglemillon@cmb.org.co

Cordial saludo,

Referencia: Proceso Ordinario Laboral de MANUEL FERNANDO BETANCOURT RUIZ contra IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN "CENTRO MISIONERO BETHESDA".
Radicado: 2020-00209-00

Miryam Marcela Bermúdez Ruiz, apoderada del demandante, por medio del presente e-mail, me permito enviar escrito de la demanda, poder y sus anexos en formato PDF, para el Despacho y la entidad demandada, en cumplimiento del Decreto 806 del 4 de junio de 2020.

Sin otro particular,

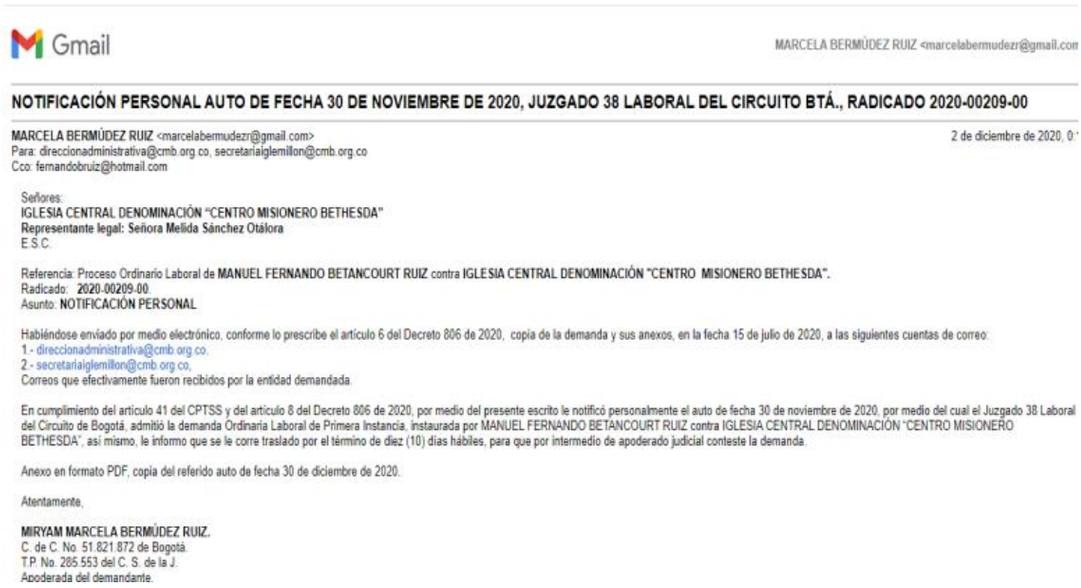
Atentamente,
MIRYAM MARCELA BERMÚDEZ RUIZ.
CC. 51.821.872
TP. 285.553 del C.S. de la J.

2 adjuntos

RADICADO 2020-00209-00 DEMANDA ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE FERNANDO BETANCOURT.pdf
580K

RADICADO 2020-00209-00 ANEXOS Y PRUEBAS DOCUMENTALES DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE FERNANDO BETANCOURT.pdf
5532K

De igual forma, acorde con el artículo 41 del CPTSS y artículos 6º y 8° del Decreto 806 de 2020, se remitió auto admisorio vía electrónica a la sociedad demandada en fecha 2 de diciembre de 2020 a la hora 0:10, notificación que fue satisfactoria en la medida que se aportó contestación *(*página 4, archivo 03ConstanciaDeNotificacion2020.pdf y *04.EscritoDeContestaciòn.pdf):*



Gmail MARCELA BERMÚDEZ RUIZ <marcelabermudezr@gmail.com

NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, JUZGADO 38 LABORAL DEL CIRCUITO BTÁ., RADICADO 2020-00209-00

MARCELA BERMÚDEZ RUIZ <marcelabermudezr@gmail.com> 2 de diciembre de 2020, 0:
Para: direccionadministrativa@cmb.org.co, secretariaiglemillon@cmb.org.co
Cco: fernandobruiz@hotmail.com

Señores:
IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN "CENTRO MISIONERO BETHESDA"
Representante legal: Señora Melida Sánchez Otálora
E.S.C.

Referencia: Proceso Ordinario Laboral de **MANUEL FERNANDO BETANCOURT RUIZ** contra **IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN "CENTRO MISIONERO BETHESDA".**
Radicado: **2020-00209-00**
Asunto: **NOTIFICACIÓN PERSONAL**

Habiéndose enviado por medio electrónico, conforme lo prescribe el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, copia de la demanda y sus anexos, en la fecha 15 de julio de 2020, a las siguientes cuentas de correo:
1 - direccionadministrativa@cmb.org.co.
2 - secretariaiglemillon@cmb.org.co,
Correos que efectivamente fueron recibidos por la entidad demandada.

En cumplimiento del artículo 41 del CPTSS y del artículo 8 del Decreto 806 de 2020, por medio del presente escrito le notificó personalmente el auto de fecha 30 de noviembre de 2020, por medio del cual el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, instaurada por MANUEL FERNANDO BETANCOURT RUIZ contra IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN "CENTRO MISIONERO BETHESDA", así mismo, le informo que se le corre traslado por el término de diez (10) días hábiles, para que por intermedio de apoderado judicial conteste la demanda.

Anexo en formato PDF, copia del referido auto de fecha 30 de diciembre de 2020.

Atentamente,

MIRYAM MARCELA BERMÚDEZ RUIZ.
C. de C. No. 51.821.872 de Bogotá.
T.P. No. 285.553 del C. S. de la J.
Apoderada del demandante.

Surtido lo anterior, se tuvo por contestada la demanda el 1º de febrero de 2022, auto que fue notificado por anotación en estado No. 013 del 2 de febrero de 2022, asimismo esta providencia fue cargada al micrositio dispuesto para ello.[1]

En la citada providencia el a quo, dispuso:

> *"**PRIMERO: RECONOCER** y **TENER** al abogado VÍCTOR VELASQUEZ REYES identificado con C.C. 3.296.610 y T.P. 14.104 del C.S. de la J. como apoderado de la demandada IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN "CENTRO MISIONERO BETHESDA" para que la represente en los términos y para los fines del mandato acreditado.*
>
> ***SEGUNDO**: Por cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 31 del CPTSS, modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, se tiene por contestada la demanda por parte de la demandada IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN "**CENTRO MISIONERO BETHESDA**"*
>
> ***TERCERO**: Admitir la reforma a la demanda, presentada por la parte demandante.*
>
> ***CUARTO**: Notificar la reforma de la demanda a la accionada IGLESIA CENTRAL **DENOMINACIÓN "CENTRO MISIONERO BETHESDA**", por anotación en estado y correrle traslado de la misma por el término de cinco (5) días, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28 del CPTS".*

Como se desprende de la anterior decisión, se ordenó correr traslado de la demanda al recurrente (numeral 4º), conforme al contenido del articulo 28 del C.P.T. y S.S., esto es, por el término de 5 días, plazo que no fue acogido por el extremo demandado al no haberse pronunciado frente a la reforma. Como consecuencia de

[1] *Consultar Rama Judicial del Poder Público, Juzgados del Circuito, Juzgados Laborales del Circuito, Bogotá, Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, estados electrónicos, 2022, febrero, estado 013.*

tal silencio, el juzgado tuvo por no contestada la reforma mediante auto del 26 de julio de 2022, decisión que no fue atacada por la sociedad demandada.

Igualmente, fijada la fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y S.S., esto es, el día 03 de agosto de 2022, la demandada no compareció por medio de su apoderado, pues solo se hizo presente la parte actora. En esta oportunidad la demandada tampoco hizo uso de la oportunidad prevista en el artículo 77 del C.P.T. y S.S. que, en su aparte pertinente, contempla:

> "*Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.*".

Es decir, el apoderado de la demandada no asistió a la audiencia, habiéndose publicado por el despacho la fecha y hora con antelación y, pese a ello, no se pronunció o solicitó el aplazamiento de la diligencia. La misma actuación y desinterés se constata en la audiencia celebrada el 06 de diciembre de 2022, toda vez que, la enjuiciada no asistió a absolver interrogatorio de parte provocando con ello, la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 205 del C.G.P, consistentes en presumir como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda. *(archivo 12ActaReceso20221206.pdf, páginas 1 a 2, récord: 02:19 a 03:22).*

Finalmente, el juzgador de primer grado, dispuso continuar con la audiencia que trata el artículo 80 del C.P.T y S.S. para el día 14 de diciembre de 2022, fecha y hora en la que compareció el apoderado de la demandada alegando una nulidad sin soportar la causal de manera taxativa con el fin de cumplir el mandato del artículo 133 del C.G.P.

Con el recuento anterior, no se evidencia ninguna trasgresión por parte del a quo que configure una nulidad o vulneración al debido proceso y derecho de defensa, pues siempre se notificaron las decisiones y se celebraron las audiencias de manera pública, dándose a conocer con antelación las fechas en que se surtirían las mismas, no siendo de recibo que el aquí recurrente pretenda que prospere una nulidad, cuando como profesional del derecho omitió hacer uso de los mecanismos previstos para interponer recursos, solicitar el link del proceso para acceder a las actuaciones, descargar del micrositio la providencia notificada, solicitar

aplazamientos y demás actuaciones atinentes a una gestión integral que le asiste a todo abogado para con su mandante.

De otra parte, frente a la imposibilidad del recurrente de asistir a la audiencia programada pare el día 6 de diciembre de 2022, no se desconoce que el togado representó a la misma sociedad demandada dentro de un proceso que cursa en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Melgar - Tolima en la misma data, empero, esta situación no es atendible para que no se sustituyera el poder y así, la demandada tuviera una defensa técnica ante el juzgado de primera instancia que conoce en esta litis.

Por último, si la demandante no remitió copia de la reforma de la demanda al correo de la sociedad, lo cierto es que este incumplimiento genera sanciones económicas al apoderado y no una nulidad procesal como lo anhela el recurrente, en este caso la demandada ha tenido a su alcance todos los medios para manifestar la imposibilidad de acceder al expediente, solicitar copia de la reforma de la demanda de manera expresa y aun así no lo hizo. En esta perspectiva vale la pena significar, verificadas las actuaciones surtidas en el plenario se observa que el juez en manera alguna transgredió los derechos de la demandada.

Así las cosas, los motivos en que se sustenta la nulidad no son constitutivos de la misma sumado a que no se indicó la causal invocada al momento de interponer el incidente ni al momento de recurrir la providencia que nos ocupa, por lo que, sin lugar a más consideraciones, habrá de confirmarse la providencia impugnada, en cuanto rechazó la solicitud de nulidad incoada por **IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÒN "CENTRO MISIONERO BETHESDA".**

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada.

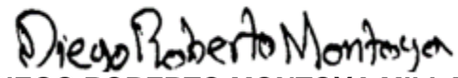
En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C., SALA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE

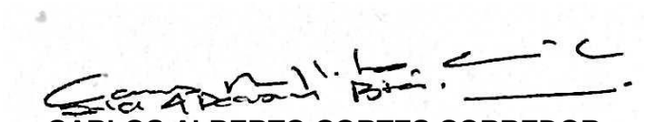
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, por las razones expuestas por esta Sala de decisión.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del extremo demandado, **IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÒN "CENTRO MISIONERO BETHESDA"**.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN



CARLOS ALBERTO CORTES CORREDOR



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $1.000.000, a cargo de la parte demandada **IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÒN "CENTRO MISIONERO BETHESDA"**, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500220190061800-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	GLADYS POSADA TORRES
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMONISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente digital lo puede ver en el siguiente enlace
11001310500220190061800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500320210019600
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA STELLA BUSTOS BRASBI
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500320210019600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500320210024800-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	STELLA CAMARGO HERNANDEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500320210024800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500420210022100-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARIA BRIGIDA RODRIGUEZ RAMIREZ
DEMANDANDO	FARID LEONARDO RAMOS MACHADO

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandado

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500420210022100

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310500620170065100

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500620170065100
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	AMPARO LIGIA FONTECHA MARTINEZ
DEMANDANDO	EMPRESA COL. DE PETROLEOS ECOPETROL

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500620170065100

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2 de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500620190029500-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	DANIELA PAOLA CELY LARA
DEMANDANDO	INTERMODAL S.A

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500620190029500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500720210028200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ISIDRO RUBEN SOLANO ESPITIA
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500720210028200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2 de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500720210037200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	BLANCA LEONOR BAUTISTA ANTOLINEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS SKANDIA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones, Porvenir y Skandia.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500720210037200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501020190072200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	FLOR ANGELA PULIDO MOLINA
DEMANDANDO	UGPP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada UGPP.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de UGPP conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501020190072200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501120190039200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ALBA LUZ ALVAREZ CARBALLO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS SKANDIA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones, Porvenir y Skandia.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501120190039200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501220210021800-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	SAMIRA NASSAR MASSY
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMONISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501220210021800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501220210035700
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LIBARDO MARTINEZ POSADA
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMONISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501220210035700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501320200040500
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA ANATILDE CABEZAS DE SEVILLANO
DEMANDANDO	VIVIANA CUIITIVA AYALA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501320200040500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501320210014600
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MERY PARDO LEON
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501320210014600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501620190045300-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	PLINIO TOMAS PEDRO BUJES ROJAS
DEMANDANDO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501620190045300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310501820160034900

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501820160034900-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	FABIOLA LEURO SALGADO
DEMANDANDO	- JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501820160034900

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920160029000-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	REINALDO PLATA RUEDA
DEMANDANDO	UGPP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920160029000

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310501920190007500

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920190007500
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	IVAN RICARDO HERNÁNDEZ
DEMANDANDO	BRAYAN ANDRES GALINDO WILLIAM GALINDO CELIS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de Iván Ricardo Hernández conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920190007500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920190025400
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	GUSTAVO HERNANDEZ CASTRO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920190025400

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920200004-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	HERNANDO TORRES POVEDA
DEMANDANDO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920200004700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920200028200-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	SANDRA YANETH PEREZ BUITRAGO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920200028200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502220180058200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	OSWALDO TORRES MENDIVELSO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - BANCO DE BOGOTA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones, Porvenir y Banco de Bogotá.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502220180058200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502620190067400-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARY STELLA FORERO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502620190067400

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310502820170058600-00

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502820170058600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	FLOR LUCILA SANCHEZ DE LOPEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y CESANTIAS COLPENSIONES - FONCEP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502820170058600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503020200046800
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ MURCIA
DEMANDANDO	CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandado.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503020200046800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503220210031600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	JAIRO STHIVEN ROJAS CORTES
DEMANDANDO	KOBA COLOMBIA S.A.S. HOY D1 S.A.S.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503220210031600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503320200022800
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ANGELICA MARÍA CARRASQUILLA RAMIREZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Colfondos.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503320200022800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503620210018300
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA NELLY SANDOVAL BARAJAS
DEMANDANDO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES COLÓN LTDA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503620210018300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503720210014800
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA ETNA ALVAREZ LUGO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503720210014800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503720210019400
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	VICTOR MARIO URIBE VELASQUEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMONISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503720210019400

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310503820190047700

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503820190047-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	JUAN SEBASTIANA AVILA GONZALEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - COLTEMPORA COLOMBIANA DE TEMPORALES - S.A, ACTIVOS S.A.S - MISIÓN TEMPORAL LTDA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503820190047700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503820210017500-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	JULIO MATIN RESARTE BASRBOSA
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA SAS.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA SAS.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503820210017500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503820210023300-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ALEXIS RAMON BRACHO REYES
DEMANDANDO	- PABLO HERNÁNDEZ MEJÍA - CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ SAN MARTÍN - JABALÍ CULTO AL CERDO PARQUE DE LA 93 S.A.S. - COMERCIALIZADORA JABALÍ S.A.S.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503820210023300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2 de marzo de 2023

Radicado No: 11001310503420190056100

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503420190056100
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	GERVACIO AVILA MARTINEZ
DEMANDANDO	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandado.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503420190056100

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500120190098800
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	FLOR EDILMA GONZALEZ GAMBOA
DEMANDANDO	FREDY FERNANDO ORTEGA SUEREZ

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de FLOR EDILMA GONZALEZ GAMBOA conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500120190098800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500320190051700
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	OSWALDO ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500320190051700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500320200017800
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LEONARDO FABIO GOMEZ CASELLES
DEMANDANDO	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500320200017800

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503420200033600
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	FERNANDO BLANCO ROJAS
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente digital lo puede ver en el siguiente enlace
11001310503420200033600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500420190042100
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	BLANCA BEATRIZ MATEUS Y OTROS
DEMANDANDO	RIESGOS LABORALES COLMENA SA-COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la interviniente ad excludemdun.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500420190042100

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500420200007200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LUZ DARY BENITEZ SAENZ
DEMANDANDO	UGPP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500420200007200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500420210008600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	SANTIAGO IANNINI JARAMILLO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500420210008600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500420210050900
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	PATRICIA LEAÑO RAMIREZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500420210050900

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310500920180037-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	NELSON RICARDO TORRES MESA
DEMANDANDO	- KREANT SAS EN LIQUIDACIÓN - OSCAR DANIEL FAJARDO ÁLVAREZ - JHON GABRIEL FAJARDO ÁLVAREZ.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310500920180037300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501120180008900-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARIA ELENA BLANCO PRIETO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Protección.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501120180008900

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310501120190055600-00

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501120190055600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501120190055600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501220180029900-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ALEXANDRA RAMIREZ PIÑEROS
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente digital lo puede ver en el siguiente enlace
11001310501220180029900

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501220200023500-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ALIRIO GOMEZ TORRES
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente digital lo puede ver en el siguiente enlace
11001310501220200023500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310501520180021100

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501520180021100
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARTHA EDITH ESTRADA CORTES
DEMANDANDO	ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES S.A SOLIDARIAMENTE: DANIEL RICARDO ESPINOSA CUELLAR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501520180021100

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501520190047200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	JAIRO CUBILLOS RAMIREZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - SEGUROS DE VIDA ALFA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501520190047200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501620200019200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARÍA PATRICIA PEREZ DE LA TORRE
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501620200019200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501720190070200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	OLGA LUCIA DIAZ TAGUI
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501720190070200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501820190038600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	OTILIA LADINO ESCOBAR
DEMANDANDO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta a favor de esta misma conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501820190038600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920190001200-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	CELIANO RAMOS TINJACA
DEMANDANDO	COMPAÑÍA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO SAS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920190001200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310501920190084400
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	YUDY FRANCO VELASQUEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310501920190084400

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502120210019600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	TERESA DE JESUS ROJAS OSPINA
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502120210019600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502320190016000-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	PAOLA MARCELA GALVIS OSPINA
DEMANDANDO	COVILLA LTDA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502320190016000

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502320210012300
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARIA IRENE LIBERATO Y OTROS
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - UGPP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502320210012300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502320210035700
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	BLANCA EMILSE BOHORQUEZ SAIZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502320210035700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502320220002900-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	OLGA MILENA COBOS CARDOZO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502320220002900

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502320220008300-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MYRIAM GOMEZ COLMENARES
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMONISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente digital lo puede ver en el siguiente enlace
11001310502320220008300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502520180048000-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	PEDRO IGNACIO SUAREZ
DEMANDANDO	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502520180048000

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502620200003-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ANGEL MANUEL CASTILLO PADILLA
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS - UGPP

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502620200000300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502620210001300
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARINA RODRIGUEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS - VINCULADA: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502620210001300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502720190036400-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	CLAUDIA MARIA OROZCO SANCHEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Bogotá D.C., 1° de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace 11001310502720190036400

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502720190040400
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	JUAN CARLOS PLATA PUENTES
DEMANDANDO	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA UNIPANAMERICANA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502720190040400

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502720210012900-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ANA ISABEL CALDERON SALCEDO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502720210012900

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310502820200042000-00

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310502820200042000-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LIZ AMPARO ACOSTA SALAS
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS SKANDIA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310502820200042000

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

Radicado No: 11001310503020190046200

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503020190046200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	AIDE FORERO HERNANDEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503020190046200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503120200043700
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LEIDY KATHERINE RICO FLECHAS
DEMANDANDO	- ADRES - GESTIÓN Y AUDITORIA ESPECIALIZADA S.A.S - GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORÍA S.A.S. - LLAMADA A GARANTIA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - INTERVENTORÍA DE PROYECTOS S.A.S.

Bogotá D.C., 1° de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la parte demandada ADRES y la Compañía Mundial de Seguros S.A.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503120200043700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503120200044200
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LUIS FELIPE ROMAÑA RODRIGUEZ
DEMANDANDO	CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503120200044200

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503120210021500-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	EDILSON FERNANDO REINOSO QUIÑONES
DEMANDANDO	JE JAIMES INGENIEROS SA

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503120210021500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503320190061300
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MONICA HERRERA VARGAS
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503320190061300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503520200043500-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	EDILSON BARRETO VANEGAS
DEMANDANDO	- SEGURIDAD THOR LTDA - CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 P. H.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada Seguridad Thor Ltda.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503520200043500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503620160038300
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	TITO TELESFORO AMADO RIVEROS
DEMANDANDO	- DURMAN COLOMBIA S.A.S - COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR, - JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el grado jurisdiccional de consulta a favor de Tito Telesforo Amado Riveros conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503620160038300

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503620200000500
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	SARUNAS ANTONIO SLAPAITIS FIERRO
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503620200000500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503620200011500
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MARTHA CECILIA DIAZ MENENDEZ
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS

Bogotá D.C., 1° de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones y Porvenir.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503620200011500

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503720200005600-00
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	LUIS ARBEY ACHIPIZ ACHIPIZ
DEMANDANDO	GRUPO CDC SAS

Bogotá D.C., 1° de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503720200005600

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503920180044100
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ANA BEATRIZ GARCIA DE SALAS
DEMANDANDO	- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES - ANA RITA SOLORZANO MORENO

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES conforme lo establece el artículo 69 del CPTSS modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503920180044100

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2º de marzo de 2023

República de Colombia

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá D. C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO

RADICADO	11001310503920210006700
CLASE DE PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	EDGAR ARMANDO GOMEZ ZAPATA
DEMANDANDO	BAVARIA S.A

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden cronológico de llegada, por lo que una vez le corresponda su turno, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

El expediente se puede consultar en el siguiente enlace
11001310503920210006700

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÉDGAR RENDON LONDOÑO
MAGISTRADO

Notificado en estado del 2 de marzo de 2023

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE ARIEH GUBEREK GRIMBERG CONTRA JUAN JOSE NARVAEZ SOLARTE

EXPEDIENTE N.° 11012205 020 2019 00861 01

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

Sería del caso proferir sentencia de segunda instancia señalada mediante auto inmediatamente anterior, de no ser porque la ponencia presentada ha sido derrotada por los magistrados que integran la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

En virtud de lo anterior, remítase por secretaria, para que se abone el presente proceso al Magistrado que sigue en turno, HM: MARLENY RUEDA OLARTE, precisando que la ponencia del suscrito derrotada, se constituirá como salvamento de voto, al momento que se presente la nueva ponencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE GERMAN EDUARDO DIAZ HEREDIA CONTRA SOILTEC SAS.

EXPEDIENTE N.° 11012205 033 2017 00563 01

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

Sería del caso proferir sentencia de segunda instancia señalada mediante auto inmediatamente anterior, de no ser porque la ponencia presentada ha sido derrotada por los magistrados que integran la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

En virtud de lo anterior, remítase por secretaria, para que se abone el presente proceso al Magistrado que sigue en turno, HM: MARLENY RUEDA OLARTE, precisando que la ponencia del suscrito derrotada, se constituirá como salvamento de voto, al momento que se presente la nueva ponencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 27 2018 00148 01
RI: **S-3116-21**
De: JUDITH BEDOYA LÓPEZ.
Contra: UGPP.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, advierte este Despacho, que el Doctor **SANTIAGO MARTÍNEZ DEVIA,** apoderado de la demandada, **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,** el día 19 de enero de 2023, presentó memorial mediante el cual renuncia al poder que le fue conferido como apoderado de la demandada **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,** tal como se evidencia a en la documental obrante a folio 8 a 10 del cuaderno del Tribunal, razón por la cual se dispone:

1. Acéptese la renuncia presentada por el Doctor **SANTIAGO MARTÍNEZ DEVIA,** identificado con C.C. 80.240.657 y T.P. 131.064 del C. S. de la J., como apoderado de la demandada **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.**

   En consecuencia, en los términos del Artículo 76 del C.G.P., por Secretaría, **COMUNÍQUESE** a la demandada **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,** la renuncia de su apoderado.

j.b

2. **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

000000

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 15 2021 00367 01
RI:	**S-3504-22**
De:	YADIRA MAHECHA MAHECHA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 25 de noviembre de 2022, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 23 2021 00330 01
RI:	**S-3503-22**
De:	GEORGE LEÓN PINTO.
Contra:	FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 02 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 09 2021 00137 01
RI:	**S-3502-22**
De:	LIDY MANRIQUE QUINTERO.
Contra:	ASOCIACIÓN COOMETAS CAMPESINAS Y SALUDARTE.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 25 de noviembre de 2022, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 02 2020 00151 01
RI:	**S-3500-22**
De:	ALONSO PEDRAZA SARMIENTO.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 27 de enero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 36 2020 00058 01
RI:	**S-3501-22**
De:	LEY DIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 02 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 09 2020 00463 01
RI:	**S-3499-22**
De:	MARTHA LUCIA PIRAMANRIQUE ÁLVAREZ.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 16 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 16 2020 00067 01
RI:	**S-3498-22**
De:	CLARA HELENA BELTRÁN SUAREZ.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 02 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 25 2020 00434 01
RI:	**S-3490-22**
De:	ANÍBAL HERNÁNDEZ
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 10 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 03 2019 00502 01
RI: **S-3488-22**
De: DIXON ADALBER PORTILLO VARGAS.
Contra: SIGNUM IMAGEN LTDA.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 02 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 25 2018 00628 01
RI: **S-3487-22**
De: CASTULO GIL GIL.
Contra: UGPP.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 24 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 04 2019 00572 01
RI:	**S-3444-22**
De:	OTILIA AYALA ARENAS.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 10 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad: Ordinario 35 2018 00365 01
RI: **S-3442-22**
De: MARIELA ARISTIZBAL DE FRANCO.
Contra: UGPP.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 24 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 07 2019 00103 01
RI:	**S-3421-22**
De:	CECILIA ZORAIDA CALDERÓN SIERRA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 25 2019 00478 01
RI:	**S-3396-22**
De:	NELSON ARTURO MARTÍNEZ ALMANZA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 02 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 36 2019 00802 01
RI:	**S-3342-22**
De:	NORMA LUCIA GÓMEZ MONTOYA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 09 2019 00872 01
RI:	**S-3220-22**
De:	LUZ DARIS HENAO PÉREZ.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 36 2018 00635 01
RI:	**S-3181-22**
De:	FREDDY ORLANDO GONZÁLEZ ROMERO.
Contra:	TITADSU S.A.S Y OTRO.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 05 2019 00580 01
RI:	**S-3161-21**
De:	MARÍA HELENA GÓMEZ LÓPEZ.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL

Rad:	Ordinario 07 2019 00043 01
RI:	**S-3110-21**
De:	JOSE DAVID RODRÍGUEZ PRADA.
Contra:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS.

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

A U T O

Verificado el informe secretarial que antecede, de fecha 03 de febrero de 2023, **SEÑÁLESE**, la hora de las **CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE** (4:30 p.m.), del día **28 DE ABRIL DEL AÑO 2023,** oportunidad dentro de la cual, se dictará la sentencia correspondiente, por escrito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS AGUSTÍN VEGA CARVAJAL
Magistrado

j.b

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado ponente

Proceso: 11001310503820210013 7 01

PROCESO DE GLADYS ALDANA PARRA EN CONTRA DE IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Magistrado Ponente, en compañía de los demás miembros de la Sala Tercera de Decisión Laboral, profieren la siguiente decisión,

TEMA: Auto tiene por no contestada la demanda.

OBJETO: Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, en contra del auto del 28 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá, en el cual se tuvo por no contestada la demanda de por parte de Iron Mountain Colombia S.A.

ANTECEDENTES

Gladys Aldana Parra llamó a juicio a Iron Mountain Colombia S.A., para que previa declaratoria de un contrato de trabajo, se sirva declarar la nulidad del acto mediante el cual se dio por terminada dicha relación contractual; restablecer la vigencia del vínculo laboral, ordenando su reintegro en iguales o mejores condiciones a la fecha de la terminación sin solución de continuidad; que se ordene el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social desde la fecha de la terminación y hasta que se haga efectivo el reintegro; que se declare que tiene derecho a las comisiones correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, al pago de perjuicios morales que se estiman en 150 salarios mínimos legales mensuales; a la indexación y costas.

Subsidiariamente pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo, que se ordene el pago de comisiones causadas durante los meses de abril y mayo de 2020, al pago de reajuste de las prestaciones sociales, a la seguridad social y demás conceptos laborales causados con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, al pago de indemnización por despido sin justa causa, a la indemnización moratoria, perjuicios morales, indexación y costas.

Como fundamento de sus pretensiones relató, en síntesis, que prestó sus servicios personales a la demandada entre el 24 de enero de 2014 y el 22 de mayo de 2020; que no le fueron canceladas las comisiones de los meses de abril y mayo de 2020, ni tampoco tenidas en cuenta como factor salarial.

Refiere que la terminación laboral se dio por mutuo acuerdo, sin embargo, que el mismo no debe tener efecto alguno, por cuanto estuvo viciado el consentimiento.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Como quiera que la parte demandada Iron Mountain Colombia S.A.S. no presentó contestación a la demanda dentro del término conferido, el juzgado de conocimiento mediante providencia del 28 de marzo de 2022 procedió a tener por no contestada la demanda (ítem 7 expediente digital).

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, la apoderada de la pasiva interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, indicando que el juzgado de conocimiento dispuso que el demandante acreditó haber notificado de conformidad con el inciso 4 del artículo 8 del Decreto 806 de 2020 a la empresa demandada a través de mensaje de datos dirigido a la dirección judicial.co@ironmountain.com.co, la cual supuestamente fue recibida el 1 de septiembre de 2021, dándose por no contestada la misma.

Frente a lo anterior, manifiestan que desde el 14 de abril de 2021, el correo electrónico previamente mencionado no se encuentra habilitado para la recepción de notificaciones, y que, desde el 4 de febrero de 2021, la compañía realizó la modificación de la dirección electrónica para efectos de notificaciones judiciales ante la Cámara de Comercio de Bogotá, siendo la nueva dirección yeison.calderon@ironmountain.com.co, por lo que, resulta claro que la demandada no tuvo conocimiento del proceso, sino hasta el 29 de marzo de 2022, cuando el juzgado remite citación a la audiencia de conciliación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegatos de conclusión, solicitando la confirmación de la sentencia apelada, al no encontrarse probada la existencia de vicios del consentimiento.

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a resolver la alzada previa las siguientes,

CONSIDERACIONES:

En el caso *sub lite*, la decisión del *a quo* consistió en tener por no contestada la demanda por la parte de la pasiva Iron Mountain Colombia S.A., providencia que resulta susceptible del recurso de apelación conforme al numeral 1° del artículo 65 del C.P.T y de la SS, y así fue interpuesto, por tanto, la Sala procede a tomar la decisión que en derecho corresponda.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el apelante al momento de interponer la alzada, en consonancia con las consideraciones del a *quo* para tener por no contestada la demanda, esta sala deberá determinar si en efecto la demanda se debía tener por no contestada por la parte pasiva, o si la notificación efectuada carecía de validez.

Dispone el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, norma vigente al momento en que se efectuó la notificación de la admisión de la demanda, frente al tema que hoy nos ocupa, lo siguiente:

> ***ARTÍCULO 8o. NOTIFICACIONES PERSONALES. <Artículo subrogado por el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022>*** *Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> ***<Inciso CONDICIONALMENTE exequible>*** *La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.*
>
> *Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.*
>
> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*
>
> ***PARÁGRAFO 1o.*** *Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.*
>
> ***PARÁGRAFO 2o.*** *La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio,*

superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales.

Ahora, revisadas las documentales allegadas al plenario, se evidencia que en el ítem 5 del expediente digital obra constancia de la notificación realizada a la demandada a través del correo electrónico judicial.co@ironmountain.com.co el día 1 de septiembre de 2021, donde se verifica que el mensaje en efecto fue entregado, tal y como consta a continuación:

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2021/09/01 15:16:35	**Tiempo de firmado:** Sep 1 20:16:34 2021 GMT **Política:** 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.
Acuse de recibo	2021/09/01 15:18:19	Sep 1 15:16:35 cl-t205-282cl postfix/smtp [13881]: DA4491248765: to=<judicial.co@ironmountain.com.co>, relay=aspmx.l.google.com[209.85.144.26]:25, delay=0.94, delays=0.1/0/0.3/0.53, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1630527395 w9si311271qkp.90 - gsmtp)

Asimismo, junto con el recurso presentado por la parte actora, se verificó que mediante petición radicada el 4 de febrero de 2021, la pasiva solicitó ante la Cámara de Comercio de Bogotá el cambio de dirección de correo electrónico judicial, el cual en lo sucesivo sería yeison.calderon@ironmountain.com.co, encontrándose inscrito en el certificado de existencia y representación actualizado al 5 de agosto de 2021.

Pese a lo anteriormente expresado, no resulta válido que la recurrente manifieste que desconoce el proceso que cursaba en contra de la entidad, en tanto el apoderado de la actora al momento de la radicación de la demanda dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, esto es, enviar de manera simultánea correo electrónico, con copia de la demanda y de sus anexos a los demandados, diligencia que tuvo lugar el día 18 de marzo de 2021, es decir, previo al 14 de abril de 2021, fecha en la cual se manifiesta que la dirección no se encontraba habilitada.

Y es que si bien no desconoce esta corporación el trámite adelantado por la entidad frente a la modificación de la dirección electrónica para efectos de notificaciones, tampoco puede desconocerse que la diligencia se adelantó en la dirección electrónica del certificado de existencia y representación legal que obraba en el plenario, que la entidad previamente ya conocía el proceso instaurado en su contra, y que la notificación se efectuó en debida forma, es decir, existe constancia de entrega frente a la misma, por lo que, considera este colegiado que la mera afirmación de la modificación no da lugar a invalidar el trámite.

En ese contexto, y pese a que la entidad recurrente manifiesta que desde el 14 de abril de 2021 el correo electrónico no se encontraba habilitado para la recepción de notificaciones, lo cierto es que el mismo seguía en funcionamiento, lo que se corrobora con la constancia de entrega, sin que se hubiese realizado advertencia alguna de la modificación efectuada.

En razón y mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 28 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso ordinario de la referencia, conforme a lo considerado.

SEGUNDO. SIN COSTAS en esta instancia ante su no causación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado Ponente

Expediente: 11001310503720210021 1 01

YVONNE VÉLEZ OSORIO EN CONTRA DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Magistrado Ponente, en compañía de los demás miembros de la Sala Tercera de Decisión Laboral, profieren la siguiente decisión

TEMA: Auto tiene por no contestada la demanda.

OBJETO: Procede la sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, contra el auto del 19 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Treinta y Siete (37) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. dentro del proceso de la referencia, mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda por parte de la entidad recurrente.

ANTECEDENTES

Yvonne Vélez Osorio llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se reconozca y pague la pensión de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990 y Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005; que se proceda a efectuar la liquidación, teniendo en cuenta las mesadas adicionales de junio y diciembre; que se ordene a la demandada a reintegrar lo correspondiente a conceptos que por salud hubiere aportado al sistema de régimen contributivo desde la fecha en que se desafilió del sistema; al reconocimiento y pago del retroactivo pensional, pago de intereses moratorios, o en su defecto, indexación de las sumas adeudadas; al pago de la mesada 14, a lo ultra y extra petita.

Como fundamento de sus pretensiones relató en síntesis, que nació el 1 de junio de 1957; que estuvo afiliada al sistema de pensiones desde el 7 de junio de 1978, contando con 500 semanas cotizadas al 18 de septiembre de 2007.

Asimismo, que cumplió el requisito de la edad para adquirir la prestación pensional el 1 de junio de 2012, sin embargo, que su historia laboral registra

semanas en mora que no están siendo tenidas en cuenta por la demandada Colpensiones.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia del 19 de mayo de 2022, el Juzgado Treinta y Siete (37) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. dispuso tener por no contestada la demanda por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por cuanto una vez vencido el término de ley, la entidad guardó silencio.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, el apoderado de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones la apeló, manifestando que la demanda fue notificada a la entidad el día 19 de julio de 2021, siendo el término para vencimiento de dicho trámite, el día 3 de agosto de 2021, habiéndose remitido la respectiva contestación el 27 de julio del mismo año a las 14:27 pm.

Asimismo, indica que después del análisis del auto que da por no contestada la demanda, se constató que debido a un error involuntario de la persona encargada de radicar las contestaciones, dicha actuación se radicó al correo electrónico jlato37@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin embargo, que el correo del juzgado de conocimiento es j37lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término, la demandada Colpensiones allegó alegatos de conclusión, manifestando que si bien existe una legalidad o formalidad en los términos para ejercer la defensa judicial, lo cierto es que un error de transcripción no puede transgredir el derecho fundamental al debido proceso.

Por otra parte, la actora solicita que se confirme la decisión de primera instancia, al considerar que tal decisión no vulnera el derecho a la defensa del apelante, y que, nadie puede alegar en su favor su propia culpa.

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes…

CONSIDERACIONES

Como quiera que el auto que da por no contestada la demanda es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el numeral 1º del artículo 65 del C.P.T y de la S.S, ésta Sala procede a tomar la decisión que en derecho corresponda.

El punto esencial que compete definir por parte de esta corporación consiste, en determinar si debe darse por no contestada la demanda por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, o si le asiste razón

al recurrente, en cuanto el escrito pese a que se allegó al correo electrónico erróneo, se aportó dentro del término de ley, debiendo ser tenido en cuenta.

Ahora, una vez revisadas las actuaciones al interior del proceso de la referencia, se verifica que el juzgado de conocimiento mediante providencia del 19 de mayo de 2022 dispuso tener por no contestada la demanda por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al no haberse pronunciado una vez la demanda fue notificada, y vencido el término.

Asimismo, se constata que la entidad recurrente mediante memorial enviado el 17 de julio de 2021, remitió a la dirección jlato37@cendoj.ramajudicial.gov.co, contestación de demanda bajo el radicado 11001310503720210021101, esto es, dentro del término legal para aportar dicho requerimiento, enviando además, copia a los diferentes apoderados que hacen parte al interior del proceso.

Una vez precisado lo anterior, le compete a esta sala establecer si debe tenerse en cuenta la contestación de demanda aportada, pese a que fue dirigida de manera errónea al correo electrónico del juzgado.

Con relación a la presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones, el artículo 109 del Código General del Proceso ha dispuesto que:

> *"(…) El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.*
>
> *Los memoriales podrán presentarse y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo.*
>
> *Las autoridades judiciales llevarán un estricto control y relación de los mensajes recibidos que incluya la fecha y hora de recepción. También mantendrán el buzón del correo electrónico con disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de datos.*
>
> ***Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término** (…)". Negrilla fuera del texto.*

Adicionalmente, y frente al tema en cita, el tratadista Hernán Fabio López Blanco refirió en su libro "*Código General del Proceso – Parte General*", pag. 449 a 451, que:

"En lo que concierne con el inciso cuarto se debe observar que la disposición enfatiza en que lo que interesa es la entrega física del memorial o el recibo del mensaje de datos en el correspondiente juzgado, que es la que se toma en cuenta para precisar si la petición, caso de tratarse de un derecho sometido a preclusión fue oportuna, pues señala que; "Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día que vence el término".

Por esta razón deben los abogados ser particularmente cuidadosos al revisar las copias de sus escritos, que son las que se hacen sellar en constancia de recibo, con el objeto de verificar que la fecha que se coloca, tanto al original como a la copia, corresponda a la del día en que el acto sucede, porque en últimas será esta constancia la básica y central para precisar el oportuno ejercicio de los derechos procesales sometidos a preclusión.

(…)

Como anotación final a este tema, destaco que suele ocurrir en las ciudades donde existen varios juzgados con idéntica competencia, que por imprevisión o descuido de quien presenta en la secretaría un memorial, lo radique en un juzgado distinto de aquel al cual está dirigido, sin que el funcionario del juzgado se percate del error y por eso lo recibe. Si el mismo día se cae en cuenta del mismo por parte de quien lo presentó, es sencillo retirarlo para dejarlo ante quien corresponde pero, como es frecuente, se precisa el mismo con posterioridad, de ahí que surge el interrogante referente a si se debe tener como oportunamente presentada la petición contenida en el escrito, si es de aquellas que implican el ejercicio de un derecho que precluye, que es la hipótesis que interesa para estos fines.

Piénsese, para dar un ejemplo, en que se profiere una providencia y dentro del término de ejecutoria se presentó el memorial apelando en el juzgado cuarto civil del circuito de Cali, cuando lo ha debido ser es ante el tercero civil del circuito al cual, además, estaba dirigido y cuando se cae en cuenta de la falla ya ha vencido el plazo apto para apelar ante el juzgado que conoce del proceso.

Con un criterio exegético se ha sostenido que en este evento las consecuencias son las mismas que si no se hubiera presentado el memorial, interpretación de la cual ***disiento por cuanto es lo cierto que en la oportunidad debida se presentó el escrito y de ello quedó cabal constancia, de ahí que en esta hipótesis, teniendo como fecha de presentación la surtida en el juzgado de idéntica competencia pero que no correspondía, considero que basta que el secretario del despacho que lo recibió, también por equivocación, bien de oficio o por solicitud de la parte interesada, con una constancia secretarial lo haga llegar al que corresponde para que se surtan los trámites de rigor, sin que puedan por ese motivo***

predicarse los efectos propios de una petición extemporánea *(…)". Negrilla fuera del texto.*

Ahora, a criterio de esta sala, si bien recae en principio total responsabilidad sobre la entidad recurrente, y si bien nadie puede ser considerado infalible, no es razón suficiente para convalidar la falta de cuidado del apoderado judicial de la entidad, quien es el encargado de asumir el encargo con cuidado y debida diligencia, sin embargo, se toma la posición frente a la cual deben analizarse otras particularidades, con el fin de no caer en un exceso ritual manifiesto, no debiendo renunciarse previo a dicho análisis, a la verdad jurídica.

Para el caso en concreto, no pasa inadvertido que el correo electrónico del juzgado de conocimiento corresponde a j37lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin embargo, el memorial fue dirigido a la dirección jlato37@cendoj.ramajudicial.gov.co. Así las cosas, y verificado por este estrado judicial, se evidencia que 32 juzgados laborales del circuito cuentan con el correo electrónico institucional, donde se les asignó un nombre de usuario correspondiente a jlato, y posteriormente el número del juzgado al cual corresponde, situación que en algunos casos podría ser confusa, pero de la cual se exceptúa al juzgado de conocimiento, quien cuenta con un usuario diferente.

Así las cosas, resulta de tal importancia el haberse verificado que la demandada Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones si remitió dentro del término contestación de la demanda, y que si bien podría inferirse que la responsabilidad recae en el apoderado que radicó el memorial, dadas las circunstancias específicas del caso, deberá primar en el caso en concreto, el hecho frente al que actuó en pro de la defensa de su representada, dando relevancia a la verdad jurídica que se debate al interior del plenario.

Si bien accederá esta corporación a lo peticionado por la parte recurrente, al considerar que los apoderados designados por las demandadas no son infalibles, y que al analizar el caso en concreto se contaba con ciertas particularidades que podían dar lugar a la confusión, se aclara que no en todas las ocasiones en que se radiquen erróneamente los memoriales, habrá lugar a tenerlos en cuenta, por cuanto es responsabilidad exclusiva del apoderado actuar con la debida diligencia.

Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia, y se ordenará al juzgado de conocimiento a que proceda al estudio de la contestación allegada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la cual fue aportada junto con el presente recurso, teniendo en cuenta la constancia de entrega aportada.

Por lo anterior, la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha 19 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Treinta y Siete (37) Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto tuvo por no contestada la demanda por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para en su lugar, **ORDENAR** al juzgado de conocimiento que proceda a estudiar la contestación de la demanda remitida, conforme lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia ante su no causación.

TERCERO: Envíese al juzgado de origen para que se continúe con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los magistrados,

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado Ponente

Proceso: 11001310500620130065 5 023

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MARTHA LILIANA POTES PUERTO EN CONTRA DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa convocatoria a la Sala, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren la siguiente decisión:

TEMA: Aprobación liquidación de costas.

OBJETO: Resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Protección S.A., en contra de la providencia proferida por el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el 2 de diciembre de 2019, mediante la cual se aprobó la liquidación de costas efectuada por secretaría, por el valor de $5.000.000 por concepto de agencias en derecho en primera instancia.

ANTECEDENTES

Martha Liliana Potes Puerto llamó a juicio a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que se le condenara al pago de la pensión de sobrevivientes; al pago del retroactivo pensional desde la fecha de causación del derecho, al pago de las sumas debidamente indexadas, intereses moratorios sobre las mesadas dejadas de cancelar, a lo ultra y extra petita, y costas del proceso.

La demanda fue repartida al Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., quien mediante sentencia del 29 de marzo de 2017 dispuso condenar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. a pagar a la señora Martha Liliana Potes Puerto de forma vitalicia la pensión de sobrevivientes a partir del día 26 de junio de 2011 con el porcentaje del 50% de la pensión que reconoció la demandada a la menor Natalia Suárez Potes en la suma inicial de $566.700, aclarando que las mesadas pensionales desde su causación en junio 26 de 2011 hasta la ejecutoria de la sentencia, quedan cobijadas por las mesadas

recibidas por la menor aquí mencionada, que hace parte del mismo núcleo familiar de la accionante; condenar a la compañía de seguros Suramericana S.A. a pagar la suma adicional a que hubiere lugar para completar el capital que financia el monto de la pensión en el evento de no resultar suficiente para la financiación de la pensión de sobrevivientes; absolviendo de las demás pretensiones a las demandadas, condenando en costas a Protección S.A. en la suma de $5.000.000.

Una vez resueltos los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, esta corporación dispuso confirmar la decisión proferida en primera instancia, sin que hubiese lugar a condena en costas.

Mediante providencia del 2 de diciembre de 2019, la a quo aprobó la liquidación de costas por el valor de $5.000.000 como agencias en derecho a cargo de Protección S.A., decisión contra la cual se presentó únicamente recurso de apelación.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, el apoderado judicial de la demandada Protección S.A. presentó recurso de apelación, indicando que el valor fijado por el despacho de conocimiento resulta excesivo y no se compadece con la actuación de la entidad, quien concurrió a dicho estrado en las oportunidades establecidas, sin que se le pueda indilgar responsabilidad en la duración del proceso.

Asimismo, que la imposición de una suma tan alta por concepto de costas no se encuentra justificada, pues no se ajustan a las tarifas señaladas en el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, excediéndose del monto autorizado correspondiente al 3 y 7.5%, máxime, cuando la condena a la entidad fue la de reconocer el 50% de la pesada pensional a la demandante, es decir, el 50% del salario mínimo del año 2016.

Así las cosas, solicita se modifique la condena impuesta, y en su lugar, se determine una suma mucho menor a la impuesta.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Una vez vencido el término, tanto la parte actora como la demandada guardaron silencio.

No observándose causal de nulidad que invalide la actuación se proceden a resolver las suplicas de la demanda previas las siguientes…

CONSIDERACIONES

Es competente la Sala para resolver el recurso de apelación planteado, conforme lo establecido en el numeral 11 del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 65 del CPT y de SS.

De acuerdo con lo anterior, procede esta corporación a resolver lo pertinente al recurso de apelación, teniendo en cuenta para ello que el artículo 366 del C.G.P., numeral 4, establece:

> "*Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas".*

Así las cosas, como quiera que el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho, solo regula los procesos iniciados a partir de dicha fecha, en tanto los comenzados antes se siguen ciñendo por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, claro es para la Sala que el aplicable al presente asunto es el 1887 de 2003, atendiendo que la fecha de radicación del proceso data del año 2015, acuerdo que en lo pertinente prevé:

> *"ART. 2º -* ***Concepto.*** *Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.*
>
> *ART. 3º-* ***Criterios.*** *El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.* ***PAR.****—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.*
>
> *ART. 6º-* ***Tarifas.*** *Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:*
>
> *LABORAL*

2.1. Proceso ordinario laboral.
2.1.2. A favor del trabajador.
(…)
Primera instancia. ***Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia****. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
(…)".

Ordenamiento jurídico del que es dable concluir que el fallador de la correspondiente instancia no se encuentra sujeto a una cuantía determinada en la fijación de las agencias en derecho, sino que está guiado por un quantum cuyos extremos van hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, y que deben establecerse teniendo en cuenta factores tales como la naturaleza del juicio, así como la duración y calidad de la gestión se constituyen en el factor determinante.

Ahora, una vez revisadas las actuaciones desplegadas al interior del proceso, y con el fin de establecer la duración del mismo en primera instancia, se tiene que la demanda fue radicada el 1 de octubre de 2013; inadmitida el 7 y admitida el 22, ambos del mismo mes y año; asimismo, que la sentencia no fue proferida sino hasta el 27 de marzo de 2017, contando el proceso con una duración de aproximadamente 3 años y 6 meses.

En suma, se advierte que la recurrente fue condenada a pagar a la señora Martha Liliana Potes Puerto de forma vitalicia la pensión de sobrevivientes a partir del día 26 de junio de 2011 con el porcentaje del 50% de la pensión que reconoció la demandada a la menor Natalia Suárez Potes en la suma inicial de $566.700, encontrando que de conformidad con la normatividad aplicable, en primera instancia por concepto de costas se reconocerá hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia.

Así las cosas, y en cuanto peticiona el recurrente dosificar por una cifra inferior la condena en costas, considera este colegiado, sin desconocer la gestión desplegada por el apoderado de la parte actora, y la duración del trámite judicial, que imponer una condena de $5.000.000 por concepto de costas procesales resulta elevado para el caso concreto, máxime, cuando la a quo dispuso que las mesadas causadas desde junio de 2011 hasta la ejecutoria de la sentencia, quedarían cobijadas por las mesadas recibidas por la menor mencionada en el proceso, por hacer parte del mismo núcleo familiar.

En conclusión, accederá esta corporación a lo pretendido, dosificando por tal concepto un valor correspondiente a tres millones quinientos mil pesos, conforme a lo considerado.

Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

Por lo expuesto, la Sala Tercera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE

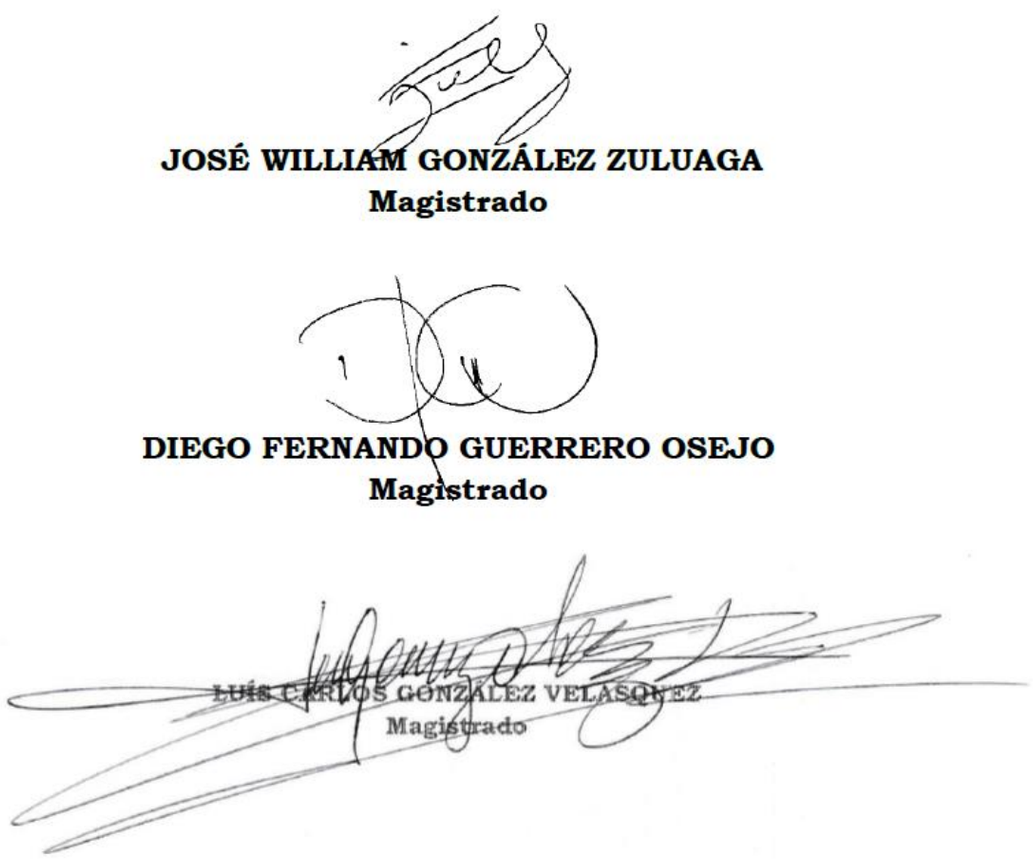
PRIMERO: MODIFICAR el auto de fecha 2 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia, en el sentido de indicar que las agencias en derecho en primera instancia a cargo de la recurrente, corresponden a la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.0000), conforme a lo considerado.

SEGUNDO. SIN COSTAS en esta instancia por no haberse causado.

TERCERO. Envíese al juzgado de origen para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,



JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado Ponente

Proceso: 11001310503420190081401

PROCESO DE GLADYS SÁNCHEZ ROZO CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Magistrado Ponente, en compañía de los demás miembros de la Sala Tercera de Decisión Laboral, profieren la siguiente decisión

TEMA: Apelación auto – excepción previa de falta de competencia.

OBJETO: Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones, en contra del auto proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá, en el cual se declaró no probada la excepción previa de falta de competencia, por el no agotamiento de la reclamación administrativa.

Lo anterior, no sin antes reconocer personería adjetiva a la Dra. Northey Alejandra Huérfano Huérfano, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.074.475 y tarjeta profesional 287.274 del C.S.J., como apoderada sustituta de Colpensiones, en los términos y para los fines indicados en el poder conferido.

ANTECEDENTES

Gladys Sánchez Rozo llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que se declare la nulidad del traslado efectuado del RPMPD al RAIS, debiendo trasladarse por parte de la AFP a Colpensiones el monto total de dinero recibido como consecuencia del traslado, incluyendo aportes, bonos pensionales, rendimientos, sin lugar a deducir ningún valor por concepto de gastos de administración, valores destinados al fondo de garantía de pensión mínima o cualquier otro concepto; ordenar a Colpensiones a registrar y actualizar en su historia laboral todos y cada uno de los periodos cotizados, a lo ultra y extra petita, costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones relató en síntesis, que nació el 29 de diciembre de 1961; que inició a efectuar cotizaciones en el Instituto de Seguros Sociales desde el 1 de septiembre de 1978, sin embargo, que en el mes de diciembre de 1998 fue contactado por Protección S.A., con el fin de que se trasladara de régimen.

Así las cosas, refiere que el día 14 de diciembre de 1998 suscribió formulario de afiliación, sin que se hubiese dado información completa sobre ambos regímenes pensionales, y que, pese a que solicitó retornar al extinto ISS en el año 2009, habiendo su entonces empleador radicado el respectivo formulario, nunca se le informó que el mismo no había sido válido.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Notificadas en legal forma las convocadas a juicio, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones; Colpensiones propuso la excepción previa de falta de competencia por el no agotamiento de la reclamación administrativa, indicando que una vez revisada la documental aportada por la demandada y obrante en el expediente administrativo, se verifica que no se cumplió con el agotamiento de la reclamación administrativa, ya que no se aporta con la demanda lo respectivo frente a las pretensiones del líbelo demandatorio.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio llevada a cabo el 15 de septiembre de 2022, el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dispuso declarar no probada la excepción previa de falta de competencia por el no agotamiento de la vía gubernativa, en tanto se allegó al plenario reclamación presentada el 10 de junio de 2021.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, la apoderada de Colpensiones interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, comoquiera que si bien es cierto que la parte actora agotó la reclamación administrativa, esta data del 10 de junio del 2021, pese a que la demanda fue radicada el 16 de diciembre de 2019, por lo que dicho escrito fue posterior al presente trámite judicial, estando el proceso en curso, considerando que es procedente declarar probada la excepción previa propuesta.

Considera la apoderada que la reclamación debió presentarse previo a la radicación de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término, la demandada Colpensiones allegó alegatos de conclusión, reiterando que la demandante no cumplió con el agotamiento de la reclamación administrativa.

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes…

CONSIDERACIONES

Compete a esta Sala desatar el recurso de alzada interpuesto y sustentado en debida forma por la apoderada de la demandada Colpensiones, en razón a que el auto apelado es susceptible del aludido recurso, acorde con lo dispuesto en el artículo 65 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, en tanto resuelve acerca de una excepción previa.

Frente a lo anterior, ha de anotarse respecto a la reclamación administrativa, que ciertamente, toda demanda debe congregar ciertos requisitos para que las pretensiones se resuelvan con éxito.

Estos requisitos son de fondo y de forma, los de fondo son los presupuestos procesales, los formales de la demanda los exige el artículo 25 del C.P.T y la SS., y el Juez antes de ordenar el traslado observará si el libelo introductorio cumple o no con las exigencias del mencionado artículo y los del 28 *ibídem*; fue en ese instante cuando el Despacho del conocimiento examinó la forma y contenido de la demanda, estudio que repitió al presentarse excepciones.

Al punto en discusión conviene a traer a colación el artículo 6º del CPL, modificado por la Ley 712 de 2001, artículo 4º, establece que: *"Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta..."*.

Dicho lo anterior, conviene recordar, conforme a la norma en cuestión y a la jurisprudencia, que la naturaleza jurídica de la reclamación administrativa, constituye factor de competencia, es un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción (ver Casación Laboral, Radicado No. 12.221 del 13 de octubre de 1999), así mismo, se cita aparte de Radicado No. 30056, fallo proferido el 24 de mayo de 2007, M.P. DR. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ:

> *"El Código de Procedimiento Laboral dispone en su artículo 6° que "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse sólo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente".* ***De manera, que antes de reclamarse ante los estrados laborales de la jurisdicción ordinaria alguna pretensión de orden social a cualesquiera de las anteriores entidades, se hace necesario que el interesado formule previamente su petición de reivindicación ante éstas.***

Tiene por finalidad el anterior procedimiento gubernativo que las entidades de derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez Laboral, la solución que un conflicto encierre.

De ahí que se haya dicho por la doctrina y la jurisprudencia laboral que a través del instituto de la vía gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer una especie de justicia interna, como que la misma ley les permite conocer de manera primigenia, es decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las inconformidades de orden laboral que tengan las personas legitimadas para formularles esta clase de cuestionamientos, para que sean tales organismos, actuando como juez de sus propias decisiones, los que definan la viabilidad de aquellas y puedan así corregir por sí mismas, cualquier error en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales desavenencias y evitar de esta manera los traumatismos propios de una controversia judicial".

De otro lado, se ha manifestado que el mecanismo procesal contemplado en el artículo 6° del C. de P. L. ofrece ventajas incomparables para los entes relacionados en dicha norma, porque al brindar a los mismos la posibilidad de autocomponer sus conflictos, se evitan los costos que implicaría para tales entidades un largo proceso laboral, lo que significa un considerable ahorro para los contribuyentes y una garantía de que no se verá afectada la buena marcha de dichos organismos como consecuencia de las vicisitudes y tropiezos que conlleva la atención de un juicio, lo que de paso asegura que todos los esfuerzos de aquellos entes se concentrarán en sus naturales cometidos estatales". (Negrillas del Tribunal).

Teniendo en cuenta lo anterior, la reclamación administrativa, tiene como finalidad lo siguiente:

- Interrumpir el término prescriptivo sobre el derecho o la prestación reclamada.
- Cumplir con lo establecido en el artículo 6 del estatuto procesal laboral.
- Brindar la oportunidad a las entidades relacionadas en el artículo 6 antes nombrado, de que tomen las decisiones pertinentes para precaver un futuro pleito laboral.
- Otorgar competencia al juez laboral para que éste conozca del conflicto planteado.

Por otra parte, también conviene reiterar que al constituir esta figura un privilegio de la administración, en orden a que ella revise su actuación antes de que el interesado acuda a la jurisdicción, el acceso a la administración de justicia se impide hasta tanto no se responda o se genere el silencio administrativo negativo, si transcurrido un mes no se contesta.

Aclarado lo anterior, atendiendo a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Trabajo, bien puede afirmarse que debía satisfacerse el anotado presupuesto procesal por la parte demandante para luego sí adelantar en su contra este proceso, constituyéndose por tanto la mencionada reclamación como un factor de competencia para el juez laboral respecto de las pretensiones que se hayan expresado en tal documento, ello precisamente porque el fin último de esa actuación es otorgar a la administración pública la oportunidad de decidir de manera directa y autónoma si los derechos reclamados por el peticionario son o no procedentes, y de esta forma enmendar cualquier error que hubiera podido cometer sobre el particular, de ahí que si no se hace en los anotados términos se le niega esa posibilidad legalmente establecida.

Ahora bien, no es objeto de discusión que la señora Gladys Sánchez Rozo presentó reclamación administrativa ante la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el 10 de junio de 2021, sin embargo, consta en el acta individual de reparto obrante en el ítem 1 del expediente digital, que el proceso de la referencia en efecto, se radicó en el mes de diciembre del año 2019, es decir, previo a la presentación de la reclamación aquí debatida.

Efectuadas las precisiones del caso, no puede desconocerse que la entidad recurrente no allegó contestación de la demanda, sino hasta el día 31 de marzo de 2022, alegando indebidamente desconocer la reclamación administrativa elevada por la demandante, afirmando que no se cumplió con el agotamiento del requisito, toda vez que "(…) *en ningún momento la señora Gladys Sánchez Rozo, presentó ante COLPENSIONES, reclamo frente a lo pretendido en las ya mencionadas pretensiones, lo que claramente se constituye en una falta del factor de competencia para el Juez Laboral, por no agotar la reclamación administrativa consagrada en el artículo 6 del Código de procedimiento de trabajo y de la seguridad social (…)" (sic),* lo anterior, inclusive pese a que al interior del expediente administrativo obra contestación a la petición elevada por la actora.

Así las cosas, y si bien en el presente recurso lo que se debate es únicamente la fecha en que se presentó la reclamación administrativa, deberá tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 101 del Código General del Proceso:

> *"(…) Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido el traslado.* ***Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará*** *(…)". Negrilla fuera del texto.*

Pudiendo determinarse, que si bien le asiste razón a la apoderada recurrente en cuanto la reclamación administrativa se presentó con posterioridad a la radicación de la demanda, ello no es óbice para que la excepción alegada no pueda ser subsanada, como aquí aconteció.

Es por lo que, considera este colegiado que al obrar en el plenario tanto la reclamación administrativa como la contestación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, no resulta procedente declarar probada la excepción propuesta, debiendo confirmarse la decisión de primera instancia.

Por lo expuesto, la Sala Tercera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá, el 15 de septiembre de 2022 dentro del proceso ordinario laboral en referencia, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. COSTAS en esta instancia a cargo de la recurrente Colpensiones. Inclúyase como agencias en derecho la suma de $1.160.000 a favor de la parte demandante.

TERCERO. Envíese al juzgado de origen, para que se continúe con el trámite pertinente.

Los magistrados,

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Magistrado

INFORME SECRETARIAL

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

MAGISTRADO DR. **JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA**

RDO: No.11001310502320170016 7. Me permito pasar a su despacho, el expediente, informando que regresó de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde NO CASÓ el recurso presentado contra la sentencia proferida por esta Sala de fecha 6/07/2020, sin costas.

ACENELIA ALVARADO ARENAS

ESCRIBIENTE

Rama Judicial
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA

MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Magistrado Ponente:	**JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA**
Clase de Proceso	FUERO SINDICAL – APELACIÓN SENTENCIA
Radicación No.	11001310502420200040 2-02
Demandante:	SATENA S.A.
Demandado:	DIEGO GUILLERMO MEJIA RUIZ

Bogotá, D.C., al primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

AUTO

Se procederá a señalar fecha para proferir sentencia que ponga fin a la litis dentro del proceso especial de la referencia.

En consecuencia, se…

RESUELVE

SEÑALAR el día diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023), para proferir decisión de fondo escritural.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA LABORAL.

Secretaría
Bogotá D.C. 2 DE MARZO DE 2023

Por ESTADO No. 037 de la fecha fue notificado el auto anterior.

MARIA ADELAIDA RUIZ VILLORIA
SECRETARIA

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-

- SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

El apoderado de la **parte demandada SALUD TOTAL E.P.S S.A**, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), notificado por edicto de fecha cinco (5) de octubre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1], en ambos casos, teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$120.000.000.**

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

En el presente asunto, la sentencia de primer grado condenó al pago de diversas acreencias laborales, decisión que apelada, fue modificada y adicionada.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandada, se encuentra determinado por el monto de las condenas impuestas en las instancias, de ellas, el pago de la sanción por no consignación de cesantías por valor de **$71´404, 562**, y de **$ 83´558.160** por concepto de indemnización moratoria, montos que en conjunto superan ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario estimar las demás obligaciones impuestas. En consecuencia, se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, con arreglo a lo expresado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

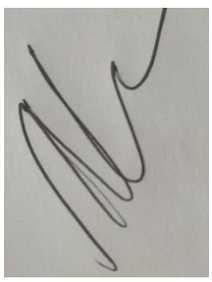
Proyectó: Alberson

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que el apoderado de la **parte demandada SALUD TOTAL E.P.S S.A**, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023).



ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-

- SALA LABORAL-

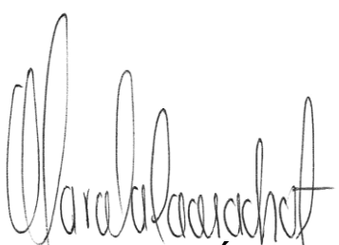
Magistrada Ponente: DRA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

El apoderado de la parte demandante, dentro del término legal interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022). Posteriormente, mediante nuevo escrito remitido por correo electrónico, desiste de él.

En consecuencia, en virtud a lo previsto en el artículo 316 del CGP, aplicable a los asuntos del trabajo, se acepta el desistimiento del recurso de casación, atendiendo las facultades otorgadas para tal fin, conforme se advierte del poder aportado.

Notifíquese y Cúmplase



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

MAGISTRADA

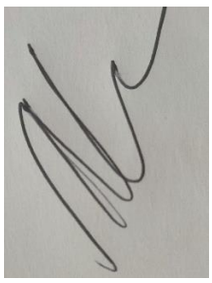
Proyectó: Alberson

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia informando que el apoderado de la parte **demandante**, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023).



ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-

- SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

El apoderado de la **parte demandante**, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022), notificado por edicto de fecha diez (10) de noviembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1], en ambos casos, teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$120.000.000.**

En el presente asunto, la sentencia de primer grado negó las pretensiones de la demanda, decisión que apelada, fue revocada, declarando la existencia del nexo laboral.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante, se encuentra determinado por el monto de las pretensiones negadas en las instancias, de ellas, el pago de los salarios causados a partir del 27 de marzo de 2015, concepto que estimado, para efectos de este recurso, por 12 pagos al año, con base en salario fijado por el actor (2.300.000),hasta la fecha de fallo de alzada, acumula un saldo de **$209.300.000**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario estimar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, con arreglo a lo expresado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO : En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada

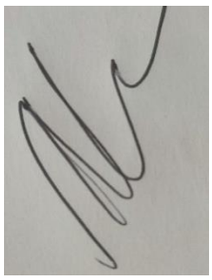
Proyectó: Alberson

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que el apoderado de la **parte demandante**, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022),

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023).



ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Proceso:	EJECUTIVO LABORAL
Ejecutantes:	JOSÉ MARÍA CORTÉS TORRES Y OTROS
Ejecutada:	COLPENSIONES
Radicación:	01-2009-01329-01
Tema:	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO – REVOCA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y vencido el término otorgado para alegar de conclusión, se procede a proferir la siguiente,

AUTO

ANTECEDENTES RELEVANTES

1. Demanda. José María Cortés Torres, Aurelio Barragán Peñuela, Miguel Segura y José Gerardo Hernández Zarate instauraron demanda ejecutiva contra Colpensiones, a continuación del proceso ordinario, quienes pidieron se libre mandamiento de pago por las sumas a las que fue condenada la ejecutada. (Expediente digital, PDF 02ExpedienteParteDos, págs. 60 a 64)

2. Mandamiento de pago. Mediante auto del 4 de octubre de 2009, el A quo libró mandamiento de pago a favor de Aurelio Barragán Peñuela, Miguel Segura y José María Cortés Torres, por las siguientes obligaciones:

1. Al pago de la pensión de vejez de carácter vitalicio que les corresponda a los señores Aurelio Barragán Peñuela, Miguel Segura y José María Cortés Torres, cuyo monto será determinado por el ISS para cada uno de los demandantes mencionados, en los términos del artículo 20, ítem II, literales a, b, parágrafos 1 y 2 y artículo 21, hasta artículo 24 del Decreto 0758 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo 049 de febrero de 1 de 1990, montos, que en ningún momento podrán ser inferiores al salario mínimo legal mensual para época de los reconocimientos advirtiendo que la causación y disfrute de la pensión por vejez aquí determinada para cada uno de los atrás demandantes, nombrados, será a partir de la fecha en que se acredite por cualquier medio la novedad de desafiliación al régimen, respecto de los señores Barragán Peñuela, Segura y Cortes Leo. Además, el ISS reconocerá, liquidará y pagará la pensión de vejez aquí ordenada a cada uno de los nombrados beneficiarios, junto con las mesadas ordinarias y adicionales correspondientes, los reajustes de orden legal que sobre las mismas se harán año a año, y las prestaciones asistenciales de que trata el sistema de seguridad social en salud.

2. Librar mandamiento de pago contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá e Instituto de Seguros Sociales, para que se pague con carácter de compartida la pensión al ejecutante JOSÉ MARÍA CORTÉS LEÓN.

3. Por las costas del proceso de primera instancia la suma de $2.000.000.

4. Por las costas del proceso de segunda instancia la suma de $8.000.000.

3. Trámite procesal. En providencia del 12 de septiembre de 2011, el cognoscente dispuso continuar adelante con la ejecución (Expediente digital, PDF 02ExpedienteParteDos, págs. 212 a 217) y en auto del 16 de noviembre de 2011 se aprobó la liquidación de crédito de la siguiente manera:

1. Mesadas pensionales del señor Aurelio Barragán Peñuela desde el 17 de octubre de 1981 hasta 30 de septiembre de 2011, la suma de $77.340.039.
2. Mesadas pensionales del señor Miguel Segura desde el 1° de noviembre de 1974 hasta 30 de septiembre de 2011, la suma de $77.822.137.
3. Mesadas pensionales del señor José María Cortés León desde el 24 de octubre de 1975 hasta 30 de septiembre de 2011, la suma de $77.583.309.
4. Costas en primera instancia, la suma de $2.000.000.
5. Costas en segunda instancia, la suma de $8.000.000.

Total: $242.745.485. (Expediente digital, PDF 02ExpedienteParteDos, pág. 272)

En auto adiado 14 de noviembre de 2018, se dispuso actualizar la liquidación del crédito, en la que se tuvieron en cuenta las mesadas causadas con posterioridad y hasta la fecha de inclusión de los actores en nómina de pensionados, de la siguiente manera:

1. Mesadas pensionales del señor Aurelio Barragán Peñuela desde el 17 de octubre de 1981 hasta marzo de 2012, la suma de $81.213.639.
2. Mesadas pensionales del señor Miguel Segura desde el 1° de noviembre de 1974 hasta abril de 2012, la suma de $88.321.266,60.
3. Mesadas pensionales del señor José María Cortés León desde el 24 de octubre de 1975 hasta marzo de 2012, la suma de $81.456.266,60.
4. Costas en primera instancia, la suma de $2.000.000.
5. Costas en segunda instancia, la suma de $8.000.000.

Total: $260.991.814,6. (Expediente digital, PDF 02ExpedienteParteDos, pág. 502)

Ahora, mediante providencia calendada el 11 de agosto de 2021, se tuvo como sucesores procesales de José María Cortés León a los señores Yolanda Cortés Torres y José María Cortés Torres, además, en auto del 31 de enero de 2022, se reconocieron como sucesores procesales de Miguel Segura a Luz Dary Triana Pinzón y Miguel Segura Cepeda, determinaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas.

4. Auto apelado. En auto del 13 de septiembre de 2022, el juzgador de primer grado negó la actualización a la liquidación de crédito que presentó la parte ejecutante, considerando que las sumas adeudadas por la encartada no están sujetas a variación, por lo tanto, tendría en cuenta la liquidación aprobada en auto 14 de noviembre de 2018.

5. Impugnación y límites del ad quem

5.1. Yolanda Cortés Torres y José María Cortés Torres, como sucesores procesales de José María Cortés León. Inconformes con la decisión, los ejecutantes formularon recurso de apelación alegando que el A quo se equivocó al negar la actualización del crédito, si se tiene en cuenta que en el mandamiento de pago en ningún momento limitó la fecha hasta la cual se podía efectuar el cobro de las mesadas pensionales reclamadas, más aún cuando se omitieron en la liquidación las causadas desde el 1 de abril de 2012 al 6 de enero de 2017, fecha de su fallecimiento, ya que "*el*

causante JAMÁS cobró suma de dinero con ocasión a la sentencia acá ejecutada, por no haber sido notificado de la misma por parte de su apoderado de la época ni de Colpensiones."

5.2. Luz Dary Triana Pinzón y Miguel Segura Cepeda, como sucesores procesales de Miguel Segura. Como argumento de su recurso de apelación esgrimieron que la liquidación aprobada no guarda coherencia a lo ordenado mediante mandamiento de pago, pues las sumas adeudadas corresponden a las mesadas pensionales causadas desde el 1 de septiembre de 2003 al 30 de abril de 2012, día anterior al ingreso en nómina de pensionados efectuados por el ISS, debidamente indexado.

Refirió que en auto anterior se liquidaron las mesadas pensionales causadas desde el 1° de noviembre de 1974, en cuantía de un salario mínimo, sin tener en cuenta que la novedad de desafiliación al régimen de prima media se hizo hasta el 31 de agosto de 2003, por lo que de no accederse a modificar la liquidación del crédito, se estaría obligando a Colpensiones hacer un pago de lo no debido, ya que al 1° de noviembre de 1974, el causante no contaba ni con la edad ni con la densidad de semanas requeridas, para obtener una pensión de vejez. Indicó que se erró al determinar el valor de la pensión aprobada en la liquidación del crédito, en tanto que el causante tenía derecho a una mesada superior a un salario mínimo a 1 de septiembre de 2003, esto es, de $1.372.903,64.

6. Alegatos de conclusión

6.1. Yolanda Cortés Torres y José María Cortés Torres, como sucesores procesales de José María Cortés León. Alegaron en su favor aduciendo que se equivocó al negar la actualización del crédito presentada, en virtud de que el mandamiento de pago librado en ningún momento limitó la fecha hasta la cual se podía efectuar el cobro de las mesadas pensionales reclamadas, ya que lo que se persigue con la presente ejecución, es precisamente el pago de estas desde el momento de su causación hasta la fecha de su pago real y efectivo.

6.2. Luz Dary Triana Pinzón y Miguel Segura Cepeda, como sucesores procesales de Miguel Segura. En su escrito de alegaciones solicitó que se modifique la decisión en controversia, en tanto que la liquidación del crédito aprobada dentro del proceso ejecutivo no se ajusta a derecho.

CONSIDERACIONES

1. Apelación de auto y principio de consonancia. Sea lo primero indicar que el auto que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo es apelable en los términos del numeral 10° del artículo 65 del CPT y de la SS, en consecuencia, los recursos de apelación interpuestos por los ejecutantes se estudiarán de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 66A del CPTSS que consagra el principio de consonancia, esto es, teniendo en cuenta los puntos y materias objeto de inconformidad, expuestos por los recurrentes.

2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala dilucidar lo siguiente: ¿Incurrió en error el fallador de primera instancia al no dar trámite a la actualización de la liquidación del crédito aprobada en auto adiado 14 de noviembre de 2018?

3. Actualización del crédito. Para decidir sobre la legalidad de la providencia impugnada, mediante la cual negó la actualización del crédito, cumple recordar que con arreglo al 446 del C.G.P., una vez ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la

ejecución o el que resuelve las excepciones propuestas, cualquiera de las partes puede allegar la liquidación del crédito con especificación del capital y los intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten; de ésta se correrá traslado a la parte contraria en la forma prevista en el artículo 110 y por el término de tres días, para que formule las objeciones relativas al estado de cuenta, para lo cual, deberá acompañarse, so pena de rechazo, una liquidación alternativa que precise los errores puntuales que atribuye a la objetada; vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que será apelable sólo en caso que se resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva; de la misma manera se debe proceder para la actualización del crédito, tomando como base la liquidación que esté en firme.

En el *sub judice*, encuentra la Sala que no le asiste razón al *a quo* cuando negó el trámite de la actualización del crédito presentada por los sucesores procesales de los señores José María Cortés León y Miguel Segura, si se tiene en cuenta que aunque la liquidación aprobada en auto adiado 14 de noviembre de 2018 se halla debidamente ejecutoriada, no es definitiva en lo que hace a la obligación a cargo de Colpensiones, de cara a lo señalado en el auto que libró mandamiento de pago de fecha 4 de octubre y conforme a providencia calendada 16 de noviembre de 2011, en donde se dispuso aprobar la liquidación del crédito, en los términos del artículo 446 del C.G.P.

Adicionalmente, no se debe pasar por alto que, aunque en la citada providencia – 14 de noviembre de 2018 - se calcularon las mesadas pensionales a partir de la fecha de disfrute de la pensión de vejez y hasta la data en que cada uno de los causantes fue incluido en nómina por parte de la entidad accionada; lo cierto es que, tanto a José María Cortés como a Miguel Segura, les fueron algunas suspendidas a partir de su inclusión, según se extracta de la certificación que expidió Colpensiones el 11 de enero de 2018; de ahí que al juez de primer grado le resultaba imperativo dar trámite a la nueva actualización de la obligación presentada, pues solo así se determinará definitivamente lo adeudado por la pasiva. (Expediente digital, PDF 02ExpedienteParteDos, págs. 489 a 496).

En ese sentido, es cierto que el auto que aprobó la actualización de la obligación no mereció reproche alguno por las partes, pues la parte ejecutante teniendo la oportunidad para controvertir lo resuelto por el juzgado de conocimiento, guardó silencio ante tal determinación; empero, para la Sala tal situación no puede servir de móvil para negar el trámite a una nueva actualización del crédito, toda vez que en el plenario no se tiene la certeza, por no existir prueba alguna que permita inferir que la sentencia fue acatada en su integridad, es decir, que las mesadas pensionales causadas con posterioridad a la inclusión a nómina y anteriores al día de fallecimiento, hayan sido o no canceladas por la ejecutada a cada uno de los pensionados en cita.

Lo anterior, no significa que se habilite a las partes para que entren a controvertir o incluir conceptos no definidos en el título base de la ejecución, ni en la liquidación y actualización del crédito ya aprobadas, sino, lo que se pretende es que evacuado el trámite señalado en el artículo 446 del C.G.P., el juez de conocimiento realice el análisis de las realidades fácticas que se someten por las partes a su escrutinio, y tras un proceso de valoración de los elementos de convicción allegados al proceso ejecutivo, adopte decisión relativa a si se debe actualizar o no el crédito, con miras a concluir si la pasiva adeuda mesadas pensionales o no a los sucesores procesales de los señores José María Cortés y Miguel Segura.

Las anteriores razones conducen a revocar el auto impugnado, para en su lugar ordenar al A quo que dé trámite a la actualización del crédito con arreglo al artículo 446 del C.G.P. y efectúe el pronunciamiento que corresponda.

4. Costas. Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

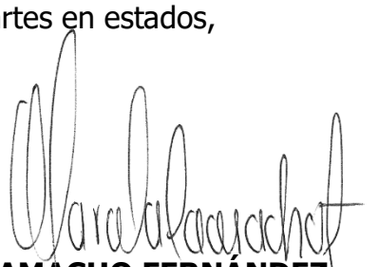
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto apelado y, en consecuencia, ordenar al *a quo* de trámite a la actualización del crédito que presentó la parte ejecutante con arreglo al artículo 446 del C.G.P., para que efectúe el pronunciamiento que corresponda.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La presente providencia se notifica a las partes en estados,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

***-**Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-*

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	CARMEN JULIA REY MÁRQUEZ
Demandadas:	COLPENSIONES Y OTRAS
Radicación:	33-2017-00621-02
Tema:	APELACIÓN AUTO–LIQUIDACIÓN DE COSTAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023)

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y vencido el término otorgado para alegar de conclusión, se procede a proferir el siguiente,

AUTO

ANTECEDENTES RELEVANTES

1. Demanda. Carmen Julia Rey Márquez instauró demanda ordinaria contra AFP Porvenir S.A. y Colpensiones con el propósito de que se declare la nulidad del traslado y afiliación al RAIS y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones a tenerla como afiliada en el RPMPD como si nunca se hubiese trasladado. Así mismo, pidió que se condene a las encartadas a reconocer y pagar intereses generados por la demora injustificada en la autorización del traslado; se realice la devolución de aportes efectuados; lo que resulte probado ultra y extra petita y costas del proceso. (Expediente digital, PDF 01. EXPEDIENTE, págs. 3 a 16).

2. Trámite procesal. Surtidas las etapas procesales, el fallador de primera instancia profirió sentencia el 16 de septiembre de 2021, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda, declarando ineficaz la afiliación realizada al RAIS, disponiendo que la demandante actualmente se encuentra afiliada de forma efectiva a Colpensiones. En consecuencia, condenó a la AFP accionada a trasladar a Colpensiones los valores generados por concepto de aportes, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentren en la cuenta de ahorro individual. Ordenó a la AFP Porvenir S.A., asumir a cargo de su propio patrimonio los gastos o cuotas de administración y comisiones generadas durante el periodo en el que la accionante estuvo afiliada al RAIS, gravándola en costas por ser la parte vencida del proceso.

Tal decisión fue adicionada por esta Sala de Decisión Laboral en providencia adiada 29 de abril del 2022, en el sentido de ordenar a la AFP Porvenir S.A. devolver a Colpensiones los porcentajes destinado a seguros previsionales y a constituir el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que en su momento descontaron de la cuenta de ahorro individual de la actora, ordenando que dichos conceptos, así como los demás ordenados por el A quo se devuelvan debidamente indexados. Así mismo, se gravó en costas de segunda instancia, tanto a Colpensiones como a AFP Porvenir S.A., determinación que se encuentra debidamente ejecutoriada. (Expediente digital, carpeta C02ApelacionSentencia, PDF 08 Sentencia).

3. Auto Apelado. En auto del 11 de julio de 2022 el *a quo* aprobó las costas de primera instancia. (Expediente digital, PDF 10AutoObedezcaseApruebaCostas).

4. Recurso de Apelación. Inconforme con la anterior decisión el apoderado judicial de **AFP Porvenir S.A.,** interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación señalando que de conformidad con el artículo 365 del C.G.P. y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, la cuantificación de las costas se debe hacer con base en la naturaleza del proceso y la gestión del apoderado, siendo el presente asunto un proceso declarativo de los que la misma jurisprudencia denomina como de complejidad mínima. Indicó que, con relación al criterio de duración del proceso, aquello no es atribuible al fondo de pensiones, pues siempre atendieron en forma oportuna las etapas procesales, por lo que de cara a lo anterior solicitó fijarlas de manera equitativa y razonable, que corresponda en "*justa medida a la labor jurídica*" realizada por la parte actora, con observación de la naturaleza y calidad del proceso. (Expediente digital, PDF 11RecursoReposicionPorvenir).

5. Alegatos de Conclusión

5.1. Demandante. Alegó en su favor aduciendo que de conformidad con el acuerdo al Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, la duración del proceso hasta la expedición del auto que liquidó las costas fue de casi cinco años, por lo que a pesar de que el proceso es denominado por la pasiva como "de baja complejidad", permaneció en el tiempo de manera prolongada, por un hecho que tal como lo definió el fallo, fue atribuible a ésta, como lo fue la falta de información, lo cual influyó de manera sustancial en la solución de lo pretendido.

5.2. Demandada. En su escrito de alegaciones indicó que no se alegó́ y menos probó, los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Apelación de auto y principio de consonancia. El recurso de apelación interpuesto por AFP Porvenir S.A. se estudiará de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S. que consagra el principio de consonancia, esto es, teniendo en cuenta los puntos y materias objeto de inconformidad, expuestos por la recurrente.

2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala dilucidar lo siguiente: ¿Conforme a las reglas de fijación de las agencias en derecho establecidas en el CGP y Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, las mismas deben modificarse en un menor valor al definido por el Juzgado de conocimiento?

3. Agencias en derecho. Conforme al artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S., cuando no existe norma expresa en el procedimiento laboral sobre alguna materia específica, debemos remitirnos al C.G.P. (criterio expuesto por la CSJ en la sentencia SL 16928-2017). En nuestro estatuto laboral adjetivo no se encuentra regulado lo relacionado con las costas procesales, motivo por el que debemos remitirnos al artículo 365 del C.G.P., el cual establece que en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, será condenada en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.

La Sala precisa que, de acuerdo con la jurisprudencia, las costas son *"aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial"* (AL1906 del 6 de abril de 2016), y están conformadas por dos rubros distintos: (i) las expensas y (ii) las agencias en derecho. Así mismo, la citada jurisprudencia manifiesta que las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de

apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho.

Para la fijación de las agencias en derecho de conformidad con el ordinal 4º del artículo 366 del C.G.P., deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, que para el caso de marras corresponde al PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 y no el derogado Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, dada la fecha de radicación de la demanda, esto es, 7 de octubre del 2017 (Expediente digital, PDF 01Expediente, pág. 86).

Así, conforme al mencionado artículo 366 del C.G.P., debe considerarse que, si las tarifas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, *"el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas."*

Aplicada la citada disposición al presente asunto, la inconformidad de la apelante radica en que a su juicio las costas a su cargo, fijadas en primera instancia, son excesivas y no se acompasan con la naturaleza y duración del proceso, así como la gestión del apoderado de la parte actora.

Así, para un mejor proveer, debe resaltar la Sala que el Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, enseña los topes a aplicar en la liquidación de costas procesales de la siguiente forma:

> **"1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.**
>
> (…) En primera instancia.
>
> a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:
>
> (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
>
> (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
>
> b. Por la naturaleza del asunto. **En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V."**

Para esta Corporación, la condena impuesta a AFP Porvenir S.A. no representa una pretensión pecuniaria por la esencia misma del proceso incoado, ya que lo solicitado trasciende a declarar la ineficacia del traslado efectuado al RAIS y en consecuencia a la devolución de aportes junto con sus rendimientos a Colpensiones, de allí que la condena comporte una obligación de hacer, en tanto que dispuso el retorno de los dineros por concepto de administración de la cuenta de ahorro individual de la actora.

Es claro entonces que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución reconocida, considerando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo como límites los topes máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté condicionado a fijar como agencias el mínimo referenciado, sino que tal condena puede oscilar entre los topes mínimo y máximo que las normas en mención contemplan.

Ahora, en el caso concreto el a quo tenía como parámetros el mínimo de 1 SMLMV y un máximo de 10 SMLMV, procediendo a condenar a la entidad enjuiciada al valor de $5.000.000, el cual no resulta desproporcionado, ni se sale de los parámetros establecidos en el Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por lo que deberá confirmarse la decisión de instancia.

A lo anterior, se agrega que analizada la gestión del apoderado de la parte actora, quien asistió a las audiencias programadas, así como la duración y la calidad del proceso, se encuentra que aquel tuvo una participación en una causa cuyo trámite implicó una duración en primera instancia de un poco más de tres años y onces meses, tiempo durante el cual revela una atención diligente del profesional del derecho quien representa los intereses de aquella.

Por consiguiente, en vista de que es deber del Juez de conocimiento liquidar las agencias en derecho, quien tiene la potestad para establecerlas de acuerdo con su criterio, siempre y cuando no vulnere la normatividad vigente, esta Sala encuentra ajustada su decisión, pues las agencias fijadas a favor de la demandante están dentro de los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y corresponden con los criterios de equidad y razonabilidad fijados por la ley de acuerdo con la gestión y la duración del proceso, no siendo atendibles los argumentos esgrimidos por el recurrente para proceder a su modificación.

Virtud de lo dicho, no queda otro camino que confirmar la decisión proferida por el fallador de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D. C.

RESUELVE

PRIMERO: **CONFIRMAR** el auto recurrido, por las razones de que da cuenta la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: **SIN COSTAS** en la presente instancia por no haberse causado.

La presente providencia se notifica a las partes en estados,

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Proceso:	EJECUTIVO LABORAL
Ejecutante:	GABRIEL ALFONSO DUQUE SERNA
Ejecutada:	UGPP
Radicación:	14-2014-00713-03
Tema:	MEDIDA CAUTELAR – CONFIRMA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023)

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y vencido el término otorgado para alegar de conclusión, se procede a proferir la siguiente,

AUTO

En atención al memorial allegado mediante correo electrónico, se **TIENE POR PRESENTADA LA RENUNCIA** por el Dr. **ALBERTO PULIDO RODRÍGUEZ**, de conformidad con el artículo 76 del C.G.P.

ANTECEDENTES RELEVANTES

1. Demanda. Gabriel Alfonso Duque Serna instauró demanda ejecutiva contra UGPP, a continuación del proceso ordinario, quien pidió se libre mandamiento de pago por las sumas a las que fue condenada la ejecutada. (Expediente digital, PDF 01ExpedientePrincipalC01F01A989, págs. 1027 a 1029)

2. Mandamiento de pago. Mediante auto del 10 de noviembre de 2014 (Expediente digital, PDF 01ExpedientePrincipalC01F01A989, págs. 1037 a 1039), el A quo libró mandamiento de pago por las siguientes obligaciones:

> *"1.- Por concepto de **PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE APORTES**, prevista en la Ley 71 de 1988, a partir del 20 de abril de 2006, en un monto del 75% del IBL calculado sobre los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el actor durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, el cual arroja una primera mesada en cuantía de $743.570,54.*
>
> *Como se advierte de la Resolución No. UGM 056515 del 28 de septiembre de 2012 expedida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social, que al actor le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía de un salario mínimo, esto es, $408.000 a partir del 19 de abril de 2006, se ordenará que ha existido algún pago como consecuencia de ese acto administrativo por ese concepto y en esa cuantía – salario mínimo-, se le descuente de lo que adeude la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "UGPP"**, por concepto de pensión de jubilación por aportes, que deberá pagarse con los incrementos y mesadas adicionales a que haya lugar.*
>
> *2.- Por concepto de **COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA** a cargo de la parte demandada, la suma de **$2.500.000.***
>
> *3.- Por las costas del proceso."*

3. Trámite procesal. En providencia adiada 7 de marzo de 2017, se siguió adelante con la ejecución, así mismo, en auto del 5 de octubre de 2017, se aprobó la liquidación del crédito en la suma de $46.004.855, en la que se tuvieron en cuenta las diferencias pensionales causadas, más las costas del proceso ordinario. En auto del 7 de abril de 2021, se ordenó continuar con la ejecución por la suma de $5.013.956 y $333.300, por concepto de saldo insoluto de la liquidación del crédito aprobada en auto del 5 de octubre de 2017 y costas causadas en el proceso ejecutivo respectivamente. (Expediente digital, PDF 01ExpedientePrincipalC01F01A989, págs. 1230, 1231, 1330 y 1331)

4. Auto apelado. En auto del 13 de julio de 2022, la juzgadora de primer grado libró medidas cautelares consistentes en el embargo y retención de los dineros que en cuentas de ahorro o corriente posea la ejecutada en los Bancos Popular, Av. Villas y Citybank, limitando la medida en la suma $5.013.956. En la misma providencia, indicó que la medida decretada no recae sobre aquellas cuentas o recursos que gocen del beneficio de inembargabilidad, como quiera que, en virtud de la sucesión procesal decretada, la suma dineraria adeudada no está siendo reclamada por el pensionado, sino por sus herederos, circunstancia que hace inaplicable la excepción a dicho principio. (Expediente digital, PDF 01ExpedientePrincipalC01F01A989, págs. 1370 y 1371)

5. Impugnación y límites del ad quem. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la demandada formuló recurso de apelación esgrimiendo que las medidas cautelares decretadas por el A quo resultan improcedentes dado a que las cuentas que se encuentran a nombre de la UGPP gozan del beneficio de la inembargabilidad, pues corresponden a recursos del Presupuesto General de la Nación que tienen tal calidad especial. (Expediente digital, PDF 01ExpedientePrincipalC01F01A989, págs. 1383 a 1385)

6. Alegatos de conclusión. El ejecutante alegó en su favor aduciendo que el presente crédito versa sobre derechos laborales ordenados en sentencia judiciales que gozan de las excepciones de inembargabilidad, de conformidad con las sentencias C-354 de 1992, C-354 de 1997 y sentencia 39697 del 28 de Agosto de 2012, de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral.

CONSIDERACIONES

1. Apelación de auto y principio de consonancia. Sea lo primero indicar que el auto que decida sobre medidas cautelares es apelable en los términos del numeral 7° del artículo 65 del CPT y de la SS, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada se estudiará de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 66A del CPTSS que consagra el principio de consonancia, esto es, teniendo en cuenta los puntos y materias objeto de inconformidad, expuestos por la recurrente.

2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala dilucidar lo siguiente: ¿incurrió en error la falladora de primera instancia al decretar la medida cautelar solicitada, en tanto considera la ejecutada que las cuentas objeto de cautela son inembargables?

3. Medida cautelar. Para decidir sobre la legalidad de la providencia impugnada, mediante la cual decretó la medida cautelar solicitada por el extremo activo, cumple recordar que las medidas cautelares comportan instrumentos procesales para asegurar al interior de los procesos ejecutivos, el cumplimiento de las decisiones que se adoptan en procura de la materialización del derecho pretendido.

Bajo ese contexto, se observa que la ejecutada solicita que se levante el instrumento cautelar por la A quo en auto de fecha 13 de julio de 2022, en tanto señala que en el presente caso no procede la excepción de inembargabilidad de recursos públicos, punto frente el cual ha de señalar la Sala que el numeral 1° del artículo 594 del C. G. del P.

dispone que además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar "*Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.*". En similar sentido, el numeral 2° del artículo 134 de la Ley 100 de 1993 establece que son inembargables *"Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas"*

Pese a la anterior regla general, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia como lo fueron las sentencias C 546-1992, C 263-1994, C 1064-2003, C 192-05, C 1154-2008, C 539-2010 y C 543 -2013 ha señalado que el principio de inembargabilidad no es absoluto, señalando como excepción, que en los casos en que se pretenda el pago de una acreencia de carácter laboral o pensional, se debe habilitar la embargabilidad de tales recursos, en aras de lograr la efectiva tutela de los derechos, como presupuesto primordial de la administración de justicia en estas materias, siempre y cuando los dineros sobre los que recae la cautela, estén destinados al pago de tales obligaciones.

Así entonces, aunque acierta la censura al señalar que por regla general en tratándose de obligaciones que afectan los recursos del Estado opera el principio de inembargabilidad de los recursos propios del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, también lo es que esta prohibición no es de carácter absoluto, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, por ende, es dable afectar esos dineros como un mecanismo para hacer efectivo el pago de los derechos pensionales.

Ahora bien, revisada la providencia censurada, es claro para la Sala que tal excepción a la regla de inembargabilidad no fue aplicada al presunto asunto por la cognoscente de primer grado, por el contrario, se consideró por aquella que como la obligación objeto recaudo no está siendo reclamada por el pensionado, sino por sus herederos, dicha circunstancia la hacía inaplicable. Por manera que, si bien se decretó medidas cautelares en contra de la ejecutada, esa determinación por la A quo es consecuente con que no le corresponde establecer si la cuenta es o no inembargable, en tanto es cada entidad bancaria la encargada de verificar esta situación una vez conozca la solicitud de la cautela.

Por consiguiente, en caso de que los bancos observen que las cuentas a oficiar son inembargables, deberán abstenerse de aplicar el embargo decretado, en acatamiento a la orden judicial; decisiva que en todo caso no fue objeto de reparo por la parte actora, lo que impide a la Sala efectuar pronunciamiento alguno tendiente a verificar si acertó o no al concluir qué los dineros sobre los que recae la cautela no encajan en ninguna de las excepciones al principio de inembargabilidad establecidos por la jurisprudencia. Lo anterior, a fin de no hacer más gravosa la situación de la única apelante.

Son estas las razones que imponen a la Sala confirmar el auto recurrido.

4. Costas. Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, en armonía a las consideraciones atrás vertidas.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La presente providencia se notifica a las partes en estados,

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	ROSA MIRYAM YATE
Demandadas:	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. Y OTRAS
Radicación:	25-2022-00053-01
Tema:	RECHAZA DEMANDA – APELACIÓN – REVOCA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero del dos mil veintitrés (2023)

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y vencido el término otorgado para alegar de conclusión, se procede a proferir el siguiente,

AUTO

ANTECEDENTES RELEVANTES

1. Demanda. Rosa Miryam Yate instauró demanda ordinaria contra Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Servicio de Acabados y Personal S.A.S., Alfonso Silva LTDA en Liquidación, con el propósito de que se declare la existencia de una relación laboral con la primera de las demandadas y por tanto la ineficacia de los contratos suscritos con las demás. En consecuencia, pidió su reintegro en iguales o mejores condiciones laborales atendiendo su estabilidad laboral reforzada por salud y por su condición de cabeza de familia, con el consecuente pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir; indemnización prevista en la Ley 361 de 1997, diferencias salariales y prestacionales, prima de antigüedad, vacaciones, trabajo suplementario, indexación, beneficios convencionales, daño moral, lo que resulte probado ultra y extra petita y costas del proceso. (Expediente Electrónico, PDF 01Demanda)

2. Actuación procesal. En auto del 12 de julio de 2022, el Juzgado devolvió la demanda y concedió el término de 5 días para que se subsanen las deficiencias anotadas, so pena de rechazo. (Expediente Electrónico, PDF 04AutoInadmite). Mediante memorial del 15 de julio de 2022 la activa solicitó la aclaración de la providencia y el 19 del mismo mes y año, allegó escrito mediante el cual refiere que subsanó la demanda. (Expediente Electrónico, PDF 05SolicitudAclaración y 06SubsanaciónDemanda)

3. Auto apelado. En auto del 23 de septiembre del 2022 el *a quo* rechazó la demanda, argumentando que no fueron subsanadas de manera integral las falencias indicadas en proveído anterior, considerando que persiste la acumulación de varios supuestos fácticos en los hechos enlistados en los numerales 12, 29, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103, además, insiste en introducir en el hecho 61 fundamentos y razones de derecho, mientras que la pretensión enlistada en el numeral 55 no es clara y se acumulan varios pedimentos dentro de la misma. (Expediente Electrónico, PDF 08AutoRechazaDemanda).

4. Impugnación y límites del ad quem. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la **parte actora** formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación señalando que se omitió por parte del A quo resolver la solicitud de aclaración del auto inadmisorio de demanda, lo cual en términos del artículo 302 del C.G.P., suspende el término de subsanación. De otro lado, indicó que la demanda se subsanó en debida forma

y oportunamente, pues atendió el requerimiento elevado por el juzgado de conocimiento, en la medida que individualizó y enlistó los hechos, no acudió a citas jurisprudenciales, ni hizo referencia a medios de prueba en las situaciones fácticas expuestas, permitiendo así su fácil contestación. Atinente a la pretensión enlistada en el numeral 55, adujo que la enlistó conforme a lo pedido por el cognoscente de primer grado.

5. Alegatos de Conclusión. Alegó su favor aduciendo que cumplió fielmente lo requerido por el A quo en auto que inadmitió la demanda, en los términos comunes del entendimiento, numerando cada pedimento para facilitar la contestación del extremo pasivo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Apelación de auto y principio de consonancia. Sea lo primero indicar que el auto que rechaza la demanda es apelable en los términos del numeral 1° del artículo 65 del CPT y de la SS, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la actora se estudiará de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 66A del CPTSS que consagra el principio de consonancia, esto es, teniendo en cuenta los puntos y materias objeto de inconformidad, expuestos por la recurrente.

2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala dilucidar lo siguiente: ¿Erró el juez de primer nivel al rechazar la demanda, al advertir que no habían sido subsanados los defectos relacionados en el auto que la inadmitió?

3. Rechazo de demanda. Para decidir sobre la legalidad de la providencia impugnada, mediante la cual rechazó la demanda por advertir que en la subsanación no se corrigieron las falencias señaladas en auto inadmisorio, importa recordar que el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, exige el cumplimiento de ciertas formalidades mínimas que se deben verificar antes de admitir el libelo demandatorio. Tal exigencia encuentra su génesis y fundamento en el hecho de ser la demanda el medio a través del cual la demandante ejercita una acción judicial tendiente a hacer efectivo un derecho ante el aparato judicial del Estado, para ponerlo a funcionar y, de contera, entrabando una relación procesal. Por lo anterior, dichos requisitos son de interés público y obligatorio cumplimiento, sin que sea posible a los ciudadanos disponer de ellos, so pena de no activarse la administración de justicia en ejercicio del derecho de acción.

En consecuencia, de reunir el escrito introductor con todos los requisitos formales de ley, deviene su aceptación; si alguna (s) de éstas no se satisface, deberá el juzgador de instancia disponer su subsanación, para lo cual se ordenará dentro del término contemplado en el artículo 28 del C.P.T. y de la S.S., la corrección de los defectos que sean indicados por el juez, la que, de no ajustarse a dichos requerimientos, hará preciso su rechazo. Por consiguiente, antes de ser la subsanación de la demanda una barrera de acceso a la administración de justicia, el cumplimiento de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico en que se fundamenta, es una herramienta de creación legislativa para hacer eficiente y eficaz la confirmación de la demanda, además de permitir el ejercicio pleno del derecho de contradicción y defensa del extremo pasivo de la relación procesal.

Al examinar la Sala el tema de controversia y la actuación surtida, concluye que a pesar de que el auto inadmisorio no era susceptible de ser aclarado por el Juez de primera instancia, en tanto, que no existía concepto o frase que ofreciera verdadero motivo de duda, dado que se expuso con total claridad las falencias a corregir por la parte actora, lo cierto es que revisado su escrito, ésta sí subsanó la demanda conforme a lo ordenado por el *a quo*, al haber no solo individualizado y enlistado los hechos y pretensiones de la

demanda, sino, por cuanto suprimió de los mismos la alusión a pruebas y, razones y fundamentos de derecho que erróneamente hizo, sin que la sola circunstancia de haberse dejado algunos de estos con organización distinta, esto es, en una tabla formada por filas y columnas, constituya causa legal de rechazo, a más porque debe tenerse en cuenta que tal aspecto se efectuó con el fin de dar una mejor comprensión del libelo introductorio, haciendo una exposición de sus pretensiones, presentándose debidamente ordenadas y clasificadas, aunque no continúe siendo el libelo demandatorio un modelo a seguir.

Considera la Sala, entonces, que el rechazo de la demanda carece de fundamento legal, que de aceptarse conlleva a sacrificar de manera injustificada el derecho sustancial sobre el formal, en la medida que si bien, la forma en cómo se estructuró por la apoderada de la parte actora no es paradigma a seguir o que se haga gala de la mejor técnica, tal situación no conlleva a que se tenga que sacrificar el derecho sustancial de la apelante, y negarle el acceso a la administración de justicia, pues en estos eventos, le compete al juez desentrañar de manera consecuente y lógica qué es lo pretendido por la promotora del juicio para así misma, resolver cada una de las pretensiones formuladas en la sentencia, sin que se evidencie que el juzgador se encuentra en: *"imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora"* o que se *"imposibilite definitivamente su entendimiento"*. (Rad. No. 22923 del 14 de febrero de 2005 y Rad. No. 39819 del 14 de febrero de 2012)

Así las cosas, no podría esta Corporación consentir lo decidido por el A quo, razón por la cual, y cumplidos como se encuentran los requisitos de forma, se revocará el auto impugnado, para en su lugar ordenar que admita la demanda. Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto recurrido y, en su lugar, se ordena al *a quo* disponer la admisión de la demanda.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La presente providencia se notifica a las partes en estados,

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

PROCESO ORDINARIO DE ANA CRISTINA PÉREZ CONTRERAS CONTRA COLPENSIONES Y OTRAS

RAD: 12-2021-00341-01

Bogotá D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

AUTO

De conformidad con el artículo 286 del CGP, toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético es corregible por el Juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, lo cual igualmente se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

Conforme a lo anterior y observando la providencia calendada 30 de noviembre de 2022, en efecto por error mecanográfico se indicó en la parte resolutiva de la sentencia que las costas procesales estarían a cargo de "AFP Protección S.A., Colfondos S.A. y Colpensiones", cuando debió decirse que correspondían a Colpensiones y AFP Porvenir S.A., por no haber prosperado los recursos de apelación que formularon. Por consiguiente, se impone la corrección de la providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: CORREGIR la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2022, en la que se indica:

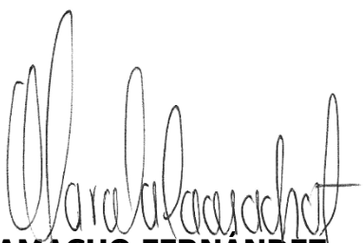
"**SEGUNDO: CONDENAR** en **COSTAS** en esta instancia a favor de la demandante y a cargo de AFP Protección S.A., Colfondos S.A. y Colpensiones. Las de primera se confirman."

Corríjase por:

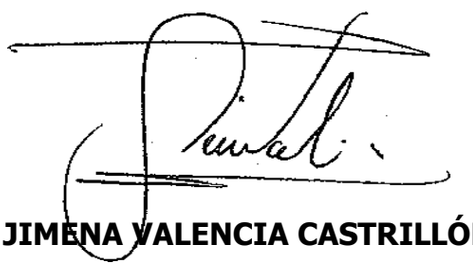
"**SEGUNDO: CONDENAR** en **COSTAS** en esta instancia a favor de la demandante y a cargo de Colpensiones y AFP Porvenir S.A. Las de primera se confirman."

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

-Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y Decreto 417 de 2020-

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA**
Clase de Proceso	ORDINARIO – Apelación Auto.
Radicación No.	11001310500320210048 6-01
Demandante:	**CARLOS ALBERTO DE LA ROSA BERMÚDEZ.**
Demandado:	**ADRES.**

Bogotá D.C., Primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Estando en la oportunidad procesal pertinente para admitir el recurso de apelación encuentra esta Corporación que carece de competencia funcional para conocer de la apelación interpuesta.

Lo anterior, puesto que el artículo 65 del C. P. del T. y de la S.S., si bien dispone que es apelable el auto "*que rechace la demanda"*, también es cierto que se debe entender esa impugnabilidad dentro del contexto del artículo 139 del C.G.P. que establece que *"Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación.* ***Estas decisiones no admiten recurso."*** (Negrillas fuera del texto original).

En ese orden de ideas, siempre que el juez se declare incompetente deberá remitir el proceso al que considere competente, sin que contra esa decisión proceda el recurso de apelación. Es por ello que el inciso 2º del artículo 90 del C.G.P. al disponer el control previo que debe hacer el juez frente a los requisitos formales para la admisión de la demanda, establece el siguiente mandato*: "El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose."*, por tanto, constituye un imperativo remitir el proceso a quien se consideraba competente, sin que sea dado controvertir a las partes tal decisión mediante la interposición de recursos.

En igual sentido, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de enero de 2013, Rad. 11001-22-03-000-2012-01383-02, señaló que las anteriores disposiciones tienen su razón de ser porque de llegar a admitirse la procedencia de la apelación contra el auto que declara la falta de competencia, se estaría obligando al superior a dirimir un conflicto de competencia que debe ser planteado por el juez a quien se envía la actuación y se niega a conocer del proceso; y al tiempo se estaría invadiendo la órbita de acción del órgano a quien la Ley 270 de 1996 le asigna la facultad para desatar el conflicto.

De igual forma, en la sentencia T- 685 del 2013 se indica que frente al auto que declara falta de jurisdicción no procede recurso alguno.

> *"Contra el auto que decide la falta de jurisdicción no es procedente recurso judicial alguno. En primer lugar, porque así lo mandan las normas que regulan el conflicto de competencia por falta de competencia, aplicables analógicamente a este supuesto, y en segundo lugar, porque se estaría atribuyendo a un juez de segunda instancia una competencia que no tiene, cual es, la de definir la jurisdicción competente para el conocimiento de un determinado asunto. Así, se ha de ver que en el ordenamiento procesal civil, aplicable al proceso laboral por remisión del artículo 145, existe norma especial que regula la adopción de la decisión de falta de competencia y la cual impone que ante esta situación se debe remitir el expediente al funcionario competente (artículo 85) y excluye de manera específica la procedencia del recurso de apelación (numeral 8° del artículo 99 y artículo 148).*
>
> *Así, concluye esta Sala que contra el auto proferido por el juez de instancia que definió la ausencia de competencia por falta de jurisdicción no procedía recurso de apelación, sino que la actuación a seguir era la remisión del proceso al funcionario judicial que se considera competente, esto es, al juez contencioso administrativo y es ante este funcionario, en donde el demandante podrá exponer sus razones con respecto a quien considera debe ser el juez que debe conocer de sus pretensiones".*

Por lo anteriormente expuesto, el auto que declara la falta de jurisdicción o competencia no es una decisión susceptible de recurso de apelación, y por lo tanto se hace necesario INADMITIR el recurso de alzada, y se ORDENARÁ su devolución al juzgado de origen, con el fin de que sean remitidas por parte del *A quo* las diligencias al juez que considere competente; tesis que en suma ha sido avalada por

la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, tal y como se puede desprender de la sentencia CSJ STL12387-2015.

En mérito de lo expuesto la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.,

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el auto proferido el 17 de febrero de 2023, mediante el cual se concedió el recurso de apelación.

SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en contra del auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá del 12 de mayo de 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

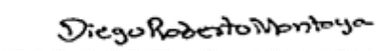
TERCERO: En firme esta providencia remítanse las presentes diligencias al Juzgado de origen, a fin de que remita las diligencias al juez que considere competente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

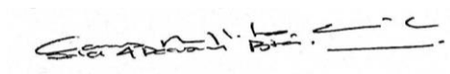
Los Magistrados,



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA**
Clase de Proceso	ORDINARIO – Apelación Sentencia.
Radicación No.	11001310501420150006l-01
Demandante:	**E.P.S. SANITAS**
Demandado:	**ADRES.**

Bogotá D.C., Primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Sería el momento procesal oportuno resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, sino fuera porque advierte esta Sala de Decisión que carece de competencia para dirimir el asunto puesto a su consideración.

Lo anterior, por cuanto las pretensiones están encaminada a que la ADRES, pague la suma de $52'854.240 por concepto de los gastos en que incurrió por diversos procedimientos que suministró a sus usuarios, que estaban por fuera del POS y que fueron autorizados por Comité Técnico Científico, junto con los gastos administrativos, e intereses moratorios (fls. 2 a 59 del archivo 02).

Al respecto, es menester recordar que en fallo proferido por la H. Corte Suprema de Justicia en Sala Plena el 23 de marzo del 2017, Exp. 11001023000020160017800, reiterado el 25 de mayo del mismo año, Exp. 11001023000020160026000, se señaló en lo atinente al recobro de servicios médicos, que su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral:

> "(…) Hasta la presente fecha, en asuntos similares la Corporación atribuyó la competencia de « [l]a ejecución de obligaciones emanadas (…) del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad», a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, a partir del artículo 2º, numeral 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibídem.
>
> (…) Sin embargo, un nuevo análisis de la situación que plantea el conflicto que ahora reclama la atención de la Corte, hace necesario recoger dicha tesis y, en lo sucesivo, adjudicar el conocimiento de demandas ejecutivas como la que originó este debate, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen.

(…) Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:

(…) Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

(…). Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.

Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre (…) y (…), la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil".

En igual sentido, en providencia del 12 de abril de 2018, APL1531-2018, Exp. 11001023000020170020 0-01, la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia, en un caso de similares características determinó que en razón de lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 347 de 2013, así como en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, los litigios surgidos con ocasión de la devolución, rechazo o glosas de las facturas o cuentas de cobro por servicios, insumos o medicamentos del servicio de salud NO incluidos en el Plan obligatorio de Salud –NO POS-, deben zanjarse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por expresa competencia de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, lo señaló en los siguientes términos:

"El Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud -Fosyga-, de conformidad con el artículo 218 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 1283 de 1996, es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y de la Protección Social manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica, ni planta de personal propia, cuyos recursos se destinan a la inversión social en salud.

Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión de «glosar, devolver o rechazar» las solicitudes de recobro por servicios, medicamentos o tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –NO POS-, en la medida que el Fosyga la asume en nombre y representación del Estado, constituye acto administrativo, particular y concreto, cuya controversia ha de zanjarse en el marco de la competencia general de la jurisdicción de lo contencioso administrativa prevista en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011[1].

Refuerza el argumento precedente lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007[2] y en el artículo 11 de la Ley 1608 de 2013[3]. De conformidad con tales preceptos, la Superintendencia de Salud puede conocer, a prevención, como juez administrativo, de los litigios atinentes a los recobros referidos; en este evento es aplicable el medio de control de reparación directa; frente a este último se enfatiza sobre el cumplimiento del presupuesto de la acción atinente a que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 164 del CPACA). Las normas en comento expresamente prescriben lo siguiente:

Art. 41 Ley 1122 de 2007. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos:

(…) **f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud**

Art. 11 de la Ley 1608 de 2013. Las EPS del Régimen Subsidiado que adeuden a las Entidades Territoriales recursos derivados de la liquidación de contratos del régimen subsidiado de salud, deberán reintegrarlos a la Entidad Territorial en un plazo máximo de 60 días calendario siguientes a la vigencia de la presente Ley. De no reintegrarse en este término se podrán practicar descuentos de los giros que a cualquier título realice el Fosyga.

Los prestadores de servicios de salud y los distintos pagadores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tendrán la obligación de efectuar depuraciones permanentes a la información de los Estados Financieros, de tal forma que se vean reflejados, los pagos y anticipos al recibo de los mismos.

Cuando la red de un mismo departamento reporte mora superior a 90 días en los pagos de las EPS, se podrá autorizar giro directo a los prestadores adicional al autorizado por la EPS. Para la aplicación de esta norma el Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento.
En el caso de los recobros y reclamaciones que se realizan al Fosyga cuya glosa de carácter administrativo hubiese sido notificada con anterioridad a la expedición de la presente Ley, y sobre los cuales no haya operado el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa correspondiente, solo se exigirán para su reconocimiento y pago los requisitos esenciales que demuestren la existencia de la respectiva obligación. Las entidades recobrantes deberán autorizar el giro directo del valor total que se llegue a aprobar a favor de las Instituciones Prestadoras de Salud habilitadas. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá permitir que los documentos de

[1] *La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales,* ***de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucrados las entidades públicas****, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (*Negrilla fuera de texto)
[2] *Literal adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47. 957 de 19 de enero de 2011.*
[3] *Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud. Publicado en el Diario Oficial 48661 de enero 2 de 2013*

soporte de los cobros o reclamaciones ante el Fosyga sean presentados a través de imágenes digitalizadas o de la tecnología que para tal efecto defina dicha entidad.

Este último inciso fue reglamentado por el Decreto 347 de 2013, en los siguientes términos:

(…). **Artículo 7°. Procedencia del reconocimiento y pago de los recobros y reclamaciones con glosa de carácter administrativo.** Los recobros o reclamaciones de que trata el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013, en concordancia con el presente decreto, sobre los cuales procederá el reconocimiento y pago, serán aquellos:

1. Que cumplan con los elementos esenciales a que refiere el presente decreto y se acrediten según lo dispuesto en el artículo anterior.

2. Respecto de los cuales las entidades recobrantes o reclamantes hayan sido notificadas de la imposición de la glosa antes de la entrada en vigencia de la Ley 1608 de 2013, esto es, del 2 de enero de 2013.

3. Respecto de los cuales no haya operado el término de caducidad prevista para la acción de reparación directa en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. Tratándose de recobros, que estos no hayan sido glosados por considerar que la tecnología en salud se encontraba incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como causal única.

Artículo 8°. Términos y formatos para la presentación de las solicitudes de recobro y/o reclamación objeto de esta medida. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá los criterios de evaluación de los elementos esenciales, los períodos de radicación que las entidades recobrantes o reclamantes deberán atender, los formatos que deberán diligenciar, así como los términos en que se surtirá el trámite de reconocimiento y pago de los recobros y reclamaciones de que trata el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013

Artículo 164 Ley 1437 de 2011. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;

4. Conclusión

Es claro entonces que los litigios surgidos con ocasión de la devolución, rechazo o glosas de las facturas o cuentas de cobro por servicios, insumos o medicamentos del servicio de salud NO incluidos en el Plan obligatorio de Salud –NO POS-, deben

zanjarse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por expresa competencia de la Ley 1437 de 2011".

Igualmente, la H. Corte Constitucional en providencia A-389 de 2021 se determinó:

" 24. La Sala encuentra, en primer lugar, que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social. Dicho procedimiento se adelanta cuando ya la entidad prestó el servicio (el tratamiento o el suministro del insumo excluido del PBS), en virtud de la orden proferida por un comité técnico científico –en su momento– o por un juez de tutela; es decir, no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación. En este sentido, el recobro busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última lo que pretende es recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se considera obligada por estimar que no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. En ese orden, el recobro no pretende garantizar en forma directa que el servicio o la tecnología en salud efectivamente sean prestados.

No se debe olvidar que los recobros tienen la virtualidad de permitir que los recursos del sistema fluyan adecuadamente y que, de esta forma, tienen repercusiones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud[49]. Sin embargo, esta relación es meramente indirecta y condicional (circunstancial), pues materialmente el procedimiento de recobro constituye una controversia económica, no de salud en estricto sentido, que formula la EPS ante el Estado por haber asumido obligaciones que considera ajenas a lo que estaba legal y reglamentariamente obligada a cumplir.

25. En segundo lugar, las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud vinculan, en principio, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este tipo de controversias, en consecuencia, no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores.

26. La ADRES es una entidad con una naturaleza jurídica específica. El legislador, mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015[50], con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creó la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ADRES, como una entidad de naturaleza especial del sector descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado, con lo que adquiere la categoría de entidad pública. Adicionalmente, dispuso que la ADRES hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, y estará encargada de administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, y los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)[51].

Entre sus funciones se encuentran: "c) Efectuar el reconocimiento y pago de las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en salud"; "d) Realizar los pagos, efectuar giros directos, a los prestadores de servicios

de salud y proveedores de tecnologías en salud, de acuerdo con lo autorizado por el beneficiario de los recursos y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del Sistema, que en todo caso optimice el flujo de recursos", y "e) Adelantar las verificaciones para el reconocimiento y pago por los distintos conceptos, que promueva la eficiencia en la gestión de los recursos" (art. 66, Ley 1753 de 2015)[52]. Al respecto, también puede verse el artículo 3 del Decreto 1429 de 2016[53].

27. Es necesario precisar que la ADRES no es una entidad administradora de los planes de beneficios en salud. De acuerdo con el artículo 121.1 de la Ley 1438 de 2011[54] se entiende por administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPBS): "Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Empresas Solidarias, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las actividades de salud que realizan las aseguradoras, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las administradoras de riesgos profesionales en sus actividades de salud. Las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud […]"[55].

28. Por otra parte, la ADRES tampoco es una entidad prestadora –no es EPS ni IPS–. En efecto, el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 determina que las Entidades Promotoras de Salud son las responsables de la afiliación, el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía. Su función primordial es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados[56]. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 185 de la misma ley, las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS), como su nombre lo indica, son aquellas encargadas de prestar directamente los diferentes servicios de salud a los usuarios.

29. Ahora, aunque el artículo 622 del CGP, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS, fue expedido cuando la ADRES aún no se había creado, no puede desconocerse que se trata de una entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que hace parte del mismo.

30. Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS (en la forma como fue modificado por el artículo 622 del CGP) no es aplicable a las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas, que se susciten entre las EPS y la ADRES, en la medida en que, como ya se indicó, no corresponden a litigios que, en estricto sentido, giren en torno a la prestación de servicios de la seguridad social. Además, porque se trata de controversias presentadas únicamente entre entidades administradoras, relativas a la financiación de un servicio que ya se prestó.

31. Así las cosas –descartada la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social–, para efectos de determinar la competencia para el conocimiento de este tipo de controversias, es necesario acudir a la cláusula que trae el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 que indica que "[l]a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las **controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo**, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa" (negrillas fuera de texto).

32. En este punto es necesario precisar que el procedimiento de recobro constituye una garantía a favor de las EPS, con la finalidad de que estas puedan reclamar el

reembolso de los servicios y tecnologías prestados en virtud de una orden judicial en el marco de una acción de tutela, o de una orden proferida por los comités técnicos científicos[57]; siendo que su prestación se ordenó a pesar de que, en principio, no podía ser cubierta por la EPS pues, estas tienen la obligación de "[…] suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5 del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud […]"[58].

33. Mediante la Ley 1608 de 2013[59] el legislador adoptó una serie de medidas tendientes a mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud. Con miras a lograr tal objetivo, en su artículo 11, dispuso que "en el caso de los recobros y reclamaciones que se realizan al Fosyga cuya glosa de carácter administrativo hubiese sido notificada con anterioridad a la expedición de la presente Ley, y sobre los cuales no haya operado el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa correspondiente, solo se exigirán para su reconocimiento y pago los requisitos esenciales que demuestren la existencia de la respectiva obligación". A su turno, este artículo fue reglamentado por el Decreto 347 de 2013[60], el cual, en su artículo 4, enunció los elementos esenciales que debían ser tenidos en cuenta por las entidades recobrantes a fin de demostrar la existencia de la obligación.

34. Posteriormente, una vez creada la ADRES, mediante el Decreto 2265 de 2017[61] se establecieron las condiciones generales de operación de la entidad. Así, en la subsección 1 de la sección 5, se establecieron normas relativas al reconocimiento de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC, entre las que destacan aquellas que definen (i) el término para presentar las solicitudes; (ii) los requisitos para el pago; (iii) el proceso de verificación, control y pago; y, (iv) el término para resolver, reconocer y pagar las solicitudes presentadas.

35. Actualmente, los artículos 35 a 71 de la Resolución 1885 de 2018[62], permiten confirmar que **el recobro es un procedimiento administrativo** que se surte en las etapas de presentación[63], pre radicación, radicación, verificación, pre auditoria, auditoría integral[64] y pago. En el marco de dicho procedimiento o trámite, la ADRES puede adoptar una de las siguientes decisiones: (i) aprobar totalmente los ítems del recobro, (ii) aprobar con reliquidación o (iii) aprobar parcialmente (art. 53, Resolución 1885 de 2018).

La determinación adoptada en virtud del trámite se recogerá en una comunicación que contiene, entre otros datos: a) la fecha de expedición, b) el resumen de la información de cantidad y valor de recobros, c) las causales de glosa (si hubo lugar a ello), d) el resultado de la auditoría integral, e) la relación de los ítems aprobados parcialmente y e) las causales de no aprobación, cuando fuere el caso (art. 55, Resolución 1885 de 2018). Contra la decisión de la entidad es posible presentar una objeción dentro de los dos meses siguientes al recibo de la comunicación, precisando las razones de la inconformidad por cada uno de los ítems del recobro (art. 56, Resolución 1885 de 2018). En el término indicado, igualmente se podrán enmendar las glosas aplicadas.

Finalmente, la ADRES dará respuesta al mecanismo de objeción o subsanación dentro de los dos meses siguientes a la radicación del documento y el pronunciamiento que efectúe será definitivo (art. 59, Resolución 1885 de 2018).

36. La normativa descrita permite concluir que **el recobro no es una simple presentación de facturas, sino que constituye un verdadero trámite administrativo** que busca garantizar el propósito de la ADRES consistente en administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad.

37. Adicionalmente, es posible considerar que, en el trámite descrito para la presentación, verificación y pago de las solicitudes de recobro, la ADRES profiere actos administrativos que logran consolidar o negar la existencia de la obligación.

Siendo el acto administrativo una declaración de voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos[65], al proferir la comunicación referida (supra 36), la entidad crea una situación jurídica concreta para la EPS, en el sentido de aceptar o rechazar el pago de los servicios y tecnologías en salud que dispensó y que no hacían parte del PBS. Dicha declaración de voluntad de la ADRES, pese a que no tiene la denominación formal de resolución o decreto, materialmente presenta las características de un acto administrativo, pues produce efectos jurídicos, en la medida en que : (i) es expedida por la autoridad competente; (ii) cuenta con una motivación respecto a la información de cantidad y valor de los recobros, las causales de la glosa, el resultado de la auditoría integral, la relación de los ítems aprobados parcialmente y las causales de no aprobación; (iii) respeta el principio de publicidad pues debe ser puesto en conocimiento de la EPS autorizada, a través de una notificación, y (iv) puede ser impugnada a través del trámite de objeción. Aunque la objeción tiene un término especial para su presentación (dos meses), ello no excluye necesariamente la posibilidad de entender la comunicación como un acto administrativo[66].

38. En ese orden, vale la pena anotar que en Sentencia del 3 de abril de 2020[67], la Sección Tercera del Consejo de Estado destacó que el procedimiento de recobro persigue un fin legítimo amparado en la Constitución, esto es, la defensa del patrimonio público, el cual se logra "**mediante la adopción de procedimientos administrativos que permitan verificar que los cobros con cargo al Fosyga** [hoy a la Adres], **correspondan a verdaderas deudas de la administración**" (negrillas fuera de texto). Así las cosas, el procedimiento de recobro, señaló el alto tribunal, se caracteriza por ser un procedimiento administrativo reglamentado que involucra la presentación de las respectivas facturas, de suerte que, con posterioridad a su radicación, la administración realice la respectiva verificación en un plazo razonable; verificación que consiste en una revisión jurídica, médica, administrativa y financiera de los soportes.

39. Todo lo anterior demuestra que la ADRES no solamente se rige por normas de derecho público, sino que la decisión de reconocer o no el pago de obligaciones por concepto de prestación de servicios y tecnologías en salud subyace a un conjunto de actuaciones administrativas regladas. Esto último no es gratuito. La creación de la Administradora de los Recursos del SGSSS, como se expuso en líneas anteriores (supra 27), tuvo como orientación primordial que el Estado jugara un papel más protagónico en la gestión y veeduría de los recursos, de suerte que se pudiera lograr el saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

40. Así las cosas, como quiera que los procedimientos de recobro son la expresión de actuaciones administrativas regladas en cabeza de una entidad pública, es razonable que su control deba estar a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa, especialmente si se tiene en cuenta que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 dispone expresamente que dicha jurisdicción "está instituida para conocer […] de **las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo**, en los que estén involucradas las entidades públicas" (negrillas fuera de texto).

Planteamiento que se refuerza en el hecho de que, por medio de la demanda, también se busca el pago de perjuicios y las reparaciones de daños causados por el hecho y la omisión de una entidad pública, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante (supra 1).

41. Cabe concluir, con fundamento en las anteriores consideraciones, que las controversias relativas a los recobros efectuados por las EPS son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo".

Así las cosas, es claro que el presente proceso le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quien mediante auto del 08 de julio de 2014 declaró su falta de competencia a través del Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá- Sección Tercera, sin que se haya surtido ningún tipo de conflicto de competencia hasta la fecha (fls. 513 a 516 del archivo 01).

Por todo lo anterior, y en razón a que no es dable asumir competencia en el proceso puesto a consideración, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE:

PRIMERO: **DECLARAR** que se carece de competencia para dirimir la controversia puesta en consideración por E.P.S. SANITAS en el proceso que adelanta contra la ADRES.

SEGUNDO: **DECLARAR** la nulidad de la sentencia adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá el 19 de septiembre de 2021.

TERCERO: **PROPONER CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA** con el Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá- Sección Tercera. En consecuencia, **REMÍTASE** por Secretaría las presentes diligencias a la H. Corte Constitucional para que dirima el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

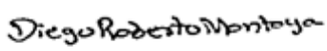
CUARTO: Por Secretaría remítase copia de la presente providencia al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

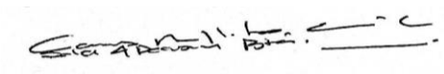
Los Magistrados,



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA.**
Clase de Proceso	Ordinario –Termina proceso por transacción.
Radicación No.	11001310501920180034 2-02
Demandante:	**OMAR SANCHEZ BERNAL.**
Demandado:	**OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA.**

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria el 21 de junio de 2022, frente a la que, los apoderados de la partes interpusieron recurso de apelación.

El expediente arribó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral, el 02 de septiembre de 2022, siendo admitido el recurso de apelación el 03 de noviembre de 2022; no obstante, el 19 de enero de 2023 se allegó por parte del apoderado de la parte actora memorial de **SOLICITUD DE TERMINACION DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN**. Sobre el tópico, el artículo 312 del C.G.P. establece:

> *"**Artículo 312. Tramite: En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis.** También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.*
>
> *Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud **podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción**; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.*
>
> ***El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia**. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuarán respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo.*

Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa.

Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas señalará fecha y hora para audiencia". (Negrillas por la Sala).

De conformidad con la norma trasunta, y como quiera que se encuentra que la transacción presentada por el apoderado de la parte actora se ajusta a la normatividad legal que rige la materia y que está en concordancia con la totalidad de las pretensiones debatidas en el transcurso del proceso, pues con esta no se vulneran derechos ciertos e indiscutibles; se dispondrá la aceptación de la transacción realizada por las partes, y en consecuencia por sustracción de materia la Sala se abstendrá de conocer sobre los recursos de apelación interpuestos por las partes en litigio.

No se impondrán costas por considerarse que no se causaron.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,**

RESUELVE:

PRIMERO. – **DECLARAR TERMINADO EL PROCESO POR TRANSACCIÓN,** en consideración al memorial allegado por el apoderado de la parte actora **OMAR SÁNCHEZ BERNAL** el 19 de enero de 2023. En consecuencia, la Sala se abstiene de conocer el recurso de apelación impetrado.

SEGUNDO. – **Sin costas** por considerarse que no se han causado.

TERCERO. – En firme la anterior decisión, devuélvase el expediente al Juzgado de Origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA.**
Clase de Proceso	ORDINARIO –Apelación sentencia
Radicación No.	11001-31-05-022-2015-00861-01
Demandante:	**MARÍA DEL CARMEN MORENO MARTÍNEZ.**
Demandado:	**P.A.R. I.S.S. Y OTROS.**

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

El 14 de octubre de 2020, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá profirió **sentencia condenatoria** dentro del proceso de la referencia, interponiéndose recurso de apelación por parte del apoderado de la demandante.

Sería entonces la oportunidad de proferir la sentencia que en derecho corresponda, sino fuera porque se observa que esta Sala carece de competencia para su conocimiento; motivo por el que debe ser remitido de manera inmediata al juez competente previa la declaratoria de nulidad de la sentencia, en los términos del artículo 138 del C.G.P., norma que dispone:

> *"**Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada***
>
> *Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso **se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.***
>
> *La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.*
>
> *El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse".*

Lo dicho, por cuanto revisado el contenido de la demanda, se observa que se pretende se declare la existencia de un vínculo laboral con la entidad pública **P.A.R. I.S.S.** y como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de todas las prestaciones legales, así como sanción moratoria, devolución del importe total de descuentos

efectuados por concepto de retención de la fuente, devolución de valor de los aportes y cotizaciones patronales en pensión y salud, así como las diferencias salariales existentes.

Todo lo anterior lo fundamenta en que entre el PAR I.S.S. y la accionante se suscribieron sendos contratos de prestación de servicios desde el 13 de noviembre de 2007, y que la demandante ejecutó sus servicios de manera personal en las instalaciones del PAR I.S.S., acatando reglamentos, cumpliendo horario, recibiendo órdenes, usando equipos, herramientas y elementos de trabajo, y efectuando funciones propias de trabajadores de planta de la entidad de manera ininterrumpida; por lo que, aspira se de aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

Así las cosas, es claro que el demandante pretende se declare la existencia de una vinculación laboral derivada de su calidad de servidor público, y en consecuencia quien debe conocer el asunto es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues según lo definió la H. Corte Constitucional escapan de la órbita de la competencia residual contenida en el artículo 2 numeral 5 del C.P.T. y de la S.S, los casos en los que se discute *"la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado"*, controversia que debe ser zanjada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la luz del artículo 104 numeral 2 del C.P.A.C.A., pues en dichos contratos es parte una entidad pública (CC A461-2021 y CC A492- 2021).

En la providencia CC A-492 de 2021, la referida Corporación determinó:

> *"En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la* ***Sala Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales y a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos.*** *En efecto,* ***cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral y no se discute que había una relación de subordinación entre la entidad pública y el trabajador o empleado, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer de estos asuntos con base en las***

funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador (criterio funcional) y la entidad a la cual se encontraba vinculado (criterio orgánico), *para establecer si se trata de un trabajador oficial, que puede ejercitar la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, o de un empleado público, caso en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe definir el asunto.*

Sin embargo, ***esta regla no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado*** *pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente,* ***la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso****.*

(vi) Examinar, aun preliminarmente, las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado para definir la competencia, constituye un examen de fondo de la controversia. Adicionalmente, la Sala considera que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado a través de vínculos contractuales simulados correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público implica realizar un examen de fondo del asunto. Esta labor no le corresponde al juez encargado de definir la jurisdicción competente, pues esto conduce a pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral que es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. ***En todo caso, este tipo de asuntos solo pueden ser decididos por el juez contencioso administrativo que es el facultado para evaluar las actuaciones de la Administración.***

En este sentido, la evaluación preliminar de la calidad del demandante como trabajador oficial o empleado público supone que la jurisdicción competente para resolver el litigio se encuentra en debate durante toda la controversia. En efecto, si el factor que define la jurisdicción es el tipo de vinculación que materialmente desempeñaba el servidor, es claro que dicha condición solo puede determinarse con certeza en la sentencia[68]. En contraste, ***la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cual se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa****.*

Ahora bien, en el caso concreto, si en gracia de discusión se "revisara preliminarmente" la posible asimilación de las labores desempeñadas por el demandante para intentar ubicarlas en las que corresponden a un empleado público o a un trabajador oficial, se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos, con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación. ***De hecho, en casos en los que se ha pretendido acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de acreencias laborales que corresponden a entes territoriales por personas que prestan servicios de vigilancia y celaduría, las autoridades de la especialidad laboral han absuelto a las entidades accionadas****, en la medida en que no se logra probar la calidad de trabajadores oficiales de los demandantes pues dichas labores no tienen relación directa con "la construcción y el sostenimiento de obras públicas"[69].*

(vii) ***De conformidad con lo expuesto, la Corte aplicará la cláusula especial de competencia derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se reclama la***

existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios*. De este modo, se concluye que los asuntos en los que no cabe duda acerca de la existencia de una relación de trabajo se diferencian notoriamente del tipo de controversias en las que se debate la existencia de dicho vínculo. Es decir, aquellas que tienen por objeto definir si el servidor público fungió como trabajador oficial o empleado público, como la que en esta oportunidad estudia la Sala. Lo anterior, dado que:*

a) En sentido estricto, lo que se discute es la validez del acto administrativo mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y acreencias laborales de los servidores públicos de planta.

b) El fundamento de las pretensiones se estructura en un contrato de prestación de servicios estatal.

*c) **Únicamente el juez contencioso administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados", en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.***

d) El objeto mismo del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública.
*(viii) Por consiguiente, **la Sala remitirá el expediente al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto**, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.*

*Regla de decisión. La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, **la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".***

Así las cosas, observa la Sala que conforme criterio de la H. Corte Constitucional cuando se discute la existencia o el reconocimiento de un vínculo laboral y el consecuente pago de acreencias laborales, es necesario determinar si el contrato que unió al demandante con la entidad pública tiene una naturaleza distinta al que se suscribió y es de tipo laboral, función que únicamente puede adelantar el juez de lo contencioso administrativo, quien además es el llamado a determinar si la labor contratada podía o no cumplirse con personal de planta, o si requería de conocimientos especializados.

Nótese además que la H. Corte Constitucional concluyó que una evaluación preliminar para determinar si las funciones desempeñadas por el demandante en este

tipo de procesos se ajustan o no a las de un empleado público, conllevaría a desatar la controversia de fondo antes de tramitar el proceso, con lo cual *"se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia (…), con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación"*, como ha ocurrido en casos sometidos a la jurisdicción ordinaria en los que se absuelven las entidades públicas por no encontrar probada la calidad de trabajadores oficiales en los demandantes, como ocurre en el presente asunto.

En consecuencia, en aras de garantizar el derecho al debido proceso, particularmente el derecho a ser juzgado por el funcionario judicial a quien el ordenamiento jurídico previamente le ha atribuido competencia -juez natural-, materializar el principio a la igualdad, de conformidad con lo reglado en los artículos 16 y 138 del C.G.P., se **DECRETARÁ LA NULIDAD** de lo actuado desde la sentencia proferida por la Juez Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, el 14 de octubre de 2020, y se dispondrá la remisión del expediente al reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá, para lo de su cargo, advirtiendo que las pruebas oportunamente decretadas y practicadas conservan su validez.

En consideración de lo brevemente expuesto la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.,

R E S U E L V E:

PRIMERO: **DECLARAR** la falta de jurisdicción y competencia de este Tribunal para conocer la demanda presentada por MARÍA DEL CARMEN MORENO MARTÍNEZ contra el P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACIÓN y FIDUAGRARIA S.A., conforme las consideraciones que preceden.

SEGUNDO: **DECLARAR LA NULIDAD** de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida por la Juez Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá el 14 de octubre de 2020, inclusive.

TERCERO:

REMÍTASE por Secretaría las presentes diligencias a reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá para lo de su cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA**
Clase de Proceso	Ordinario – Apelación Auto
Radicación No.	11001310502920100084 7-02
Demandante:	**SARA MANCERA BARRERA.**
Demandado:	**HACIENDA SANTA ANA S.A Y OTRO.**

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Sería del caso adentrarse en el estudio de los argumentos del recurso de apelación elevado por el apoderado de la parte demandada HACIENDA SANTA ANA S A, frente al auto de conciliación proferido por el juzgado de primera instancia, sino fuera porque el auto objeto de impugnación no se encuentra enlistado en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.

En efecto, la juez de primera instancia, en audiencia virtual del 16 de noviembre de 2022, lleva a cabo AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN aprobando parcialmente esta en lo referente a salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos por trabajo suplementario y nocturno, viáticos, comisiones e indemnizaciones, y en consecuencia, DISPUSO la continuación del proceso respecto de la declaratoria del contrato de trabajo y el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones. (archivo 28)

Respecto de la anterior decisión, el apoderado de HACIENDA SANTA ANA S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación, no obstante, no se accedió a la reposición, y se concedió el correspondiente recurso de apelación.

Pues bien, el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., norma aplicable al caso indica lo siguiente:

> ***"ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION.*** *<Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:*
> *1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.*
> *2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.*
> *3. El que decida sobre excepciones previas.*
> *4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.*

5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.
6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.
12. Los demás que señale la ley."

Teniendo en cuenta la norma en cita, es claro que el recurso impetrado por HACIENDA SANTA ANA S.A. contra la decisión de continuar el proceso por parte de la A Quo, no se encuentra enlistada en el artículo 65 del C.P.T y de la S.S, como un asunto o decisión susceptible de apelación, por lo que, no hay lugar a asumir su conocimiento.

Así las cosas, se impone **DECLARAR INADMISIBLE** el recurso de apelación interpuesto por no estar previsto como apelable en el artículo 65 del C.P.T y de la S.S.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,**

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de HACIENDA SANTA ANA S.A. contra el auto del 16 de noviembre de 2022, dictado por la Juez Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con el artículo 65 del C.P.T y de la S.S.

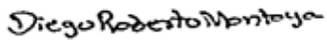
SEGUNDO. - En firme la presente providencia, remítase de forma inmediata y perentoria el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

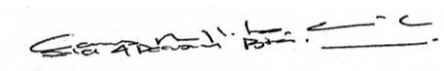
Los Magistrados,



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA.**
Clase de Proceso	Ordinario –Desistimiento.
Radicación No.	11001310503220200039 5-01
Demandante:	**JULIAN FELIPE OLIVERA RODRÍGUEZ.**
Demandado:	**CONSORCIO ZC Y OTROS.**

Bogotá D.C, primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

El 23 de junio de 2022, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá profirió **sentencia condenatoria** dentro del proceso de la referencia**, interponiéndose** recurso de apelación por parte del apoderado de la demandante.

Sería entonces la oportunidad de proferir la sentencia que en derecho corresponda, sino fuera porque se observa que el 28 de julio de 2022 se remitió correo electrónico, en el que se encuentra un poder otorgado por el demandante a la Dra. Gloria Janeth Rodríguez Cornelio, así como un desistimiento que esta misma apoderada presentó el 20 de febrero de 2023.

Sobre el tópico, sea lo primero precisar que quien venía actuando como apoderado principal en el presente proceso era el Dr. Diego Mauricio Olivera Rodríguez, no obstante, y de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del C.G.P., esto es, que el poder termina con la radicación del escrito en virtud del cual se revoca o se designa otro apoderado, se tendrá por revocado el poder del aludido apoderado, y se reconocerá personería adjetiva para actuar como apoderada principal del demandante a la Dra. Rodríguez Cornelio.

En cuanto al desistimiento, ciertamente el artículo 316 del C.G.P. establece:

> *"**Artículo 316. Desistimiento de ciertos actos procesales:** Las partes podrán **desistir de los recursos interpuestos** y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.*
>
> *El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias*

para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario".

Así las cosas, y dado que el desistimiento presentado por la apoderada del demandante se ajusta a la normatividad legal que rige la materia, se dispondrá la aceptación del mismo.

No se impondrán costas al demandante por considerarse que no se causaron.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,**

RESUELVE:

PRIMERO. – TÉNGASE POR REVOCADO EL PODER otorgado al Doctor Diego Mauricio Olivera Rodríguez identificado con C.C. 1.010.182.137 de Bogotá D.C. con T.P. 222.155 del C.S. de la J. En consecuencia, se **RECONOCE PERSONERÍA ADJETIVA** a la Doctora Gloria Janeth Rodríguez Cornelio, identificada con C.C. 51.740.298 y T.P. No. 85335 del C.S. de la J., como apoderada judicial del demandante, Julián Felipe Olivera Rodríguez, en los términos y para los fines indicados en el poder allegado.

SEGUNDO. – ACEPTAR EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la apoderada del demandante Julián Felipe Olivera Rodríguez.

TERCERO. – Sin costas por considerarse que no se han causado.

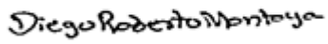
CUARTO. – En firme la anterior decisión, devuélvase el expediente al Juzgado de Origen para que continúen con el trámite de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

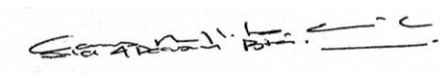
Los Magistrados,



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C.

SALA LABORAL

Magistrada Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA.**
Clase de Proceso	Ordinario –Apelación auto.
Radicación No.	11001310502018005 67-02
Demandante:	**JUAN CARLOS JIMÉNEZ GIRALDO.**
Demandado:	**EMPLOYMENT SOLUTIONS S. A. S. Y OTRO**

Bogotá D.C, primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Este despacho judicial, mediante el proveído de fecha 12 de enero de 2023, admitió la apelación de una providencia judicial, so pretexto de "reunir los requisitos de ley".

Ahora bien, con gran extrañeza, esta magistrada titular, al momento proyectar la decisión para resolver el medio de impugnación propuesto, no logró ubicar en el expediente digital, aquella providencia con respecto a la cual debe surtirse este último.

Por tal razón, se ordenará a la Secretaría de esta Sala, para que por su conducto se oficie al Juzgado de primera instancia, en la búsqueda de que remita copia integral del expediente, en el cual se incluya el auto de cuya ausencia se duele este estrado judicial.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,**

RESUELVE:

PRIMERO. – OFICIAR, al **JUZGADO 28 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**, para efectos de que remita a esta Sala, copia digital íntegra del proceso de la referencia, atiéndase las razones expuestas en el cuerpo de esta determinación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA LABORAL

Magistrado Ponente:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA.**
Clase de Proceso:	ORDINARIO LABORAL - Apelación auto.
Radicación No.:	11001-31-05-003-2021-00262-01
Demandante:	**DIANA MILENA SAGUÑA TRIVIÑO Y OTRO.**
Demandado:	**ADRES.**

Bogotá D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Estando en la oportunidad procesal pertinente para admitir el recurso de apelación encuentra esta Corporación que carece de competencia funcional para conocer de la apelación interpuesta.

Lo anterior, puesto que el artículo 65 del C. P. del T. y de la S.S., si bien dispone que es apelable el auto "*que rechace la demanda*", también es cierto que se debe entender esa impugnabilidad dentro del contexto del artículo 139 del C.G.P. que establece que *"Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación.* ***Estas decisiones no admiten recurso."*** (Negrillas fuera del texto original).

En ese orden de ideas, siempre que el juez se declare incompetente deberá remitir el proceso al que considere competente, sin que contra esa decisión proceda el recurso de apelación. Es por ello que el inciso 2º del artículo 90 del C.G.P. al disponer el control previo que debe hacer el juez frente a los requisitos formales para la admisión de la demanda, establece el siguiente mandato*: "El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose."*, por tanto, constituye un imperativo remitir el proceso a quien se consideraba competente, sin que sea dado controvertir a las partes tal decisión mediante la interposición de recursos.

En igual sentido, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de enero de 2013, Rad. 11001-22-03-000-2012-01383-02, señaló que las anteriores disposiciones tienen su razón de ser porque de llegar a admitirse la procedencia de la apelación contra el auto que declara la falta de competencia, se estaría obligando al superior a dirimir un conflicto de competencia que debe ser planteado por el juez a quien se envía la actuación y se niega a conocer del proceso; y al tiempo se estaría invadiendo la órbita de acción del órgano a quien la Ley 270 de 1996, le asigna la facultad para desatar el conflicto.

De igual forma, en la sentencia CC T- 685 del 2013 se indica que frente al auto que declara falta de jurisdicción no procede recurso alguno.

> *"Contra el auto que decide la falta de jurisdicción no es procedente recurso judicial alguno. En primer lugar, porque así lo mandan las normas que regulan el conflicto de competencia por falta de competencia, aplicables analógicamente a este supuesto, y en segundo lugar, porque se estaría atribuyendo a un juez de segunda instancia una competencia que no tiene, cual es, la de definir la jurisdicción competente para el conocimiento de un determinado asunto. Así, se ha de ver que en el ordenamiento procesal civil, aplicable al proceso laboral por remisión del artículo 145, existe norma especial que regula la adopción de la decisión de falta de competencia y la cual impone que ante esta situación se debe remitir el expediente al funcionario competente (artículo 85) y excluye de manera específica la procedencia del recurso de apelación (numeral 8° del artículo 99 y artículo 148).*
>
> *Así, concluye esta Sala que contra el auto proferido por el juez de instancia que definió la ausencia de competencia por falta de jurisdicción no procedía recurso de apelación, sino que la actuación a seguir era la remisión del proceso al funcionario judicial que se considera competente, esto es, al juez contencioso administrativo y es ante este funcionario, en donde el demandante podrá exponer sus razones con respecto a quien considera debe ser el juez que debe conocer de sus pretensiones".*

Por lo anteriormente expuesto, el auto que declara la falta de jurisdicción o competencia no es una decisión susceptible de recurso de apelación, y por lo tanto se hace necesario INADMITIR el recurso de alzada, y se ORDENARÁ su devolución al juzgado de origen, con el fin de que sean remitidas por parte del *a quo* las diligencias al juez que considere competente; tesis que en suma ha sido avalada por

la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, tal y como se puede desprender de la sentencia CSJ STL12387-2015.

En mérito de lo expuesto la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.,

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el auto proferido el 15 de noviembre de 2022, mediante el cual se concedió el recurso de apelación.

SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en contra del auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, del 10 de mayo de 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: En firme esta providencia remítanse las presentes diligencias al Juzgado de origen, a fin de que remita las diligencias al juez que considere competente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

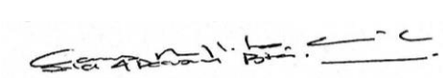
Los Magistrados,



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA LABORAL

Magistrada:	**RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA.**
Clase de Proceso	ORDINARIO –Apelación Auto
Radicación No.	11001-31-05-008-2019-00680-01
Demandante:	**JORGE MARIO JARAMILLO CARDONA.**
Demandado:	**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y OTROS.**

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

El 22 de noviembre de 2022, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá profirió **auto sobre las excepciones previas** dentro del proceso de la referencia, interponiéndose recurso de apelación por parte del apoderado de la parte demandada **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** (archivo 12).

Sería entonces la oportunidad de proferir la sentencia en que en derecho correspondiese, sino fuera porque se observa que esta Sala carece de competencia para su conocimiento; motivo por el que debe ser remitido de manera inmediata al juez competente.

Lo dicho, por cuanto revisado el contenido de la demanda, se observa que se pretende la declaratoria de un vínculo laboral entre el **CONSULADO DE COLOMBIA ubicado en LOS ANGELES CALIFORNIA** entre el 01 de enero de 1990 y el 31 de enero de 1992; y como consecuencia de lo anterior, que las demandadas PROCOLOMBIA, BANCOLDEX, FIDUCOLDEX, y la NACIÓN- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CANCILLERÍA reconozcan y paguen las cotizaciones a pensión del periodo correspondientes a su relación laboral, que se liquide el bono pensional teniendo como salario la suma de $1’303.800, y que SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS, tenga dicho valor para el reconocimiento de su pensión de jubilación.

Todo lo anterior lo fundamenta en que el demandante fue nombrado como Agregado Comercial por Decreto 2732 el 24 de noviembre de 1989 en el

CONSULADO DE COLOMBIA EN LOS ANGELES CALIFORNIA por medio de la demandada **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** hasta la fecha de su renuncia, la cual fue aceptada mediante Decreto 386 del 02 de marzo de 1992, en la cual manifiesta que ejecutó sus servicios de manera personal como Agregado Comercial.

Conforme a los antecedentes expuestos, es posible establecer que, el demandante pretende se declare la existencia de un contrato de trabajo derivada de su calidad de servidor público, y como consecuencia de lo anterior que se le reconozcan y paguen las cotizaciones de aportes pensionales correspondientes al periodo en el cual ejerció las funciones de un Agregado Comercial, lo que conlleva a que este Tribunal carezca de competencia para conocer de este proceso, y que quien deba conocer el asunto sea la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; recuérdese que según lo definió la H. Corte Constitucional escapan de la órbita de la competencia residual contenida en el artículo 2 numeral 5 del C.P.T. y de la S.S., las controversias de tipo laboral donde se encuentra inmerso un servidor público, pues en dicho litigio es parte una entidad pública (A461-2021 y A492- 2021).

En la providencia CC A-492-2021, la referida Corporación determinó:

> *"En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la* ***Sala Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales y a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos.*** *En efecto,* ***cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral y no se discute que había una relación de subordinación entre la entidad pública y el trabajador o empleado, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer de estos asuntos con base en las funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador (criterio funcional) y la entidad a la cual se encontraba vinculado (criterio orgánico),*** *para establecer si se trata de un trabajador oficial, que puede ejercitar la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, o de un empleado público, caso en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe definir el asunto.*
>
> *Sin embargo,* ***esta regla no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios***

con el Estado *pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente,* ***la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso****.*

(vi) Examinar, aun preliminarmente, las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado para definir la competencia, constituye un examen de fondo de la controversia. Adicionalmente, la Sala considera que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado a través de vínculos contractuales simulados correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público implica realizar un examen de fondo del asunto. Esta labor no le corresponde al juez encargado de definir la jurisdicción competente, pues esto conduce a pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral que es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. ***En todo caso, este tipo de asuntos solo pueden ser decididos por el juez contencioso administrativo que es el facultado para evaluar las actuaciones de la Administración.***

En este sentido, la evaluación preliminar de la calidad del demandante como trabajador oficial o empleado público supone que la jurisdicción competente para resolver el litigio se encuentra en debate durante toda la controversia. En efecto, si el factor que define la jurisdicción es el tipo de vinculación que materialmente desempeñaba el servidor, es claro que dicha condición solo puede determinarse con certeza en la sentencia[68]. En contraste, ***la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cual se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa****.*

Ahora bien, en el caso concreto, si en gracia de discusión se "revisara preliminarmente" la posible asimilación de las labores desempeñadas por el demandante para intentar ubicarlas en las que corresponden a un empleado público o a un trabajador oficial, se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos, con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación. ***De hecho, en casos en los que se ha pretendido acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de acreencias laborales que corresponden a entes territoriales por personas que prestan servicios de vigilancia y celaduría, las autoridades de la especialidad laboral han absuelto a las entidades accionadas****, en la medida en que no se logra probar la calidad de trabajadores oficiales de los demandantes pues dichas labores no tienen relación directa con "la construcción y el sostenimiento de obras públicas"[69].*

(vii) ***De conformidad con lo expuesto, la Corte aplicará la cláusula especial de competencia derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se reclama la existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios****. De este modo, se concluye que los asuntos en los que no cabe duda acerca de la existencia de una relación de trabajo se diferencian notoriamente del tipo de controversias en las que se debate la existencia de dicho vínculo. Es decir, aquellas que tienen por objeto definir si el servidor público fungió como trabajador oficial o empleado público, como la que en esta oportunidad estudia la Sala. Lo anterior, dado que:*

a) En sentido estricto, lo que se discute es la validez del acto administrativo mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y acreencias laborales de los servidores públicos de planta.

b) El fundamento de las pretensiones se estructura en un contrato de prestación de servicios estatal.

*c) **Únicamente el juez contencioso administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados", en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.***

d) El objeto mismo del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública.
*(viii) Por consiguiente, **la Sala remitirá el expediente al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto**, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.*

*Regla de decisión. La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, **la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado".***

Así las cosas, observa la Sala que conforme criterio de la H. Corte Constitucional cuando se discute la existencia o el reconocimiento de un vínculo laboral y el consecuente pago de alguna acreencia laboral, es necesario determinar el tipo de vinculación que unió al demandante con la entidad pública, función que únicamente puede adelantar el juez de lo contencioso administrativo.

Nótese además que, la H. Corte Constitucional concluyó que una evaluación preliminar para determinar si las funciones desempeñadas por el demandante en este tipo de procesos se ajustan o no a las de un empleado público, conllevaría a desatar la controversia de fondo antes de tramitar el proceso, con lo cual *"se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia (…), con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación"*, como ha ocurrido en casos sometidos a la jurisdicción ordinaria en los que se absuelven las entidades públicas por no encontrar probada la calidad de trabajadores oficiales en los demandantes, como ocurre en el presente asunto.

Lo anterior cobra mayor fuerza, si se tiene en cuenta que según providencia del 28 de julio de 2020, el H. Consejo de Estado- Sección Segunda dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-01939-01(4767-19), se determinó que el cargo de Agregado Comercial es propio de un empleado público, y que en consecuencia, era competencia de lo contencioso administrativo:

> "*Los denominados agregados comerciales son vinculados por el Ministerio de Relaciones Exteriores como empleados públicos de libre nombramiento y remoción. Según los hechos de la demanda y en atención a los elementos probatorios que obran en el plenario, se tiene que el señor David Simmonds Valencia desempeñó el cargo de agregado comercial con categoría cónsul general en el Consulado General de Colombia en San Juan de Puerto Rico, nombrado por Decreto 1152 del 25 de abril de 1997 firmado por la entonces ministra de relaciones exteriores y el ministro de comercio exterior. Posteriormente fue trasladado, según Decreto 758 del 22 de abril de 1998, al cargo de agregado comercial con categoría de consejero en la Embajada de Colombia ante el gobierno de Guatemala. Finalmente, mediante Decreto 1055 del 30 de mayo 2001 se aceptó su renuncia. Bajo los anteriores argumentos puede entonces concluirse, sin mayores planteamientos, que el demandante tenía la calidad de empleado público en atención a la vinculación laboral con el Ministerio de Relaciones Exteriores.(…) en materia de controversias laborales y de seguridad social, en principio, la jurisdicción juzga: La legalidad de los actos administrativos generales con contenido laboral que expidan las entidades públicas y particulares que desempeñen funciones públicas. Las controversias laborales que surjan entre los servidores públicos sometidos a una relación legal y reglamentaria, y el Estado como su empleador. Frente a la seguridad social, de aquellas controversias que surjan entre los servidores públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria y una entidad administradora del sistema, siempre y cuando ésta sea de derecho público. Ahora, en contraste con aquellos asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria, se tiene que en los conflictos originados de las relaciones laborales y con la seguridad social, la competencia se define por combinación de la materia objeto de conflicto y el vínculo laboral, sin que sea determinante la forma de reconocimiento o negativa del derecho (…) la jurisdicción ordinaria laboral en su especialidad laboral y seguridad social conoce de los asuntos laborales cuando se trata de trabajador privado u oficial, supuesto que no encontramos en el caso bajo estudio. Ahora y sólo en gracia de discusión, es claro que la jurisdicción ordinaria conoce de controversias, en tratándose de la modalidad de seguridad social, que involucren a trabajadores privados y oficiales, sin importar la naturaleza de la entidad administradora, así como la referida a empleados públicos únicamente cuando la administradora es de derecho privado y, según la naturaleza de Fiducoldex S.A., la fiduciaria no está constituida como entidad administradora y prestadora de los servicios de seguridad social. Elemento que también permite descartar la tesis de que el presente medio de control debe remitirse a la jurisdicción ordinaria*

En consecuencia, y en aras de garantizar el derecho al debido proceso, particularmente el derecho a ser juzgado por el funcionario judicial a quien el ordenamiento jurídico previamente le ha atribuido competencia -juez natural-, materializar el principio a la igualdad, de conformidad con lo reglado en los artículos

16 y 138 del C.G.P., se dispondrá la remisión del expediente al reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá, para lo de su cargo.

En consideración de lo brevemente expuesto la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.,

R E S U E L V E:

PRIMERO: **DECLARAR** la falta de jurisdicción y competencia de este Tribunal para conocer la demanda presentada por **JORGE MARIO JARAMILLO CARDONA** contra **LA NACIÓN- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PROCOLOMBIA, BANCOLDEX, FIDUCOLDEX, COLPENSIONES Y LA NACION – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS,** conforme las consideraciones que preceden.

SEGUNDO: **REMÍTASE** por Secretaría las presentes diligencias a reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá para lo de su cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,



RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

CARLOS ALBERTO CORTÉS CORREDOR

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Segunda de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **AUTO**
RADICACIÓN. 11001 31 05 **032 2017 00490 02**
DEMANDANTE: ESPERANZA OVALLE MÁSMELA
DEMANDADO: VENTAS Y SERVICIOS SA

Bogotá DC, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (f.° 369-372 – arch. 18 C01) contra el auto proferido el 15 de junio de 2022, por el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá DC, por medio del cual admitió el incidente de regulación de honorarios instaurado dentro del proceso de la referencia (f.° 364,365 – arch. 16 *ídem* C01).

No obstante, se precisa que acorde con lo dispuesto en el art. 65 del CPTSS, modificado por el art. 29 de la Ley 712 de 2001, tal decisión no es objeto de apelación, pues dispone la norma que son apelables los autos proferidos en primera instancia allí relacionados, entre ellos, en el numeral 5° prevé que lo es "*El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida"*, supuesto que no se enmarca en este caso, sin que exista norma adicional en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social o en el Código General del Proceso que así lo consagre, pues el numeral 5.° del art. 321 de este último estatuto procesal, establece que es apelable el auto que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva, por lo que se concluye que el auto impugnado no es susceptible del recurso de apelación.

Lo anterior, por cuanto lo que decidió el *a quo* en el proveído del 15 de junio de 2022 es admitir el incidente de regulación de honorarios y correr traslado del mismo a la parte incidentada, pero ello de ninguna manera constituye una negación o rechazo del incidente, mucho menos lo está decidiendo de fondo, resultando este, un auto de mero trámite o sustanciación,

y conforme el art. 64 del CPTSS este tipo de providencias no son susceptibles de recurso alguno.

Conforme a lo anterior, en concordancia con lo establecido en el inciso 4° del art. 325 y el inciso 2° del art. 326 del CGP, aplicables en materia laboral por remisión expresa del art. 145 del CPTSS, habrá de declararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la demandante y se devolverá el expediente al juez de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ DC,**

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el auto proferido por esta Corporación, el 12 de septiembre de 2022, dentro del proceso de la referencia (arch. 4 C02).

SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto proferido el 15 de junio de 2022, por el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá DC, en el proceso de la referencia, de conformidad a lo expuesto en las consideraciones anteriores.

TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase oportunamente el expediente al Juzgado de origen, para los fines pertinentes, y previas las desanotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada ponente

MILLER ESQUIVEL GAITÁN
Magistrado

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

Enlace expediente digital:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des15sltsbta_cendoj_ramajudicial_gov_co/EjD6tUfqRQhApEHEMwXl9LUBO0EUYNudrEHteF5uZtOoUg?e=enhhyD

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala Laboral

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f30158a9a29fe87bcd8b8b4aa28404a77fc8bd7068ae757611432a31a93684cf**

Documento generado en 28/02/2023 04:49:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

H. MAGISTRADA DRA. MARLENY RUEDA OLARTE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001310503020160027101** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 15 de mayo de 2019.

CARMEN CECILIA ESTUPIÑAN ROZO
AUXILIAR DE S.G.3

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Por secretaría liquídense las costas, para el efecto inclúyase la suma de DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (2 SMLV), valor en que se estima el valor de las agencias en derecho, a cargo de la AFP Porvenir y Protección.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrado (a) Ponente

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARLENY RUEDA OLARTE

PROCESO ORDINARIO DE RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ VS ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS RAD N° 01-2019-815-01

ACÉPTESE la renuncia presentada por la apoderada de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en los términos del artículo 76 del CGP, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del CPTSS.

En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente:

DECISIÓN

El Tribunal Superior de Bogotá por conducto de la Sala Laboral, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,** en contra de la providencia proferida el 8 de septiembre de 2022, mediante la cual se dispuso tener **por no contestada la demanda por parte de** esta llamada en garantía, como quiera que se había notificado de la existencia de la acción por conducta concluyente desde proveído de fecha 2 de mayo de 2022. (Expediente Digital)

Inconforme con esta decisión la apoderada de la entidad en mención interpone recurso de apelación, afirmando en síntesis que se había enterado de la existencia del proceso a través de correo electrónico que le fuera remitido el 6 de septiembre de 2021 y el que no contenía el auto admisorio de demanda, no siendo notificada dicha entidad en debida forma de la existencia de la acción; no obstante ello, procedió a remitir poder para su representación judicial y el 29 de junio de 2022, solicitó al despacho la notificación en debida forma de la acción o la remisión del expediente digital, el que le fue remitido sólo hasta el 5 de julio de 2022 y por ello tuvo dicha data como pauta para contabilizar el término de contestación, ya que previo a esta fecha, no conocía la demanda, su auto admisorio, ni el escrito de llamamiento en garantía.

CONSIDERACIONES

Lo primero que advierte la Sala es que el Decreto 806 de 2020, antes que imponer más; fue justamente fue expedido para garantizar efectividad en la administración de justicia, y ese es el entendimiento que debe dársele, normatividad que posibilitó la notificación personal mediante mensaje de datos.

Conforme lo señalado en precedencia, se evidencia en el presente asunto que como bien lo indica la recurrente, en aras de ejercer su derecho de defensa era menester que se le pusiera en conocimiento el contenido del escrito de demanda, llamamiento en garantía y auto admisorio de dichas actuaciones; respecto de lo cual, únicamente se evidencia que la demandada Interservicios S.A.S., remitió a POSITIVA S.A., mensaje de datos bajo el asunto "*denuncia del pleito"*, el 3 de septiembre de 2021, correo que únicamente contiene un archivo adjunto, sin que se logre evidenciar que el mismo contiene los escritos de demanda, de llamamiento en garantía y las providencias mediante las cuales se admitió la acción y el llamamiento en mención.

Así las cosas y contrario a lo manifestado por el Juzgado de instancia, el Decreto en mención vigente para la data en que se admitió el llamamiento en garantía de la recurrente, tiene como uno de sus objetivos principales, promover las actuaciones judiciales en la modalidad **digital,** de tal manera, no resulta de recibo el argumento según el cual, para conocer de las actuaciones adelantadas, la recurrente podía acercarse a las instalaciones del despacho, lo que claramente contraviene la normatividad legal bajo estudio.

Es así como observa la sala que la llamada en garantía, únicamente tuvo conocimiento de las providencias antedichas el 5 de julio de 2022, data para la cual, fue remitido por parte del Juzgado de conocimiento el vínculo de acceso al proceso judicial de la referencia, ya que sin conocer su contenido, difícil le resultaba pronunciarse al respecto, evidenciándose que es a partir de dicha data que debe contabilizarse el término para emitir contestación, la que se remitió al juzgado el 12 de julio de dicha anualidad, esto es, dentro del término previsto para el efecto.

Por lo expuesto se REVOCARÁ el auto apelado y en su lugar se ordena TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA Y EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR PARTE DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Sin costas en esta instancia

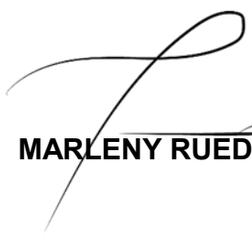
En mérito de lo expuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por conducto de la Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO:- REVOCAR el auto apelado y en su lugar se ordena TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA Y EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR PARTE DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

SEGUNDO:- COSTAS. No se causan en la alzada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARLENY RUEDA OLARTE



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO



LORENZO TORRES RUSSY

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARLENY RUEDA OLARTE

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE CARLOS RAMÓN ANAYA SEVERICHE VS MARITRANS SAS hoy AGUNSA COLOMBIA SAS RAD N° 5-2020-089-01

En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente:

DECISIÓN

Resuelve el Tribunal Superior de Bogotá por conducto de la Sala Laboral, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada AGUNSA COLOMBIA SAS contra el auto proferido por el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá, el día siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022), por medio del cual se dio por no contestada la demanda. (Expediente Digital).

HECHOS

CARLOS RAMÓN ANAYA SEVERICHE presentó demanda **en contra de MARITRANS SAS HOY AGUNSA COLOMBIA SAS,** para que mediante un proceso ordinario laboral se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo, terminado sin justa causa y en consecuencia se le condene a pagar indemnización del art 64 del CST, perjuicios morales y costas del proceso. (Expediente Digital).

Mediante la providencia que hoy revisa la Sala, se **dio por no contestada la demanda por parte de la demandada, pues a pesar de haber sido notificada de conformidad con el Decreto 806 /20, no se presentó la contestación dentro del término legal para ello, existiendo el respectivo comprobante de entrega al correo de la empresa.**

Inconforme con esta decisión el apoderado de la demandada presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación en cuyo argumento central básicamente se afirma: *"… **Si bien de la "trazabilidad de notificación electrónica" expedida por la empresa E-entrega, se evidencia que la notificación personal fue remitida el día 28 de octubre de 2020 al correo electrónico salamanca@agunsa.com.co, en dicho documento no se señala que éste haya acusado leído el mensaje de datos,** necesario para que se entienda surtida la notificación, de conformidad con lo*

previsto en el Decreto 806 de 2020, sentencia de la Corte Constitucional C-420 de 2020, en armonía con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 527 de 1998 y el artículo 10° del Acuerdo PSAA06- 3334 de 20069 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales señalan, en su orden, que: - "La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación". Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, ***que no se enteró de la providencia,*** *además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso (…) - "La Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos 2 (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje…" - Se podrá acusar recibo mediante: a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos y, que «los mensajes de datos se entienden recibidos de la siguiente manera: a) Cuando el destinatario ha confirmado mediante acuse de recibo la recepción, o éste se ha generado automáticamente; b) el destinatario o su representante, realiza cualquier actuación que permita concluir que ha recibido el mensaje de datos; c) los actos de comunicación procesal emanados de la autoridad judicial, no han sido devueltos al sistema de información de la autoridad judicial, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a su remisión» (resalto intencional) Subrayado fuera del texto original de las normas citadas. Como se indicó la Compañía no tuvo acceso al correo electrónico remitido el 28 de octubre de 2020, ni mucho menos para generar acuse de recibido* ***dada la magnitud de correos recibidos provenientes del correo electrónico ssalamanca@maritrans.com.co que estaba registrado antes del cambio de razón social y, por la notificación que erróneamente había remitido la apoderada judicial del demandante al mismo.*** *Tal y como se prueba del siguiente pantallazo,* ***la Compañía tenía en su bandeja de entrada más de 15.000 mil correos electrónicos: Ello precisamente se comprueba con el dictamen pericial que se aportó al expediente, mediante el cual se hace un análisis forense de informática y a partir del cual se determina que el correo electrónico de la notificación personal efectuada por la apoderada judicial de fecha 28 de octubre de 2020 no había sido leído y por consiguiente no se puede decirse que se acusó recibido del mismo.*** *Pues precisamente fueron los peritos quienes procedieron a realizar la búsqueda del correo "NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA CARLOS RAMÓN ANAYA SEVERICHE – RAD. 11001-3105-005-2020-00089-00" Si el actuar de la Compañía estuviera revestido de mala fe como lo quiso dar a entender su Despacho alegando que "no es de recibo la manifestación del demandado porque ello significaría que si no lee el correo en dos años no se podría contabilizar el término", ésta habría leído el mensaje y posteriormente hubiera modificado esta situación, pero como se prueba el dictamen pericial ello no ocurrió, por lo que esto simplemente deja ver que la Compañía por razones justificadas y evidentes no conocía que a sus servidores había ingresado este correo por l cantidad de correos electrónicos que estaba recibiendo, porque de lo contrario habría procedido a allegar la contestación de la demandada contabilizando el término desde esta mismo día. ¿CUÁL FUE EL HECHO GENERADOR QUE TUVO LA APODERADA DEL DEMANDADO PARA CONFIRMAR QUE LA COMPAÑÍA HABÍA ACCEDIDO AL MENSAJE QUE CONTENIA LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA? ¿EL ACUSE DE RECIBIDO AUTOMATICO POR LA PLATAFORMA E-ENTREGA? 3 Sobre estos interrogantes, llamo a su Despacho la atención sobre lo siguiente: (i) La abogada del demandante manifestó haber enviado una primera notificación de la demanda el día 08 de octubre de 2020 a la Compañía, la cual según la trazabilidad de notificación de la empresa de mensajería E Entrega se había efectuado con acuse de recibido, apertura de la notificación y lectura del mensaje el mismo día. (ii) que en razón al*

cambio de razón social de la Compañía, del cual tuvo conocimiento de forma posterior a la remisión de la notificación personal de la demanda, procedió a enviar el 28 de octubre de 2020 nuevamente la notificación de la demanda, (iii) que el cambio de razón social lo realizó la Compañía en junio de 2020, (iv) que el correo electrónico remitido el 28 de noviembre de 2020, judiciales no obtuvo la misma constancia de acuse de recibido, apertura de la notificación y lectura del mensaje. Dicho esto, entonces, surge otro interrogante ¿PORQUE LA PARTE INTERESADA NO CONSTATÓ QUE LA COMPAÑÍA HABÍA ACCEDIDO A ESTE MENSAJE DE DATOS COMO YA LO HABÍA HECHO CUANDO REMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA A UN CORREO EQUIVOCADO? Es evidente que ante esta situación, la parte interesada pudo entonces proceder con la notificación de la demanda de conformidad con el artículo 291 Código General del Proceso, remitiendo la misma de forma física a la dirección que igualmente reposa en el Certificado de Existencia y Representación y que conocía perfectamente, en la medida que lo importante y relevante era que dependiendo de la opción que se escogiera para este fin, la misma debía ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma Cita sentencias relativas al exceso ritual manifiesto al derecho al acceso a la administración de justicia y el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal…."

CONSIDERACIONES

La sala resolverá el recurso de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 A del C P del T y de la S S.

Bien está acreditado, además aceptado por el apoderado recurrente, que el 28 de octubre de 2020, y según trazabilidad de notificación electrónica expedida por la empresa E-entrega, se realizó, al correo electrónico salamanca@agunsa.com.co.

No obstante el argumento de la demandada es que era necesario según la ley, que dicho documento no solo tuviese acuso de recibo, sino de haber sido leído, lo cual no surge ni de la ley, ni de las sentencias citadas, ni siquiera haciendo un esfuerzo interpretativo que permita llegar a semejante conclusión; admitirlo sería tanto como eliminar los términos que la ley contempla en todas las etapas procesales, quedando al arbitrio o voluntad o tiempo de quien es convocada a juicio el determinarlos; según los vaya abriendo para leer su contenido.

Ahora, aunque a nadie le está permitido fabricar sus pruebas, es el mismo dictamen que la demandada presenta en su defensa; la que demuestra que fue recibido un correo denominado *"NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA CARLOS RAMÓN ANAYA SEVERICHE – RAD. 11001-3105-005-2020-00089-00"* y que aun aceptando todas las razones de informática que permitan inferir que no se abrió y leyó; jamás podría hacer concluir que un acto proveniente de la voluntad de la parte; de lugar a la inexistencia de la notificación como se pretende; sencillamente porque nadie puede alegar en su favor su propia culpa.

Y es que el hecho de tener quince mil, veinte mil o más correos, no es una justificación para no atenderlos; sobre todo cuando se trata de un asunto que implica una actuación judicial, la cual los profesionales del derecho saben implica términos y consecuencias en su omisión.

De otra parte, se equivoca la recurrente, se itera, al identificar acuso de recibo con acuso de "leído" por decirlo de alguna manera, pues el acuso de recibo solo da certeza de que determinada comunicación llego a su destino; no de las actuaciones posteriores, que quedan en manos del destinatario quien bien puede si el envío es físico archivarlo sin abrir o mandarlo a la bandeja no deseada en idénticas circunstancias si es electrónico; lo que es su decisión y actuación; por lo que las consecuencias, también lo serán sin que ello necesariamente implique mala fe o buena fe lo que nada influye en lo así decidido.

En ese orden y como señaló el Juez de primera instancia, resulta claro que el mensaje si fue recibido, lo que se itera es ratificado con la prueba que aduce el recurrente, que da fe de ese hecho, esto es, la recepción del correo el 28 de octubre de 2020 a las 5:00 37 pm con tamaño de 23KB. Que no lo leyera por cualquier razón; muchos correos u otras que no es del caso analizar, no elimina la notificación ni los términos que con ella empiezan a correr, no es eso, se repite, lo que consagra la ley, ni menos aún lo ha dicho así la jurisprudencia, pues admitirlo es bueno insistir en ello, dejaría al arbitrio de las convocadas a juicios el que se trabe la relación procesal y se tenga acceso adecuado a una correcta administración de justicia; sin que sobre tampoco recordar que el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, justamente señaló que las providencias que deban notificarse personalmente; -como el auto admisorio de la demanda-, podían serlo mediante **el envío de la providencia como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado para esa notificación, sin necesidad de previa citación o aviso físico o virtual, para que se cumplan los fines de la norma, esto es que corran los términos y que estos sean respetados en las diversas actuaciones, en concordancia efectivamente con la sentencia C 420 DE 2020 que declaró exequible el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 en el entendido " que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, no cuando este decida leerlo o no".**

En conclusión, claro resulta que, a la demandada, **se le notificó el auto admisorio de la demanda en debida forma y en los términos que ordenara el Decreto 806 de 2020, sin que se contestara, luego la decisión de tenerla por no contestada**

resulta acertada y adecuada a la ley, por lo que se impone CONFIRMAR la providencia que así lo declaró.

Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por conducto de la Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO:- CONFIRMAR la providencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO:- COSTAS. No se causan en la alzada.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

MARLENY RUEDA OLARTE

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO

LORENZO TORRES RUSSY

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARLENY RUEDA OLARTE

PROCESO ORDINARIO DE JOSÉ FERNANDO ALJURE MUÑOZ VS ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS RAD N° 5-2020-297-01

En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente:

DECISIÓN

El Tribunal Superior de Bogotá por conducto de la Sala Laboral, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de **COLPENSIONES,** en contra de la providencia proferida el 12 de agosto de 2021, mediante la cual se dispuso tener **por no contestada la demanda por parte de COLPENSIONES por cuanto el termino para contestar vencía el 19 de noviembre de 2020 y el escrito de contestación se allegó al correo el 20 de noviembre de ese año.** (Expediente Digital)

Inconforme con esta decisión el apoderado de la parte demandada **COLPENSIONES** interpone recurso de apelación, afirmando básicamente que el juzgado da una interpretación y alcance no acertado al Decreto 806 de 2020, pues desconoce lo estipulado en el artículo 41 de C P del T y de la S S, en cuanto a las notificaciones a entidades públicas. Afirma que el artículo 74 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 38 de la ley 712 de 2001, establece que, una vez admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados. Asimismo, no se puede desconocer que el Decreto 806 de 2020, no hace referencia a las notificaciones judiciales ante entidades públicas, así como, la contabilización de los términos y, en consecuencia, al encontrarse debidamente regulado el trámite y términos legales para efectos de notificación de la demanda en el Código Procesal Laboral, se tiene que las normas especiales prevalecen sobre las normas generales y, por ende, deberá efectuarse el estudio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del C.P.T y S.S modificado por el artículo 20 de la ley 712 de 2001, las cuales, a su vez señalan que tratándose de entidades públicas como lo es el caso que nos compete, debe aplicarse lo

dispuesto en el parágrafo de la citada norma el cual indica lo siguiente: “PARÁGRAFO. NOTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando en un proceso intervengan Entidades Públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso. Dirección: Carrera 8 N° 67 51 - NIT: 900871863-0 - Teléfono:7039248 - Fax: 7039248 Mail: uniontemporaladnr@gmail.com En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad demandada, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria. Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia. En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba” (Subrayado fuera del texto). Adicional a ello, resulta importante poner de presente al despacho **que no es posible equiparar la notificación personal realizada al representante legal de la entidad con el envío del auto admisorio y traslado de la demanda por correo electrónico, ya que, al referido correo se efectúan notificaciones judiciales a nivel nacional, por lo que, el correo es recibido por el área de correspondencia y no directamente por el representante legal y, en consecuencia, por el cúmulo de correos y procesos notificados que llegan a diario estos deben ser revisados por varias personas encargadas de informar las notificaciones al representante legal y al área de defensa judicial de la entidad. Para sintetizar, es dable concluir que mi representada dio respuesta a la demanda dentro del término legal, en atención, a que el despacho remitió al correo de notificaciones de la entidad notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co el día 30 de octubre de 2020, la digitalización del auto admisorio y traslado de la demanda para lo cual, se tiene que: 1. El término de dos (2) días hábiles establecido en el Decreto 806 de 2021, termino el 4 de noviembre de 2020. 2. El termino de cinco (5) días hábiles correspondiente al parágrafo del artículo 41 del C.P.L., finalizó el 11 de noviembre de 2021. 3. El termino de diez (10) días hábiles, dispuesto en el artículo 74 del C.P.L. se cumplía el 26 de noviembre de 2021. Así pues, al**

haberse radicado la respuesta a la demanda el 20 de noviembre de 2021, esto es, al día trece (13) hábil, contado a partir de la recepción del correo electrónico se tiene que se cumple ampliamente con el término legal…"

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 A del C P del T y de la S S, se resolverá el recurso.

En primer lugar, advierte la Sala que antes y después de la emergencia sanitaria que dio lugar a la expedición de Decreto 806 de 2020 el artículo 41 del C P del T y de la S S ordena notificar el auto admisorio de la demanda de manera personal, lo que se consagra no solo en el literal A numeral 1 de la norma, sino en el parágrafo relativo a la notificación de entidades públicas que literalmente señala: " Cuando en un proceso intervengan Entidades Públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones….."

El inciso dos del parágrafo en mención, describe a su vez la forma en que se debe proceder si al acudir a la entidad dicho representante o delegado no puede recibir la notificación, caso en el cual el **notificador practica la diligencia entregando copia de la demanda y del auto admisorio y del aviso o bien al secretario general de la entidad o bien dejándola en la oficina receptora de correspondencia.**

Todo lo anterior lógicamente, cuando esta era la forma de realizar la notificación personal, esto es de manera física y mediante el traslado del funcionario a la entidad; lo que una vez expedido el Decreto 806 de 2020, se itera ante la emergencia que ya no lo permitía siempre así; fue remplazado con la notificación también personal allí prevista, esto es mediante mensaje de datos.

De manera que se equivoca la recurrente cuando asegura que el Juez interpretó mal el artículo 8 del decreto, norma que no requiere la denominada interpretación pues de manera clara, se regula lo relativo a la forma de realizar las notificaciones personales, corroborando que estas pueden hacerse mediante **el envío de la providencia como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado para esa notificación, sin necesidad de previa citación o aviso físico o virtual.**

Por tanto, lo cierto es **que la notificación personal del auto admisorio de la demanda no ha desaparecido,** como lo señala el artículo 41 del C P del T y de la S S; siendo claro además que luego de la emergencia dos eran la manera de

realizarla, se itera o desplazando al funcionario o escogiendo la forma prevista en el Decreto, esto es el mensaje de datos, no una especie de mezcla de las dos y sin que nada tenga que ver la naturaleza de la entidad, pues para las públicas sigue siendo personal, la del auto admisorio, lo que implica que habiendo escogido la prevista en el artículo 41 del ordenamiento procesal, pueda tener lugar la de dejar los documentos en correspondencia si se dan las circunstancias antes descritas, y solo si fue esa la notificación practicada; lo que ciertamente no tuvo lugar en este caso, pues solo se acudió a lo previsto en el Decreto 806 de 2020, esto es personal a través de mensaje de datos, al correo electrónico habilitado para ello por la entidad.

Siendo así, le asiste razón al Juez cuando señala que si la notificación se hizo con base en el Decreto los términos son los que este también contempla, esto es de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación personal. Básicamente el Decreto 806 de 2020, art 8; especifica cómo debe entenderse la notificación personal, dadas las nuevas circunstancias, siendo claro que en todo caso debe enviarse el auto admisorio a la demandada, **y para que se cumplan los fines de la norma implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos, se itera para que se cumpla el fin de la norma, esto es que corran los términos y que estos sean respetados en las diversas actuaciones, en concordancia efectivamente con la sentencia C 420 DE 2020 que declaró exequible el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 en el entendido " *que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje"***

No sobra también agregar que efectivamente como también señaló el Juez, no pueden mezclarse las normas con el fin de ampliar términos, siendo estos 10 y no 15 o más, pues definitivamente los términos son individuales, los contemplados se itera, en la norma con base en la que se practicó la diligencia y sin que lo estipulado en el artículo 74 del ordenamiento cuando se refiere a términos comunes; implique ampliación en los días para contestar; (diez se itera); como ya se ha sostenido en reiteradas providencias proferidas por esta Sala.

Sin costas en esta instancia

En mérito de lo expuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por conducto de la Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO:- CONFIRMAR el auto apelado, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO:- COSTAS. No se causan en la alzada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARLENY RUEDA OLARTE



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO



LORENZO TORRES RUSSY

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C

SALA LABORAL

PROCESO EJECUTIVO No. 37-2022-00053-01
ASUNTO: APELACIÓN AUTO EJECUTIVO
DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA GÓMEZ JARRO
DEMANDADO: MÓNICA SOLEDAD GONZÁLEZ MÉNDEZ

MAGISTRADA PONENTE

MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente providencia:

ANTECEDENTES

La señora SANDRA PATRICIA GÓMEZ JARRO instauró en nombre propio demanda ejecutiva en contra de la señora MÓNICA SOLEDAD GONZÁLEZ MÉNDEZ por la suma de $15’000.000 más los intereses moratorios desde el 27 de mayo del año 2014. (fl. 14 archivo 01.DemandayActuacciones).

Mediante auto del 04 de mayo del 2022 se negó el mandamiento de pago solicitado por la señora Gómez Jarro aduciendo que:

> *“…De ellos se resalta con especial énfasis que en el presente proceso la abogada ejecutante aporta como título ejecutivo acta de la audiencia celebrada el día 2 de diciembre del año 2.020, proferida por el Juzgado 16 Civil municipal de Bogotá dentro del radicado No. 110014003016-2018-00764-00 prueba extraprocesal, donde se deja constancia del* ***INTERROGATORIO DE PARTE COMO PRUEBA ANTICIPADA*** *promovido por ella contra la señora contra* ***MÓNICA SOLEDAD GONZÁLEZ***

MENDEZ, *visible a folios 7-9 y copia del cuestionario que se realizó en dicha diligencia (fls. 10-11).*

Para resolver es importante tener en cuenta, el interrogatorio de parte realizado con base en los presupuestos del art. 184 del Código General del Proceso, puede prestar mérito ejecutivo siempre que cumpla con las condiciones que para ello alude el art.422 ya aludido, en concordancia con el análisis de la constitución del título complejo que debe materializarse para su mérito ejecutivo.

De la revisión del acta de audiencia celebrada el 02 de diciembre de 2020 ante el Juez 16 Civil Municipal de Bogotá D.C. se extrae que la hoy ejecutada no compareció a contestar el interrogatorio que como prueba anticipada le formularía la convocante, razón por la cual se le tuvo por confesa fictamente respecto de las preguntas 6, 7 y 8 consignadas en el cuestionario allegado (fls.10 y 11) , lo anterior, debido a que las mismas fueron redactadas de manera asertiva y versaban sobre hechos susceptibles de confesión.

En virtud de ello consideró, como hechos susceptibles de confesión que entre las partes se acordó el pago de $15.000.000 en virtud de la representación judicial, constantes consultas y acompañamientos de trámite; así como, que la ejecutada a la fecha de dicha diligencia no realizó el pago a favor de la reclamante.

De dicho documento se puede concluir, de la confesión ficta, el estado de la deuda y el impago de la misma; pero no se acredita el objeto contractual celebrado por su generalidad, donde sólo se consignó las de consultas y acompañamientos de trámite, sin especificar en qué consistieron, o, por lo menos, sobre qué actuaciones particulares recayeron; recuérdese que, para la configuración del mérito ejecutivo del título complejo, no sólo debe probarse el documento del cual emerge la obligación, sino los actos orientados a su cumplimiento, en virtud de acreditar la obligación encomendada en los términos acordados, que es lo que genera el reconocimiento de los honorarios causados.

En ese orden de ideas, la sola prueba extrajudicial allegada al plenario, no permite determinar acreditadas las características del título ejecutivo complejo, pues, aunque puede advertirse alguna claridad sobre el valor adeudado; lo cierto es que, no es clara en el sentido de su causación, el objeto contractual, la verificación de la ejecución de la labor acordada, así como tampoco de fecha que establezca la exigibilidad del pago de la obligación acordada.

Argumentos que permiten concluir que no cumple las características de ser expreso, claro y exigible.

De conformidad con los argumentos expuestos, el mandamiento de pago solicitado se negará, y en su lugar se ordenará la devolución de la demanda; se advierte a la ejecutante, que el hecho de negar el mandamiento de pago por las razones expuestas, no le impide acudir al trámite de un proceso ordinario, para que, a través de los medios probatorios pertinentes pueda establecer la procedencia de los honorarios; proceso en el que podrá solicitar y practicar las pruebas pertinentes; ello si es su

deseo acudir a dicho mecanismo procesal. (archivo 03.AutoNiegaMandamientodePago (2022-00053-Copia)

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión la ejecutante interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente:

"1. Desde el mes de julio 10 del año 2018 se presentó prueba anticipada interrogatorio de parte ante el Juzgado 16 civil Municipal de Bogotá bajo el radicado No. 11001400301620180076400 quien ostenta en su calidad de demandada MONICA SOLEDAD GONZALEZ MENDEZ, quien a través del proceso se notificó y en una primera citación no asistió y presento excusa, por lo cual nuevamente toco notificar y llevar a cabo todo el ritual legal para lograr fijar fecha y hora para realizar nuevamente dicha prueba anticipada interrogatorio de partes, es así como una vez realizadas las diferentes notificaciones, las cuales se allegaron al Juzgado y reposan dentro del plenario, la convocada NO ASISTIO.

2. Llegado el día y la hora señala (sic) por el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, este llevo a cabo la audiencia en trámite, la cual arrojo el acta por la cual se da inicio a la demanda que nos ocupa.

(…)

4.- Es así como queda probado con total certeza que represente a la demandada MONICA SOLEDAD GONZALEZ MENDEZ EN el proceso que se cursó en el Juzgado de familia y el cual estaba inmerso en el interrogatorio como se prueba en una de las preguntas.

5.- Igualmente quedo probado con el interrogatorio de parte que la aquí demandada me debe la suma de $15 millones de pesos mcte por dicha representación.

6.- Quedando también probado que la deuda actualmente está vigente ya que a la fecha la demandada no ha cancelado la suma de $15 millones de pesos mcte.

7. -El Juzgado 37 Laboral cuestiona si se cumplió o no se cumplió con la labor encomendada, lo cual podrá verificarse si se inadmitiera la demanda y se solicitara la sentencia del proceso del cual emergen o nacen esos $15 millones de pesos que se están ejecutando en este momento. Pero tampoco sería de resorte ya que en el Interrogatorio quedo establecido. Pero si así lo quisiera dicho Juzgado con una INADMISION para verificar el plenario dentro del proceso 2013'117 para verificar la actuación surtida dentro del mismo.

8.- El Juzgado 37 laboral no podrá dejar a un lado la claridad del interrogatorio y de lo expresado por esta, en el mismo, donde se deja claridad que los $15 millones adeudados a la fecha nacieron de la representación en el Juzgado 16 de Familia bajo el radicado No. 2013- 117, así como se dice en el cuerpo contentivo de la demanda ejecutiva laboral, y así como quedo plasmado y demostrado dentro de la prueba anticipada interrogatorio de parte.

(…)

9. El juzgado 37 Laboral se abstuvo de dar trámite legal a lo solicitado en la demanda ejecutiva labor (sic), sin valorar efectivamente las pruebas a lugar que reposan dentro del plenario, y no darle la validez y efectividad a la prueba procesal prueba anticipada. El Juzgado 37 laboral dice no acreditarse el objeto contractual de consultas y acompañamientos de tramite sin especificar en que consistieron, apreciación errónea totalmente, en virtud que es muy claro el Hecho primero de la demanda donde claramente se dice que debe la suma de $15 millones de pesos por la representación en el Juzgado 16 de Familia dentro del radicado 2013-117, igualmente quedo demostrado dentro del interrogatorio de parte, es así como NO PODRA NEGARSE EL MANDAMIENTO DE PAGO, con esta apreciación del todo totalmente ERRONEA.

Que se diga que también se brindaron asesorías no quiere decir que el pago perseguido sea de asesorías, el pago perseguido va directamente relacionado con la representación dentro del proceso No. 2013-117 que se surtia en el Juzgado 16 de Familia, donde la aquí demandante fungía también como demandante dentro del mismo, y como se prueba dentro de los pantallazos a lugar.

10. Lo anterior constituye una violación a las normas, las cuales deben ser observadas en orden estricto, razón por la cual se impone la solicitud del recurso de apelación contra la providencia del cuatro (4) de mayo del año 2022 por medio de la cual el despacho se abstuvo de dar trámite a la demanda presentada, a efecto de que se revoque tal decisión y en su lugar se disponga el trámite correspondiente.

11. Igualmente señoría una prueba más de la valoración errónea que hace este fallador frente a la demanda que nos ocupa, se puede evidenciar en los diferentes juzgados que conocieron este caso, pero el uno inadmitía y luego al hacer el estudio solicitaba se trasladara a otro juzgado por falta de competencia, todos los anteriores juzgados que conocieron de este caso, siempre se pronunciaron únicamente que por la cuantía debía someterse a reparto, téngase en cuenta que fue analizada la demanda pero por cuantía nuevamente remitían a reparto.

Es así Señor Magistrado que pido tener en consideración lo anteriormente expuesto y dar valor a lo expuesto para que se ordene a este juzgado se admita la demanda y se dé continuidad con los trámites legales pertinentes…"

CONSIDERACIONES

A efectos de resolver el recurso de apelación, se tiene que el artículo 100 del C. P. del T. y de la S. S. preceptúa, acerca de las características que ha de reunir el documento que se presenta para el recaudo judicial:

> ***"Artículo 100. Procedimiento de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.***
>
> *Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial según sea el caso"*

A su turno, el artículo 422 del C. G. del P., aplicable al presente caso por remisión que en forma directa hace la norma anteriormente transcrita, al referirse a las características que deben tener los documentos base de la ejecución, señala:

> ***"Artículo 422. Título ejecutivo.*** *Pueden demandarse ejecutivamente* ***las obligaciones expresas, claras y exigibles*** *que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.* ***La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184"***

El artículo 184 ibidem establece el interrogatorio de parte como prueba extraprocesal indicando lo siguiente:

> ***"Artículo 184.-*** *Quien pretenda demandar o tema que se le demande* ***podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso.*** *En la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia."*

Ahora bien, se allega como título ejecutivo en el expediente digital, el acta de la AUDIENCIA DE APERTURA Y CALIFICACIÓN DE PREGUNTAS (ART. 205 C. G. DEL P.) dentro del proceso PRUEBA ANTICIPADA - INTERROGATORIO DE PARTE con radicado 11001400301620180076400 de SANDRA PATRICIA GÓMEZ JARRO contra MÓNICA SOLEDAD GONZÁLEZ MENDEZ llevada a cabo el 02 de diciembre del 2020 en la cual se plasmó lo siguiente:

> ***1. DESARROLLO***
>
> ***1.2. INSTALACIÓN***
>
> *El Despacho instala la audiencia e indica las pautas para el desarrollo de la misma.*
>
> ***1.3. PRESENTACIÓN DE LAS PARTES***
>
> *Comparece a la audiencia, la citante Dra. Sandra Patricia Gómez Jarro, quien actúa en causa propia y se identifica plenamente con sus generales de ley.*
>
> *El Despacho deja constancia que envió invitación para participar en la audiencia en el día de hoy, tanto a la citante Dra. Sandra Patricia Gómez Jarro como al profesional del derecho Giovanny Alexander Velandía Reyes que la venía representando, a los correos electrónicos aportados en la solicitud, como también*

telefónicamente, en donde este último manifestó, que ya no tenía asuntos pendientes con la citante.

Que por tratarse de una prueba anticipada y de conformidad con los artículos 183 y 184 C.G. Del P., no necesita acreditar derecho de postulación y que además la citante tiene la calidad de profesional del derecho, pero que para el presente asunto actúa en causa propia, lo cual no hace que se invalide la presente diligencia o que incurra en alguna causal de nulidad.

El Despacho hace una breve reseña del historial del proceso y seguidamente, de conformidad con la norma del artículo 205 C.G. Del P., procede a abrir el sobre cerrado que milita a folio 22 del legajo, es un cuestionario en dos (2) folios que contiene nueve (9) preguntas, que en pretérita oportunidad presentara el profesional del derecho Giovanny Alexander Velandía Reyes, como apoderado judicial de la citante.

El Despacho procede a dar lectura a las preguntas en el orden allegado, de la pregunta No. 1 a la pregunta No. 9.

De lo anterior, se puede colegir que son nueve (9) preguntas, todas podían ser contestadas de tipo asertivo, las preguntas Nos. 6º ,7º y 8º son susceptibles de la prueba de confesión.

Puestas así las cosas, si bien es cierto las preguntas # 6º, 7º y 8º allegadas en sobre cerrado son asertivas y por ende admiten prueba de confesión, no obstante quien debe precisar sus efectos es el Juez de conocimiento, a quien se le someta la fase de ejecución de conformidad con los artículos 204 y 205 C.G. Del P.

EL Despacho le pregunta a la citante, si tiene alguna manifestación sobre el particular, a lo que manifiesta que ninguna.

AUTO:

Evacuada la finalidad de la presente prueba anticipada, el Despacho ordena que por Secretaría, sin el pago de expensas de aquellas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura,

habida consideración que el expediente se encuentra debidamente escaneado, se expidan las copias previa solicitud de parte al correo institucional: cmpl16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

El Despacho le concede el uso de la palabra a la citante, señora Sandra Patricia Gómez Jarro, si desea hacer alguna manifestación sobre el particular, a lo que manifiesta: Gracias su señoría, agradezco muchísimo al Despacho haber llevado a cabo la presente prueba, donde plenamente bajo el interrogatorio se ha probado que la señora Mónica Soledad González Méndez, a la fecha me adeuda la suma de $15.000.000,00 MCTE., en virtud de la representación que le hice en el juzgado de familia, de acuerdo a lo esgrimido dentro del interrogatorio de parte.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 10:36 am.

La audiencia fue grabada mediante la aplicación TEAMS y se incorpora al expediente digital, que se encuentra en la aplicación OneDrive para lo fines pertinentes." (fls. 7 a 9 archivo 01.DemandayActuacciones")

Adicionalmente, se allegó el interrogatorio de parte escrito presentado dentro del proceso de PRUEBA ANTICIPADA 2018-00764. Siendo necesario señalar que sólo se allegó el acta de la audiencia y no el audio de la misma.

Es necesario señalar, que si bien el acta de la audiencia llevada a cabo dentro del proceso adelantado para practicar una prueba extraprocesal -interrogatorio de parte- da cuenta que la ejecutante adelantó el tramite correspondiente para que se practicara el interrogatorio extraprocesal de que trata el artículo 184 del C. G. del P. al cual hace referencia el artículo 422 de dicha normatividad indicando que la confesión que conste en dicho interrogatorio constituye título ejecutivo; lo cierto es, que al revisar el acta allegada no se evidencia ninguna confesión.

Y es que en el acta se plasmó que las preguntas 6, 7 y 8 que se referían a una deuda de $15'000.000 por concepto de honorarios por servicios, son susceptibles de prueba de confesión, pero en ningún del acta hace mención a que la ejecutada haya confesado, es más ni siquiera se presentó a la audiencia y tampoco se plasmó de manera clara que se le haya tenido por confesa de dichas preguntas, pues lo que se señala el acta es que será el Juez de la ejecución quien precisara los efectos conforme al artículo 204 y 205 del C. G. del P.

Luego al no haber una confesión en el interrogatorio extraprocesal adelantado por la ejecutante (artículo 184 C. G. del P.), es claro que no existe una obligación clara, expresa y actualmente exigible por parte de la ejecutada; pues tal y como lo refiere el *A quo.* no se cumplen los presupuestos para librar mandamiento de pago.

Y es que como se ha expresado en múltiples ocasiones, resulta importante recordar la naturaleza jurídica del proceso de ejecución que muestra trascendencia a partir de la especial distinción hecha con respecto a los asuntos de conocimiento, ya que se tiene establecido que al primero, vale decir, al de ejecución, sólo puede acudir la parte que cuenta con la posibilidad materia de acreditarle al Juez que es titular de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, a cargo de quien las demanda. (art. 422 C. G. del P.)

O lo que es lo mismo, al proceso ejecutivo concurre la parte que busca someter a composición judicial derechos - en principio - indiscutibles que sólo reclaman la presencia del Estado para imponer su satisfacción, debido al incumplimiento del deudor, de modo que él *"no ha sido creado para juzgar quien tenga y quien no tenga razón, sino para satisfacer el interés de quien tiene la razón",* según lo predica el Maestro Chiovenda.

Contrario sensu, si el demandante no ostenta esa situación privilegiada, deberá discutir sus pretensiones a través del proceso de conocimiento en el que al Juez le corresponde regular un conflicto singular de intereses y determinar, *in casu*, si el actor ciertamente tiene el derecho, vale decir, quien *ius dicit*, es el funcionario judicial competente.

Así pues que tratándose de asuntos de naturaleza ejecutiva, incumbe al actor llevarle al Juez la prueba idónea del derecho cuya satisfacción reclama, como quiera que es presupuesto *sine qua non* para que se profiera tal orden y ella debe corresponder a un documento al cual atribuye la ley efecto de prueba integral del crédito respecto del que se pide la ejecución, de suerte que cuando alguien presente un título ejecutivo, este no puede ofrecer dudas en torno a la existencia del crédito representado en él, pues el proceso ejecutivo no tiene por objeto resolver cuestiones, sino realizar actos jurídicos.

De conformidad con lo expuesto, se tiene que la documental que se allega como título, no presta mérito ejecutivo, pues si lo que pretendía era cobrar una suma de dinero por concepto de honorarios profesionales, era necesario que la parte ejecutante acreditara cual fue la gestión para la cual fue contratado; que cumplió a cabalidad con la totalidad de esa gestión y el valor de los honorarios, situación ésta que no acontece en el presente proceso.

Así las cosas, se habrá de confirmar la decisión objeto de estudio.

Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, SALA LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia recurrida, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARLENY RUEDA OLARTE
MAGISTRADA

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
MAGISTRADO

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C

SALA LABORAL

PROCESO EJECUTIVO No. 33-2019-00344-01
ASUNTO: APELACIÓN AUTO EJECUTIVO
DEMANDANTE: JUAN CARLOS MORA CORZO
DEMANDADO: MIGUEL ANGEL SANCHEZ TRUJILLO Y MARÍA OLGA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

MAGISTRADA PONENTE

MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente providencia:

ANTECEDENTES

El señor JUAN CARLOS MORA CORZO instauró demanda ordinaria laboral en contra de los señores MARÍA OLGA SÁNCHEZ SÁNCHEZ y MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TRUJILLO con el fin de que se le reconozca y page unas acreencias laborales. (fls. 7 a 9 archivo 01Expediente)

En audiencia del 27 de noviembre del 2018 las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio por la suma de $50’000.000 la cual debería pagarse en 16 cuotas. (fl. 33 archivo 01Expediente)

Por solicitud de la parte ejecutante, el *A quo* mediante auto del 21 de agosto del 2019 libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

> *“**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO** por la vía ejecutiva laboral en PRIMERA INSTANCIA a favor del señor **JUAN CARLOS MORA CORZO,** y en contra de **MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ***

TRUJILLO *y* ***MARÍA OLGA SÁNCHEZ SÁNCHEZ,*** *identificados con la C.C. N° 79.327.264 y 39.539.922 respectivamente, por los siguientes conceptos:*

a. Por la suma de ***TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000.oo)****, equivalentes a las cuotas dejadas de cancelar entre el 01 de Diciembre de 2018 y el 05 de Agosto de 2019, en virtud del acuerdo de conciliación celebrado el 27 de noviembre de 2018.*

b. Por las cuotas pactadas y que no se llegaren a cumplir, comprendidas entre el 05 de septiembre de 2019 y el 05 de febrero de 2020.

c. Por las costas derivadas del presente trámite ejecutivo.

SEGUNDO: NEGAR EL MANDAMIENTO DE PAGO *solicitado por concepto de intereses moratorios por cuanto los mismos no se encuentran contenidos en el título ejecutivo. En su lugar, se* ***LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO*** *por los intereses legales, a partir de la fecha de exigibilidad de la obligación y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación…"*

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión el ejecutante interpuso recurso de apelación señalando básicamente que no está de acuerdo con la negativa del *A quo* de librar mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios, pues si bien, no se encuentran contenidos en el título ejecutivo, lo cierto es, que tales emolumentos van ligados e intrínsecos en las acreencias laborales, los cuales no son renunciables y están respaldados en la figura extra y ultra petita. Que los intereses legales decretados por el *A quo* atenta flagrantemente contra los principios de estirpe laboral. Que el Juez debe velar por los derechos fundamentales, los cuales no se estarían reclamando si la parte demandada hubiese cumplido cabalmente con el acuerdo al que llegaron en la audiencia de conciliación. Que no está de acuerdo en la forma como se decretó la medida cautelar pues lo que se pide es el embargo del crédito que se adelanta dentro

del proceso ejecutivo hipotecario radicado 2015-00502 de BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A. contra OLGA SANCHEZ y MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ el cual cursa ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución teniendo en cuenta que se da la concurrencia de embargos en procesos diferentes. Solicita se decrete el embargo del crédito con la prevalencia de embargos.

CONSIDERACIONES

Los problemas jurídicos planteados consisten en establecer (i) si se debe librar mandamiento de pago por los intereses moratorios pese a que no se encuentran contenidos dentro del título que sirve de base de la presente ejecución y (ii) si acertó el fallador de primera instancia en la forma en que libró la medida cautelar solicitada.

Intereses moratorios

Sea lo primero precisar que con el proceso ejecutivo se busca adelantar un trámite expedito conducente a obtener el pago efectivo de una obligación ya reconocida radicada en cabeza de una persona natural o jurídica. Para ello, debe mediar, indiscutiblemente, un título ejecutivo frente al cual no existe determinación legal más allá de definirlo por sus características, que sea claro, expreso, exigible y, con base en este último requisito, que provenga de la persona del deudor.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone:

> ***"Artículo 100. Procedencia de la ejecución.*** *Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme.*

> *"Cuando de los fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial según sea el caso."*

Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso establece:

> ***"Títulos ejecutivos.*** *Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley."*

El artículo 430 ibídem señala:

> *"Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso."*

En el presente caso, como título ejecutivo se allegó el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes el 27 de noviembre del 2018 dentro del proceso ordinario bajo el radicado 11001310503320170047100 adelantado por el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. en el cual se concilió el proceso por la suma de $50'000.000 los cuales debían pagarse en 16 cuotas.

De lo anterior, encuentra la Sala que como acertadamente lo dijo el fallador de primera instancia, en la conciliación que sirve de título ejecutivo únicamente se acordó al pago de $50'000.000, pero en ningún momento se

acordó el pago de intereses moratorios en favor de la parte ejecutante, por lo que es claro, que dichos intereses no se encuentran estipulados de manera clara, expresa y exigible en la conciliación que sirve de base de la presente ejecución.

Por consiguiente, acertó el fallador de primera instancia cuando negó librar mandamiento de pago por los intereses moratorios deprecados, como quiera que el documento aportado no cumple con las exigencias señaladas en el artículo 100 de C. P. del T. y de la S.S. frente a este concepto, pues como ya se explicó no contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible a cargo del ejecutado y en favor del ejecutante en cuanto a los intereses moratorios; razón por la cual no queda otro camino que confirmar la decisión proferida en primera instancia.

Medida cautelar

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del C. P. del T. y de la S.S. una vez solicitado el cumplimiento por el interesado ***y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento*** el Juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de la ejecución.

El ejecutante presenta memorial solicitando la siguiente medida cautelar:

> *"Que por prelación de créditos Laborales conforme al artículo 345 del C. S. T., se ponga a disposición de este juzgado, Los bienes muebles o inmuebles que legalmente se encuentren embargados y secuestrados dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario N° 11001340370320150050200 (Juzgado de origen 14 C.C.) que actualmente conoce el Juzgado N° 3 Civil del Circuito de Ejecución de Bogotá, cuyo demandante es el Banco Procredit Colombia S.A. (Cesionario Luís Alfreso Veloza) Contra María Olga Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Trujillo"*

Ante dicha solicitud y en aras de interpretar lo solicitado por el ejecutante, el fallador de primera instancia decretó el embargo de los remanentes existentes y/o que se llegaren a causar dentro del proceso ejecutivo hipotecario N° 2015-00502 de BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A., contra OLGA SÁNCHEZ y MIGUEL SÁNCHEZ el cual cursa actualmente en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Bogotá.

Con lo anterior, no está de acuerdo el ejecutante quien señala que nunca ha solicitado el decretó de un remanente, pues lo que pide es el embargo del crédito que se adelanta dentro del proceso ejecutivo.

Teniendo en cuenta que no es posible decretar medidas cautelares de oficio, sino que por el contrario conforme lo dispone el artículo 101 del C. P. del T. y de la S.S. para ser decretadas debe existir previa denuncia de bienes hecha bajo juramento y, como quiera, que efectivamente el actor no ha solicitado el embargo de remanentes del proceso que se adelanta ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito se revocará el numeral quinto del auto apelado; para en su lugar, ordenar al Juez que estudie la medida cautelar en los términos en que fue solicitada, y conforme lo dispone los artículos 465 y 593 del C. G. del P. a los cuales nos remitimos por disposición expresa del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S.; los cuales disponen la manera en que se deben efectuar los embargos y el procedimiento en caso de concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Una vez revisada la medida cautelar solicitada sí el Juez considera que lo peticionado no procede deberá negar lo pretendido y no como lo hizo modificando la medida cautelar pretendida.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, SALA LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el numeral quinto de la providencia recurrida, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para en su

lugar ordenar al Juez que estudie la medida cautelar en los términos en que fue solicitada.

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás.

TERCERO: Sin costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

MARLENY RUEDA OLARTE
MAGISTRADA

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
MAGISTRADO

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C

SALA LABORAL

PROCESO EJECUTIVO No. 32-2022-00264-01
ASUNTO: APELACIÓN AUTO EJECUTIVO
DEMANDANTE: SALUD TOTAL E.P.S. S.A.
DEMANDADO: MUTUAL SERVIR S.A.S.

MAGISTRADA PONENTE
MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente providencia:

3ANTECEDENTES

SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTRA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A. instauró demanda ejecutiva en contra de MUTUAL SERVIR S.A.S. con el fin de que se libre mandamiento de pago por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes a salud, intereses moratorios y las costas del proceso. (Archivo 01Demanda)

Mediante auto del 25 de julio del 2022 el *A quo* se negó a librar mandamiento de pago argumentando que, si bien es cierto, la liquidación de aportes que hace la prestadora de salud presta mérito ejecutivo por mandato legal, no es menos cierto que dicho mérito es nugatorio cuando no se hace efectivo el requerimiento extrajudicial que ordena la Ley, ello con exactitud, claridad y precisión. Que en el presente caso la parte ejecutante aportó envió del requerimiento en mora a una dirección de notificación diferente a la reportada en el certificado de existencia y representación; adicionalmente se observa que el requerimiento de aportes en mora enviado no advierte de manera clara

respecto de que trabajadores depreca la solicitud, sino que de manera genérica advierte el valor adeudado sin ser explicito lo referido. Que finalmente, se advierte que el cobro prejuridico que pobra a folio 68 hace referencia a una deuda por concepto de capital en cuantía de $34.179.700.00, en tanto que la liquidación de aportes en mora emitida por la entidad ejecutante asciende a la suma de $57.321.799.00, valor que se pretende ejecutar según las pretensiones de la demanda, no existiendo correspondencia entre el monto liquidado y aquel por el cual fue constituida en mora la deudora Se advierte al procurador judicial de la parte ejecutante, que no basta entonces con la manifestación de cobrar, pues esa manifestación debe ser como se dijo, clara y reconocida por su deudor, pues es de ella de donde emana la obligación, por lo cual debe existir una unidad entre el requerimiento y la liquidación de aportes insatisfechos, de no ser así, el titulo ejecutivo complejo creado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, no nace a la vida jurídica pues el mismo será incompleto.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión la ejecutante interpuso recurso de apelación señalando que el Despacho manifiesta que el requerimiento enviado a la demandada el día 13 de julio de 2021, fue remitido a una dirección que no corresponde a la aportada en el Certificado de existencia y representación legal, la cual es la CL 55 #43-21, como se puede identificar en el folio 62 de la demanda. Que al revisar el envió del requerimiento al deudor, este fue enviado a la dirección Cl 55 # 43 21 de la ciudad de Barranquilla, coincidiendo así con la misma dirección registrada en el certificado de existencia y representación legal de la demandada, visible en el folio 70 y 71 de la demanda. Que el Despacho indica que el requerimiento realizado a la demandada no muestra de manera clara y detallada los aportes en mora de los trabajadores sino de manera genérica, se establece en la providencia que lo que se requiere “se observa que el requerimiento de aportes en mora enviado no advierte de manera clara respecto de que trabajadores depreca la solicitud, sino que de manera genérica advierte el valor adeudado sin ser explicito lo referido.”; no obstante, respetuosamente se aparta de la manifestación realizada, y se

permite indicar que en la documental aportada con el escrito de la demanda, al verificar la información que se detalla, se establece que con dicho requerimiento y/o carta de requerimiento de pago (Carta Cobro Prejurídico) se anexa estado de cuenta, mismo, en el cual se discriminan los afiliados, valores y periodos en mora, porque dicho estado de cuenta corresponde a una liquidación similar a la allegada con el escrito de la demanda, esta última, sobre el cual versa el título ejecutivo. Que es necesario aclarar que, las cotizaciones a cobrar son por el subsistema a salud y respecto al estado de cuenta y/o título ejecutivo que se allega con la presentación de la demanda, los valores son cambiantes, primero porque la obligación es de tracto sucesivo y segundo, debido al no pago por parte del demandado, la deuda ha ido incrementándose de manera diaria, en atención a los intereses de usura, los cuales se generan diariamente. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 161 de la ley 100 de 1993 y en el artículo 92 del decreto 1295 de 1994, los empleadores que no cancelen los aportes de Seguridad Social en las respectivas fechas de vencimiento, deben pagar un interés de mora. Que la primera consecuencia que debe asumir el empleador que no paga oportunamente los aportes a seguridad social, es el pago de intereses moratorios, los cuales son intereses causados diariamente que cesaran hasta el momento del pago. Que como se manifiesta en la carta de requerimiento de pago (Carta Cobro Prejurídico) notificada y recibida a satisfacción por la demandada, tal como se demuestra con la guía de entrega emitida por la empresa de mensajería Servientrega; con dicho requerimiento se anexó un estado de cuenta en el cual se discrimina la obligación objeto de ejecución, por lo tanto, sostiene que el titulo ejecutivo base para la presentación de la demanda sí reúne los requisitos establecidos por la Ley para ser ejecutado.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero precisar que, con el proceso ejecutivo se busca adelantar un trámite expedito conducente a obtener el pago efectivo de una obligación ya reconocida radicada en cabeza de una persona natural o jurídica. Para ello, debe mediar, indiscutiblemente, un título ejecutivo frente al cual no existe determinación legal más allá de definirlo por sus características, que sea

claro, expreso, exigible y, con base en este último requisito, que provenga de la persona del deudor.

En el presente asunto, observa la Sala que pretende la ejecutante se libre mandamiento de pago por el valor de las cotizaciones en mora de los trabajadores afiliados a MUTUAL SERVIR S.A.S. junto con los intereses de mora causados por cada uno de los periodos adeudados a los trabajadores y costas procesales.

Ahora bien, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993,

> *"**ART. 24. ACCIONES DE COBRO**. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. **Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo**..." (Subrayado y resaltado al copiar)*

De manera que, las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen por ley la capacidad de promover las acciones judiciales (ejecutivo) para obtener el pago de las cotizaciones adeudadas.

Aunado a ello, los artículos 2° y 5° del Decreto 2633 de 1994, establecen los requisitos para cobrar los aportes adeudados por los empleadores incumplidos así:

> ***"ART. 2.- Del procedimiento para constituir en mora al empleador**. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, **la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá,** si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.*

> ***ART. 5.- Del cobro por vía ordinaria***. *En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad, adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes*.
>
> ***Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993***.

De donde se colige que los requerimientos al moroso se deben realizar una vez vencido el plazo para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores y antes de elaborar la correspondiente liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Teniendo claro lo anterior, precisa esta Magistratura que el requerimiento realizado debe ser conocido por el empleador moroso, pues no de otra forma puede éste manifestarse frente al mismo.

En este caso se tiene que la juez de primera instancia negó el mandamiento de pago argumentando en primer lugar que no se había enviado el requerimiento a la dirección dispuesta para notificaciones judiciales.

Una vez revisados los documentos allegados con la demandan se evidencia que el requerimiento aportado no cumple con los parámetros requeridos, primero, porque contrario a lo señalado por el apoderado de la parte ejecutante en su recurso, el requerimiento **no** fue remitido a la dirección de notificación judicial que se señala en el Certificado de la Cámara de Comercio que corresponde a la "calle 55 # 43 -21 **OF1"** conforme se observa a folio 69 del archivo "01Demanda", sino a la carrera "calle 55 # 43-21 **LC2"**

Segundo, efectivamente como lo señala el *A quo*, en el requerimiento no se le señaló al deudor los valores adeudados, ni porque trabajadores y períodos, lo cual, si bien es cierto, no se establece como requisito en las normas precitadas, lo cierto es, que como lo señala el mismo apelante la finalidad del requerimiento es asegurar que el deudor de aportes de pensiones, tenga conocimiento sobre la deuda y tenga la posibilidad de verificar sí efectivamente se encuentra en mora, lo cual no puede hacer si no se le indican los trabajadores y los valores que se adeudan.

Tercero, si bien aparece una constancia de correo certificado remitido a la ejecutada lo cierto es que en ella no se evidencia cuáles fueron los documentos que le fueron remitidos a la ejecutada y, por tanto, no existe certeza de que se hubiese efectuado el requerimiento en debida forma.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia, como quiera que el requerimiento que se aportó como título ejecutivo no cumplió su finalidad como era informar al empleador moroso, pues ni siquiera existe certeza de que lo haya recibido, al no haber sido remitido a la dirección de notificación judicial que se registra en el certificado de la Cámara de Comercio aportada por el mismo ejecutante y no haberse cotejado los documentos enviados., ni existir certificación de la empresa de correos en donde se evidencia cuales fueron los documentos remitidos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión apelada, teniendo en cuenta lo aquí expuesto.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

MARLENY RUEDA OLARTE
MAGISTRADA

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
MAGISTRADO

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA DE DECISIÓN LABORAL

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

DEMANDANTE: E.P.S. SANITAS

DEMANDADO: ADRES

RADICACIÓN: 11001220500020220169201

MAGISTRADA PONENTE: MARLENY RUEDA OLARTE

AUTO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a desatar el conflicto de competencia negativo promovido por el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Bogotá D.C. con la Superintendencia Nacional de Salud.

ANTECEDENTES

E.P.S. SANITAS promovió por conducto de apoderado judicial, demanda ordinaria laboral de primera instancia contra la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES-, cuyo conocimiento

correspondió por reparto al Juzgado 2 laboral del Circuito de Bogotá D.C. (fl. 197 archivo 202082305043472 carpeta CD1)

Mediante auto proferido el 23 de septiembre del 2020, el Juez de conocimiento resolvió remitir la demanda a la Superintendencia Nacional de Salud, por falta de competencia, señalando que las pretensiones se encontraban entre los asuntos enlistados que corresponden a la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el art. 41 de la Ley 1122 del 2007. (fls. 271 a 275 archivo 202082305043472 carpeta CD1)

Por medio de providencia proferida el 21 de enero del 2021, la Superintendencia Nacional de Salud decidió **rechazar por falta de competencia** señalando que al otorgarse competencia judicial a la Superintendencia de ninguna manera se está excluyendo a las autoridades que integran la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral del conocimiento de los asuntos descritos en el artículo 41 de la Ley 1122 del 2007 y artículo 6° de la Ley 1949 de 2019. Señala además que la concurrencia de las autoridades competentes para conocer de un determinado asunto conlleva a la necesidad de precisar ante cuál de ellas se surtirá el correspondiente trámite, lo cual en este caso correspondió a la jurisdicción ordinaria. (fls.1 a 4 archivo AUTOPR~1).

Establecida la posición de los Despachos Judiciales en conflicto, procede la Sala a resolver, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

En primer lugar, no sobra recordar que en virtud del numeral 5° del artículo 139 del Código General del Proceso, al cual nos remitimos por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando el conflicto de competencia se suscite

entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada; que en este caso corresponde a la Sala Laboral de esta Corporación.

Por otra parte, es preciso señalar que el fundamento del presente conflicto radica en determinar cuál de los dos Despachos es el competente para conocer de la demanda instaurada por el gestor, cuyas pretensiones son las siguientes:

> ***"4. PRETENSIONES***
> *Con base en los hechos que se plantearán y las pruebas aportadas, con la presente demanda se pretende:*
>
> ***Principales:***
>
> *4.1. Se declare la responsabilidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, en la causación de los perjuicios ocasionados en la modalidad de daño emergente, irrogados a SANITAS S.A.S., con ocasión del rechazo infundado de cuatrocientos noventa y un (491) ítems contenidos en cuatrocientos sesenta y tres (463) recobros, cuyo costo asciende a la suma de MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS ($ 1.052.493.903)discriminados por cada recobro…*
>
> *4.2. Como consecuencia de la declaración efectuada en el numeral anterior, se condene a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, en la modalidad de indemnización del daño emergente, al reconocimiento y pago a favor de SANITAS S.A.S., ala suma de MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS ($ 1.052.493.903)correspondientes a los cuatrocientos noventa y un (491) ítems contenidos en cuatrocientos sesenta y tres (463) recobros de conformidad con la discriminación descrita en la pretensión 4.1.*
>
> *4.3.Se declare la responsabilidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, en la causación de los perjuicios en la modalidad de daño emergente causados a la E.P.S. SANITAS S.A.S., que ascienden a la suma de CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 105.249.390)por concepto de los gastos administrativos inherentes a la gestión yal manejo de las tecnologías no incluidas en el POS objeto de*

la presente demanda, monto que equivale al diez por ciento (10%) del valor de cada recobro objeto de demanda.

4.4. Conforme a la declaración anterior, se condene a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, en la modalidad indemnización de daño emergente, al reconocimiento y pago a favor de la EPS SANITAS S.A.S., a la de suma de CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 105.249.390) de conformidad con el detalle relacionado en la pretensión 4.3

4.5. En la modalidad de lucro cesante, se condene a los demandados a pagar a favor de las demandantes, intereses moratorios, sobre el monto de que tratan las pretensiones 4.1 y 4.3, liquidados entre la fecha de exigibilidad del respectivo concepto de recobro y la de pago efectivo de su importe, a la tasa máxima de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la DIAN, conforme al artículo 4 del Decreto 1281 de 2002.

4.6. Se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

Subsidiaria

4.7. En el caso que no se condene a las demandadas al pago de los intereses moratorios reclamados, se conceda la actualización conforme a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), desde la fecha en que se venció el plazo para efectuar su pago hasta el día en que efectivamente éstas sean recibidas por la demandante."

La competencia en los términos constitucionales y legales, se refiere a las atribuciones y funciones conferidas a los órganos administrativos y judiciales en virtud de su multiplicidad, que hace necesaria la delimitación funcional, bien sea por la naturaleza del asunto, la cuantía de lo que se reclama, la calidad de las partes, y en general por todas aquellas situaciones descritas en las normas.

Descendiendo al caso de autos, la Sala observa que la Corte Constitucional mediante Auto 389 del 22 de julio del 2021 (CJU-072) al resolver un conflicto de competencia suscitado entre un Juzgado Laboral y un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá en atención a una demanda instaurada por la EPS SANITAS contra la

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social ADRES cuyas pretensiones eran similares a las que aquí nos ocupa, concluyó que las controversias relativas a los recobros efectuados por las EPS son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo dijo:

> *"La Sala encuentra, **en primer lugar,** que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social. Dicho procedimiento se adelanta cuando ya la entidad prestó el servicio (el tratamiento o el suministro del insumo excluido del PBS), en virtud de la orden proferida por un comité técnico científico –en su momento– o por un juez de tutela; es decir, no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación. En este sentido, el recobro busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última lo que pretende es recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se considera obligada por estimar que no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. En ese orden, el recobro no pretende garantizar en forma directa que el servicio o la tecnología en salud efectivamente sean prestados.*
> *(…)*
> ***En segundo lugar**, las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud vinculan, en principio, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este tipo de controversias, en consecuencia, no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores.*
>
> *(…)*
>
> *Así las cosas, comoquiera que los procedimientos de recobro son la expresión de actuaciones administrativas regladas en cabeza de una entidad pública, es razonable que su control deba estar a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa, especialmente si se tiene en cuenta que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 dispone expresamente que dicha jurisdicción "está instituida para conocer […] de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas" (negrillas fuera de texto).*

> *Planteamiento que se refuerza en el hecho de que, por medio de la demanda, también se busca el pago de perjuicios y las reparaciones de daños causados por el hecho y la omisión de una entidad pública, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante…"*

Lo anterior, por cuanto el numeral 4° del artículo 2° del C. P. del T. y de la S.S. establece que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social ***conoce de las controversias relativas a la prestación de los servicios*** de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos; por lo que se condiciona la competencia de la especialidad laboral, primero, a los asuntos relativos a la prestación de servicios del sistema de seguridad social y no al pago de prestaciones económicas a cargo del sistema, que es lo que aquí se pretende y, segundo, a las controversias entre afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades de seguridad social y no a los conflictos entre entidades de seguridad social, como en este caso.

De otro lado, el literal f) del artículo 41 de la Ley 1122 del 2007 modificado por el artículo 6° de la Ley 1949 del 2019 indica que la Superintendencia Nacional de Salud conoce de los conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de **garantizar la efectiva prestación del derecho a la Salud** de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que tampoco resulta competente para conocer del presente caso el cual es eminentemente económico.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el presente asunto gira en torno a una controversia de carácter económico relativa a procedimientos de recobro por la omisión de una entidad pública como lo es la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, lo cual conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional no corresponde a la prestación de los servicios de la seguridad social o a asuntos que deba conocer la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, ni la Superintendencia Nacional de Salud, es claro que la competencia para conocer de este proceso corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, ninguna de las autoridades involucradas en este conflicto es la competente para conocer de este asunto y como quiera que entre los deberes del Juez radica el de remitir el expediente al que considere pertinente en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a ser juzgado por el funcionario judicial a quien se le haya atribuido esa competencia y, que además, conforme a los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional, se reitera, **la competencia de este proceso radica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,** se dispondrá la remisión del presente asunto al reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá, para lo de su cargo, tal y como lo hizo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, entre otros en auto APL1531 de 12 de abril de 2018 Radicación No. 11001-02-30-000-2017-00200-01, en el que al resolver un conflicto de competencia decidió remitir el expediente a una autoridad diferente a la implicada en el conflicto.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

RESUELVE:

PRIMERO: REMITIR el expediente al reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Informar lo resuelto a los Despachos involucrados en esta actuación, por el medio más expedito.

TERCERO: Por Secretaría, procédase de conformidad con lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARLENY RUEDA OLARTE
MAGISTRADA

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
MAGISTRADO

LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO No. 27 2019 00160 01

ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA

DEMANDANTE: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

DEMANDADO: RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA

MAGISTRADA PONENTE

MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá D.C., a los Veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), día señalado por auto anterior, previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente:

SENTENCIA

Al conocer recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revisa la Corporación el fallo de fecha 8 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C.

ALEGACIONES

Durante el término de traslado para presentar alegaciones fueron remitidas vía correo electrónico las de ambas partes.

ANTECEDENTES

Solicitó la parte actora se declare que durante la afiliación a RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA los trabajadores Luz López, Manuel Castillo, Margarita Zapata, Yamel Gómez, José Rodelo y Natividad Caicedo, estuvieron expuestos 100% a factores de riesgo ocupacional que motivaron el pago a su favor de prestaciones asistenciales o en subsidio se determine el porcentaje de exposición; como consecuencia, peticiona se declare que la demandada en mención, está obligada a reembolsar a su favor los gastos que tuvo que asumir por

concepto de prestaciones asistenciales y/o económicas a prorrata el tiempo de afiliación de los trabajadores mencionados en que estuvieron expuestos a factores de riesgos que dieron lugar a las patologías laborales que contrajeron, ordenando pagar a la demandada el 100% de los valores que relaciona respecto de cada uno de ellos en escrito de demanda, el 100% por incapacidades temporales, junto con intereses moratorios y en subsidio indexación.

HECHOS

Fundamentó sus pretensiones señalando, en síntesis que, los señores Luz López, Manuel Castillo, Margarita Zapata, Yamel Gómez, José Rodelo y Natividad Caicedo, estuvieron vinculados por cuenta de sus empleadores para el cubrimiento de riesgos laborales con la demandada RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., a quienes les fue emitido dictamen de calificación de origen de las patologías que padecían entre los años 2014 y 2016, anualidades para las cuales, uno de los trabajadores se encontraban afiliados a la demandada y los demás con Positiva S.A., que al 1 de abril de 2015, todos se encontraban afiliados con la demandada, tiempo de afiliación durante el cual estuvieron expuestos a los riesgos laborales señalados en tabla que adjunta como psicosocial, físico o ergonómico, por lo que su patología fue calificada como de origen laboral.

Que como consecuencia del traslado de administradora de riesgos laborales, fueron afiliados a Positiva Compañía de Seguros S.A., a partir del 1 de abril de 2015 y atendiendo al origen de su patología, les fueron reconocidas prestaciones asistenciales y económicas en cuantía relacionada en escrito de demanda, así como incapacidades temporales, que solicitó ante la demandada el reembolso del pago de tales prestaciones, el que no se ha efectuado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada RIESGOS LABORALES COLMENA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, en relación con los hechos aceptó los enlistados en los numerales 1 a 4, 6, 7, 10 y 14, para los demás los negó y manifestó no constarle. Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de prueba de los presupuestos legalmente exigidos para que sea procedente la acción de recobro, enfermedad de origen común dentro de la vigencia de ARL Colmena, inexistencia de exposición al riesgo durante la

afiliación a Colmena S.A., falta de legitimación en la causa por pasiva, extinción de la obligación por compensación, prescripción, improcedencia de condena por concepto de intereses moratorios, ausencia de siniestro durante la afiliación a Colmena S.A., e improcedencia del derecho al recobro.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado de conocimiento, en sentencia de reconstrucción, resolvió:

> *"**PRIMERO: DECLARAR** que la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A., debe responder por el 66% del valor de las prestaciones asistenciales y económicas pagadas a la señora Luz Myriam López por Positiva Compañía de Seguros S.A., en proporción al tiempo de exposición al riesgo con cada una de ellas.*
> ***SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior **CONDENAR** a la demandada a pagar a reembolsar a **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,** las siguientes sumas:*
>
> - *$1.834.268,59 que corresponde al 66.3% de los valores pagados por prestaciones asistenciales suministradas a Luz Myriam López.*
> - *$3.642.977.59 que corresponde al 66.3% de los valores pagados por incapacidades temporales de Luz Myriam López.*
>
> ***TERCERO: NEGAR** las demás pretensiones de demanda formuladas por la demandante. (…)*

Inconforme con la decisión, interpusieron recurso de apelación ambas partes.

CONSIDERACIONES

Sería esta la oportunidad de desatar el recurso de apelación interpuesto, de no ser porque se torna necesario referirse respecto de la competencia de la especialidad laboral para resolver los conflictos de recobros judiciales.

Sobre el particular, La H. Corte Constitucional, al resolver un conflicto de competencia suscitado entre distintas jurisdicciones, conforme el numeral 11 del artículo 241 Constitucional, relacionado con el pago de recobros judiciales al estado, mediante providencia A389 de 2021, estableció el alcance de la competencia prevista en el numeral 4° del artículo 2° del CPTSS, al considerar que si bien sobre los jueces laborales recae la competencia general para dirimir las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social, ésta se encuentra condicionada a

aquellos eventos que correspondan a la prestación de servicios de la seguridad social y que se trate de una controversia entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Para tal fin, refirió los argumentos que se sintetizan a continuación:

> *Conforme lo dispuesto en el 40 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso, es claro que en los jueces laborales recae la competencia general para dirimir las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre, por un lado, los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y, por el otro lado, las entidades administradoras o prestadoras.*
>
> *La anterior posición concuerda con la sentencia C-1027 de 2002, la cual declaró exequible la modificación que el artículo 2 de la Ley 712 de 2001 hizo al numeral 4 del artículo 2 CPTSS, providencia en la cual se reiteró que la sentencia C-111 de 2000, la cual en su momento declaró exequible los cambios adoptados por la Ley 362 de 1997, providencias en las cuales la H. Corte Constitucional concluyó que a los Jueces Laborales se les entregó el conocimiento de los litigios con las entidades del régimen de la seguridad social y sus afiliados, únicamente relacionados con las obligaciones y derechos que nacen de la relación afiliado, beneficiario o usuario frente la respectiva entidad administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral.*
>
> *Que el proceso judicial de recobro no corresponde, en sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social. Dado que este se adelanta después que la EPS ha prestado el servicio, ha llevado el tratamiento o suministrado el insumo excluido del PBS, en virtud de la orden proferida por un comité técnico científico o por un juez de tutela. En consecuencia, el litigio no gira entorno a la prestación del servicio, sino a su financiación.*
>
> *En las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y no financiadas con la UPC y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores.*
>
> *La posición adoptada en la providencia A389 de 2021, ha sido reafirmada por la H. Corte Constitucional en las providencias A-390 de 2021, A-721 de 2021, A-734 de 2021, A-743 de 2021, A-744 de 2021, A-745 de 2021, A1112-21, A722 de 2022, entre otras.*

Descendiendo al caso bajo estudio, advierte la Sala que si bien el citado precedente constitucional fue adoptado con ocasión a un conflicto

relacionado con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas, que se susciten entre las EPS y la ADRES, su análisis se hace extensivo a este tipo de asuntos, pues se determinó que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social sino a su financiación, al pretenderse resolver un desequilibrio económico y no garantizar la efectiva prestación directa de un servicio. Y, que en este tipo de controversias no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores.

En efecto, de la revisión de la demanda y su contestación no hay duda alguna de que el presente asunto versa exclusivamente sobre los tiempos de exposición de unos afiliados al subsistema de riesgos laborales a cargo de cada ARL, demandante y demandada, y la procedencia de condenar al recobro solicitado por prestaciones asistenciales y económicas reconocidas a ellos, de acuerdo con la cobertura de cada una de las aseguradoras, en virtud del parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 776 de 2002, artículos 5 y 6 del Decreto 1771 de 1994 compilados en los artículos 2.2.4.4.5 y 2.2.4.4.6 del Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.

Así las cosas, conforme el antecedente jurisprudencial expuesto, en este asunto no existe controversia en la prestación de los servicios de la seguridad social entre afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Por el contrario, el proceso tiene su origen en las diferencias que se presentan en la asunción del riesgo por parte de dos administradoras que se obligaron a prestar el servicio a afiliados del subsistema de riesgos laborales, entidades sobre quienes se debe determinar las obligaciones que tiene cada una de ellas frente al financiamiento de las contingencias, aspectos que se escapan del conocimiento del juez laboral, en virtud de lo señalado en el numeral 4 del artículo 2° del CPTSS.

Es así como, al considerar que esta jurisdicción no es la competente para conocer del asunto puesto a consideración, se declarará la FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA para conocer del mismo y en aras de determinar cuál es la autoridad competente para conocer de la solicitud de recobro efectuada por una administradora de riesgos laborales a otra administradora del mismo subsistema de seguridad social, se advierte que **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** es una entidad aseguradora organizada como sociedad anónima, con el carácter de entidad

descentralizada indirecta del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado conforme el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 1º del Decreto 1234 de 2012, cuyos actos para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujeta a las disposiciones del derecho privado conforme los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, así mismo, el artículo 105 del CPACA excluyó del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual por entidades públicas que tengan el carácter de, entre otras, aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando el litigio corresponda al giro ordinario de los negocios de dichas entidades.

Por lo anterior, con apego a la normatividad en cita, se concluye que el objeto de la controversia –recobro de prestaciones- es un asunto propio de la actividad industrial y comercial de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, sujeto a las disposiciones del derecho privado, donde se discute la eventual responsabilidad de la ARL DEMANDADA en asumir, por mandato de la ley –responsabilidad extracontractual- el monto de las prestaciones a prorrata del tiempo de exposición al riesgo, el asunto no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual se debe acudir a la cláusula residual de competencia establecida en el artículo 15 del CGP, que asigna a la especialidad civil el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. En este caso, conforme la cuantía del proceso y al domicilio de las partes, su conocimiento en primera instancia corresponde al juez civil del circuito de Bogotá a quien se dispondrá remitir las diligencias.

En mérito de lo expuesto, la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida por el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá el 8 de octubre de 2021, inclusive.

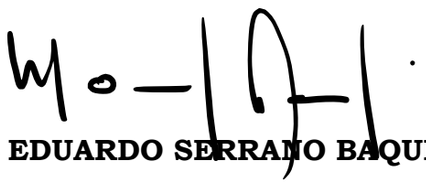
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA para conocer del presente proceso.

TERCERO: ORDENAR la remisión del expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado



LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado
ACLARO VOTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO No. 29-2019-232-01
ASUNTO: APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE: SANITAS SA EPS
DEMANDADOS: ADRES Y OTROS

MAGISTRADA PONENTE
MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés; previa deliberación de los Magistrados y conforme a los términos acordados en la Sala de Decisión, se procede a dictar la siguiente,

DECISION

El Tribunal Superior de Bogotá por conducto de la Sala Laboral, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014; contra el auto proferido por la Juez 29 Laboral del Circuito de Bogotá, el día veinticinco (25) de octubre de dos mil veintidós (2022), por medio del cual se NEGÓ el llamamiento en garantía que hiciera la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014 a ADRESS. (Expediente Digitalizado)

HECHOS

LA ENTIDAD SANITAS SA demandó a ADRES para obtener el reconocimiento y pago de las sumas de dinero que fueron asumidas por EPS Sanitas y que están relacionadas con los gastos en que esta incurrió por razón de la cobertura efectiva y

de la garantía de acceso al medicamento Forteo 250 Mg, no incorporado o excluido del Plan Obligatorio de Salud, POS (Hoy Plan de Beneficios en Salud PBS) vigente para la fecha de la cobertura y suministro del mismo y, en consecuencia, no financiado por las unidades de pago por captación, UPC, requeridos por sus afiliados y beneficiarios, cuyo valor fue asumido integralmente con recursos propios, en atención a las autorizaciones emitidas por el entonces Comité Técnico Científico (CTC); al reconocimiento de los perjuicios que ocasionó el desgaste administrativo inherente a la gestión y al manejo de dichas prestaciones. (Expediente Digitalizado).

La competencia fue asignada a la jurisdicción ordinaria laboral y fue admitida, mediante providencia de noviembre 30 de dos mil veinte (2020). (Expediente Digitalizado)

Mediante providencia de agosto once (11) de dos mil veintiuno, se vinculó a la Unión Temporal Fosyga 2014.

El Juzgado 29 Laboral del circuito de Bogotá D.C, mediante decisión que hoy revisa esta Sala, se itera, **negó el llamamiento en garantía presentado por FOSYGA.**

Manifestó la Juez que no se cumple con los presupuestos del artículo 64 del CGP, por cuanto la llamada en garantía fue demandada en este proceso dado que la promotora de la acción la considera responsable de los pagos referentes a prestaciones no incluidas en el POS, lo que resulta contradictorio al llamamiento.

Inconforme con esta decisión la apoderada de UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación, afirmando como argumentos centrales que : ".. *la figura del llamamiento en garantía se encontraba estipulada en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, el cual establecía: "(…) Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores." Del contenido de la norma citada, se puede concluir que el llamamiento en garantía es procedente cuando entre la parte y el tercero citado existe una relación de garantía de origen legal o contractual, y tiene por objeto hacer valer, en el mismo proceso, esa relación que obliga a este último a indemnizar o restituir el valor de la eventual condena. Esta figura, en palabras de la Corte Suprema de Justicia "rinde tributo al principio de la economía procesal, puesto que se evita la necesidad de una nueva litis para ejercer el llamado derecho de regresión o de reversión, entre quien sufrió la condena y la persona legal o contractualmente obligada a correr con sus consecuencias patrimoniales"; es decir, con la consagración de esta institución, el legislador buscaba desarrollar el principio de economía procesal, como uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. En este mismo sentido, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, mediante decisión del 13 de abril de 2011, señaló: "Con el propósito de resolver la anterior cuestión, memorase que las figuras procesales en cita,*

constituyen, aquel mecanismo en virtud del cual, a las partes se les posibilita para vincular al proceso a quien eventualmente y en virtud de determinada relación jurídica sustancial, deba resarcir el perjuicio causado por el llamante; es decir, lo que se pretende con el llamamiento es ejercer respecto del llamado el derecho de reversión o repetición de forma anticipada, sin que ello implique en manera alguna sustitución de partes o exoneración de las hipotéticas responsabilidades que pesen sobre el llamante. De ahí que no pueda pensarse que este llamamiento genere "impunidad civil", como lo señala el apoderado de la parte actora. Aunque en principio pueda parecer extraño que una persona jurídica o natural pueda asumir en un mismo proceso posiciones que resultan distintas, esto es la de parte principal y la de tercero, tal situación se explica por las diferentes relaciones sustanciales que se presentan en este caso entre el demandante y el demandado y la de la parte llamante y el llamado, en relación con el contrato de encargo fiduciario, ***pues una cosa es que se deba responder frente al demandante por la eventual condena que se le imponga en calidad de demandado y otra que se responda no como demandado sino como llamado en garantía frente a la condena que se le impuso al llamante en virtud de la relación existente entre aquellos (llamado y llamante), pues es perfectamente admisible en este caso que el demandado-llamado en garantía deba responder como demandado y no como llamante y viceversa*** *Sentencia de fecha 11 de mayo de 1976, proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. M.P. José María Esguerra Samper. Por tanto, es posible que dentro del proceso se vincule a través del llamamiento en garantía a una persona que ya hace parte del proceso, como ocurre en el caso analizado, pues la relación sustancial que se tiene entre el demandante y las sociedades demandadas, difiere de la que tienen la FIDUCIARIA BOGOTA S.A, y el fideicomitente PROMOTORA CENTRO HISTORICO CARTAGENA DE INDIAS S.A, con respecto a la sociedad demandante RIENZA S.A. Nótese que asumir la posición del Juez A-quo, llevaría a que en caso de desvinculación del demandado respecto del cual se niega el llamamiento, verbigracia por un desistimiento, o bien porque las pretensiones no prosperen con respecto al mismo, liberaría de toda responsabilidad en el proceso a aquella parte frente a la sociedad llamante, dejando ahí si impune respecto de ella la responsabilidad, pues no contando con la posibilidad de vincularla sino en condición de parte y no como llamada en garantía, no habría ninguna posibilidad de acarrearle consecuencias jurídicas si eventualmente llegase a declararse la responsabilidad en cabeza del llamante en este proceso, pues en tal caso para que se haga efectiva la responsabilidad sería menester que se entablara otro proceso, circunstancia que riñe con el principio de economía procesal. El aceptar entonces el llamamiento en garantía de la parte que se encuentra vinculada al proceso abre la posibilidad que en este mismo asunto no solo se decida sobre la relación jurídico sustancial entre demandantes y demandados planteada en la demanda, sino también y sobre la relación existente entre los demandados, haciendo en el mismo litigio uso del derecho de reversión que poseen los llamantes y que es el fundamento mismo del llamamiento en garantía(…)." Es decir que, si bien en el Código de Procedimiento Civil no se contemplaba de manera literal la posibilidad de efectuar el llamamiento en garantía como una demanda de coparte, mediante jurisprudencia ya se habían realizado pronunciamientos respecto de la procedencia de dicha figura, en aras de garantizar el principio de economía procesal en el proceso judicial.* ***Ahora bien, en la actualidad, la figura del llamamiento en garantía se encuentra regulada en los artículos 64 al 68 del Código General del Proceso, normas en las que claramente se expone la viabilidad jurídica de llamar en garantía a un sujeto que a su vez actúa en calidad de demandado del mismo proceso, específicamente en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 66 del estatuto procesal, el cual señala: "ARTÍCULO 66. TRÁMITE. (…) "PARÁGRAFO. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes." (Negrita y subraya fuera del texto) En***

este orden de ideas, es importante tener en cuenta que a través del llamamiento en garantía se trae al proceso una nueva relación que deberá ser objeto de discusión en él, y que es ajena a la relación sustancial principal que se está debatiendo. *Se trata de una nueva pretensión que formula el llamante frente al llamado y tiene por objeto que se ordene la indemnización de perjuicios o el reembolso a cargo del llamado de los que éste tuviere que pagarle a los demandantes, en caso de resultar condenado en la sentencia que defina de fondo el asunto. La existencia de esta relación sustancial entre llamante y llamado es la que justifica el llamamiento en garantía, pues de otra manera no podría resolverse dentro del mismo proceso.* ***En conclusión, el llamante y el llamado en garantía así sean codemandados son terceros entre sí, pues entre ellos no existe una relación jurídica común. La demanda dirigida contra ambos no tiene la virtud de vincularlos jurídicamente y crear entre ellos derechos y obligaciones recíprocas.*** *Mediante el llamamiento en garantía, se involucra al proceso una pretensión entre llamante y llamado, en virtud de la cual, se pretende hacer efectiva una obligación de garantía o de reembolso consagrada en la ley o en el contrato. Los codemandados que eran terceros entre sí se vinculan procesalmente y entran a discutir la eventual existencia de la obligación de garantía…. Cita sentencias en donde se admite el llamamiento en garantía entre codemandados y describe los contratos de consultoría que en su sentir justifican la figura, de la que dice sí existe un fundamento legal y jurisprudencial y que los contratos fueron subrogados íntegramente por Adres y se basan en os recobros no incluidos en el POS específicamente el contrato N° 043 de 2013 y que existe la obligación legal en cabeza de ADRES de pagar los recobros por prestaciones no POS, que se financiaban del antes Fosyga hoy Adres, agregando que la figura obedece a economía procesal …."*

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso de acuerdo con lo establecido en el art 66 A del C P del T y de la S S.

El llamamiento en garantía se encuentra **hoy** contemplado en el artículo 64 del Código General del Proceso, norma que lo define como una facultad que le asiste a *"**quien tenga derecho legal o contractual de exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia"**.*

Esta disposición aplicable en materia laboral en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al igual que las previstas para su trámite, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional "*debe concebirse como un instrumento procesal creado por el legislador con la finalidad de concretar el principio de la economía procesal, para vincular al proceso como parte a un tercero interviniente que, desde cuando se admite la solicitud por parte del juez, queda vinculado de manera forzosa a lo que se resuelva en la sentencia".*

El tema del llamamiento en garantía en materia laboral ha sido tratado por la H Corte Suprema de Justicia, aceptando la procedencia de esta intervención- antes de la expedición del CGP, denominados terceros, **ahora otras partes-; cuando se trata de situaciones en que se aseguran riesgos derivados de normas del CST, lo que no excluye en principio este caso, en donde se asignó la competencia a esta jurisdicción.**

Ahora bien, aunque procedente- se itera-. en materia laboral; **solo lo es cuando se cumplen los requisitos de la norma, esto es el artículo 64 del CGP; requisitos, que tal y como señaló el Juez de primera instancia y contrario a lo afirmado por la recurrente, no se dan en este caso específico;** sin que sea cierto que exista esa relación legal o contractual, derivado de un contrato de consultoría, así como tampoco resulta cierto que uno pueda ser obligado directo al pago de unos recobros como lo asegura y de otra llamado a responder en garantía por la existencia de ese contrato.

Por el contrario, se itera, clara resulta la norma cuando expresa: "***quien tenga derecho legal o contractual*** *de exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir"* y no como parece entender la recurrente **quien crea tener un derecho legal o contractual;** luego claro resulta que ese derecho debe estar acreditado, y en este caso no lo está.

La Sala en anteriores oportunidades, se ha pronunciado en casos similares, incluso cuando el que llama es ADRES; manifestando que estos solo tienen una relación de auditoria, recaudo, administración y pago derivados de unos contratos de Fiducia, **luego esta relación no es de las que la norma contenida en el art 64 del CGP indica, esto es que otorgue a quien llama a exigir indemnización de perjuicios o reembolso de posibles condenas,** pues estas estarán a cargo de la demandada Nación, Ministerio de Salud y Protección Social;(ADRES-SUCESORA), y este es justamente el objeto de la controversia, luego resulta irrelevante la posibilidad jurídica del llamamiento en codemandados, pues en este caso no existe la relación contractual que da lugar a la figura como exige la norma mencionada.

Salta a la vista que le asiste razón a la Juez de primera instancia, pues no existe tan siquiera una razón, que indique que la relación contractual entre el llamante y el llamado; los obligue a responder por las condenas; siendo se itera irrelevante que un llamado pueda a su vez ser demandado o que un demandado pueda llamar en garantía a otro demandado, pues ese no es el motivo determinante para negar la intervención;

sino esa carencia de certeza sobre la existencia de la relación legal o contractual, lo que hace que no se den los requisitos del artículo 64 CGP, que así lo exige.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la decisión del juez de primera instancia pues no se dan los requisitos contemplados en el art 64 del C G P, para acceder al llamamiento en garantía.

Costas en esta instancia, a cargo de la parte que recurre.

En mérito de lo expuesto por el Tribunal Superior de Bogotá, por conducto de la Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado.

SEGUNDO: COSTAS en la instancia, a cargo de la parte que recurre.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

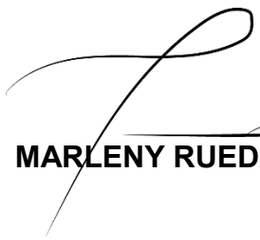
MARLENY RUEDA OLARTE

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO

LORENZO TORRES RUSSY

AUTO

Inclúyase en la liquidación de costas la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, según lo establecido en los artículos 365 y 366 del CGP.



MARLENY RUEDA OLARTE

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

PROCESO EJECUTIVO No. 22-2021-299-01
DEMANDANTE: PROTECCIÓN S.A.
DEMANDADO: ELECTROASEO DC LTDA.

MAGISTRADA PONENTE
MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Magistrada Ponente en asocio de los demás integrantes de la Sala de Decisión, profiere el siguiente,

AUTO

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la ejecutante contra la providencia proferida por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de esta ciudad, en el que se dispuso negar el mandamiento de pago solicitado.

ANTECEDENTES

Protección S.A. mediante apoderado judicial instauró demanda ejecutiva en contra de ELECTROASEO DC LTDA, para el pago de cotizaciones no canceladas de sus trabajadores afiliados a dicha AFP por valor de $13.653.246, intereses moratorios causados hasta abril de 2021 y por los que se causen a futuro, costas y gastos de proceso.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El juez de primera instancia negó el mandamiento de pago, argumentando que del requerimiento que fuera enviado a la ejecutada, si bien contaba con el sello de recibo de esta, no se podía concluir que se le hubiera remitido el estado de cuenta cuyo cobro se pretendía ejecutar.

APELACIÓN EJECUTANTE

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de apelación, alegando en resumen que el requerimiento enviado al empleador, había sido remitido conforme las previsiones del artículo 24 de la ley 100 de 1993 y conforme los artículos 244 y 262 del CGP, del que se desprendía con claridad que se había indicado con detalle el estado de cuenta de lo adeudado, aunado a lo cual, se remitió el mismo a la dirección de notificación judicial que aparece registrada en el certificado de existencia y representación legal de la ejecutada y las normas en comento, no exigen la solemnidad a que aludía la decisión recurrida.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo anterior y en la forma en que se encuentra planteado el recurso de apelación, debe la Sala determinar si la exigencia de requerir al obligado para el pago de los aportes por pensión en el sistema integral de seguridad social establecido en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, se realizó correctamente por parte de la ejecutada y con el lleno de los presupuestos que la Ley exige para que se tenga por válido, a fin de establecer si existe un título ejecutivo con todas las características que le son esenciales.

Por lo anterior, es menester señalar que los títulos ejecutivos, deben reunir necesariamente una serie de requisitos de forma y de fondo para que puedan ser considerados como tales, hallándose entre los primeros la condición de constituir plena prueba contra el deudor, con miras a evitar el abuso del litigio y para dar la certeza de que el ejecutado es el obligado.

Descendiendo al caso que nos ocupa se tiene que, en el presente asunto se pone en duda la existencia del título ejecutivo por la omisión de efectuar en debida forma los requerimientos previstos en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, que al efecto prescribe:

> *"En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimulación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordasteis.*
>
> *Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas*

> *por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993."*

Encuentra esta Sala que la norma antes trascrita establece expresamente la obligación que tiene la entidad que cobra los aportes, de constituir en mora a los deudores a través de un requerimiento en el que se le debe señalar su estado moroso y los créditos que se le cobran, ello con la finalidad de que los deudores tengan la oportunidad de conocer su estado de mora y el valor de los créditos por los que se efectúa el requerimiento; igualmente para que puedan ejercer su derecho de defensa o sanear la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, antes de la iniciación de un juicio ejecutivo en el que se generan consecuencias gravosas para sus intereses.

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley, por parte de la AFP ejecutante, se observa que junto con escrito de demanda digital, allegó el requerimiento efectuado al deudor, en donde expresamente le señalan que adjunto al mismo, se anexa la deuda que presenta y por cuáles afiliados, comunicación y anexos que fueran recibidos por la ejecutada como da cuenta el cotejo efectuado a dicha comunicación, mediante la cual se evidencia que la misma fue recibida el 28 de abril de 2021.

De conformidad con lo anterior, esta Sala encuentra que el requerimiento efectuado a la empresa ejecutada es válido, ya que analizada la documental allegada contentiva de requerimiento, se encuentra que éste fue dirigido a la misma dirección que aparece en el certificado de existencia y representación legal del ejecutado y contrario a lo manifestado por el Juez de conocimiento, se reitera, que al empleador requerido se le señaló con claridad el valor en mora y los empleados sobre quienes presenta dicha mora y exigirle sello de recibo en cada folio de los acompañados con el requerimiento, resulta ser excesivo.

Visto como está que la realización de los requerimientos previstos en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994 fueron acreditados por la entidad de seguridad social ejecutante, procede **REVOCAR** el proveído apelado y en su lugar se ordenará al Juez de conocimiento librar mandamiento de pago si, con prescindencia del punto reprochado, encuentra que existe mérito para ello.

En mérito de lo expuesto, la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C,**

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión apelada, para en su lugar ordenar al Juez de conocimiento, proferir mandamiento de pago solicitado, si, con prescindencia del punto reprochado, encuentra mérito para ello; conforme lo expuesto.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

PROCESO EJECUTIVO No. 36-2021-473-01
DEMANDANTE: COLPENSIONES S.A.
DEMANDADO: DOWELL SHCLUMBERGER INTERNATIONAL INC EN LIQUIDACIÓN

MAGISTRADA PONENTE
MARLENY RUEDA OLARTE

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Magistrada Ponente en asocio de los demás integrantes de la Sala de Decisión, profiere el siguiente,

AUTO

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la ejecutante contra la providencia proferida por el Juzgado 36 Laboral del Circuito de esta ciudad, en el que se dispuso negar el mandamiento de pago solicitado.

ANTECEDENTES

Colfondos S.A. mediante apoderado judicial instauró demanda ejecutiva en contra de DOWELL SHCLUMBERGER INTERNATIONAL INC EN LIQUIDACIÓN, para el pago de cotizaciones no canceladas de sus trabajadores afiliados a dicha AFP por valor de $46.922.410, intereses moratorios causados a partir de la exigibilidad de cada una de las cotizaciones, así como los que se causen a futuro.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El juez de primera instancia negó el mandamiento de pago, argumentando que si bien se había acreditado en debida forma el envío del requerimiento exigido por la Ley, la liquidación aportada al proceso y la remitida al

empleador moroso distaban en cuanto a la liquidación de los intereses moratorios peticionados.

APELACIÓN EJECUTANTE

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de apelación, alegando en resumen que no se presentaba la incongruencia en los valores indicada por el despacho, ya que la liquidación de los intereses moratorios se había realizado conforme lo dispuesto en la Ley.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo anterior y en la forma en que se encuentra planteado el recurso de apelación, debe la Sala determinar si la exigencia de requerir al obligado para el pago de los aportes por pensión en el sistema integral de seguridad social establecido en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, se realizó correctamente por parte de la ejecutada y con el lleno de los presupuestos que la Ley exige para que se tenga por válido, a fin de establecer si existe un título ejecutivo con todas las características que le son esenciales.

Por lo anterior, es menester señalar que los títulos ejecutivos, deben reunir necesariamente una serie de requisitos de forma y de fondo para que puedan ser considerados como tales, hallándose entre los primeros la condición de constituir plena prueba contra el deudor, con miras a evitar el abuso del litigio y para dar la certeza de que el ejecutado es el obligado.

Descendiendo al caso que nos ocupa se tiene que, en el presente asunto se pone en duda la existencia del título ejecutivo por la omisión de efectuar en debida forma los requerimientos previstos en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, que al efecto prescribe:

> *"En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimulación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordasteis.*
>
> *Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante*

> *comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993."*

Encuentra esta Sala que la norma antes trascrita establece expresamente la obligación que tiene la entidad que cobra los aportes, de constituir en mora a los deudores a través de un requerimiento en el que se le debe señalar su estado moroso y los créditos que se le cobran, ello con la finalidad de que los deudores tengan la oportunidad de conocer su estado de mora y el valor de los créditos por los que se efectúa el requerimiento; igualmente para que puedan ejercer su derecho de defensa o sanear la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, antes de la iniciación de un juicio ejecutivo en el que se generan consecuencias gravosas para sus intereses.

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley, por parte de la AFP ejecutante, se observa que junto con escrito de demanda digital, allegó el requerimiento efectuado al deudor, en donde expresamente le señalan que adjunto al mismo, se anexa la deuda que presenta y por cuáles afiliados, comunicación y anexos que fueran recibidos por la ejecutada como da cuenta el cotejo efectuado a dicha comunicación, mediante la cual se evidencia que la misma fue recibida el 5 de febrero de 2021.

El requerimiento enviado al empleador, indica que se encuentra en mora el pago de aportes en una suma total de $46.668.939, valor que corresponde al que se pretende ejecutar por concepto de capital, igual circunstancia se evidencia respecto de los intereses moratorios que se calculan en un total de $146.088.288, para un total de deuda de $193.010.689, valor en el que se estima la cuantía de esta ejecución, así las cosas no se advierte la incongruencia referida por la decisión recurrida y en gracia de discusión tal argumento tampoco resultaría válido, en tanto se observa que la liquidación en mención, cumple con los requisitos previstos en la normatividad en cita y en el artículo 422 del CGP, aunado a lo cual, la naturaleza de la información consignada en la misma, determina su constante variación, la que obedece a circunstancias como el pago parcial que pueda efectuar el empleador de las sumas adeudadas, la variación **mensual** a la que está sujeta el interés moratorio que debe liquidar la administradora de pensiones, por estar facultada por virtud de la ley para ello.

Es así como atendiendo a las diferentes variables a la que se encuentra sujeta la liquidación allegada como título ejecutivo, no se puede afirmar que

la misma, sea inmodificable como lo señala la Juez de conocimiento; a su vez, de no ajustarse a la realidad las sumas señaladas en liquidación allegada como título, le corresponde a la ejecutada en la etapa procesal prevista para el efecto, manifestar aquella circunstancia, allegando prueba de su afirmación; lo anterior determina en esta oportunidad que la liquidación allegada por la ejecutante, cumple como se indicó con los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994 y 422 del CGP, razón por la cual, procede **REVOCAR** el proveído apelado y en su lugar se ordenará al Juez de conocimiento librar mandamiento de pago si, con prescindencia del punto reprochado, encuentra que existe mérito para ello.

En mérito de lo expuesto, la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C,**

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión apelada, para en su lugar ordenar al Juez de conocimiento, proferir mandamiento de pago solicitado, si, con prescindencia del punto reprochado, encuentra mérito para ello; conforme lo expuesto.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C

SALA LABORAL

PROCESO ORDINARIO No. 12 2018 00295 01
DEMANDANTE: JORGE IVÁN BOHÓRQUEZ
DEMANDADO: LUIS EDUARDO DURÁN

MAGISTRADA PONENTE

MARLENY RUEDA OLARTE

Primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La parte demandada, vía correo electrónico allega solicitud de desistimiento del proceso por transacción.

Sobre el particular, debe señalarse que en cuanto a la transacción, el Código Civil establece:

> *Art. 2469. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.*

Por su parte, el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, señala:

> *Validez de la transacción. Es válida la transacción en asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutible.*

De otro lado, el art. 312 del Código General del Proceso refiere que las partes pueden transigir la Litis en cualquier estado del proceso así como las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia y para que produzca efectos procesales, debe solicitarse por las personas que participaron en ese acto, además, precisa que se debe aceptar la misma

siempre que se ajuste al derecho sustancial, declarando en consecuencia terminado el proceso, siempre que verse sobre la totalidad de los derechos debatidos en el juicio.

Respecto a la figura de la transacción, no se puede pasar por alto que de vieja data la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que es de la esencia de esa figura que las partes hagan concesiones, o lo que es lo mismo, que pierdan parte del derecho que creen les corresponde, pues si el acto se limita a reconocer derechos a una sola, o renunciar a los que no se encuentran en disputa, no puede considerarse a ese acto procesal como transacción[1].

De acuerdo a las anteriores normas legales de carácter sustancial y procesal, aunado a lo que ha adoctrinado el máximo órgano de la justicia laboral ordinaria, se debe dar validez a los acuerdos celebrados entre las partes, a fin de precaver un posible litigio o terminar el mismo, **siempre y cuando versen sobre derechos inciertos y discutibles, pues aun por voluntad de las partes, estas se encuentran vedadas para transar derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, protegidos además por normas de orden público.**

De conformidad con las normas legales y jurisprudencia antes reseñada se observa del acuerdo de transacción aportado y suscrito por las partes demandante y demandada el 20 de enero de 2023, que en la cláusula cuarta se acordó transar la Litis en la suma de $10.000.000 y revisada la sentencia proferida en primera instancia, en el numeral SEGUNDO literal f., de dicha decisión, se ordenó a la demandada al pago a favor del demandante de los aportes pensionales comprendidos entre el 7 de diciembre de 2015 al 8 de septiembre de 2017.

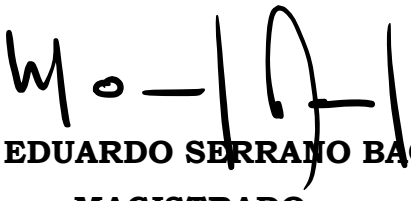
[1] Sentencia del 27 de abril de 2016 Rad. 51753.

Así las cosas, es bien sabido que los derechos pensionales, son de carácter irrenunciable e imprescriptible y como se señaló al inicio de este pronunciamiento, sobre tal naturaleza de derechos, no puede recaer el acuerdo transaccional; máxime cuando es una condena que debe cubrirse ante la respectiva entidad de seguridad social y no directamente al trabajador; razón por la cual, en tanto el acuerdo transaccional no cumple con las previsiones de la normatividad antes citada, como quiera que con este se pretende transar un derecho irrenunciable y no se acreditó el cumplimiento de tal obligación, **no resulta procedente aceptar la transacción allegada.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARLENY RUEDA OLARTE
MAGISTRADA



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
MAGISTRADO



LORENZO TORRES RUSSY
MAGISTRADO

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA MARLENY RUEDA OLARTE

Bogotá D.C. primero (01) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

A efectos de dar trámite a la solicitud de desistimiento presentada por el apoderado de la parte demandada UGPP, requiérase a abogado para que en cumplimiento de los artículos 315 y 316 del CGP, aplicable por analogía a los asuntos del trabajo, acredite la facultad para desistir.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-003-2021-00529-01
DEMANDANTE:	GLORIA AMPARO BARAJAS VÁSQUEZ
DEMANDADO:	CASUR
ASUNTO:	Apelación Auto del 22 de marzo de 2022
JUZGADO:	Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Rechaza demanda – Competencia
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra del Auto del 22 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **GLORIA AMPARO BARAJAS VÁSQUEZ** contra la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, con radicado No. **11001-31-05-003-2021-00529-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, la señora GLORIA AMPARO BARAJAS VÁSQUEZ formuló demanda ordinaria laboral contra la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, con miras a que se declare que tiene derecho a que se le reconozca, liquide, pague y sustituya la Pensión (asignación de retiro), que en vida devengaba su esposo José Rodrigo Palacio Cano (Q.E.P.D.); como consecuencia de ello, se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión en un cincuenta por ciento (50%) de la asignación mensual de retiro que devengaba causante, a partir del 17 de febrero de 2010; que una vez cese el

derecho pensional a favor del menor Sebastián Palacio Gómez, el 50% restante de la mesada pensional se acrecenté en su favor; que se ordene la actualización, nivelación y recomposición de la mesada pensional; se condene al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y se ordene su inclusión en nómina.[1]

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 22 de marzo de 2022, rechazó la demanda al considerar, en síntesis, que la Jurisdicción Ordinaria Laboral no era la competente para conocer del presente asunto, sino que lo era la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en razón a que la demandada era un establecimiento público y lo que perseguía la acción era el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de un empleado público.[2]

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte DEMANDANTE presentó recurso de apelación argumentando que el Juez interpretó erróneamente el numeral 4º del artículo segundo del C.P.T. y S.S., pues la demanda contiene un conflicto surgido dentro de un tema específico de Seguridad Social porque se pretende el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobrevivientes deprecada por la cónyuge supérstite del causante, y si bien es cierto la asignación de retiro devengada por este tuvo su origen en una relación legal y reglamentaria que como servidor público de la Policía Nacional, para el momento en que empezó a devengar la asignación de retiro, ya se había retirado del servicio, por lo que era un simple ciudadano, de ahí que el conflicto que en la actualidad surge es totalmente independiente de la antigua relación legal y reglamentaria que el causante tuvo en el pasado, pues ahora es el surgido entre una beneficiaria de la Seguridad Social que reclama una prestación y la negativa de la entidad que de reconocerla. Agregó, que la Jurisdicción Contencioso Administrativa no es la competente para conocer de estas controversias específicas y concretas sobre la seguridad social, como sí lo es, por expreso mandato de la ley 712 de 2001 y 1564 de 2012, la Jurisdicción Ordinaria Laboral, ya que, en este caso, la demandante no ostenta, ni ha ostentado la calidad de servidora pública y solo aspira a que se le reconozca una pensión de sobrevivientes. Además, que Las altas Corporaciones han precisado en varias

[1] Fs. 3-15 Archivo 01 Expediente Digital
[2] Archivo 02 Expediente Digital

sentencias que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo, ni los actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia.[3]

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente rechazar la demanda.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Ahora, lo pretendido en la demanda es el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor José Rodrigo Palacio Cano (Q.E.P.D.), a quien en vida la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL le reconoció la asignación de retiro por haber prestado sus servicios a la Policía Nacional.

Teniendo claro lo anterior, ha de indicarse que los argumentos del recurrente no tienen vocación de prosperidad, pues considera la Sala que la Jurisdicción Ordinaria Laboral no es la competente para estudiar la para estudiar la procedencia de sustituir o no una prestación que en vida le había sido reconocida a un servidor público por parte de una entidad pública, por las razones que se pasan a explicar:

Si bien como lo expone el apelante, el numeral 4º del artículo 2º del C.P.T. y S.S., modificado por el 622 de la Ley 1564 de 2012, determina que la Jurisdicción

[3] Archivo 03 Expediente Digital

Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, conoce de: "*Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos*.". Esta disposición normativa, que alude a la competencia general de esta jurisdicción, enseña que los conflictos jurídicos que se susciten entre los afiliados al Sistema general de Seguridad Social con las entidades que administran el mismo, serán conocidos por la justicia ordinaria laboral, sin prescribir excepción alguna en relación con la calidad jurídica del empleado afiliado a dicho sistema.

Sin embargo, en el presente asunto hay que tener en cuenta dos aspectos a saber: **(i)** que quien causó la prestación que se pretende sustituir ostentó la calidad de servidor público, y **(ii)** que la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, entidad pagadora de la prestación, es una entidad pública que no hace parte del SGSSP.

En esos términos, tal como lo consideró el A quo, se debe acudir a lo reglado por el CPACA, que en su artículo 104, establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los siguientes procesos:

(…)

"*4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público."*

Tenemos entonces, que al no tratarse una controversia propia del SGSSP, la Jurisdicción Ordinaria Laboral no es competente para conocer la misma, sino que al ser la prestación económica una asignación de retiro que devengaba quien había sido servidor público y que está a cargo de la entidad pública, dicha competencia recae sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en razón a que la disposición normativa en cita, ha de entenderse que se refiere a los regímenes especiales que existen en nuestro ordenamiento jurídico y al cual se encuentran vinculados algunos servidores públicos, como era el caso de del señor José Rodrigo Palacio Cano (Q.E.P.D.).

De otro lado, en tratándose de falta de jurisdicción y competencia, debe decirse que la normatividad adoptada con el Código General del Proceso, consagró la figura de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia en los artículos 16 y 138, la cual presupone que frente a la declaratoria de la pérdida de la misma por parte del juzgador o la corporación de segunda instancia, las diligencias deban enviarse a quien corresponda, conservando absoluta validez lo actuado, aun si se

ha proferido sentencia, salvo que la causal invocada lo sea por el factor subjetivo o funcional, evento en el cual se invalida únicamente la sentencia para que sea proferida por la autoridad correspondiente. Lo anterior, con el fin de dotar de celeridad los trámites judiciales y lograr una eficaz administración de justicia.

En ese orden, atendiendo a que la calidad de empleado público del causante es lo que da competencia a la Jurisdicción Contenciosa para conocer de la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es claro que la falta de jurisdicción que se presenta por parte del Juez Laboral lo es por el factor subjetivo, de ahí que resulta acertada la decisión del A quo de rechazar la demanda o ordenar remitir las diligencias al juez competente.

Así las cosas, la decisión de instancia será confirmada. Sin Costas en esta instancia por no aparecer causadas al no haberse trabado la litis.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

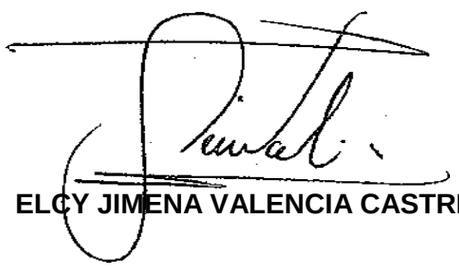
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 15 de junio de 2022, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-008-2021-00524-01
DEMANDANTE:	FABIO ANDRADE TORRES
DEMANDADO:	LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y OTRO
ASUNTO:	Apelación Auto del 27 de julio de 2022
JUZGADO:	Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Rechaza demanda
DECISIÓN:	REVOCA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra del Auto del 27 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **FABIO ANDRADE TORRES** contra la **NACIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA** y **ECOPETROL S.A.** con radicado No. **11001-31-05-008-2021-00524-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, el señor FABIO ANDRADRE TORRES formuló acción de reparación directa contra la NACIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y ECOPETROL S.A. con miras a que se declare que las demandadas son responsables de los daños que le fueron causados en su condición de trabajador o pensionado, por la omisión en el pago del 3% sobre las utilidades de Ecopetrol y/o Prima de Servicios y/o Bono Eva, o cualquier otra denominación con objetivo similar; en consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de $15.551.570 por cada año trabajado, por concepto de perjuicio de rentabilidad del

3% anual correspondiente al valor de las utilidades sobre $2.760.148.633 del año 1.962 hasta $11.560.000.000.000 del año gravable 2019, a prorrata por los años trabajados; igualmente, se condene a la suma de $67.182.178 por concepto de perjuicio de rentabilidad y falta de pago del 3% anual sobre $2.760.148.633 del año gravable 1962 hasta $11.560.000.000.000 del año gravable 2019, a prorrata por los años trabajados, junto con la suma de $20.286.843 por cada año trabajado por perjuicios patrimoniales consolidados del lucro cesante como es la renta frustrada correspondiente del 3% anual, e igualmente, la pérdida del valor adquisitivo calculado sobre el IPC por perjuicios morales, la suma de $50.000.000 correspondiente a los daños de relación debidamente indexada, y las costas del proceso[1].

Repartida la demanda al Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera, mediante proveído del 14 de octubre de 2020 declaró su falta de competencia y ordenó remitir el proceso a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá para que sea sometido a reparto entre los Juzgados de la Sección Segunda. [2]

En ese orden, se repartió la demanda al Juzgado 52 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda, quien, mediante auto del 20 de octubre de 2021, declaró que carece de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, y es por ello que, ordenó remitir las diligencias al Juez Laboral del Circuito de Bogotá (reparto).[3]

A través de Providencia del 11 de febrero de 2022, el Juzgado de conocimiento, que lo fue el Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, resolvió devolver la demanda al apoderado de la parte demandante: "…*para que adecue la demanda al procedimiento laboral teniendo en cuenta los requisitos exigidos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001 y todas las formalidades del Decreto 806 de 2020, toda vez que la misma estaba invocada con fundamentos procesales de lo contencioso administrativo, ley 1438 de 2011, en especial lo atinente la relación de los medios de prueba que pretende hacer valer en el juicio. Para lo cual se otorga el término de 5 días so pena de rechazo … No se reconoce personería adjetiva al profesional del derecho hasta tanto no se ajuste el nuevo poder conforme a los lineamientos*

[1] Páginas 1 a 10 Archivo 01 Expediente Digital
[2] Archivo 04 del expediente digital
[3] Archivo 11 del expediente digital

establecidos en el art. 74 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y según lo establecido en el Decreto 806 de 2020".[4]

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 27 de julio de 2022, rechazó la demanda por no haber sido subsanada.[5]

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte DEMANDANTE presentó recurso de apelación argumentando que *"El Juzgado 52 Administrativo remitió la demanda con estado del 21 de Octubre de 2021 y el Juzgado Octavo Laboral publica el Auto de Subsanación de estado del 20 de Octubre de 2021 … Loa (sic) anterior, generó confusión en la fecha en que fue radicada la demanda y la fecha en la cual se le asignó el número de radicación".*[6] Por tal motivo, solicitó se revoque el auto impugnado y se vuelva a correr traslado para la subsanación de la demanda, para evitar que el derecho al debido proceso se vea afectado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

No encontrando vicios que puedan generar la nulidad de lo actuado en primera instancia y surtido el término previsto en el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007 se profiere la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente rechazar la demanda.

[4]Archivo 03 Expediente Digital
[5] Archivo 04 Expediente Digital
[6] Archivo 04 Expediente Digital

CONSIDERACIONES

En aras de resolver el problema jurídico planteado primeramente ha de advertir la Sala que el argumento expuesto por la parte convocante en cuanto a la confusión que presuntamente se le presentó para atender el requerimiento de la subsanación efectuado por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, no resulta atendible, toda vez que, tal proveído datado 11 de febrero de 2022, fue debidamente notificado en el estado electrónico del Despacho el 14 de febrero de símil año, como se observa en el link https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36156836/99054635/AutosEstado016.pdf/2fc0f254-6ca5-4b7b-9141-084d76be14ce; de manera que la abogada de la parte demandante en cumplimiento del deber que le asiste en virtud del mandato que le fue otorgado, debió estar atenta al estado electrónico en referencia y verificar el contenido de la decisión en mención, en aras de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por el *a quo.*

No obstante, debe la Sala manifestar que no comparte la decisión del Juzgado de Conocimiento de rechazar la demanda formulada por la parte activa, porque no se advierte que el proceso de calificación se haya efectuado debidamente y en los términos previstos 28 del CPT y de la SS, lo cual no puede ser pasado por alto por el Colegiado en respeto de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia del demandante, pese a que ello no se encuentra advertido por su apoderada en el recurso de apelación.

Nótese que conforme a la normatividad *ejusdem*, *"Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale",* siendo clara la normativa en prever, que el Juez debe advertir los yerros que contiene el *libelo genitor,* los cuales deben definirse a la luz de los requisitos formales que debe contener la demanda, según lo previsto en el artículo 25 del CPT y de la SS, que a la letra dispone:

> *"La demanda deberá contener:*
>
> *1. La designación del juez a quien se dirige.*
>
> *2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.*

3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.

4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.

5. La indicación de la clase de proceso.

6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.

7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.

8. Los fundamentos y razones de derecho.

9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y

10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.

Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo".

En ese orden, cuando el juzgador se encuentra en el proceso de calificación de la demanda, este debe valorar si tal escrito cumple con cada uno de los requisitos ya enunciados, y en caso de no ajustarse a ellos, debe señalar expresamente las falencias que se presentan, a fin que la parte demandante pueda corregir debidamente, aquello que no se ajustó a la ley en cuando a la forma y requisito de la demanda.

Tal tarea, no fue debidamente desplegada por el Juzgado de Conocimiento, pues nótese que en el auto de fecha 11 de febrero de 2022, que como ya se dijo, se notificó mediante el estado electrónico del 14 de febrero de símil año, se resolvió devolver la demanda para la parte activa la adecuara al procedimiento laboral conforme al artículo 25 del CPT y de la SS, ya que la misma se construyó con base en las normas procesales de lo contencioso administrativo, especialmente en lo que a las pruebas se refiere, pues inicialmente fue radicada en tal jurisdicción, misma que procedió a remitirla a los Juzgados Laborales por no considerarla de su competencia. Aunado a ello, *el quo* ordenó ajustar el poder conforme a lo establecido en el artículo 74 del CGP.

En ese orden, la falladora de primer grado se limitó a referirle a la parte convocante de una manera genérica y escueta que la demanda no cumplía con los requisitos formales previstos en el artículo 25 del CPT y de la SS, sin definir con precisión y claridad, qué acápite no estaba acorde a la ley, ni las razones por las

cuales debía adecuarse, como quiera que ninguna falencia le señaló en cuanto a la autoridad a la que debía dirigirse, a los hechos, a las pretensiones y, en general, a todos los elementos que componen el *libelo genitor*, que dicho sea de paso, en el *sub judice* contiene todos los títulos que se acaban de mencionar, como se constata en las páginas 1 a 10 del Archivo 01 carpeta 01 del expediente digital. Sumado a que, respecto de los medios de prueba, ningún yerro le precisó.

De manera que, si bien el *a quo* debía proceder a calificar la demanda porque tal trámite no se efectuó en la jurisdicción contencioso administrativo, en tanto una vez la recibió procedió a su remisión por falta de competencia, lo cierto es que tal trámite debió ser desplegado debidamente por el Juez Laboral, quien no debía limitarse a indicar simplemente que la demanda no cumple con lo previsto en el artículo 25 del CPT y de la SS, porque inicialmente fue radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Es por lo anterior, que la Sala no respalda la decisión de primer grado opugnada, ya que la misma implicó el rechazo de la demanda, sin que previamente se le haya especificado a la parte actora los yerros puntuales de su escrito, para que esta con la debida claridad adecuara aquello que verdaderamente no se ajustara a los requisitos previstos en el artículo 25 del CPT y de la SS.

Así las cosas, la decisión de instancia habrá de ser revocada, para que en su lugar, el Juzgado de Conocimiento proceda a calificar nuevamente la demanda, y en caso de ser procedente, le señale a la parte actora las deficiencias puntuales que han de ser subsanadas en el término legal de cinco (5) días. Sin Costas en esta instancia por no aparecer causadas al no haberse trabado la Litis.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

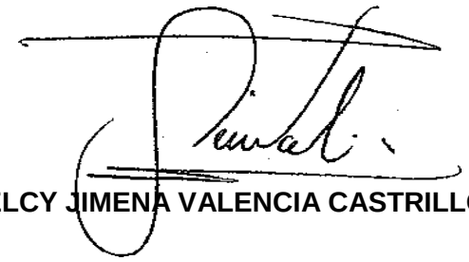
RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el Auto del 27 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, para que en su lugar, el Juzgado de Conocimiento proceda a calificar nuevamente la demanda, y en caso de ser procedente, le señale a la parte actora las deficiencias puntuales que han de ser subsanadas en el término legal de cinco (5) días, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-

-SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

La apoderada de la parte demandada PORVENIR S.A, allegando poder para el efecto, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dado su resultado adverso.

Previo a resolver, por ser procedente y ajustarse a lo dispuesto en el artículo 75 del CGP, se reconocerá a la abogada PAULA HUERTAS BORDA identificada con la cédula de ciudadanía No 1.020.833.703, portadora de la T.P No 369744 del C.S.J., miembro adscrito a la firma de abogados GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S, conforme se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal que se aporta (f.42 -Pg. 9 de 16), como apoderada de la sociedad demandada PORVENIR S.A.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta

impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

Igualmente la Alta Corporación ha precisado que para conceder el recurso se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: (i) la *summa gravaminis* debe ser determinable, es decir, cuantificable en dinero, no son susceptibles de valoración las condenas meramente declarativas, (ii) el monto debe superar la cuantía exigida para recurrir en casación, (iii) en gracia de discusión, los montos objeto de reproche debieron ser calculables, demostrables y superar el debate probatorio en aras de salvaguardar el derecho defensa y contradicción de las partes.

También, refiriéndose a casos similares presentados por la sociedad aquí recurrente, Porvenir S.A, ha asentado que:

> *"De acuerdo con lo anterior, Porvenir S.A. no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el ad quem al ordenar la devolución de saldos, no hizo otra cosa que instruir a esta sociedad, en el sentido que el capital pensional de la accionante sea retornado, dineros que, junto con sus rendimientos financieros y el bono pensional, son de la afiliada. Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de habérsele privado de su función de administradora del régimen pensional de la demandante, en tanto que dejaría de percibir, a futuro, los rendimientos por su gestión, perjuicios estos que además de no evidenciarse en la sentencia de segunda instancia, no se pueden tasar para efectos del recurso extraordinario." (AL1226-2020[2]).*
>
> *[…]*
>
> *"Para desestimar tal petición basta decir, que si bien podría pregonarse que la misma se constituye en una carga económica para el Fondo demandado, no se demostró que tal imposición superara la cuantía exigida para efectos de recurrir en casación; y en esa medida por obvias razones, no pueden ser objeto de cuantificación para hallar el interés económico, por consiguiente, se declara bien denegado el recurso de casación formulado por la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A." (AL2866-2022[3]).*

---

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*
[2] Magistrada ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.
[3] Magistrado ponente: GERARDO BOTERO ZULUAGA.

Acorde con lo anterior, es de mencionar que de acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$120´000.000.**

En el presente caso, el fallo de primera instancia declaró la ineficacia del cambio de régimen pensional, condenando a PORVENIR S.A, en lo que respecta a la demandante, a devolver a COLPENSIONES lo relativo a gastos de administración, comisiones y seguros previsionales, debidamente indexados.

Así las cosas, el interés jurídico de la parte accionada para recurrir en casación, se encuentra determinado por el monto de las condenas impuestas en la segunda instancia; no obstante, acatando los precedentes y directrices del Máximo Órgano de Cierre de la jurisdicción laboral [4], ante la falta de elementos de juicio que, debatidos en el proceso, permitan cuantificar de forma concreta el agravio sufrido por la recurrente, se torna improcedente conceder el recurso de casación interpuesto por la demandada, en consecuencia, se negará.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER a la abogada PAULA HUERTAS BORDA, como apoderada de PORVENIR S.A.

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado

[4]Magistrado ponente: LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ. Acción de tutela contra providencia judicial, caso que versa sobre la ineficacia del traslado del RPM al RAIS donde en sede de tutela la Sala de Laboral de la Corte Suprema de Justicia exhorta a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para que, en lo sucesivo, acate el precedente judicial emanado del Alto Tribunal. STL3078-2022

por la demandada PORVENIR S.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

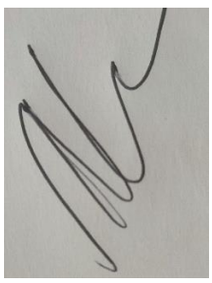
Alberson

H. MAGISTRADA DRA. ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que la apoderada de la parte demandada PORVENIR S.A, allegando poder para el efecto, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023).



ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-013-2021-00213-01
DEMANDANTE:	PEDRO ANTONIO TORRES BELTRÁN
DEMANDADO:	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO SAS HOY PPCI INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
ASUNTO:	Apelación Auto del 25 de enero del 2023
JUZGADO:	Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Nulidad
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDADA en contra del Auto del 25 de enero de 2023, proferido por el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **PEDRO ANTONIO TORRES BELTRÁN** contra **PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S.A.S.** hoy **PPCI INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.**, con radicado No. **11001-31-05-013-2021-00213-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, el señor **PEDRO ANTONIO TORRES BELTRÁN** formuló demanda ordinaria laboral contra **PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S.A.S.** hoy **PPCI INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.**, con miras a que se declare que su asignación salarial al momento de finalizar el vínculo laboral fue de $4.316.000 y que el finiquito se produjo por despido indirecto imputable a la empleadora, aunado a que la sociedad ejerció actos de acoso laboral y desmejoró injustificadamente sus condiciones laborales; en consecuencia, se condene a la

demandada a la indemnización por despido sin justa causa, los perjuicios extrapatrimoniales causados por las conductas de acoso laboral, reliquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones por el período comprendido entre el 29 de marzo de 2017 y el 19 de febrero de 2021, de conformidad con el salario realmente devengado, la licencia de paternidad causada el 17 de julio de 2020, las comisiones generadas entre los años 2019 y 2021, así como las horas extras causadas desde el 29 de marzo de 2019, junto con la indemnización moratoria, indexación y ordenar compulsar copias a la UGPP para que inicie investigación contra la demandada por omisión o inexactitud en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.[1]

Una vez admitida la demanda, el Juzgado de Conocimiento profirió el auto del 4 de noviembre de 2022, mediante el cual dispuso tener por no contestada la demanda por el extremo pasivo, y fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y de la SS, para el 25 de enero de 2023 (Archivo 14 del expediente digital), misma que se celebró en la fecha en mención, en la cual estando en la etapa de saneamiento del proceso, la parte demandada presentó solicitud de nulidad bajo el argumento que no recibió correo electrónico tendiente a notificar la demanda ni el auto admisorio de la misma, y es por ello que, no se allegó la respectiva contestación.

Agregó que si bien en auto del 4 de noviembre de 2022, el *a quo* refirió que e-entrega como servicio de correo autorizado certificó el envío y apertura del correo electrónico, lo cierto es que en la realidad sólo se certificó su entrega, más no su apertura, aunado a que solo tuvo conocimiento de la demanda el 7 de diciembre, dado que a su dirección electrónica no llegó la respectiva notificación, como lo puede verificar el Despacho mediante inspección judicial o cualquier otra prueba que a bien considere decretar y practicar.[2]

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 25 de enero de 2023, resolvió negativamente la nulidad propuesta por la parte demandada.

[1] Páginas 2 a 15 Archivo 01 y páginas 04 a 48 Archivo 06 del Expediente Digital
[2] Minuto 08:12 – 10:41 Archivo de audio 17 del Expediente Digital

Como fundamento de su decisión, el A quo manifestó que, para resolver la nulidad planteada resulta aplicable lo definido por la Corte Constitucional sobre la exequibilidad condicionada del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, como quiera que la Ley 2213 de 2022 adoptó como legislación permanente la mentada norma, acotando que conforme a dicha decisión, lo relevante para comenzar a contabilizar el término con que cuenta la pasiva para contestar la demanda, es cuando el iniciador acuse recibido o se pueda constatar por otro medio el acceso del destinatario al mensaje de datos; por tanto, en el presente caso no se configura la nulidad alegada, que lo es con sustento en la causal de indebida notificación, como quiera que la parte activa allegó certificado que da cuenta de notificación electrónica a la sociedad demandada al correo administración@protecciónc ontraelfuego.com.co, que coincide con el reportado en su certificado de existencia y representación legal, aunado a que en la referida certificación se indicó que se obtuvo acuse de recibido el 7 de diciembre de 2021, existiendo constancia además, que se remitieron los archivos de la demanda, su subsanación y el auto que la admitió, siendo claro que la parte accionante probó que envió al correo electrónico de la llamada a juicio, la notificación correspondiente.

Concluyó advirtiendo que no es procedente decretar dictamen pericial, pues la parte pasiva debió allegarlo para acreditar su dicho, esto es, que no recibió la notificación aludida, pues la activa acreditó el hecho contrario. [3]

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte DEMANDADA recurrió la decisión argumentando, en síntesis que, todas las comunicaciones recibidas respecto del presente proceso fueron remitidas específicamente a los correos de la firma Peralta Abogados y Asociados, acotando que no se recibió ninguna comunicación de la empresa e-entrega tendiente a notificar el auto admisorio de la demanda, y es por ello que, no presentó su contestación en el término del traslado otorgado por el Despacho. Adujo que la manifestación de no haber recibido la notificación, se ha realizado bajo la gravedad del juramento, lo cual no puede ser desconocido por el administrador de justicia, máxime que se hicieron todas las verificaciones del correo de la sociedad, encontrando que el mensaje de datos que contenía la notificación personal del auto admisorio de la demanda, no fue recibido por la pasiva. Añadió que en todo caso, el recibido certificado, tuvo lugar fuera del horario hábil, siendo el día siguiente festivo. Concluyó advirtiendo que la nulidad alegada no requiere prueba, dado que

[3] Archivo de audio 18 del Expediente Digital

se sustenta en una negación indefinida realizada bajo la gravedad del juramento, que en todo caso puede ser constata con prueba que decrete el Tribunal.[4]

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

No encontrando vicios que puedan generar la nulidad de lo actuado en primera instancia y surtido el término previsto en el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007 se profiere la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente declarar la nulidad de todo lo actuado desde el acto de notificación del auto admisorio de la demanda, de acuerdo con los argumentos expuestos por la apoderada de la parte demandada.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para resolver el problema jurídico planteado, juzga conveniente recordar esta Colegiatura, que las nulidades procesales procuran el amparo del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, que como derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política erigen a nuestro país en un Estado Social de Derecho (artículo 29) con cuya observancia y garantía se busca obtener mediante el eficaz desarrollo de los preceptos legales.

Adicionalmente, en asuntos laborales, aparte de las causales reseñadas en el ordenamiento procesal civil, existe nulidad por vulneración de los principios de

[4] Archivo de audio 18 del Expediente Digital

oralidad y publicidad en las actuaciones judiciales y práctica de pruebas, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 42 del CPTSS.

De suerte que, el ordenamiento jurídico impuesto en los estatutos procedimentales ha concretado para cada asunto jurisdiccional etapas, términos, interés para acudir, medios de impugnación y, en general, todas y cada una de las reglas constituidas, a fin de obtener una resolución judicial con sometimiento al derecho fundamental denominado debido proceso.

Resultando entonces indispensable, para velar por el adecuado cumplimiento y protección del derecho constitucional de que trata el artículo 29, que se acaten a cabalidad los lineamientos regulados para el proceder legal de la Litis, y que habilita la terminación adecuada del asunto, sin que se adviertan deficiencias o irregularidades que riñan con el ordenamiento.

En el *examine* se evidencia que el fundamento de la nulidad alegada por la apoderada judicial de la demandada, atañe a la falta de notificación de su representada del auto admisorio de la demanda y sus anexos, al no recibir el correo electrónico que la contenía, arguyendo en el fondo que dicha inhibición configura la causal establecida en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, que en su tenor literal cita:

> «***ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD.*** *El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*
>
> *(…)*
>
> *8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.»* (resaltado fuera de texto)

Sobre el particular, y con el fin de establecer si fue surtida en debida forma la notificación, es pertinente recordar que al tenor de lo reglado en el artículo 8º del Decreto 806 de 2020, norma vigente para la data en que se pretendió hacer la notificación, esto es, el 7 de diciembre de 2021[5], prevé que la notificación personal debe surtirse de la siguiente manera:

> «***Artículo 8. Notificaciones personales.*** *Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envió de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado*

[5]Archivo 11 del expediente digital

en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envió del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso». (Subraya fuera de texto)

Adicionalmente, ha de considerarse que conforme al inciso 5º del artículo 6º de la normatividad *ejusdem*, cuando el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al ser admitida la demanda, el trámite de notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al extremo pasivo.

Ahora bien, la notificación personal de que trata el Decreto 806 de 2020, fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, en la cual moduló lo siguiente:

*«**iv. Modificaciones temporales al trámite ordinario de notificación personal (art. 8º)***

66. El artículo 8º del Decreto Legislativo sub examine introduce modificaciones transitorias al régimen ordinario de la notificación personal de providencias judiciales, previsto por el CGP[61] y CPACA[62].

67. Régimen ordinario de la notificación personal. La notificación personal tiene el propósito de informar a los sujetos procesales, de forma directa y personal, de las providencias judiciales[63] o de la existencia de un proceso judicial[64] mediante el envío de comunicaciones a sus direcciones físicas o electrónicas[65]. El artículo 291 del CGP regula la forma en que la notificación personal debe practicarse. Así, su numeral 3 dispone que la parte interesada remitirá, por medio de servicio postal autorizado, una comunicación de citación para notificación a quien deba ser notificado[66]. En el caso de las personas naturales, la comunicación debe ser enviada "a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento" o al correo electrónico cuando se conozca[67]. En el caso de las personas jurídicas de derecho privado o de las personas naturales comerciantes, la "comunicación deberá remitirse a la dirección [física o de correo electrónico] que aparezca registrada en la Cámara de Comercio […] correspondiente" (inciso 2, numeral 3, del art. 291 del CGP). Después de que la comunicación es enviada, si la persona a notificar comparece al juzgado, "se le pondrá en conocimiento la providencia previa su identificación" (numeral 5 del art. 291 del CGP). Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección

no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, "se procederá a su emplazamiento" a petición del interesado (numeral 4 art. 291 del CGP). Finalmente, si la comunicación es entregada, pero la persona no comparece a notificarse dentro de la oportunidad señalada, "el interesado procederá a practicar la notificación por aviso". Al respecto, el artículo 292 del CGP señala que el interesado deberá enviar un aviso al sujeto a notificar[68], por medio del servicio postal autorizado a la misma dirección a la que envió la citación, mediante el cual se le informará sobre los datos generales del proceso y de la providencia a notificar (inciso 1 del art. 292 del CGP[69]).

68. La notificación del auto admisorio y el mandamiento de pago a las personas jurídicas de derecho público debe efectuarse mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales dispuesto por la entidad para el efecto[70].

69. Modificaciones transitorias al régimen ordinario de notificaciones personales. El artículo 8º del Decreto sub examine ***introduce tres modificaciones transitorias al régimen de notificación personal de providencias. Primero, permite que la notificación personal se haga directamente mediante un mensaje de datos y elimina transitoriamente (i) el envío de la citación para notificación y (ii) la notificación por aviso (inciso 1 del art. 8º).***

70. Segundo, modifica las direcciones a las cuales puede ser enviado el mensaje de datos para efectos de la notificación personal. El mensaje de datos debe ser enviado "a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación" (inciso 1 del art. 8º), quien debe: (i) afirmar bajo la gravedad de juramento "que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar", (ii) "informar la forma como la obtuvo" y (iii) presentar "las evidencias correspondientes"[71] (inciso 1 del art. 8º). Asimismo, prescribe que la autoridad judicial podrá solicitar "información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales" (parágrafo 2 del art. 8º). Por último, el Decreto establece que la notificación personal se entenderá surtida "una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación" (inciso 2 del art. 8º).

71. Tercero, el Decreto establece dos medidas tendientes a garantizar el debido proceso y, en particular, a que la persona a notificar reciba la providencia respectiva. De un lado, (i) instituye que para efectos de verificar el recibo del mensaje de datos "se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos" (inciso 3 del art. 8º). De otro lado, (ii) permite que la parte que se considere afectada por esta forma de notificación solicite la nulidad de lo actuado[72], para lo cual debe manifestar "bajo la gravedad del juramento […] que no se enteró de la providencia" (inciso 5 del art. 8º). Por último, precisa que lo previsto en este artículo se aplica a cualquier actuación o proceso (parágrafo 1 del art. 8º)[73]». (Subraya y negrilla fuera de texto).

De suerte que, el Decreto 806 de 2020, permitió de manera transitoria que las notificaciones personales se hicieran a través de mensajes de datos, como una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en aras de privilegiar la utilización de los medios virtuales para la prestación del servicio de justicia, dentro del marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID 19, declarada por la Organización Mundial de la Salud, prescindiendo a su vez la norma,

de la citación para llevar a cabo la notificación personal en las instalaciones del Juzgado y de la notificación por aviso, como así lo señaló el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.

Tal normatividad, además ofreció como garantía que el mensaje de datos sea enviado a la dirección electrónica informada por el interesado bajo la gravedad del juramento, quien igualmente, debe indicar sus fuentes y presentar las evidencias correspondientes. A más que, debe poderse evidenciar o constatar en el proceso, que ese mensaje de datos haya sido recibido por la parte que se pretende notificar.

En igual sentido, debe resaltarse que el mentado mensaje debe contener el auto admisorio de la demanda, y en caso que, el *libelo genitor* y sus anexos no se hayan remitido al demandado por el mismo canal, al momento en que tal escrito fue radicado, también deberán adjuntarse en el correo electrónico con el que se pretenda efectuar la notificación personal.

Puestas así las cosas, al descender al caso objeto de estudio, se advierte que la parte convocada insiste en afirmar que se abstuvo de dar contestación a la demanda, porque el mensaje de datos que remitió la parte demandante a efectos de surtir la notificación personal del auto admisorio de la demanda no fue recibido en su correo electrónico, contrario a lo argüido por el convocante, lo cual configura la causal de nulidad alegada, misma que en su sentir no requiere prueba, porque se sustenta en una negación indefinida que ha realizado bajo la gravedad del juramento.

Sobre el particular, ha de resaltar la Sala de Decisión que, si bien a la luz del inciso 6º del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, la parte demandada en el presente caso ha indicado bajo la gravedad del juramento que no se enteró del auto admisorio de la demanda, porque no recibió el mensaje de datos mediante el cual se pretendió esa notificación, ello no implica que esa manifestación no pueda ser infirmada por la parte contraria y deba la Sala de Decisión tenerla por cierta, desconociendo los demás medios probatorios adosados al proceso, lo cuales de manera clara y cierta dan fe del hecho contario.

Así, nótese que en el Archivo 11 del expediente digital, obra certificación de notificación personal allegada por la parte demandante, expedida por el servicio de correo electrónico e-entrega, en la cual se indica que el 7 de diciembre de 2021 a las 17:02:52 horas se remitió mensaje de datos al correo electrónico administración@protecciooncontraelfuego.com.co, que corresponde a la dirección electrónica de la demandada, conforme a su certificado de existencia y

representación legal[6], con el asunto *"Notificación Personal Demanda Ordinaria Laboral-Pedro Antonio Torres Beltrán" y,* teniendo como adjuntos, los archivos en pdf denominados demanda radicada Pedro Antonio, auto 24 de agosto de 2021, subsanación de la demanda y auto admite demanda. Igualmente, la certificación en mención, refiere que se obtuvo acuse de recibo de la dirección electrónica de la demandada a las 17:03:09 horas de ese mismo día.

De suerte que, para la Sala obra medio de convicción claro y cierto que permite tener por demostrado que la parte demandante sí realizó la notificación personal del auto admisorio de la demanda ante el extremo pasivo, mediante mensaje de datos que sí fue recibido por este, desvirtuándose así, su manifestación bajo la gravedad de juramento, relativa a que no recibió tal comunicación, misma que se insiste, podía ser infirmada por el demandante mediante cualquier medio de prueba, como en efecto ocurrió.

Ahora bien, debe acotar el Tribunal que la certificación de la que se viene hablando, tiene amplio peso probatorio, porque pese a que la parte demandada insistió en que no recibió el mensaje de datos que contenía la notificación personal de que trata el articulo 8º del Decreto 80 de 2020, lo cierto es que no tachó de falsedad tal documental y tampoco desplegó ninguna actividad probatoria para desvirtuar su contenido, lo cual no puede ser subsanado por este Colegiado, bajo la petición de decreto de prueba que se realiza en la alzada, dado que las facultades probatorias en segunda instancia son limitadas, conforme a las voces del artículo 83 del CPT y de la SS[7].

Finalmente, en lo que atañe a la observación de la demandada, relativa a que el mensaje de datos fue enviado en hora inhábil, ha de precisarse que cuando ello tiene lugar, el correo debe entenderse recibido en la primera hora del día hábil siguiente, que para el caso, lo es el 9 de diciembre de 2021 a las 08:00 horas; sin embargo, tal situación no altera lo aquí decidido, porque el término de traslado para la contestación de la demanda comenzó a correr dos días después, esto es, el 14 de diciembre de símil año, y aun así, la pasiva no allegó ninguna contestación.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia en su integridad. Las Costas de esta instancia correrán a cargo de la parte demandada por no haber

---

[6] Página 57 Archivo 01 del expediente digital
[7] *"**ARTICULO 83.** - Modificado por el art. 41, Ley 712 de 2001. Casos en que el tribunal puede ordenar y practicar pruebas. Las partes no podrán solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en la primera instancia.*

Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte y en la primera audiencia, ordenar su práctica, como también las demás que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta.

Si en esta audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, el tribunal citará para una nueva audiencia, con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes".

prosperado su recurso de apelación. Inclúyanse como agencias en derecho una suma equivalente a un SMMLV al momento de su pago.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

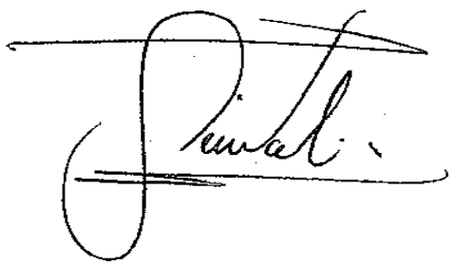
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 25 de enero de 2023, proferido por el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada. Inclúyanse como agencias en derecho una suma equivalente a un SMMLV al momento de su pago

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-018-2021-00279-01
DEMANDANTE:	ALI HUMBERTO OTERO CÁRDENAS
DEMANDADO:	EDITORIAL DELFÍN S.A.S.
ASUNTO:	Apelación Auto del 13 de diciembre de 2021
JUZGADO:	Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Medida cautelar Art. 85-A C.P.T. y S.S.
DECISIÓN:	REVOCA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra del Auto del 13 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **ALI HUMBERTO OTERO CÁRDENAS** contra **EDITORIAL DELFÍN S.A.S.**, con radicado No. **11001-31-05-018-2021-00279-01.**

ANTECEDENTES

El señor ALI HUMBERTO OTERO CÁRDENAS presentó demandada ordinaria laboral en contra de EDITORIAL DELFÍN S.A.S, pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 2 de enero de 1.990, y que, la terminación celebrada el 24 de septiembre de 2020, por vía de acuerdo transaccional, se torna ineficaz. Como se consecuencia, se condene a su reintegro, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales,

vacaciones y aportes al sistema de seguridad social, causados desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro. Igualmente, que se condene a pagar el mayor valor por concepto de prestaciones sociales, vacaciones y aportes a pensión durante todo el tiempo laborado. De manera subsidiaria, pretende se declare que la demandada no pagó la totalidad de la liquidación laboral, teniendo en cuenta el promedio salarial real percibido al momento del finiquito, el cual además, tuvo lugar sin justa causa; en consecuencia, se condene al pago de la indemnización por despido sin justa causa, junto con el total de la liquidación del contrato de trabajo, la indemnización moratoria y la indexación[1].

Con la demanda, en escrito separado, el promotor de la acción solicitó medidas cautelares de inscripción de demanda respecto de un bien inmueble, al igual que sobre dos vehículos y la matrícula mercantil de propiedad de EDITORIAL DELFÍN S.A.S., y finalmente, oficiar a la Cámara de Comercio de Bogotá, para que se abstenga o suspenda cualquier acto liquidatorio que promueva la demandada[2].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, a través de Auto del 13 de diciembre de 2021, resolvió inadmitir la demanda y, frente a las medidas cautelares solicitadas por la parte actora indicó: *"Respecto de la MEDIDA CAUTELAR solicitada a folio 55 a 59 del plenario, el despacho se* ***ABSTIENE*** *de dar curso a la misma, en virtud de lo previsto en el art. 85A del C.P.T.S.S., puesto que para dar trámite a la misma se hace necesario que se haya trabado la Litis en legal forma y que la petición sea efectuada en los términos del articulado en mención"*[3].

La parte actora procedió a subsanar el *libelo genitor* y contra la determinación de medidas cautelares, formuló recurso de apelación[4].

[1] Páginas 5 a 44 Archivo 01 del expediente digital.
[2] Páginas 46 a 50 Archivo 01 del expediente digital.
[3] Archivo 03 del expediente digital.
[4] Archivos 04 y 05 del expediente digital.

Mediante auto del 6 de diciembre de 2022, el Juzgado de Conocimiento admitió la demanda promovida y concedió el recurso de apelación propuesto por la parte actora en el efecto devolutivo[5].

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte DEMANDANTE al recurrir la decisión, argumentó en síntesis que, la determinación adoptada por el *a quo* respecto de las medidas cautelares, desconoce los motivos existentes para su formulación, cuales son, preservar la garantía del cumplimiento de las obligaciones endilgadas a la llamada a juicio, más aún cuando el actor fue desvinculado por la accionada mediante suscripción de un acuerdo que se perfeccionó bajo el engaño de la empleadora, al aducir que se encontraba *"embargada"*. Agregó que durante la celebración de ese acuerdo se mencionó un estado de liquidación de la sociedad, para posiblemente evadir sus obligaciones patronales, y es por ello que, en caso de obtenerse una sentencia favorable, las misma sería inocua al no contar la demandada con garantía de la prenda general de acreedores. Sostuvo que el Juzgado de Conocimiento ha incurrido en un exceso ritual, al supeditar la garantía deprecada, al trámite previsto en la audiencia del artículo 85A del CPT y de la SS, el cual previene a la contraparte de tal solicitud, pese a que conforme a la decisión proferida por la Corte Constitucional, informada en boletín 022 del 26 de febrero de 2021, se declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma, bajo el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse la medidas cautelares innominadas, previstas en el literal "C" del numeral 1º del artículo 590 del CGP. Concluyendo que es procedente el decreto de las medidas deprecadas, previa acreditación de la legitimación del demandante y la existencia de vulneración de sus derechos fundamentales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

[5] Archivo 06 del expediente digital.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si se equivocó el Juzgado de Conocimiento al negarse a imponer las medidas cautelares solicitadas por la parte actora.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

El artículo 85-A del C.P.T. y S.S., dispone lo siguiente:

> *"**ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO.** Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.*
>
> *En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.*
>
> *Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden."*

Tal disposición fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-043 de 2021, *"en el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal "c", numeral 1, del artículo 590 del CGP"*, siendo claro, que las mismas no se circunscriben a una caución, como en su literalidad lo dispuso el artículo 85 del CPT y de la S.S.

Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar el punto materia de controversia, para lo cual ha de rememorarse que el Juzgado de Conocimiento

se abstuvo de imponer las medidas cautelares reclamadas por el extremo activo, bajo el argumento que para el trámite de dicha solicitud se hace necesario que se haya trabado la *Litis* en legal forma y que la petición sea efectuada en los términos del artículo 85A del CPT y de la SS.

Determinación que luce claramente desacertada, a la luz del artículo 85 A del CPT y de la SS, porque aunque es cierto que para resolver la solicitud de medidas cautelares se requiere que el demandado se encuentre debidamente vinculado al trámite jurisdiccional, conforme a los presupuestos de procedencia de las mismas, se equivoca la falladora de primer grado al referir que se abstiene de resolver la petición por cuanto no se ajusta a los términos del artículo 85A del CPT y de la SS, dado que tal determinación en el fondo, implicó una negación de plano de las medidas deprecadas, lo que desconoce abiertamente el procedimiento previsto en la norma en referencia, en virtud del cual la solicitud de las mismas debe resolverse en audiencia especial, con la debida comparecencia de las partes, para que estas tengan la posibilidad de presentar las pruebas acerca de la situación alegada.

Lo anterior, pese a que la Corte Constitucional haya declarado la exequibilidad condicionada del artículo 85A del CPT y de la SS, mediante sentencia C-043 de 2021, dado que dicha decisión no descartó el procedimiento especial previsto en la normatividad *ejusdem* para tramitar la solicitud de medidas cautelares, antes bien, contrario a lo indicado por la parte recurrente, la Alta Corporación únicamente precisó que las medidas previstas en el CPT y de la SS, no solamente consisten en la imposición de una caución, pues era procedente acceder a las medidas innominadas de que trata el literal c del numeral 1º del artículo 590 del CGP.

En ese orden, se revocará la determinación impugnada, para en su lugar, ordenar al Juzgado de Conocimiento que, una vez se encuentre vinculada la demandada en el presente trámite, proceda a citar a las partes a la celebración de la audiencia de que trata el artículo 85A CPT y de la SS, a efectos de resolver la solicitud de medidas cautelares elevada por la activa, en el sentido que en derecho corresponda. Sin Costas en esta instancia ante su no causación.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el **NUMERAL TERCERO** del auto del 13 de diciembre de 2021, proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar, ordenar al Juzgado de Conocimiento que, una vez se encuentre vinculado el extremo pasivo en legal forma, proceda a citar a las partes a la celebración de la audiencia de que trata el artículo 85A CPT y de la SS, a efectos de resolver la solicitud de medidas cautelares elevada por la activa, en el sentido que en derecho corresponda.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-020-2019-00261-01
DEMANDANTE:	IDALY PERDOMO SABOGAL
DEMANDADO:	SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ASUNTO:	Apelación Sentencia 5 de noviembre de 2021
JUZGADO:	Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Contrato de trabajo
DECISIÓN:	NULIDAD SENTENCIA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por AMBAS PARTES en contra de la sentencia del 5 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **IDALY PERDOMO SABOGAL** contra **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** con radicado No**. 11001-31-05-020-2019-00261-01.**

A continuación, se procede a proferir la siguiente: **PROVIDENCIA**

Seria del caso proceder a analizar los recursos de apelación interpuestos por los extremos procesales contra la sentencia del 5 de noviembre de 2021, de no ser, porque se evidencia una nulidad insaneable conforme a lo previsto en el artículo 16 del CGP, en concordancia con el artículo 138 del mismo estatuto, aplicables por analogía a la jurisdicción ordinaria laboral, por remisión expresa del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral.

C O N S I D E R A C I O N E S

Juzga conveniente recordar esta Colegiatura, que las nulidades procesales procuran el amparo del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, que, como derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, erigen a nuestro país en un Estado Social de Derecho, cuya observancia y garantía se pretende obtener mediante el eficaz desarrollo de los preceptos legales. Adicionalmente, en asuntos laborales, aparte de las causales reseñadas en el ordenamiento procesal civil, existe nulidad por vulneración de los principios de oralidad y publicidad en las actuaciones judiciales y práctica de pruebas, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 42 del CPTSS.

De suerte que, el ordenamiento jurídico impuesto en los estatutos procedimentales ha concretado para cada asunto jurisdiccional etapas, términos, interés para acudir, medios de impugnación y, en general, todas y cada una de las reglas constituidas a fin de obtener una resolución judicial con sometimiento al derecho fundamental denominado debido proceso. Resultando entonces indispensable, para velar por el adecuado cumplimiento y protección del derecho constitucional de que trata el artículo 29, que se acaten a cabalidad los lineamientos regulados para el proceder legal de la Litis, y que habilita la terminación adecuada del asunto, sin que se adviertan deficiencias o irregularidades que riñan con el ordenamiento.

En el *examine* se evidencia de la revisión de la demanda[1] y de su contestación[2] que en el presente asunto se debate la existencia de un vínculo

[1] Páginas 3 a 21 Archivo 01 del expediente digital.
[2] Páginas 138 a 156 Archivo 01 del expediente digital.

laboral, el cual alega la demandante fue encubierto a través de sucesivos contratos de arrendamiento de servicios personales, así como de prestación de prestación de servicios, en virtud de lo que se desempeñó como AUXILIAR DE CONFECCIÓN para el HOSPITAL MEISSEN II, que ocultaron su real condición de trabajadora oficial de la demandada, lo cual a la luz de la regla de decisión sentada por la Corte Constitucional mediante Auto No 492 del 11 de agosto de 2021, permite evidenciar que la sentencia emitida por el Juzgado de Conocimiento se encuentra afectada de nulidad, dado que en el presente caso concurre la falta de jurisdicción de la especialidad ordinaria laboral para resolver el conflicto puesto a consideración.

Ello es así, en la medida que en la decisión aludida, la Alta Corporación moduló que:

> *"(iv) La revisión de contratos de prestación de servicios de naturaleza estatal corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que resulta relevante para definir la jurisdicción competente en estos casos es la naturaleza no laboral del contrato de prestación de servicios suscrito entre los particulares y las entidades del sector público, "para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad […] solo […] cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados […] y por el término estrictamente indispensable", en los términos del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Esto en la medida en que lo que se propone es el examen de la actuación de la Administración, es decir, la revisión de contratos de carácter estatal para determinar, con base en el acervo probatorio, si se celebró un contrato de prestación de servicios o si, por el contrario, se configuró realmente una vinculación laboral.*
>
> *De manera que la jurisdicción habilitada por el ordenamiento jurídico para efectuar dicha labor es la de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, que establece que aquella "está instituida para conocer (…) de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa" y de asuntos "relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado".*
>
> *(v) En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la Sala Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales y a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos. En efecto, **cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral** y no se discute que había una relación de subordinación entre la entidad pública y el trabajador o empleado, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer*

de estos asuntos con base en las funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador (criterio funcional) y la entidad a la cual se encontraba vinculado (criterio orgánico), para establecer si se trata de un trabajador oficial, que puede ejercitar la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, o de un empleado público, caso en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe definir el asunto.

Sin embargo, esta regla ***no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es****, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente, la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso.*

(vi) Examinar, aun preliminarmente, las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado para definir la competencia, constituye un examen de fondo de la controversia. Adicionalmente, la Sala considera que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado a través de vínculos contractuales simulados correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público implica realizar un examen de fondo del asunto. Esta labor no le corresponde al juez encargado de definir la jurisdicción competente, pues esto conduce a pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral que es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. En todo caso, este tipo de asuntos solo pueden ser decididos por el juez contencioso administrativo que es el facultado para evaluar las actuaciones de la Administración.

En este sentido, la evaluación preliminar de la calidad del demandante como trabajador oficial o empleado público supone que la jurisdicción competente para resolver el litigio se encuentra en debate durante toda la controversia. En efecto, si el factor que define la jurisdicción es el tipo de vinculación que materialmente desempeñaba el servidor, es claro que dicha condición solo puede determinarse con certeza en la sentencia[68]. En contraste, la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cual se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa.

Ahora bien, en el caso concreto, si en gracia de discusión se "revisara preliminarmente" la posible asimilación de las labores desempeñadas por el demandante para intentar ubicarlas en las que corresponden a un empleado público o a un trabajador oficial, se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos, con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación. De hecho, en casos en los que se ha pretendido acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de acreencias laborales que corresponden a entes territoriales por personas que prestan servicios de vigilancia y celaduría, las autoridades de la especialidad laboral han absuelto a las entidades accionadas, en la medida en que no se logra probar la calidad de trabajadores oficiales de los demandantes pues dichas labores no tienen relación directa con "la construcción y el sostenimiento de obras públicas"[69].

(vii) De conformidad con lo expuesto, la Corte aplicará la cláusula especial de competencia derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se reclama la existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios. De este modo, se concluye que los asuntos en los que no cabe duda acerca de la existencia de una relación de trabajo se diferencian notoriamente del tipo de controversias en las que se debate la existencia de dicho vínculo. Es decir, aquellas que tienen por objeto definir si el servidor público fungió como trabajador oficial o empleado público, como la que en esta oportunidad estudia la Sala. Lo anterior, dado que:

a) En sentido estricto, lo que se discute es la validez del acto administrativo mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y acreencias laborales de los servidores públicos de planta.

b) El fundamento de las pretensiones se estructura en un contrato de prestación de servicios estatal.

c) Únicamente el juez contencioso administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados", en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

d) El objeto mismo del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública.

(viii) Por consiguiente, la Sala remitirá el expediente al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados". (Subraya fuera de texto).

Conforme al criterio jurisprudencial traído a colación, se tiene que el órgano constitucional y legalmente encargado de dirimir los conflictos de competencia que se suscitan entre diferentes jurisdicciones, que lo es la Corte Constitucional, se apartó del precedente sentado anteriormente por el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Disciplinaria, sobre la competencia para conocer de presuntas relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios.

Así, definió que la revisión de contratos de prestación de servicios de naturaleza estatal corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa; además que, cuando el litigio se centra en la definición de existencia del vínculo laboral, que a su vez implica estudiar si la labor contratada corresponde a una función que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados,

corresponde el conocimiento al Juez contencioso, al no existir certeza sobre la existencia del mismo.

La posición adoptada en la providencia A492 de 2021, ha sido reiterada por la H. Corte Constitucional en las providencias A479 de 2021, A617 de 2021, A618 de 2021, A676 de 2021, A680 de 2021, A705 de 2021, A738 de 2021, A901 de 2021, A931 de 2021, A1076 de 2021, A1094 de 2021, A1116 de 2021, A131 de 2022, A198 de 2022, A304 de 2022, A439 de 2022, A500 de 2022, A623 de 2022, A705 de 2022, A738 de 2022. A760 de 2022, A785 de 2022, A790 de 2022, A791 de 2022, A829 de 2022, A1090 de 2022, entre otras.

De suerte que, aunque la Corte Suprema de Justicia de antaño ha establecido que la sola solicitud de reconocimiento de un contrato de trabajo, le otorga competencia al Juez Laboral para dirimir el asunto, a la luz del artículo 2º del CPT y de la SS, como así lo refirió la Alta Corporación en la sentencia CSJSL21087-2017[3], lo cierto es que, el Tribunal no puede desconocer la nueva regla de decisión adoptada por la Corte Constitucional, en tanto se *itera*, se trata del órgano que por virtud de la Constitución y la ley debe dirimir los conflictos de competencia que se suscitan entre distintas jurisdicciones, y quien en desarrollo de su función ha establecido reiteradamente la competencia en el Juez Contencioso Administrativo, cuando se pretende el reconocimiento de una relación laboral, a partir de la figura del contrato de prestación de servicios estatal.

En ese orden, al aplicar al caso concreto la regla de decisión definida en las providencia anotada, consistente en que *"de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral,*

[3]"*En efecto, la jurisprudencia tiene dicho que, para que el juez laboral asuma la competencia en un juicio contra una entidad de derecho público, al actor le basta afirmar la existencia del contrato de trabajo porque, de controvertirse esa afirmación, al juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existió o no, y sólo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato.*

Y ha precisado la jurisprudencia esa particular manera de desarrollarse la relación procesal que vincula a los servidores de la administración pública con ella misma, para poner de presente que la decisión que declare la existencia del contrato, como la que lo niega, es de fondo, con lo cual ha rechazado como previas las excepciones de falta de jurisdicción o competencia. Desde luego tampoco ha admitido que esas excepciones operen al finalizar la instancia, ya que ni la jurisdicción ni la competencia dependen del resultado del juicio.

(…)"

presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado"[4], diáfano resulta concluir que en el caso puesto a consideración, esta especialidad carece de jurisdicción y competencia para conocer la controversia y, es por ello que, la sentencia de primer grado se encuentra viciada de nulidad, pues a las voces del artículo 138 del CGP "*Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará."*

Y es que, conforme a lo establecido en el artículo 16 del CGP *"La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables"*, aunado a que *"La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso".*

La nulidad advertida, también se soporta en lo adoctrinado por la Corte Constitucional en sentencia C- 537 del 2016, cuerpo colegiado que profundizó en este tema, considerando lo siguiente:

> *"Al tiempo, el legislador previó que la causal de nulidad no alegada por la parte en la etapa procesal en la que ocurrió el vicio, se entenderá saneada (artículo 132 y parágrafo del artículo 133), lo mismo que si la parte actúa después de su ocurrencia, sin proponer la nulidad correspondiente (artículo 135). También, estableció que las nulidades sólo pueden alegarse antes de proferirse la sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma (artículo 134). Una interpretación sistemática del régimen de las nulidades en el CGP lleva fácilmente a concluir que la posibilidad de sanear nulidades por la no alegación o por la actuación de parte, sin alegarla, se refiere necesariamente a las nulidades saneables. A este respecto, el parágrafo del artículo 136 del CGP establece una lista de nulidades insaneables, la que no incluye la derivada de la falta de jurisdicción o de competencia del juez, por los factores subjetivo y funcional. También establece, en el artículo 133, que las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente y en la lista de las nulidades que no se entienden subsanadas, no se encuentra la de actuar en el proceso y dictar sentencia con falta de jurisdicción y de competencia por los factores subjetivo y funcional. La combinación de estas dos normas, a primera vista, podría dar lugar a concluir, de manera concordante con el demandante, que ésta es saneable. Sin embargo, como quedó establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con el artículo 16 del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez el que se percatará del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de legalidad del proceso (artículo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podrá dictar válidamente sentencia, la que expresamente se dispone que será nula. En estos términos, habrá que concluirse, de manera concordante con varios de los intervinientes que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema taxativo de nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el artículo 136 y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los*

[4] Auto A492 de 2021.

*factores subjetivo y funcional**, es insaneable**”.* (Subraya y negrilla fuera de texto).

En esa medida, no puede la Sala de Decisión continuar asumiendo el conocimiento de las diligencias, en tanto que por virtud del Auto No 492 del 11 de agosto de 2021 emitido por la Corte Constitucional, esta especialidad carece de jurisdicción para el efecto, circunstancia que al ser desconocida, configura una nulidad insaneable, como bien se advirtió en la jurisprudencia en cita; ello pese a que, en los contratos de prestación de servicios celebrados por los extremos procesales, estos hayan previsto que los mismos se regían por las normas del derecho privado, pues no se puede pasar por alto que la celebración de cada uno de ellos tuvo lugar entre una persona natural y una entidad de naturaleza estatal, de suerte que es a la jurisdicción contencioso administrativa a la que le corresponde conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral que presuntamente fue encubierta a través de la sucesiva suscripción contratos de prestación de servicios con el Estado.

Por las anteriores consideraciones y atendiendo la improrrogabilidad de la *“jurisdicción y competencia por el factor subjetivo*” conforme el artículo 16 CGP, lo cual permite declarar la misma de oficio, decisión contra la cual no proceden recursos conforme el artículo 139 CGP y cuyos efectos están previstos en el artículo 138 CGP, normas todas aplicables al proceso laboral y de la seguridad social por virtud del artículo 145 CPTSS, se declarará la falta de jurisdicción y lo actuado en este expediente conservará su validez, salvo la sentencia de primera instancia, la cual se invalidará.

De otra parte, se ordenará la remisión del proceso a reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá D.C., conforme el numeral 2 del artículo 155 CPACA.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN para conocer el presente asunto, advirtiendo que lo actuado en este proceso conservará su validez, salvo la sentencia de primera instancia, la cual se declara inválida. En consecuencia, **ABSTENERSE** de abordar el estudio del recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente a reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá D.C., para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de esta providencia. Secretaria de la Sala proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO **DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ**

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-

-SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

La apoderada de la parte demandante**,** dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

También ha señalado la Alta Corporación que, tratándose de reintegro con aumentos salariales, a la tasación de la cuantía debe agregarse otra cantidad igual. Esto por cuanto se ha considerado que la reinstalación del trabajador a mediano y largo plazo tiene incidencias económicas que no se reflejan y que se originan propiamente en la declaración que apareja la garantía de la no solución de continuidad del contrato de trabajo [2].

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*
[2] *Sentencia del 21 de mayo de 2003, Radicación No. 2010 y Auto del 25 de mayo de 2006 Radicación 29.095.*

Ahora, de acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de $**120.000.000.**

En el presente caso, el fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, decisión que apelada, fue confirmada por el Superior.

En consecuencia, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante se encuentra determinado por el monto de las pretensiones negadas en las instancias, de ellas, reintegrar al trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, con base en el último salario mensual devengado ($27´058.380- f.6), desde el 26 de junio de 2019, hasta la fecha de fallo de segunda instancia, por 12 pagos al año, sin actualizar o indexar, acumulando un saldo de **$ 1.055´276.820**.

En consecuencia, por hallarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas, se concederá el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, continúese con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN
Magistrada

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO
Magistrado

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

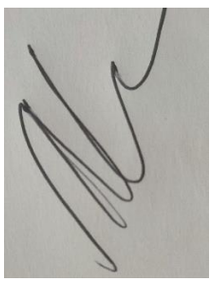
Alberson

H. MAGISTRADA DRA. ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que la apoderada de la parte demandante, dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2022).



ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-025-2020-00438-01
DEMANDANTE:	PAOLA ANDREA GARCÍA NIÑO
DEMANDADO:	PROINCALZA S.A.S.
ASUNTO:	Apelación Auto 27 de septiembre de 2022
JUZGADO:	Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Auto tiene por no contestada la demanda
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada PROINCALZA S.A.S. en contra del Auto del 27 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **PAOLA ANDREA GARCÍA NIÑO** contra **PROINCALZA S.A.S.** con radicado No**. 11001-31-05-025-2020-00438-01.**

ANTECEDENTES

El Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 27 de septiembre de 2022, resolvió tener por no contestada la

demanda por parte de PROINCALZA S.A.S. (Archivo 12 del expediente digital).

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandada PROINCALZA S.A.S. presentó recurso de apelación argumentando que la parte demandante para efectos de la notificación del traslado de la demanda hizo uso del artículo 291 del C.G.P., por lo que por tratarse de un proceso laboral debió haberse advertido lo dispuesto en el artículo 29 del C.P.T.S.S.

Indica que, requerido por el Despacho, el apoderado de la parte actora, envío el 21 de septiembre de 2021 a su representada, por correo electrónico no certificado, una comunicación sin fecha, en la que anuncia como anexos el auto admisorio de la demanda y copia íntegra de esta, con el Auto de fecha 25 de marzo de 2021 que rechazó la demanda por ausencia de notificación a la parte pasiva y el Auto del 26 de marzo de 2021 que resuelve el recurso de apelación y admite la demanda.

El apoderado de la parte actora no anunció en sus escritos a cuál norma está acudiendo para notificar a la demandada, pues de hacerlo en los términos del artículo 292 debió expresarlo claramente, caso en el cual los términos para contestar eran diferentes a los establecidos en los artículos 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022.

Que se deben remitir todos los documentos a la parte demandada como ordena la norma antes citada, y si contra el Auto del 13 de septiembre de 2021 el apoderado interpuso recurso, dicho memorial no fue enviado a la demandada como ordena la ley.

Manifiesta que tener por no contestada la demanda cuando no ha transcurrido el término legal, es una violación al debido proceso y una negación al derecho de defensa de su representada, por lo que solicita se enmiende el error y se deje transcurrir el término respectivo. (Archivo 13 del expediente digital).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación, si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar cuál es la norma a aplicar en éste caso para determinar si fue notificada en legal forma la demanda y en consecuencia si es o no procedente tener por no contestada la demanda.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Para resolver el recurso interpuesto por la parte actora se tiene en cuenta en primer lugar, que la demanda fue admitida mediante Auto del 26 de marzo de 2021 (archivo 8) en el que se ordenó practicar la notificación en la forma dispuesta en el artículo 41 del C.P.L. y en caso de no ser hallado el demandado o se impida la notificación se procederá conforme a lo establecido en el artículo 29 de la misma norma y el Decreto 806 de 2020.

Al respecto debe decirse que la norma a aplicar para la notificación a la parte demandada en este caso, era el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 como se dispuso en el Auto mencionado y en atención a que era la norma que se encontraba vigente para ese momento.

El citado artículo disponía lo siguiente:

"*Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

PARÁGRAFO 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.

PARÁGRAFO 2. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, Superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales

Mediante Auto del 13 de septiembre de 2022 (archivo 10) el Juzgado requirió a la parte actora para que allegara en debida forma la notificación a la parte demandada conforme al Decreto 806 del 2020, por lo que la parte actora

allegó escrito de fecha 24 de enero de 2023 al que anexó el correo dirigido a pronicalza@hotmail.com el 6 de octubre de 2020 y el 12 de febrero de 2021 mediante los cuales remitió la demanda y sus anexos (archivo 7 f. 9 y 12) e igualmente remitió al mismo correo el 21 de septiembre de 2022 la subsanación y admisión de la demanda (archivo 11 f.11) tal y como había sido solicitado por el Juzgado en Auto del 13 de septiembre de 2022 (archivo 10).

Lo anterior, es aceptado por la parte recurrente en su escrito cuando manifiesta que "el 21 de septiembre de 2021 se envió a su representada por correo electrónico no certificado, una comunicación sin fecha, en la que anuncia como anexos el Auto admisorio de la demanda y copia íntegra de esta con el Auto de fecha 25 de marzo de 2021 que rechazó la demanda por ausencia de notificación a la parte pasiva y el Auto del 26 de marzo de 2021 que resuelve el recurso de apelación y admite la demanda", por lo que no es de recibo lo manifestado en el recurso respecto a que la notificación no fue remitida en debida forma, toda vez que está demostrado que la demandada recibió al correo pronicalza@hotmail.com todos los documentos que disponía el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, vigente para el momento y conforme al cual la notificación se cumple con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual, por lo que no era necesario que el apoderado anunciara en su escrito a cuál norma estaba acudiendo para notificar a la demandada o que lo remitiera por correo certificado.

En cuanto a haberse advertido lo dispuesto en el artículo 29 del C.P.T.S.S. es claro que esta advertencia se encontraba en el auto admisorio que fue notificado, pues ya no se requiere una comunicación adicional al envío del correo; y por último, respecto al término legal para contestar la demanda, este es el establecido en la norma ya citada, es decir, que se entendía realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezaban a correr a partir del día siguiente, por lo que notificada la demanda el 21 de septiembre de 2021 el término de 10 días para contestarla iniciaba el 24 de septiembre y vencía el 7 de octubre de 2021, fecha para la cual no se había presentado la contestación, por lo que debía

tenerse por no contestada, como en efecto se decidió por el A quo en el Auto impugnado.

Así las cosas, no queda otro camino a la Sala que confirmar la decisión impugnada. Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 27 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-026-2019-00079-01
DEMANDANTE:	JAZMÍN PAREDES FONSECA
DEMANDADO:	SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
ASUNTO:	Apelación Sentencia 18 de octubre de 2022
JUZGADO:	Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Contrato de trabajo
DECISIÓN:	NULIDAD SENTENCIA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte DEMANDANTE en contra de la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido **JAZMÍN PAREDES FONSECA** contra **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.,** con radicado No**. 11001-31-05-026-2019-00079-01.**

A continuación, se procede a proferir la siguiente: **PROVIDENCIA**

Seria del caso proceder a analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de octubre de 2022, de no ser, porque se evidencia una nulidad insaneable conforme a lo previsto en el artículo 16 del CGP, en concordancia con el artículo 138 del mismo estatuto, aplicables por analogía a la jurisdicción ordinaria laboral, por remisión expresa del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral.

C O N S I D E R A C I O N E S

Juzga conveniente recordar esta Colegiatura, que las nulidades procesales procuran el amparo del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, que, como derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, erigen a nuestro país en un Estado Social de Derecho, cuya observancia y garantía se pretende obtener mediante el eficaz desarrollo de los preceptos legales. Adicionalmente, en asuntos laborales, aparte de las causales reseñadas en el ordenamiento procesal civil, existe nulidad por vulneración de los principios de oralidad y publicidad en las actuaciones judiciales y práctica de pruebas, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 42 del CPTSS.

De suerte que, el ordenamiento jurídico impuesto en los estatutos procedimentales ha concretado para cada asunto jurisdiccional etapas, términos, interés para acudir, medios de impugnación y, en general, todas y cada una de las reglas constituidas a fin de obtener una resolución judicial con sometimiento al derecho fundamental denominado debido proceso. Resultando entonces indispensable, para velar por el adecuado cumplimiento y protección del derecho constitucional de que trata el artículo 29, que se acaten a cabalidad los lineamientos regulados para el proceder legal de la Litis, y que habilita la terminación adecuada del asunto, sin que se adviertan deficiencias o irregularidades que riñan con el ordenamiento.

En el *examine* se evidencia de la revisión de la demanda[1] y de su contestación[2] que en el presente asunto se debate la existencia de un vínculo

[1] Páginas 6 a 26 Archivo 01 del expediente digital.
[2] Archivo 03 del expediente digital.

laboral, el cual alega la demandante fue encubierto a través de sucesivos contratos de prestación de servicios estatales, en virtud de los que se desempeñó como AUXILIAR DE ENFERMERÍA, que ocultaron su real condición de trabajadora oficial de la demandada, lo cual a la luz de la regla de decisión sentada por la Corte Constitucional mediante Auto No 492 del 11 de agosto de 2021, permite evidenciar que la sentencia emitida por el Juzgado de Conocimiento se encuentra afectada de nulidad, dado que en el presente caso concurre la falta de jurisdicción de la especialidad ordinaria laboral para resolver el conflicto puesto a consideración.

Ello es así, en la medida que en la decisión aludida, la Alta Corporación moduló que:

> *"(iv) La revisión de contratos de prestación de servicios de naturaleza estatal corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que resulta relevante para definir la jurisdicción competente en estos casos es la naturaleza no laboral del contrato de prestación de servicios suscrito entre los particulares y las entidades del sector público, "para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad […] solo […] cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados […] y por el término estrictamente indispensable", en los términos del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Esto en la medida en que lo que se propone es el examen de la actuación de la Administración, es decir, la revisión de contratos de carácter estatal para determinar, con base en el acervo probatorio, si se celebró un contrato de prestación de servicios o si, por el contrario, se configuró realmente una vinculación laboral.*
>
> *De manera que la jurisdicción habilitada por el ordenamiento jurídico para efectuar dicha labor es la de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, que establece que aquella "está instituida para conocer (…) de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa" y de asuntos "relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado".*
>
> *(v) En los casos en los que se discute el reconocimiento de un vínculo laboral con el Estado no es posible aplicar la misma regla que se utiliza para definir la autoridad judicial que conoce de las controversias suscitadas entre los trabajadores oficiales o empleados públicos y el Estado. Lo anterior conlleva la necesidad de que la Sala Plena se aparte del precedente que, en su oportunidad, desarrolló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es claro que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos laborales en los que son parte trabajadores oficiales y a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos relacionados con la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos. En efecto, **cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral** y no se discute que había una relación de subordinación entre la entidad pública y el trabajador o empleado, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer*

de estos asuntos con base en las funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador (criterio funcional) y la entidad a la cual se encontraba vinculado (criterio orgánico), para establecer si se trata de un trabajador oficial, que puede ejercitar la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, o de un empleado público, caso en el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe definir el asunto.

Sin embargo, esta regla ***no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es****, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades públicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente, la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso.*

(vi) Examinar, aun preliminarmente, las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado para definir la competencia, constituye un examen de fondo de la controversia. Adicionalmente, la Sala considera que determinar si las funciones desempeñadas por los contratistas del Estado a través de vínculos contractuales simulados correspondían a las de un trabajador oficial o a las de un empleado público implica realizar un examen de fondo del asunto. Esta labor no le corresponde al juez encargado de definir la jurisdicción competente, pues esto conduce a pronunciarse sobre la existencia de una relación laboral que es, justamente, lo que se pretende con la demanda y lo que debe demostrarse en el curso del proceso. En todo caso, este tipo de asuntos solo pueden ser decididos por el juez contencioso administrativo que es el facultado para evaluar las actuaciones de la Administración.

En este sentido, la evaluación preliminar de la calidad del demandante como trabajador oficial o empleado público supone que la jurisdicción competente para resolver el litigio se encuentra en debate durante toda la controversia. En efecto, si el factor que define la jurisdicción es el tipo de vinculación que materialmente desempeñaba el servidor, es claro que dicha condición solo puede determinarse con certeza en la sentencia[68]. En contraste, la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cual se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa.

Ahora bien, en el caso concreto, si en gracia de discusión se "revisara preliminarmente" la posible asimilación de las labores desempeñadas por el demandante para intentar ubicarlas en las que corresponden a un empleado público o a un trabajador oficial, se correría el riesgo de exponer al actor equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos, con la consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su reclamación. De hecho, en casos en los que se ha pretendido acudir ante la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de acreencias laborales que corresponden a entes territoriales por personas que prestan servicios de vigilancia y celaduría, las autoridades de la especialidad laboral han absuelto a las entidades accionadas, en la medida en que no se logra probar la calidad de trabajadores oficiales de los demandantes pues dichas labores no tienen relación directa con "la construcción y el sostenimiento de obras públicas"[69].

(vii) De conformidad con lo expuesto, la Corte aplicará la cláusula especial de competencia derivada del artículo 104 del CPACA. Esto por cuanto se reclama la existencia de un vínculo laboral con el Estado, presuntamente camuflada en sucesivos contratos de prestación de servicios. De este modo, se concluye que los asuntos en los que no cabe duda acerca de la existencia de una relación de trabajo se diferencian notoriamente del tipo de controversias en las que se debate la existencia de dicho vínculo. Es decir, aquellas que tienen por objeto definir si el servidor público fungió como trabajador oficial o empleado público, como la que en esta oportunidad estudia la Sala. Lo anterior, dado que:

a) En sentido estricto, lo que se discute es la validez del acto administrativo mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos y acreencias laborales de los servidores públicos de planta.

b) El fundamento de las pretensiones se estructura en un contrato de prestación de servicios estatal.

c) Únicamente el juez contencioso administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados", en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

d) El objeto mismo del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública.

(viii) Por consiguiente, la Sala remitirá el expediente al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados". (Subraya fuera de texto).

Conforme al criterio jurisprudencial traído a colación, se tiene que el órgano constitucional y legalmente encargado de dirimir los conflictos de competencia que se suscitan entre diferentes jurisdicciones, que lo es la Corte Constitucional, se apartó del precedente sentado anteriormente por el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Disciplinaria, sobre la competencia para conocer de presuntas relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios.

Así, definió que la revisión de contratos de prestación de servicios de naturaleza estatal corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa; además que, cuando el litigio se centra en la definición de existencia del vínculo laboral, que a su vez implica estudiar si la labor contratada corresponde a una función que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados,

corresponde el conocimiento al juez contencioso, al no existir certeza sobre la existencia del mismo.

La posición adoptada en la providencia A492 de 2021, ha sido reiterada por la H. Corte Constitucional en las providencias A479 de 2021, A617 de 2021, A618 de 2021, A676 de 2021, A680 de 2021, A705 de 2021, A738 de 2021, A901 de 2021, A931 de 2021, A1076 de 2021, A1094 de 2021, A1116 de 2021, A131 de 2022, A198 de 2022, A304 de 2022, A439 de 2022, A500 de 2022, A623 de 2022, A705 de 2022, A738 de 2022. A760 de 2022, A785 de 2022, A790 de 2022, A791 de 2022, A829 de 2022, A1090 de 2022, entre otras.

De suerte que, aunque la Corte Suprema de Justicia de antaño ha establecido que la sola solicitud de reconocimiento de un contrato de trabajo, le otorga competencia al Juez Laboral para dirimir el asunto, a la luz del artículo 2º del CPT y de la SS, como así lo refirió la Alta Corporación en la sentencia CSJSL21087-2017[3], lo cierto es que, el Tribunal no puede desconocer la nueva regla de decisión adoptada por la Corte Constitucional, en tanto se *itera*, se trata del órgano que por virtud de la Constitución y la ley debe dirimir los conflictos de competencia que se suscitan entre distintas jurisdicciones, y quien en desarrollo de su función ha establecido reiteradamente la competencia en el Juez Contencioso Administrativo, cuando se pretende el reconocimiento de una relación laboral, eso sí, a partir de la figura del contrato de prestación de servicios estatal.

En ese orden, al aplicar al caso concreto la regla de decisión definida en las providencia anotada, consistente en que *"de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral,*

[3]"*En efecto, la jurisprudencia tiene dicho que, para que el juez laboral asuma la competencia en un juicio contra una entidad de derecho público, al actor le basta afirmar la existencia del contrato de trabajo porque, de controvertirse esa afirmación, al juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existió o no, y sólo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato.*

Y ha precisado la jurisprudencia esa particular manera de desarrollarse la relación procesal que vincula a los servidores de la administración pública con ella misma, para poner de presente que la decisión que declare la existencia del contrato, como la que lo niega, es de fondo, con lo cual ha rechazado como previas las excepciones de falta de jurisdicción o competencia. Desde luego tampoco ha admitido que esas excepciones operen al finalizar la instancia, ya que ni la jurisdicción ni la competencia dependen del resultado del juicio.

(…)"
Sala Laboral
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá

presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado"[4], diáfano resulta concluir que en el caso puesto a consideración, esta especialidad carece de jurisdicción y competencia para conocer la controversia y, es por ello que, la sentencia de primer grado se encuentra viciada de nulidad, pues a las voces del artículo 138 del CGP "*Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará."*

Y es que, conforme a lo establecido en el artículo 16 del CGP *"La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables"*, aunado a que *"La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso".*

La nulidad advertida, también se soporta en lo adoctrinado por la Corte Constitucional en sentencia C- 537 del 2016, cuerpo colegiado que profundizó en este tema, considerando lo siguiente:

> *"Al tiempo, el legislador previó que la causal de nulidad no alegada por la parte en la etapa procesal en la que ocurrió el vicio, se entenderá saneada (artículo 132 y parágrafo del artículo 133), lo mismo que si la parte actúa después de su ocurrencia, sin proponer la nulidad correspondiente (artículo 135). También, estableció que las nulidades sólo pueden alegarse antes de proferirse la sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma (artículo 134). Una interpretación sistemática del régimen de las nulidades en el CGP lleva fácilmente a concluir que la posibilidad de sanear nulidades por la no alegación o por la actuación de parte, sin alegarla, se refiere necesariamente a las nulidades saneables. A este respecto, el parágrafo del artículo 136 del CGP establece una lista de nulidades insaneables, la que no incluye la derivada de la falta de jurisdicción o de competencia del juez, por los factores subjetivo y funcional. También establece, en el artículo 133, que las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente y en la lista de las nulidades que no se entienden subsanadas, no se encuentra la de actuar en el proceso y dictar sentencia con falta de jurisdicción y de competencia por los factores subjetivo y funcional. La combinación de estas dos normas, a primera vista, podría dar lugar a concluir, de manera concordante con el demandante, que ésta es saneable. Sin embargo, como quedó establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con el artículo 16 del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez el que se percatará del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de legalidad del proceso (artículo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podrá dictar válidamente sentencia, la que expresamente se dispone que será nula. En estos términos, habrá que concluirse, de manera concordante con varios de los intervinientes que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema*

[4] Auto A492 de 2021.

*taxativo de nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el artículo 136 y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los factores subjetivo y funcional**, es insaneable**". (Subraya y negrilla fuera de texto)*

En esa medida, no puede la Sala de Decisión continuar asumiendo el conocimiento de las diligencias, en tanto que por virtud del Auto No 492 del 11 de agosto de 2021 emitido por la Corte Constitucional, esta especialidad carece de jurisdicción para el efecto, circunstancia que al ser desconocida, configura una nulidad insaneable, como bien se advirtió en la jurisprudencia en cita.

Por las anteriores consideraciones y atendiendo la improrrogabilidad de la *"jurisdicción y competencia por el factor subjetivo*" conforme el artículo 16 CGP, lo cual permite declarar la misma de oficio, decisión contra la cual no proceden recursos conforme el artículo 139 CGP y cuyos efectos están previstos en el artículo 138 CGP, normas todas aplicables al proceso laboral y de la seguridad social por virtud del artículo 145 CPTSS, se declarará la falta de jurisdicción y lo actuado en este expediente conservará su validez, salvo la sentencia de primera instancia, la cual se invalidará.

De otra parte, se ordenará la remisión del proceso a reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá D.C., conforme el numeral 2 del artículo 155 CPACA.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

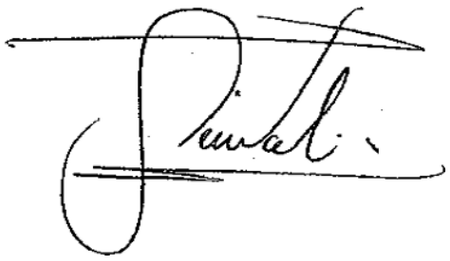
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN para conocer el presente asunto, advirtiendo que lo actuado en este proceso conservará su validez, salvo la sentencia de primera instancia, la cual se declara inválida. En consecuencia, **ABSTENERSE** de abordar el estudio del recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente a reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá D.C., para lo de su competencia, conforme

la parte considerativa de esta providencia. Secretaria de la Sala proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-027-2019-00693-01
DEMANDANTE:	LUIS ALFONSO MANCERA ROMERO
DEMANDADO:	COLFONDOS S.A. Y OTRO.
ASUNTO:	Apelación Auto del 18 de octubre de 2022
JUZGADO:	Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Contestación demanda
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A. en contra del Auto del 18 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Veintisiete (27) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **LUIS ALFONSO MANCERA ROMERO** contra **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES,** con radicado No. **11001-31-05-027-2019-00693-01.**

ANTECEDENTES

Mediante apoderado judicial, el señor LUIS ALFONSO MANCERA ROMERO formuló demanda ordinaria laboral contra de COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES, con miras a que se declare que la ineficacia del traslado de regimen pensional efectuado del RPM al RAIS, con las consecuencias que de dicha declaratoria se derivan; se permita su regresó al RPM y se condene a COLPENSIONES a reconocerle y pagarle la pensión de vejez.[1]

[1] Fs. 4-25 Archivo 01 Expediente Digital

Previa inadmisión y posterior subsanación, la demanda fue admitida mediante providencia del 10 de diciembre de 2020[2].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Veintisiete (27) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 18 de octubre de 2022, decidió tener por no contestada la demanda por parte de COLFONDOS S.A.[3]

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

La apoderada de COLFONDOS S.A. recurrió la decisión argumentando que la notificación no se surtió en atención al Decreto 806 de 2020, vigente para la fecha, por lo que la comunicación que tuvo el Despacho por notificación, no se realizó en debida forma, pero aun así, la procedió a radicar la contestación de la demanda el día 17 de enero de 2022, de ahí que debe ser tenida como notificada por conducta concluyente, en razón a que la indebida notificación del auto admisorio de la demanda genera nulidad del proceso precisamente por entorpecer el derecho a la defensa del demandado y, a su vez, debió el juzgado dar aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S.[4]

DECISIÓN DE INSTANCIA

El Juzgado de conocimiento, a través de providencia del 9 de diciembre de 2022, declaró extemporáneo el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación.[5]

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

---

[2] Archivo 02 Expediente Digital
[3] Archivo 11 Expediente Digital
[4] Archivo 12 Expediente Digital
[5] Archivo 13 Expediente Digital

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar fue acertada o no la decisión del A quo de tener por no contestada la demanda por parte de COLFONDOS S.A.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

De acuerdo con revisión a la actuación procesal de primera instancia, considera la Sala que los argumentos del recurrente no tienen vocación de prosperidad, en razón a que, en efecto, la sociedad demandada fue notificada en debida forma de la demanda y, consecuencialmente, no es posible tener por contestada la demanda, como quiera que no allegó escrito de contestación dentro del término legal.

El artículo 8 del Decreto 806 de 2020, dispone en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

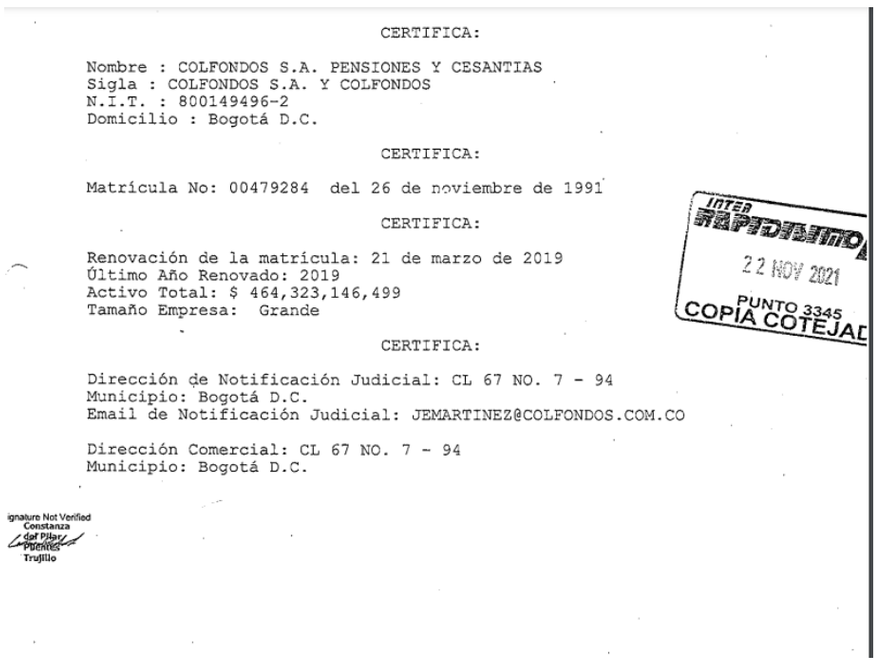
> ***ARTÍCULO 8o. NOTIFICACIONES PERSONALES.*** *Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> *La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación (…)"* (Subrayas de la Sala)

De la lectura desprevenida del precepto normativo en cita, se tiene que la notificación por medios electrónicos esa una posibilidad con que cuenta la parte que deba cumplir con esa carga procesal, más corresponde a un imperativo, como quiera que el artículo 291 del C.G.P., que establece la forma en que se debe practicar la notificación personal, no fue derogado de forma expresa ni

tácita por el Decreto 806 de 2020, ni mucho menos por la Ley 2213 de 2022, vigente en la actualidad.

En ese sentido, la notificación personal del auto admisorio puede realizarse de la forma tradicional, es decir, a través de correo certificado, o en su defecto, en la forma prevista en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, según lo decida la parte promotora de la acción.

Descendiendo al caso concreto, se observa que la parte demandante notificó a COLFONDOS S.A. el Auto admisorio de la demanda en la forma prevista en el artículo 291 del C.G.P., con remisión de la providencia, la demanda y sus anexos, a través de correo certificado prestado por la empresa INTERRAPIDÍSIMO, a la dirección Calle 67 # 7-94 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo esa la dirección para notificaciones judiciales establecida en el certificado de existencia y representación de la AFP (f. 175 Archivo 05 ED).



CERTIFICA:

Nombre : COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS
Sigla : COLFONDOS S.A. Y COLFONDOS
N.I.T. : 800149496-2
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00479284 del 26 de noviembre de 1991

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 21 de marzo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 464,323,146,499
Tamaño Empresa: Grande

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CL 67 NO. 7 - 94
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: JEMARTINEZ@COLFONDOS.COM.CO

Dirección Comercial: CL 67 NO. 7 - 94
Municipio: Bogotá D.C.

INTER RAPIDÍSIMO
22 NOV 2021
PUNTO 3345
COPIA COTEJAD

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pacheco Trujillo

De acuerdo con la certificación emitida por la empresa de mensajería, la notificación se surtió el día 23 de noviembre de 2021 (fs. 222-223 Archivo 05 ED), por lo cual la entidad contaba hasta el 7 de diciembre de 2021 para contestar la demanda, como quiera que en esa data se vencía el término del traslado de diez días dispuesto en el artículo 74 del C.P.T. y S.S. y no el 10 de diciembre de 2021, como lo indicó el A quo en la providencia apelada, pues ha de tenerse en cuenta que los dos días adicionales para que se entienda surtida la notificación personal señalada en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 hoy Ley 2213 de 2022, solo opera en el caso de las notificaciones a través de mensaje de datos, es decir, electrónicas, que no es el caso que ahora nos ocupa.



RAPIDISIMO

CERTIFICADO DE ENTREGA

INTER RAPIDISIMO S.A. Con licencia del Ministerio de Tecnologia de la Información y las comunicaciones No. 1195 atendiendo lo establecido en el Código General Del Proceso, se permite certificar la entrega del envio con las siguientes caracteristicas:

24 NOV 2021

DATOS DEL ENVÍO

Número de Envío	Fecha y Hora de Admisión
700065150325	11/22/2021 3:31:11 PM
Ciudad de Origen BOGOTA/CUNDICOL	Ciudad de Destino BOGOTA/CUNDICOL
Dice Contener NOTIFICACION	
Observaciones NOTIFICACION PERSONAL	
Centro Servicio Origen 3345 - PTO/BOGOTA/CUND/COL/CALLE 19 # 4-71 LOCAL 102 C.C LOS ANGELES	

REMITENTE

Nombres y Apellidos(Razón Social)	Identificación
MANUEL SANABRIA CHACON	91068058
Dirección CL 19 # 3 - 10 OF 1201 TO B	Teléfono 3103218219

DESTINATARIO

Nombre y Apellidos (Razón Social)	Identificación
SRS. COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS	3103218219
Dirección CL 67 # 7 - 94 BOGOTA	Teléfono 3103218219

PRUEBA DE ENTREGA

BOGOTA/CUNDICOL

NÚMERO DE GUÍA

700065150325

PARA: SRS. COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS

ENTREGADO A:

Nombre y Apellidos (Razón Social) SELLO DE RECIBIDO	
Identificación 1	Fecha de Entrega 11/23/2021

CERTIFICADO POR:

Nombre Funcionario Ana Lucia Zapata Parra	
Cargo LIDER DE OPERACIONES	Fecha de Certificación 11/23/2021 10:55:41 PM
Guia Certificación 3000209211582	Codigo PIN de Certificación 7bd2fded-6994-4c3a-a491-3b45f7464574

En ese sentido, como lo reconoce la recurrente, la contestación de la demanda solo se presentó hasta el día 17 de enero de 2023, cuando ya se encontraba más que vencido el término del traslado, sin que se encuentre asidero fáctico, ni jurídico para que la AFP alegue una indebida notificación, pues los elementos de juicio con que cuenta el plenario son contundentes en demostrar que la notificación se surtió en debida forma, bajo los derroteros que para ese efecto dispone el artículo 291 del C.G.P., norma vigente que se aplica al proceso laboral por virtud de la remisión analógica dispuesta en el artículo 145 del C.P.T. y S.

Así las cosas, la decisión de instancia será confirmada. Costas en esta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. por no haber prosperado su recurso de apelación. Inclúyanse como agencias en derecho una suma equivalente a un SMMLV al momento de su pago.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

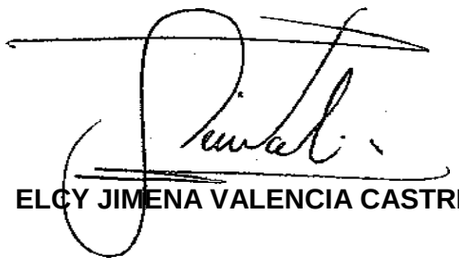
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 18 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Veintisiete (27) Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. Inclúyanse como agencias en derecho una suma equivalente a un SMMLV al momento de su pago.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN



ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ordinario Laboral
RADICADO:	11001-31-05-033-2019-00704-02
DEMANDANTE:	CARLOS AGUSTÍN BERNAL GARAVITO
DEMANDADO:	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
ASUNTO:	Apelación Auto 25 de noviembre de 2022
JUZGADO:	Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Liquidación de costas
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Porvenir S.A. en contra del Auto del 25 de noviembre de 2022, proferido por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por **CARLOS AGUSTÍN BERNAL GARAVITO** contra **COLPENSIONES** y **PORVENIR S.A.** con radicado No**. 11001-31-05-033-2019-00704-02.**

ANTECEDENTES

El Juzgado Treinta y Tres (33) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 25 de noviembre de 2022, aprobó la liquidación de costas a cargo

de PORVENIR S.A. efectuada por la Secretaría por un total de $4.600.000, cuyas agencias en derecho fueron distribuidas de la siguiente manera: $4.000.00 por agencias en derecho de primera instancia, y $600.000 por agencias en derecho de segunda instancia; además incluyó la suma de $600.000 por agencias en derecho de segunda instancia a cargo de Colpensiones (Archivo 17 del expediente digital).

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la AFP PORVENIR S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación argumentando que, conforme al artículo 366 del C.G.P. y en atención a lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, especialmente los artículos 2º y 5º de dicho Acuerdo, se establecen como criterios para la fijación de las agencias en derecho la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión, de manera que al analizar el presente caso se debe tener en cuenta que el proceso tuvo una duración de 6 meses, 5 días, lo que no es atribuible a su representada, respecto de lo cual señala que existen precedentes horizontales, los cuales relaciona en su escrito, en cuanto a que por la duración del proceso y la baja complejidad del asunto, se disminuirían las agencias en derecho.

Así las cosas, solicitó en su recurso la disminución de las agencias en derecho que le fueron impuestas, y en su lugar fijarlas de manera equitativa y razonable en correspondencia con la justa medida a la labor jurídica realizada por la parte actora (Archivo 18 del expediente digital).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación, si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente disminuir el valor de las agencias en derecho impuestas en primera y segunda instancia en contra de la AFP Porvenir S.A.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

En lo que refiere a las costas, debe recordarse que son estas la carga económica que dentro de un proceso debe afrontar quien obtuvo una decisión desfavorable y comprende además de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, sin que para ello sea menester que la parte contraria actúe o no en la respectiva instancia.

En ese sentido, el artículo 362 del C. G. P., aplicable a los juicios laborales por disposición del artículo 145 del C.P.T y la S.S. dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, indistintamente de su calidad.

Es claro el ordenamiento legal contemplado en el art. 366 del C.G.P., aplicable por mandato del artículo 145 del C.P.L, a estos asuntos, cuando determina en su numeral 4° los elementos o parámetros que debe tener en cuenta el Juez de instancia para señalar las agencias en derecho. Es así como no limita tal fijación exclusivamente a la aplicación inmediata de la tabla de honorarios aprobada por el Ministerio del Trabajo o Colegio de Abogados, ni tampoco al guarismo que resulte de liquidar las condenas; sino que debe realizar un estudio conjunto de todas las circunstancias dispuestas del devenir del litigio, además de las anteriores, conjugadas con la naturaleza del asunto, duración y calidad de la gestión del apoderado o la parte vencedora en el proceso.

Ahora, el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 emanado del Consejo Superior de la Judicatura aplicable al presente asunto, determina en su artículo 5º que en primera instancia el Juez debe aplicar para efectos de tasar la condena por concepto de agencias en derecho entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por tratarse de un proceso declarativo que carece de pretensiones pecuniarias; además, en tratándose de la segunda instancia, las agencias en derecho deben oscilar entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por tanto, al declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional realizado por el demandante, se encuentra acorde a ley el porcentaje utilizado por el Juez de conocimiento, al tasar como costas en primera instancia la suma de $4.000.000, las cuales resultan afines para efectos de la cuantificación de las agencias en derecho.

En punto de la segunda instancia, nótese que las mismas fueron tasadas en el valor de $600.000, suma que a la vista resulta incluso inferior al parámetro mínimo que debió ser considerado por el Colegiado para su imposición, por manera que no existe ninguna razón atendible que permita a la Sala considerar la disminución de tal concepto.

Sobre el particular, juzga conveniente recordar al profesional del derecho recurrente que la condena en costas *«contiene una obligación procesal que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (…) los anteriores razonamientos muestran el carácter objetivo de la imposición de agencias en derecho y no se puede hablar de daño, pues como lo entiende la Sala, el valor que el juzgador le da al trabajo del profesional del derecho que ha triunfado en el proceso, lo que le corresponde pagar a la parte que resulte vencida judicialmente, que para este caso lo es la parte actora».*

Ahora, teniendo en cuenta que el legislador dispuso en las normas ya enunciadas, la facultad de imponer costas a cargo de la parte vencida en el proceso, diáfano resulta colegir que debido a que el asunto lleva en marcha desde el 1º de octubre de 2019 (acta de reparto f. 77 archivo 1), esto es, más de 3 años, y que en el curso del proceso salieron avante las pretensiones incoadas por el libelista, que se *itera*, estaban encaminadas a obtener la ineficacia del traslado al RAIS, las agencias en derecho se encuentran acordes a los límites

previstos para los asuntos que carecen de pretensiones pecuniarias, al igual que a la duración y a la gestión adelantada por la parte activa.

En tales términos, bajo los parámetros del artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho que se fijaron a cargo de la demandada Porvenir, habrán de confirmarse por no encontrarse motivo de reparo en su cuantificación, más si se tiene en cuenta la duración y la cantidad y calidad de la gestión adelantada en este proceso, que no se desdice por el hecho de existir jurisprudencia reiterada sobre la materia que fue objeto de debate; aunado a que se han definido tomando en consideración el artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el H. Consejo Superior de la Judicatura.

Así las cosas, no queda otro camino a la Sala que confirmar la decisión impugnada. Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 25 de noviembre de 2022, proferido por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Sala Laboral
Tribunal Superior del Distrito Judicial
Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ejecutivo Laboral
RADICADO:	11001-31-05-038-2022-00157-01
DEMANDANTE:	ANDRÉS REYES CARVAJAL
DEMANDADO:	CONSORCIO ECO-CASA
ASUNTO:	Apelación Auto del 7 de octubre de 2022
JUZGADO:	Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Mandamiento de pago
DECISIÓN:	CONFIRMA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte EJECUTANTE en contra del Auto del 7 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso Ejecutivo promovido por **ANDRÉS REYES CARVAJAL** contra **CONSORCIO ECO-CASA**, con radicado No. **11001-31-05-038-2022-00157-01.**

ANTECEDENTES

El señor ANDRÉS REYES CARVAJAL presentó demanda ejecutiva en contra del CONSORCIO ECO-CASA, a fin de que se emita mandamiento de pago por la suma de $15.392.000, por concepto de los honorarios por prestación de servicios profesionales adeudados en el mes de julio de 2021; más los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible hasta la fecha efectiva de su pago; por la suma de $13.010.047, por concepto de los honorarios por prestación de servicios profesionales adeudados en el mes de agosto de 2021, más los

intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible hasta la fecha efectiva de su pago; Por la suma de $8.712.800, por concepto de los honorarios por prestación de servicios profesionales adeudados en el mes de septiembre de 2021, más los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible hasta la fecha efectiva de su pago, y por las costas procesales.[1]

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 7 de octubre de 2022, negó el mandamiento de pago, al considerar que no existía documento que tenga la virtualidad de acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la parte ejecutada, ya que el contrato de prestación de servicios aportado con la demanda no cumplía con el requisito de la exigibilidad, pues con las cuentas de cobro que también se aportaron no era posible determinar la participación o las actividades desarrolladas por el actor en el marco del objeto contractual, aunado que para la efectividad de los pagos se requería presentar la cuenta de cobro para que sea aprobada, acompañarse de las planillas de seguridad social debidamente canceladas y un informe de todas las actividades desarrolladas por el contratista, condiciones y características que no fueron exhibidas por el promotor de la acción.[2]

RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

La parte EJECUTANTE recurrió la decisión y, como sustento del recurso, argumento que dentro de las pruebas aportadas al proceso se encuentra documentación emanada de los demandados en la que manifiestan la existencia de la obligación a favor del actor, por lo cual no es de recibo que el Juzgado omita hacer la valoración de dichos documentos para concentrarse solo en el contrato de prestación de servicios y en las cuentas de cobro, pues es con aquellos junto con estos con los que existe la conformación del título ejecutivo complejo, debido que en la respuesta al derecho de petición del 15 de diciembre de 2021, el representante legal del Consorcio reconoció que el demandante cumplió con todos los requisitos para que sus cuentas fueran aceptadas y pagadas, y en la copia del correo electrónico del miércoles 23 de abril de 2022, el mismo representante legal del Consorcio propone un plan de pagos para satisfacer la obligación, lo que constituyen una manifestación clara y un reconocimiento expreso de la obligación del Consorcio, de ahí que el título ejecutivo complejo se compone no solo del

[1] Fs. 6-16 Archivo 01 Expediente Digital
[2] Archivo 05 Expediente Digital

contrato de prestación de servicios y las cuentas de cobro, sino que también lo integra la respuesta al derecho de petición y el correo electrónico.[3]

DECISIÓN DE INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 16 de diciembre de 2022 resolvió no reponer la providencia y concedió el recurso de apelación. Como argumentos de la decisión, además de reiterar los de la providencia recurrida, sostuvo, en síntesis, que los dos correos electrónicos proferidos por el representante legal de la sociedad que se pretende ejecutar, no contienen una obligación clara, expresa y menos exigible, características inherentes a los títulos ejecutivos.[4]

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente emitir el mandamiento de pago solicitado.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

El artículo 422 del C.G.P., aplicable al proceso laboral por virtud del artículo 145 del C.P.T. y S.S., establece:

> "*Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de*

[3] Fs. 2-5 Archivo 06 Expediente Digital
[4] Archivo 08 Expediente Digital

policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184."

De esta norma, que debe ser analizada en consonancia con el artículo 100 del C.P.T. y S.S., se desprende que los títulos ejecutivos deben cumplir ciertos requisitos de carácter formal y sustancial. Los formales radican en que el documento o documentos que contienen la obligación, cuando se trata de un título ejecutivo complejo, sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la ley. Los requisitos sustanciales consisten en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante y en contra del ejecutado, sean claras, expresas y exigibles.

Ahora, una obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido. Es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título, sin necesidad de acudir a deducciones, interpretaciones o razonamientos lógicos. Y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de esta por no estar pendiente de un plazo o condición.

En el presente asunto, la parte ejecutante pretende se emita el mandamiento de pago por concepto de honorarios pactados en un contrato de prestación de servicios profesionales, en los siguientes términos:

CLÁUSULA TERCERA - VALOR Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará por sus servicios al **PROFESIONAL INDEPENDIENTE** la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($46.800.000),** valor que se cancelara de la siguiente forma: se pagarán en seis (6) mensualidades de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($7.800.000)** cada uno de los pagos anteriormente mencionados se cancelarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la presentación y aprobación de la cuenta de cobro, la cual se deberá acompañar de la correspondiente fotocopia de la planilla de seguridad social (PILA), donde conste los aportes a EPS, ARL y PENSIÓN; y un informe de todas las actividades desarrolladas en el mes.

Conforme a los términos de la anterior clausula contractual, se tiene que para el cobro de los honorarios que pretende la parte ejecutante se debe conformar un título ejecutivo complejo, ya que debe estar conformado, no solo por el contrato de prestación de servicios, sino por la cuentas de cobro que hayan sido aprobadas, la planilla de seguridad social donde consten los aportes a la EPS, la ARL y la AFP y un informe de las actividades desarrolladas en el respectivo mes.

La parte ejecutante acompañó con la demanda copia del contrato de prestación de servicios (fs. 37-39 Archivo 01 ED) y copia de las cuentas de cobro de julio, agosto y septiembre (fs. 43-45 Archivo 01 ED); sin embargo, no allegó la

planilla de seguridad social donde consten los aportes a la EPS, la ARL y la AFP, ni tampoco el informe de las actividades desarrolladas en los meses sobre los que pretende el pago por la vía compulsiva.

Ahora, si bien obra en el plenario respuesta a derecho de petición suscrito por el representante legal del consorcio, en el cual en uno de sus apartes se indica que: "…*señor Reyes cumplió con los requisitos exigidos para los pagos de los honorarios adeudos*…" (f. 50 Archivo 01 ED), y también copia de un correo electrónico donde se propone un plan de pagos al demandante (f. 52 Archivo 01 ED), lo cierto es que dichos documentos no tienen el alcance para considerar que con ellos se conforma el título ejecutivo complejo, en razón a que; primero, no es posible establecer si los requisitos para el pago de los honorarios a los que se refiere la respuesta al derecho de petición corresponden a los que pretende el demandante le sean cancelados a través de la vía judicial u otros, esto en atención a que el contrato tuvo una duración de seis meses y los honorarios que aquí se reclaman corresponden únicamente a los meses de julio, agosto y septiembre y; segundo, la propuesta de plan de pagos aludida en el correo electrónico corresponden a las cuentas de cobro No. 1 por valor de $11.198.000 y Nos. 2 y 3 por valor de $21´510.000, mientras que las aportadas al proceso corresponden a las cuentas de cobro No. 29 por valor de $15.392.000, No. 30 por valor de $8.712.800 y No. 31 por valor de $8.712.800.

Adicionalmente, debe tener en cuenta el recurrente que no es posible conformar el título ejecutivo complejo con documentos diferentes, ya que ello constituiría una modificación a las condiciones establecidas por las partes para la exigibilidad de la obligación, aunado que, como lo expuso el A quo, ni del derecho de petición, ni del correo electrónico, emerge una obligación clara, expresa y exigible al CONSORCIO ECO-CASA.

Por lo anteriormente expuesto, la providencia apelada será confirmada en su integridad. Sin Costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 7 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO:	Ejecutivo Laboral
RADICADO:	11001-31-05-039-2018-00468-02
DEMANDANTE:	GERARDO HERNÁNDEZ MORENO
DEMANDADO:	COLPENSIONES Y OTRO
ASUNTO:	Apelación Auto del 14 de diciembre del 2021
JUZGADO:	Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá
TEMA:	Liquidación del crédito
DECISIÓN:	MODIFICA

Hoy, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, **SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA** por los Magistrados **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ, ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO** y como Ponente, **ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN**, se procede a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES en contra del Auto del 14 de diciembre de 2021, proferido por el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso Ejecutivo promovido por **GERARDO HERNÁNDEZ MORENO** contra **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y OTRO**, con radicado No. **11001-31-05-039-2018-00468-02.**

ANTECEDENTES

El promotor de la acción adelantó proceso ejecutivo a continuación del ordinario en contra de COLPENSIONES[1], por las condenas impuestas por el Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogotá mediante la sentencia del 7 de marzo de 2018, confirmada por este Tribunal en fallo del 11 de abril de símil año, por concepto de pensión de vejez, a partir del 2 de mayo de 2013, en cuantía inicial

[1] Páginas 148 a 152 Archivo 01 Expediente Digital

de $589.500, a razón de 14 mesadas al año, junto con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, contados desde que cada mesada se hizo exigible hasta el pago efectivo de la obligación y las costas del proceso ordinario[2].

El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 5 de octubre de 2018, libró el mandamiento de pago por las obligaciones solicitadas por la parte actora[3]. Mediante providencia del 29 de enero de 2020, previo traslado que se corrió a las partes del mandamiento de pago, el Juzgado resolvió declarar improcedentes las excepciones propuestas por la parte ejecutada Colpensiones y ordenó continuar adelante con la ejecución, condenando en costas del proceso ejecutivo, cuyas agencias en derecho las fijó en $450.000[4]. Esta decisión fue confirmada por esta Sala a través de Auto del 31 de julio de 2020, en la cual impuso costas y agencias en derecho en $900.000[5].

PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 14 de diciembre de 2021, modificó la liquidación del crédito por valor de $35.638.887, que incluye intereses moratorios por suma de $32.288.887, costas del proceso ordinario por valor de $2.000.000, costas del proceso ejecutivo en primera instancia por $450.000 y, costas del proceso ejecutivo en segunda instancia por $900.000.

Como fundamento de su decisión, el A quo manifestó que al valor del retroactivo pensional adeudado, ha de sustraerse la suma que corresponde a los aportes en salud, en atención a lo dispuesto por la ley, de manera que efectuadas las operaciones aritméticas de rigor, se obtiene a título de retroactivo pensional a favor del ejecutante la suma de $61.197.736. Agregó que el cálculo de los intereses moratorios, debe tomar como fecha de corte la data en la cual se efectuó el depósito judicial de $85.000.000, que lo fue el 11 de febrero de 2020, para un total por intereses de $55.746.005,79, Concluyendo que conforme a la

[2] Páginas 124 a 125 y 134 a 143Archivo 01 expediente Digital
[3] Páginas 159 a 160 Archivo 01 Expediente Digital
[4] Páginas 218 a 219 Archivo 01 Expediente Digital
[5] Páginas 239 a 243 Archivo 01 Expediente Digital

consignación efectuada, existe un saldo a favor del ejecutante de $35.638.887, incluidas las costas del proceso ordinario y el proceso ejecutivo[6].

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de COLPENSIONES recurrió la decisión argumentando, frente a la liquidación del crédito, que mediante título judicial No. 400100007580701 del 11 de febrero de 2020 por valor de $85.000.000, realizó el pago de la totalidad de lo ordenado en las sentencias título base de recaudo, lo cual incluyó la liquidación de los intereses moratorios, así como la condena en costas, sin embargo, en la decisión opugnada se evidencia un error en la liquidación, toda vez que en ella se aduce que aún se adeuda la suma de $35.638.887, por manera que debe efectuarse la revisión de la liquidación realizada por el *A quo*, teniendo en cuenta la que se anexa a la alzada. Concluyó advirtiendo que los intereses moratorios deben liquidarse en el caso analizado, tomando como fecha final el 11 de febrero de 2020, data en la cual se constituyó el título judicial en referencia[7].

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Cabe anotar que los alegatos de conclusión no constituyen una nueva oportunidad para complementar el recurso de apelación si este fue interpuesto en primera instancia.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme al recurso interpuesto, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si es o no procedente modificar la liquidación del crédito realizada por el Juzgado de Primera Instancia, conforme a los argumentos expuestos por la parte recurrente.

[6] Archivo 12 Expediente Digital
[7] Archivo 40 Expediente Digital

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL**,** es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

En aras de resolver el problema jurídico planteado, ha de rememorar la Sala de Decisión que la obligación pretendida en la presente demanda ejecutiva laboral corresponde a la contenida impuesta en la sentencia proferida el 7 de marzo de 2018 por el Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogotá[8], que corresponde a la pensión de vejez reconocida a favor del señor Gerardo Hernández Moreno desde el 2 de mayo de 2013, en cuantía inicial de $589.500 por 14 mensualidades al año, junto con el retroactivo pensional causado hasta que se incluya en nómina la prestación, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde que cada mesada se hizo exigible hasta la fecha del pago efectivo y las costas del proceso ordinario, cuyas agencias en derecho en primera instancia fueron fijadas en $2.000.000, lo que fue confirmado por este Tribunal en sentencia del 11 de abril de 2018[9], y respecto de lo cual se libró mandamiento de pago por el *A quo* mediante Auto del 5 de octubre de 2018, incluyendo las costas del proceso ejecutivo[10].

Ahora bien, revisada la documental adosada por la ejecutada Colpensiones, se observa que la entidad mediante Resolución SUB101885 del 30 de abril de 2020[11], en aras de dar cumplimiento a las decisiones antes reseñadas, reconoció la pensión de vejez a favor del ejecutante desde el 1º de mayo de 2020 en cuantía inicial de $877.803, precisando que la mencionada prestación sería incluida en la nómina del mes de mayo de 2020 y que además, constituyó a favor del extremo activo el título judicial No. 40010007580701 del 11 de febrero de 2020 en valor de $85.000.000, en aras de cancelar el retroactivo pensional impuesto en las decisiones base de ejecución.

En ese orden, el retroactivo pensional a liquidar se encuentra compuesto por las mesadas pensionales causadas entre el 2 de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2020, dado que la demandada en el acto administrativo en referencia, reconoció la prestación de vejez desde el 1º de mayo de 2020; aunado a ello, resulta oportuno advertir que para el respectivo cálculo se deben tener en cuenta 14 mesadas al año

[8] Páginas 124 a 125 del Expediente Digital
[9] Páginas 134 a 143 Archivo 01 del Expediente Digital
[10] Páginas 159 a 160 Archivo 01 del Expediente Digital
[11] Páginas 4 a 9 Archivo 07 del Expediente Digital

y el valor de la primera mesada pensional de $589.500, conforme a lo definido en las decisiones que son objeto de ejecución.

Teniendo en cuenta los parámetros expuestos, se procede a revisar la liquidación efectuada por el Juzgado de Conocimiento visible en las páginas 2 a 4 archivo 12 del expediente digital, encontrando que la misma se encuentra ajustada a la condena impuesta, ya que tal autoridad obtuvo la suma de $69.542.882 a título de retroactivo pensional causado a favor del actor desde el 2 de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2020, misma que coincide exactamente con el valor obtenido por este Tribunal al efectuar la correspondiente liquidación.

En igual sentido, se advierte acertada la suma hallada por el Juzgado de Conocimiento a título de descuentos en salud, como quiera que esta Colegiatura también ha obtenido por tal concepto, la cifra de $8.345.146, que al ser descontada del retroactivo pensional, arroja un monto total de $61.197.736 a título de mesadas pensionales causadas entre el 2 de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2020 a favor del actor, según la tabla que se discrimina a continuación:

--------continúa hoja siguiente----------

RETROACTIVO PENSIONAL CALCULADO DEL 2 DE MAYO DE 2013 AL 30 DE ABRIL DE 2020					
Año	**Mes**	**Mesada**	**Días**	**Decuento salud**	**Mesada con descuento**
2013	Mayo	$ 569.850,00	29	$ 68.382	$ 501.468
	Junio	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Junio	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Julio	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Agosto	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Septiembre	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Octubre	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Noviembre	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Diciembre	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
	Diciembre	$ 589.500,00	30	$ 70.740	$ 518.760
2014	Enero	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Febrero	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Marzo	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Abril	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Mayo	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Junio	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Junio	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Julio	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Agosto	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Septiembre	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Octubre	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Noviembre	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Diciembre	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
	Diciembre	$ 616.000,00	30	$ 73.920	$ 542.080
2015	Enero	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Febrero	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Marzo	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Abril	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Mayo	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Junio	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Junio	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Julio	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Agosto	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Septiembre	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Octubre	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Noviembre	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Diciembre	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
	Diciembre	$ 644.350,00	30	$ 77.322	$ 567.028
2016	Enero	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Febrero	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Marzo	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Abril	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Mayo	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Junio	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Junio	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Julio	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Agosto	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Septiembre	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Octubre	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Noviembre	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Diciembre	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
	Diciembre	$ 689.455,00	30	$ 82.735	$ 606.720
2017	Enero	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Febrero	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Marzo	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Abril	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Mayo	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Junio	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Junio	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Julio	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Agosto	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Septiembre	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Octubre	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Noviembre	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Diciembre	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
	Diciembre	$ 737.717,00	30	$ 88.526	$ 649.191
2018	Enero	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Febrero	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Marzo	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Abril	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Mayo	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Junio	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Junio	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Julio	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Agosto	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Septiembre	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Octubre	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Noviembre	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Diciembre	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
	Diciembre	$ 781.242,00	30	$ 93.749	$ 687.493
2019	Enero	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Febrero	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Marzo	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Abril	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Mayo	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Junio	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Junio	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Julio	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Agosto	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Septiembre	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Octubre	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Noviembre	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Diciembre	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
	Diciembre	$ 828.116,00	30	$ 99.374	$ 728.742
2020	Enero	$ 877.803,00	30	$ 105.336	$ 772.467
	Febrero	$ 877.803,00	30	$ 105.336	$ 772.467
	Marzo	$ 877.803,00	30	$ 105.336	$ 772.467
	Abril	$ 877.803,00	30	$ 105.336	$ 772.467
	TOTAL	**$ 69.542.882,00**	**2939**	**$8.345.146**	**$ 61.197.736**

Por tanto, no resulta atendible el reparo efectuado por la entidad convocada en su alzada, pues aunque esta allega su propia liquidación visible en las páginas 3 a 5 del Archivo 13 del expediente digital, la cual respeta los parámetros de liquidación aquí expuestos, lo cierto es que la misma obtiene una suma inferior por concepto de retroactivo pensional ($66.914.134) y descuentos en salud ($8.029.696.08), que para la Sala no encuentran ninguna explicación, porque se insiste, al realizarse nuevamente las operaciones aritméticas de rigor, se obtienen exactamente las sumas halladas por la falladora de primer grado a título de los rubros en mención.

Ahora bien, respecto al tema de los intereses moratorios, encuentra el Colegiado que Colpensiones no allega ninguna liquidación de los mismos y sólo se limita a indicar que la fecha de corte para su cálculo debe ser aquélla en que se constituyó el título judicial por valor de $85.000.000 a favor del señor Hernández Moreno, que conforme a lo aceptado por el *A quo,* lo fue el 11 de febrero de 2020.

Así las cosas, al realizar nuevamente la liquidación de tal rubro considerando que los intereses moratorios proceden desde que cada mesada se hizo exigible hasta la fecha del pago efectivo, que se *itera*, lo fue el 11 de febrero de 2020, se obtiene un valor de $52.894.429,00, según se discrimina en la siguiente tabla:

--------continúa hoja siguiente----------

Tabla Liquidación de Intereses Moratorios con					Fecha de Corte		11/02/20
Mesada Causada	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Número de días en mora**	**Interés moratorio anual**	**Tasa de interés de mora diario**	**Capital**	**Subtotal Interés**
desde 02-05-2013	01/06/13	11/02/20	2447	28,59%	0,0689%	$ 569.850,00	$ 960.989,00
jun-13	01/07/13	11/02/20	2417	28,59%	0,0689%	$ 1.179.000,00	$ 1.963.876,00
jul-13	01/08/13	11/02/20	2386	28,59%	0,0689%	$ 589.500,00	$ 969.344,00
ago-13	01/09/13	11/02/20	2355	28,59%	0,0689%	$ 589.500,00	$ 956.750,00
sept-13	01/10/13	11/02/20	2325	28,59%	0,0689%	$ 589.500,00	$ 944.562,00
oct-13	01/11/13	11/02/20	2294	28,59%	0,0689%	$ 589.500,00	$ 931.968,00
nov-13	01/12/13	11/02/20	2264	28,59%	0,0689%	$ 589.500,00	$ 919.780,00
dic-13	01/01/14	11/02/20	2233	28,59%	0,0689%	$ 1.179.000,00	$ 1.814.372,00
ene-14	01/02/14	11/02/20	2202	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 934.806,00
feb-14	01/03/14	11/02/20	2174	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 922.920,00
mar-14	01/04/14	11/02/20	2143	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 909.759,00
abr-14	01/05/14	11/02/20	2113	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 897.024,00
may-14	01/06/14	11/02/20	2082	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 883.863,00
jun-14	01/07/14	11/02/20	2052	28,59%	0,0689%	$ 1.232.000,00	$ 1.742.255,00
jul-14	01/08/14	11/02/20	2021	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 857.967,00
ago-14	01/09/14	11/02/20	1990	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 844.807,00
sept-14	01/10/14	11/02/20	1960	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 832.071,00
oct-14	01/11/14	11/02/20	1929	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 818.911,00
nov-14	01/12/14	11/02/20	1899	28,59%	0,0689%	$ 616.000,00	$ 806.175,00
dic-14	01/01/15	11/02/20	1868	28,59%	0,0689%	$ 1.232.000,00	$ 1.586.030,00
ene-15	01/02/15	11/02/20	1837	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 815.745,00
feb-15	01/03/15	11/02/20	1809	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 803.312,00
mar-15	01/04/15	11/02/20	1778	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 789.546,00
abr-15	01/05/15	11/02/20	1748	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 776.224,00
may-15	01/06/15	11/02/20	1717	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 762.458,00
jun-15	01/07/15	11/02/20	1687	28,59%	0,0689%	$ 1.288.700,00	$ 1.498.272,00
jul-15	01/08/15	11/02/20	1656	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 735.370,00
ago-15	01/09/15	11/02/20	1625	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 721.604,00
sept-15	01/10/15	11/02/20	1595	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 708.282,00
oct-15	01/11/15	11/02/20	1564	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 694.516,00
nov-15	01/12/15	11/02/20	1534	28,59%	0,0689%	$ 644.350,00	$ 681.194,00
dic-15	01/01/16	11/02/20	1503	28,59%	0,0689%	$ 1.288.700,00	$ 1.334.856,00
ene-16	01/02/16	11/02/20	1472	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 699.419,00
feb-16	01/03/16	11/02/20	1443	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 685.640,00
mar-16	01/04/16	11/02/20	1412	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 670.910,00
abr-16	01/05/16	11/02/20	1382	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 656.656,00
may-16	01/06/16	11/02/20	1351	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 641.926,00
jun-16	01/07/16	11/02/20	1321	28,59%	0,0689%	$ 1.378.910,00	$ 1.255.343,00
jul-16	01/08/16	11/02/20	1290	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 612.942,00
ago-16	01/09/16	11/02/20	1259	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 598.212,00
sept-16	01/10/16	11/02/20	1229	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 583.958,00
oct-16	01/11/16	11/02/20	1198	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 569.228,00
nov-16	01/12/16	11/02/20	1168	28,59%	0,0689%	$ 689.455,00	$ 554.974,00
dic-16	01/01/17	11/02/20	1137	28,59%	0,0689%	$ 1.378.910,00	$ 1.080.488,00
ene-17	01/02/17	11/02/20	1106	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 562.301,00
feb-17	01/03/17	11/02/20	1078	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 548.065,00
mar-17	01/04/17	11/02/20	1047	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 532.305,00
abr-17	01/05/17	11/02/20	1017	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 517.052,00
may-17	01/06/17	11/02/20	986	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 501.292,00
jun-17	01/07/17	11/02/20	956	28,59%	0,0689%	$ 1.475.434,00	$ 972.079,00
jul-17	01/08/17	11/02/20	925	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 470.279,00
ago-17	01/09/17	11/02/20	894	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 454.518,00
sept-17	01/10/17	11/02/20	864	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 439.266,00
oct-17	01/11/17	11/02/20	833	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 423.505,00
nov-17	01/12/17	11/02/20	803	28,59%	0,0689%	$ 737.717,00	$ 408.253,00
dic-17	01/01/18	11/02/20	772	28,59%	0,0689%	$ 1.475.434,00	$ 784.984,00
ene-18	01/02/18	11/02/20	741	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 398.958,00
feb-18	01/03/18	11/02/20	713	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 383.883,00
mar-18	01/04/18	11/02/20	682	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 367.192,00
abr-18	01/05/18	11/02/20	652	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 351.040,00
may-18	01/06/18	11/02/20	621	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 334.350,00
jun-18	01/07/18	11/02/20	591	28,59%	0,0689%	$ 1.562.484,00	$ 636.395,00
jul-18	01/08/18	11/02/20	560	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 301.507,00
ago-18	01/09/18	11/02/20	529	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 284.816,00
sept-18	01/10/18	11/02/20	499	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 268.664,00
oct-18	01/11/18	11/02/20	468	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 251.974,00
nov-18	01/12/18	11/02/20	438	28,59%	0,0689%	$ 781.242,00	$ 235.821,00
dic-18	01/01/19	11/02/20	407	28,59%	0,0689%	$ 1.562.484,00	$ 438.262,00
ene-19	01/02/19	11/02/20	376	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 214.587,00
feb-19	01/03/19	11/02/20	348	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 198.607,00
mar-19	01/04/19	11/02/20	317	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 180.915,00
abr-19	01/05/19	11/02/20	287	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 163.794,00
may-19	01/06/19	11/02/20	256	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 146.102,00
jun-19	01/07/19	11/02/20	226	28,59%	0,0689%	$ 1.656.232,00	$ 257.961,00
jul-19	01/08/19	11/02/20	195	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 111.288,00
ago-19	01/09/19	11/02/20	164	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 93.596,00
sept-19	01/10/19	11/02/20	134	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 76.475,00
oct-19	01/11/19	11/02/20	103	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 58.783,00
nov-19	01/12/19	11/02/20	73	28,59%	0,0689%	$ 828.116,00	$ 41.662,00
dic-19	01/01/20	11/02/20	42	28,59%	0,0689%	$ 1.656.232,00	$ 47.940,00
ene-20	01/02/20	11/02/20	11	28,59%	0,0689%	$ 877.803,00	$ 6.654,00
feb-20	01/03/20	11/02/20	-18	28,59%	0,0689%	$ 877.803,00	$ 0,00
mar-20	01/04/20	11/02/20	-49	28,59%	0,0689%	$ 877.803,00	$ 0,00
abr-20	01/05/20	11/02/20	-79	28,59%	0,0689%	$ 877.803,00	$ 0,00
					Total intereses moratorios		**$ 52.894.429,00**

Página 1

Así, se obtiene a título de intereses moratorios una suma inferior a la definida por el *A quo*, quien halló por tal concepto un valor de $55.746.005,79, misma que habrá de modificarse por este Colegiado, pues, aunque el Juzgado de Conocimiento consideró como fecha de corte para su liquidación el 11 de febrero de 2020, se constata que la tasa de interés moratorio del 2,12% no es la que corresponde al caso. Ello, en la medida que la tasa prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera[12], que para el mes de febrero de 2020 equivale a 28,59%, dado que el interés corriente a dicha data fue definido en 19,06%, conforme a la Resolución 094 del 31 de enero de 2020 expedida por tal entidad.

De suerte que, la decisión opugnada está llamada a su modificación, pues la variación del rubro de los intereses moratorios causados a favor del actor, lógicamente afecta la liquidación del crédito aprobada por el Juzgado de Conocimiento, quien en todo caso acertó al indicar que aún existe un saldo a favor del ejecutante, dado que la suma consignada por Colpensiones, no logra cubrir el valor total de la obligación, como equivocadamente se refirió en su recurso de apelación.

Por tanto, encuentra la Sala que la liquidación del crédito debe atender los rubros que se discriminan a continuación, incluidas las costas del proceso ordinario y del trámite ejecutivo, sobre las cuales no media discusión:

CONCEPTO	VALOR	
Retroactivo pensional	$	61.197.736
Intereses Moratorios	$	52.894.429
Costas Ordinario Primera Instancia	$	2.000.000
Costas Proceso Ejecutivo Primera Instancia	$	450.000
Costas Proceso Ejecutivo Segunda Instancia	$	900.000
Depósito Judicial	$	85.000.000
TOTAL LIQUIDACIÓN	**$**	**32.442.165**

Conforme a lo dicho, la liquidación del crédito será modificada en valor de $32.442.165. Sin costas en esta instancia, dada la prosperidad parcial de la alzada.

Por lo expuesto, la **SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

[12] Artículo 111 de la Ley 510 de 1999

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el Auto del 14 de diciembre de 2021, proferido por el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de **MODIFICAR** la liquidación del crédito en valor **$32.442.165**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, dada la prosperidad parcial de la alzada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

ÉDGAR RENDÓN LONDOÑO **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-029-2017-00233-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral- Sala de Descongestión, donde NO CASA la sentencia proferida por esta **Sala** de fecha 27 de Junio de 2019.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-017-2017-00264-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión, donde NO CASA la sentencia proferida por esta **Sala** de fecha 28 de Noviembre de 2019.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-036-2016-00161-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral –donde acepta el DESISTIMIENTO del recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por esta Sala de fecha 31 de julio de 2020.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-032-2017-00129-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral –donde INADMITE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por esta Sala de fecha 11 de julio de 2019.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-031-2019-00417-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral- Sala de Descongestión, donde NO CASA la sentencia proferida por esta **Sala** de fecha 4 de junio de 2020.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-011-2016-00389-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral- Sala de Descongestión, donde NO CASA la sentencia proferida por esta **Sala** de fecha 10 de octubre de 2019.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-35-2018-00317-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral –donde acepta el DESISTIMIENTO del recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por esta Sala de fecha 30 de julio de 2021.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2023

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-35-2016-00469-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral –donde INADMITE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por esta Sala de fecha 14 de Noviembre de 2019.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C. 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA

MAGISTRADO DR(a). LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001-31-05-007-2017-00246-01** informando que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-, donde NO CASA la sentencia proferida por esta **Sala** de fecha 27 de Junio de 2019.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

ANDREA GUZMÁN PORRAS

ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo resuelto por el Superior.

Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaría, devuélvanse las presentes diligencia al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase,

LUCY STELLA VÁSQUEZ SARMIENTO

MAGISTRADA